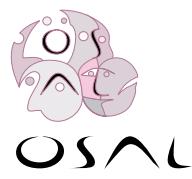


Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL
Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

País

Mes de Año

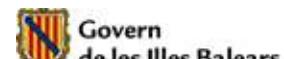
Editada en el MES de AÑO



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears
Conselleria d' Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 000

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de*



Integrantes

Nombres

Fuentes

Nombres

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Enero de 2011

Jueves 6

En las ciudades de La Paz y Santa Cruz, amas de casa bloquean diferentes puntos de venta de azúcar en protesta por la escasez de este producto en los mercados. Cientos de personas realizan largas filas en los puntos de abastecimiento de arroz, harina, azúcar y aceite de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). El gobierno de la República admite que tiene problemas en la importación de azúcar, el gerente general de EMAPA, Álvaro Rodríguez, explica que las causas para la escasez se deben a la sequía prolongada, al incremento en la exportación y al contrabando a otros países. Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Fernando Fuentes, responsabiliza a los comerciantes mayoristas quienes estarían ocultando dicho producto con fines especulativos. Por su parte, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, responsabiliza al cambio climático por la falta del producto.

En el departamento de Santa Cruz, en la localidad de Mineros, en horas de la noche, un grupo de vecinos y vecinas saquea, destruye y quema varias motocicletas y patrullas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), debido a que la Policía se habría negado a mostrar públicamente al presunto asesino de un joven mototaxista del lugar. Los efectivos policiales de ese módulo se repliegan a la aledaña localidad de Montero, para preservar su seguridad.

Viernes 7

En la ciudad de Santa Cruz, trabajadores/as de los hospitales San Juan de Dios, Mario Ortiz y Japonés, acatan un paro de 24 horas, en protesta por el recorte del bono de antigüedad, que afecta al 40% de los trabajadores de salud. Con la medida se suspende la atención en la consulta externa, las cirugías programadas y los servicios de laboratorio, quedando sólo en funcionamiento las emergencias y los servicios de internación. La federación departamental del gremio no apoya la huelga, señalando que aún se están agotando las instancias legales para conseguir el pago de la totalidad del bono. La Dirección del Trabajo del departamento fija una segunda audiencia de conciliación entre el municipio y la dirigencia de salud. Entretanto, la oficial mayor de Desarrollo Humano del municipio de Santa Cruz, Ana María Encina, informa que el recorte responde a una instrucción emitida por la Contraloría General del Estado, en la que hace conocer su observación sobre el bono de antigüedad, en el sentido de que

hasta el 2009 el bono se pagaba en base a los tres sueldos mínimos, como lo establece la Ley General del Trabajo, pero ahora se exige que se haga en base a lo que estipula la Ley del Funcionario Público, es decir, sobre la base de un sueldo mínimo. Por su parte, la Dirección del Trabajo indica que la alcaldía estaría incurriendo en despido indirecto, pues al reducir el bono de antigüedad hay una disminución del salario.

Sábado 8

En el departamento de Cochabamba, en horas de la madrugada, pobladores y pobladoras del valle bajo ingresan a la represa de La Angostura con equipo pesado, con el objetivo de abrir el canal de riego cerrado por los pobladores del valle alto. Vecinos y vecinas de Tolata y Arbieto, localidades situadas en el valle alto, responden de inmediato a esta acción tomando de rehenes a los pobladores del valle bajo y a la maquinaria que ya había logrado abrir parte del canal, obligando a cerrarlo nuevamente con el mismo equipo pesado que llevaron. El diálogo entre ambas partes evita mayores enfrentamientos, sin embargo, se advierte a la gobernación de Cochabamba que si no dan una pronta solución al conflicto los enfrentamientos serán mayores. Por su parte, el gobernador Edmundo Novillo expresa su deseo de que las partes en conflicto opten por la solidaridad y decidan compartir el agua como lo hacen otras poblaciones. Manuel Rocha, principal dirigente de los regantes del valle bajo, lamenta que en el 66 aniversario de los productores de esa zona sucedieran estos incidentes, siendo que su intención era abrir el canal de riego como regalo para acabar con la preocupación que tienen los y las pobladores de esa zona sobre la falta de agua para sus cultivos. El dirigente señala que ya cuenta con el permiso correspondiente desde la gobernación para la apertura del canal y que no renunciarán en su demanda de riego para la zona ya que el agua debe beneficiar no sólo a unos cuantos. Por su parte, Efrain Ferrel, dirigente de las y los comunarios del valle alto y los municipios de Tolata y Arbieto, dijo que lo correcto es la realización de una investigación que determine el derecho propietario de la represa de La Angostura y sostiene que históricamente la represa habría abastecido a las comunidades del valle alto y que antes no existía el canal en cuestión, el mismo que, según su versión, se habría abierto como un favor a las comunidades del valle bajo, pero que al haber bajado el nivel de las aguas de la represa éstas ya no se puede compartir. Por su parte, la secretaria de Asuntos de la Madre Tierra, Carmen Rodríguez, dependiente de la gobernación, dijo que se está trabajando en una política departamental para tratar el tema del agua como recurso esencial, y anuncia que hasta fin de mes se dará a conocer la propuesta o plan para implementar esta gestión.

Domingo 9

Productores del valle bajo llegan a la represa de la Angostura para celebrar su 66 aniversario. En el lugar ya se encontraban los pobladores de Tolata y Arbieto, con los que se produce un enfrentamiento. La policía usa gases lacrimógenos para dispersar a la gente y evitar mayores enfrentamientos. Desde la gobernación del departamento de

Cochabamba, se informa que, en una reunión con ambos sectores, se acordó que las y los comunarios del valle alto permitan la apertura de 70 centímetros del canal de riego mientras dure un estudio batimétrico para determinar cuánto de agua podrá corresponder a cada comunidad. Esta apertura se llevará a efecto este próximo miércoles si los pobladores aceptan la propuesta de Novillo. Por su parte, los dirigentes de cada uno de los sectores informan que socializarán con sus bases la propuesta.

Lunes 10

En la ciudad de El Alto, madres y padres de familia bloquean la avenida 6 de Marzo y el peaje de la autopista exigiendo mejoras en infraestructura educativa y anuncian una movilización para el próximo 26 de enero, amenazando con no iniciar las labores escolares en febrero. Freddy Valencia, presidente de la junta de padres de familia de la ciudad de El Alto, informa que el municipio de la ciudad de El Alto no habría previsto ninguna obra de reparación y mantenimiento en los establecimientos educativos y que no se habrían ejecutado ni siquiera los fondos de emergencia, en previsión de la época de lluvias. Por su parte, el alcalde de la ciudad de El Alto, Édgar Patana, señala que se está realizando un diagnóstico para entregar, en esta gestión, material para la refacción de los establecimientos que realmente lo necesitan.

En Cochabamba, alrededor de 50 pobladores de las comunidades de Andrada Grande y Chica, ubicadas en el extremo norte de la ciudad, bloquean, durante toda la mañana, el ingreso a la urbanización residencial Lomas de Aranjuez, como medida de protesta contra la administración de dicha urbanización, que, según explican las y los manifestantes, les exige presentar su carnet de identidad para pasar, por las mañanas, por el camino que atraviesa las Lomas de Aranjuez y que es el único que tienen para llegar a sus comunidades y, por las noches, sólo se les permite atravesarlo hasta las ocho p.m. La subalcaldía Tunari interviene en la controversia y luego de una reunión sostenida con las y los comunarios y representantes de la urbanización, acuerdan que todos las y los pobladores de Andrada contarán con una credencial y que con ese documento podrán circular por la urbanización. Asimismo, las y los vecinos demandan que se permita crear una nueva línea de transporte que llegué hasta las dos poblaciones.

En la ciudad de Santa Cruz, alrededor de 50 choferes de la Asociación de Taxis Centinelas del Chaco protestan por la revocatoria de la autorización de circulación de sus vehículos, que operaban desde hace 10 meses en el distrito 12, en horario nocturno, de 18:00 a 6:00 horas. La revocatoria de permiso, por parte de la municipalidad, se da luego de que la asociación fuera denunciada por trabajar fuera de horario. De esta manera, la alcaldía, tras una inspección de verificación de la denuncia, habría procedido a quitar el permiso de circulación correspondiente. Ante el hecho, los choferes y sus familiares organizan, en horas de la mañana, una protesta frente a la Oficialía Mayor de Planificación y, pasado mediodía, prenden una fogata e improvisan una olla común para alimentarse. Alrededor de las 15:00 horas, al momento en que las y los funcionarios municipales retornaban a sus funciones, se da un intercambio de palabras que deriva en un enfrentamiento con palos y piedras. La Policía interviene y detiene a

seis personas de entre los manifestantes. El director municipal de Tráfico y Transporte, Rodrigo Flores, informa que los transportistas habrían sido citados a una nueva reunión para tratar la demanda de los choferes, quienes piden no sólo que les devuelvan la licencia, sino que le amplíen la ruta y el horario.

Martes 11

Las y los trabajadores de salud de los hospitales de Santa Cruz ingresan en un cuarto intermedio en sus protestas por la restitución de pago del bono de antigüedad, basado en el cómputo de los tres salarios mínimos nacionales. En este sentido, deciden esperar hasta el viernes de esta semana, cuando la Dirección Departamental del Trabajo debería oficializar a la alcaldía una resolución en la que se exija la restitución del bono, bajo el argumento que de lo contrario se estaría incurriendo en un despido indirecto, vía reducción de salario.

En Cochabamba, los internos de la cárcel de San Pedro de Sacaba se amotinan contra la decisión del gobernador de prohibición de fiestas de fin de año y denuncian el cobro de un dinero que se exige a los nuevos detenidos y que se aplica de manera arbitraria. El comandante de la Policía de Sacaba, Carlos Arismendi, respalda la demanda de eliminación de estos pagos y explica que la situación llegó al límite porque se dio el caso de adultos mayores que dormían a la intemperie debido a que no tenían para pagar por una celda. Entretanto, la directora de Régimen Penitenciario, Sissy Gutiérrez, intenta dialogar con los representantes de los 220 internos detenidos en San Pedro, pero éstos se niegan a flexibilizar sus demandas. La Policía de Sacaba refuerza la seguridad del penal con más de medio centenar de efectivos que resguardan techos, puertas y ventanas.

Lunes 17

En La Paz, un grupo de comerciantes de abarrotes de esta ciudad y de El Alto realizan un paro que incluye el cierre de sus negocios para exigir que el gobierno ordene la reubicación de las tiendas de EMAPA en zonas periurbanas. Según los comerciantes, las filas que se forman para comprar azúcar y otros productos alimentarios en EMAPA no permiten que ellos puedan realizar sus ventas cotidianas. Asimismo, señalan que los precios que ofrece esta empresa, al ser más baratos, generan una competencia "desleal", porque los comerciantes adquieren su mercadería a precios más elevados y pagan el alquiler de las tiendas, siendo la venta su única fuente de ingreso.

En Cochabamba, comerciantes de la avenida "Héroes del Chaco protestan ante el anuncio de la Alcaldía municipal de esa ciudad que prevé desalojarlos del lugar. Así, los comerciantes realizan una marcha para exigir la renuncia de la alcaldesa Carla Lorena Pinto. Por su lado, La alcaldesa explica que, a pedido de la población, está en marcha un plan de reordenamiento del comercio y también del transporte, a fin de descongestionar una de las avenidas más importantes de ese municipio, precisamente la que conduce a la

Iglesia de San Idelfonso y al santuario de la Virgen de Urkupiña. La autoridad aclara, además, que la Alcaldía trata sólo de dar cumplimiento a una ordenanza aprobada ya en el año 2003 por autoridades anteriores. Asimismo, la presidenta de la Federación de Comerciantes, Mercedes Mancilla, manifiesta su preocupación porque existen muchos de los asentados en dicha avenida que sólo cuentan con ese espacio para desarrollar su actividad; sin embargo, anuncia que de todas maneras analizarán las alternativas que ofrezca la Alcaldía.

En Cochabamba, la Gobernación del departamento decide conformar una comisión de alto nivel para atender las demandas de las ocho comunidades de Misicuni y el Distrito 9 de Quillacollo con el fin de clasificar las demandas entre aquellas que pueden ser atendidas directamente por el gobierno departamental y las que corresponden a otras instancias y de llegar a solucionar el conflicto suscitado entre las ocho comunidades que el pasado cinco de enero tomaron el campamento del proyecto múltiple Misicuni demandando 22 puntos. El principal tiene que ver con una compensación por las tres hectáreas adicionales que el proyecto ha ocupado. Aunque en inicio los comunarios exigían la entrega de unas 40 hectáreas de tierras en el oriente o en el trópico cochabambino a cambio de las tres hectáreas que se han visto recientemente afectadas por las obras y por las anteriores tierras cedidas, luego de un encuentro se acordó respetar los convenios anteriores amparados en la ley. Por su parte, los pobladores que tomaron el campamento explicaron que piden una compensación justa, porque desde que comenzaron las obras han perdido 90 vertientes y la apertura de caminos ha disminuido sus tierras de pastoreo.

Martes 18

La Comisión Nacional del Refugiado de Paraguay (CONARE) determina dar refugio político al gobernador suspendido del departamento de Tarija, Mario Cossío, quien es procesado por el Ministerio Público en Bolivia por presuntos delitos de corrupción. El trámite de refugio político a favor de Cossío ha generado tensión en las relaciones bilaterales, denunciándose como injerencia las acciones realizadas desde el Ministerio de Transparencia de Bolivia, desde la cual se buscó persuadir a los legisladores del vecino país para que allanen la extradición de la autoridad departamental.

Miércoles 19

En La Paz, dos grupos de artesanos de la Feria de Alasita se enfasan en una batalla campal en la puerta de la Alcaldía central. El sector liderado por Balbina Tapia exige la instalación de puestos sobre la calle Wenceslao Argandoña y el otro, presidido por Rolando Huanca, rechaza esta demanda. Ambos sectores debían reunirse con el director de Gobernabilidad de la Alcaldía paceña, Pedro Susz, y es en el momento de la espera que se dan los insultos que derivan en conflicto. Tras la batalla callejera, a las 11:30, los comerciantes que quieren instalar sus puestos sobre la Argandoña bloquean las calles

del centro paceño y amenazan con declararse en huelga de hambre. La pelea disuade a la Alcaldía de habilitar la citada arteria para instalar puestos de venta, debido a que se podría generar otro foco de conflicto con los expositores del Campo Ferial Bicentenario. Por la tarde, Susz ratifica que todos los puestos serán instalados en predios del Campo Ferial y que no habrá expositores callejeros.

Jueves 20

En Santa Cruz, trabajadores sindicales del hospital municipal San Juan de Dios inician un paro de 48 horas. La medida de presión se lleva a cabo para protestar por la falta de alimentos y productos para la comida de los pacientes y de los trabajadores. Pese a que la Alcaldía de esta ciudad señala que no existe desabastecimiento, los trabajadores denuncian que la actual directora municipal de salud, Rima Ribera, ha señalado que la Alcaldía sólo proveerá insumos para la alimentación de los pacientes y no para el personal del hospital. Asimismo, los trabajadores exigen la atención de otras demandas como la anulación de la licitación para la compra de equipamiento para el nosocomio, el cumplimiento de pago de aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y a la Caja Nacional de Salud (CNS), y se quejan por la falta de renovación de los contratos de algunos funcionarios. A esto se suma la denuncia de que no se hace nada para habilitar los quirófanos, que hace varios años no funcionan. Paralelamente, trabajadores eventuales de la CNS radicalizan sus medidas de presión iniciadas en días pasados, crucificándose en la puerta del centro hospitalario de la avenida Cañoto y bloqueando por algunas horas la vía. Exigen que sus sueldos sean nivelados a lo que ganan los funcionarios de planta que, según estos empleados, en algunos casos es hasta de un 300% más. Al final de la tarde, se decide levantar la medida para esperar hasta el día 21 de este mes una respuesta al pedido. De no ser escuchados o si la respuesta que reciben no es satisfactoria para el sector, amenazan con iniciar una huelga de hambre indefinida.

Viernes 21

En Santa Cruz, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios cumplen el segundo día de paro. La crisis de los hospitales en esta ciudad amenaza con agudizarse, puesto que los funcionarios de la maternidad anuncian una huelga indefinida a partir del lunes 24. Con el fin de frenar el paro indefinido anunciado en la maternidad, representantes del municipio de Santa Cruz se reúnen con los trabajadores de este centro asistencial, pero no se logra ningún acuerdo y los funcionarios ratifican la medida, aunque indican que el encuentro sirvió para plantear su pliego petitorio.

En Cochabamba, integrantes de diferentes sectores afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) y al Sindicato de Fabriles realizan una marcha de protesta pidiendo el incremento salarial superior al 20 %, la no especulación de los precios y rechazando las medidas económicas del gobierno respecto a los productos de la canasta familiar. El dirigente de la COD, Gustavo Moreira, anuncia que los 35 sectores afiliados

a la misma esperarán el mensaje que pronunciará el presidente Morales mañana para asumir otras medidas de presión. También asegura que no tolerarán ningún "mini gasolinazo", al tiempo de pedir un salario justo para los trabajadores.

Otra vez, en La Paz, artesanos de la Feria de Alasita bloquean los ingresos de la Avenida del Ejército y la calle Wenceslao Argandoña, en rechazo a la determinación de la Alcaldía de evitar que los expositores se asienten en vía pública. Además, anuncian que el día de la inauguración de la feria, en la plaza Eliodoro Camacho, recibirán al alcalde paceño Luis Revilla con huevos y tomates. Sin embargo, este grupo de artesanos, que pertenece al grupo de Balbina Tapia, firmó ayer un acuerdo con la municipalidad, para dejar expeditas la calle Argandoña, las avenidas del Ejército y Simón Bolívar y el atrio del Teatro al Aire Libre. Tapia, secretaria general de la Federación de Artesanos de la Alasita, explica que el sector que les fue asignado dentro del Campo Ferial Bicentenario no tiene luz eléctrica ni agua potable.

Sábado 22

En Santa Cruz, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios piden que la Fiscalía intervenga el nosocomio para verificar si son ciertas las denuncias que hacen los dirigentes sobre un supuesto sobreprecio en la compra de alimentos y las malas condiciones en que está el centro asistencial. Ayer concluyó el paro de 48 horas y anuncian que habrá otro cese de actividades a partir del martes de la siguiente semana. A este conflicto, que provocó perjuicios a más de 200 personas que no pueden contar con las atenciones hospitalarias, se suma el paro de 24 horas que llevará adelante el lunes el centro de maternidad Percy Boland. La decisión fue asumida luego de un ampliado de los trabajadores de este nosocomio, que no están conformes con la respuesta de la Alcaldía al pliego petitorio que plantearon a principios de este año. En este documento solicitan aumento salarial, dotación de uniformes, respeto a los bonos de vacunación y transporte y contratación de personal eventual, entre otros puntos. Según la dirigencia sindical, en 2010 el pliego petitorio sólo fue aplicado en un 40%. Por su parte, la oficial mayor de Desarrollo Humano, Ana María Encina, anuncia que la municipalidad iniciará el mantenimiento rutinario de los hospitales de tercer nivel que hay en la capital cruceña, como el San Juan de Dios.

Lunes 24

En Santa Cruz, campesinos, transportistas y comerciantes del municipio de El Torno instalan un bloqueo en la carretera que va hacia las provincias de los valles en siete puntos para demandar celeridad en el proceso judicial instaurado contra tres ex funcionarios de alto rango de la Alcaldía de esta localidad. Según señalan los líderes de la protesta, el bloqueo se efectúa para presionar al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para que acelere la investigación y proceso en contra del ex alcalde Wilber Soliz, el ex presidente del Concejo Wálter Bolívar Vaca y el ex oficial Mayor

Administrativo Eddy Ruiz Delgadillo, quienes habrían causado daño económico a El Torno por más de Bs 52 millones, manteniendo paralizadas obras de infraestructura o construyéndolas mal. En noviembre de 2008, el viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción denunció a las principales autoridades municipales de El Torno ante la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz por varias irregularidades, entre ellas la rescisión de un contrato con una empresa constructora, lo que supuestamente provocó un daño al municipio de Bs 2 millones. En diciembre del mismo año, Wilber Soliz fue aprehendido por orden del fiscal Alexander Osinaga, bajo acusación de irregularidades en la suscripción de un contrato de Bs 9 millones por un plan de drenaje. Al día siguiente, Soliz recuperó su libertad bajo medidas sustitutivas a la detención (arraigo, garantes y comparecencia ante la Fiscalía). Así, en marzo de 2009, los vecinos de El Torno y comunidades aledañas bloquearon por primera vez la carretera a los valles cruceños para exigir el procesamiento de las ex autoridades por daños económicos a la Alcaldía torneña. Meses más tarde, en agosto de 2010, representantes cívicos y gremiales de la localidad, durante una visita a Sucre, obtuvieron la promesa de la Fiscalía General de conformar una comisión para investigar un daño económico por más de Bs 52 millones cometido por las ex autoridades municipales de El Torno. En esa oportunidad, el fiscal General, Mario Uribe, delegó el caso a la fiscal Mirna Arancibia y a sus colegas cruceños Álvaro Latorre y Fanny Alfaro.

En la localidad de Llallagua (Potosí), autoridades originarias y grupos de pobladores de las comunidades indígenas de los chullpas y los sicoyas, junto a cerca de 3.000 cooperativistas de los centros mineros de Llallagua, Siglo XX y Uncía, inician una manifestación en defensa de la economía popular con el fin de evitar el agio, especulación y alza indiscriminada de los precios de los alimentos. Sin embargo, la medida de protesta deriva en actos vandálicos con el saqueo de algunos centros de expendio de alimentos y otros productos, además de agresiones a periodistas que cubrían la marcha en esta población del norte del departamento de Potosí. La intervención de la Policía evita que los enfrentamientos se radicalicen y logra negociar con los manifestantes para que los mismos cooperen en la devolución de artículos robados por la turba, iniciándose posteriormente una reunión para evaluar los violentos hechos sucedidos en la jornada cuando se produjeron saqueos a comercios para así poder establecer responsabilidades. Posteriormente, un cabildo efectuado por vecinos y comerciantes de las calles afectadas determina llevar adelante cuatro medidas: iniciar una vigilia permanente; organizarse por barrios o campamentos para darse seguridad mutua; pedir la renuncia del comandante de la guarnición policial de la población, coronel Miguel Ángel Narváez; y desconocer las instituciones que no fueron parte del cabildo (Alcaldía Municipal y Comité Cívico).

En Santa Cruz, los trabajadores del centro materno Percy Boland cumplen un paro de 24 horas, en protesta por la falta de respuestas positivas a sus demandas, que incluyen la recontratación de empleados eventuales. Entretanto, los funcionarios del San Juan de Dios se reunirán para decretar si cumplen o no una huelga de 72 horas. Las autoridades de salud del municipio cruceño descalifican dichas protestas e insisten en que nada justifica el perjuicio a la población.

Martes 25

Transportistas, campesinos y comerciantes del municipio El Torno suspenden el bloqueo de carretera a los valles tras recibir el compromiso de la Fiscalía General Plurinacional de no cambiar a los tres fiscales que investigan denuncias contra tres altas ex autoridades municipales. El desbloqueo de la carretera se inicia posteriormente. Horas antes de la reapertura de la carretera a los valles cruceños hubo amago de pelea entre los bloqueadores y los transportistas que se quedaron varados por más de 24 horas entre los siete puntos de bloqueo, entre Santa Martha, Santa Rita, El Torno, Limoncito, Jorochito y el puente de Tarumá.

En La Paz, en el cantón Yaco de la provincia Loayza, campesinos y cooperativistas mineros de la localidad de Caracoles avasallan violentamente la mina Laramcota, concesionada por la Empresa Minera Barrosquira (EMBAS). Los representantes de EMBAS aseguran que la toma fue alentada por el personal del departamento minero de la gobernación y que esperan llegar a una solución entre ambos grupos a través del diálogo para que así la minera continúe libremente con los trabajos de exploración y se respeten estos lugares, precisando además que EMBAS invirtió cerca de 750.000 dólares para realizar trabajos de exploración en ese lugar. Asimismo, esta empresa privada recordó que sufrió la toma de la mina de wolfram Himalaya, en La Paz, hace más de tres años, problema al que aún no se le dio una solución, como también la pérdida del contrato de riesgo compartido de la mina de estaño Caracoles, tras el avasallamiento de cooperativistas de ese mismo centro minero en 2004. Por su parte, la Federación Sindical de trabajadores Mineros de Bolivia (FSMB), en un boletín de prensa, condena ese lamentable hecho que viola flagrantemente los derechos fundamentales del trabajo y pide a las autoridades de gobierno dar una solución "inmediata" al conflicto, además de respetar una resolución multiministerial suscrita en mayo de 2009.

En Llallagua (Potosí), pobladores de esta localidad realizan una manifestación para exigir a las autoridades garantías que impidan nuevas agresiones y saqueos comerciales luego de que ayer los comercios fueron destrozados tras una movilización que reclamaba por el alza de precios de los principales artículos alimenticios. La marcha se detiene frente a la Alcaldía de Llallagua en espera de un informe del alcalde sobre las acciones emprendidas contra de los agresores.

Miércoles 26

En La Paz, un grupo de cinco personas con discapacidad corta el tráfico vehicular a una cuadra de la Plaza Murillo, para exigir al gobierno de Evo Morales la asignación de un bono anual de 3.000 Bs. Los manifestantes señalan que cuentan con un compromiso firmado con el Ministerio de Justicia y reclaman que el gobierno, de un fondo de 40

millones de bolivianos que había comprometido en 2007 para ese sector, saque los fondos para la entrega de un bono especial.

En toda Bolivia, se realiza el masticado masivo de la hoja de coca para que mediante este acto simbólico diferentes organizaciones indígenas, campesinas y movimientos sociales exijan a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la despenalización de esta planta. Para que se lleve a cabo este acto los productores de coca reparten por los diferentes lugares una bolsa de coca. Por otra parte, a este evento se unen representantes de países extranjeros como Argentina, Brasil, Perú y otros lugares donde se encuentran comunidades bolivianas. En este día del “acullico” (masticación tradicional de la hoja de coca) se expondrán productos dando a conocer las cualidades medicinales y alimentarias elaboradas en base a la coca. La hoja milenaria en Estados Unidos es considerada como cocaína.

En La Paz, la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de este departamento (FDTFLP) realiza una marcha contra el incremento en los precios de los productos de la canasta familiar. La dirigencia pide paralelamente un aumento salarial de al menos un 25% debido a que sus salarios no cubren el constante aumento en los precios de los productos alimenticios. Por su parte, la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) informa que el próximo ampliado nacional determinará si el incremento que pedirá el sector será del 30%.

Jueves 27

La Corte Superior de Justicia de Chuquisaca restituye en sus funciones a Verónica Berrios como alcaldesa de Sucre, en reemplazo de José Santos Romero, quien fue elegido como alcalde en una polémica sesión del Consejo Municipal el pasado 10 de enero. Por su parte el ahora ex alcalde Santos Romero, tras conocer la determinación de la Corte Superior, dice que no apoyará la gestión de Berrios e indica que apelará a los movimientos sociales para que tomen la alcaldía de Sucre. Berrios, al conocer el fallo, agradeció la decisión de la Corte y anuncia que de manera inmediata asumirá sus funciones para continuar con su trabajo. Los bandos que apoyaban tanto a Romero como Berrios, al enterarse del resultado, se enfrentan con insultos y empujones.

En Cochabamba, decenas de trufis de la línea 232, que prestan el servicio de transporte interprovincial Sacaba-Cochabamba, interrumpen la libre transitabilidad peatonal y vehicular en la plaza 14 de Septiembre en protesta por la supuesta violencia ejercida por las líneas 230 y 270 en su contra. Los choferes de la línea 232 piden la intervención de las autoridades para evitar enfrentamientos con las líneas mencionadas y garantías para operar en la ruta que va desde la población de Sacaba hasta la zona norte de Cercado. Uno de los chóferes, Ernesto Revollo, señala que el problema está en la ordenanza que aprobó el Concejo a fines del pasado año, que legalizó 23 nuevas líneas y dejó atrás otras tantas, entre las relegadas está la línea 232.

En Cochabamba, persiste la tensión en el campamento de Misicuni cuando se da el hostigamiento a un grupo de trabajadores que ingresan a los terrenos en conflicto que aún no han sido compensados para realizar unos estudios. Pobladores de la comunidad de Patapampa expulsan a los trabajadores, decomisando sus materiales de trabajo y apedreando su vehículo. El incidente no pasa a mayores, pero impidió que los trabajadores culminen con su trabajo. Al margen de este hecho, las obras de la segunda fase en el campamento de Misicuni se realizan con normalidad. Una de las ofertas para superar el conflicto con las comunidades es indemnizar económicamente a la comunidad de Patapampa por las tres hectáreas que se han visto recientemente afectadas por las obras de construcción del estribo izquierdo de la futura represa de 120 metros de altura.

Viernes 28

En La Paz, los damnificados de la zona Huano Huanuni bloquean la calle 17 de Obrajes para exigir al Ejecutivo edificar nuevos inmuebles y a la Alcaldía resolver el problema que impide contar con el terreno con ese fin. El plan habitacional debería construirse en la zona Peña Azul, al sur de la ciudad de La Paz, bajo la coordinación del Viceministerio de Vivienda. En medio de la protesta, una de las damnificadas relata que los damnificados viven “entre dos familias dentro de un solo módulo. Nuestros hijos, nuestras familias están ahí, en esas condiciones, lo que no es digno, queremos viviendas dignas”. Una vez que supo de los derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias, el presidente Evo Morales había comprometido una inversión de dos millones de bolivianos para la construcción de las viviendas. El presupuesto debía haber sido administrado desde el Ministerio de Servicios y Obras Públicas. Como contraparte, la Alcaldía comprometió la identificación de un terreno para la obra y el lote elegido está ubicado en Peña Azul; sin embargo los vecinos de ese lugar rechazan la propuesta del municipio, por lo que los damnificados anuncian más medidas de presión. El deslizamiento dejó 72 viviendas destruidas, 118 familias sin techo y cerca de 400 damnificados, entre adultos y niños.

Sábado 29

El Ministerio de Minería presenta un informe en el que se da cuenta de los conflictos suscitados por la toma de minas en 2010: el mismo señala que en La Paz existen 16 casos latentes; en Potosí, cinco; en Oruro, cuatro; en Santa Cruz, dos, y Beni y Pando, uno. De todos los casos registrados, 11 son por avasallamientos y cuatro por contaminación del medio ambiente, entre otro tipo de denuncias. En noviembre del 2010, el presidente de la Cámara Nacional de Minería (CANALMIN), Saturnino Ramos, denunció que cerca de 201 concesiones mineras chicas, medianas y cooperativas de Potosí, La Paz, Cochabamba y Oruro fueron avasalladas por comunarios desde el 2004, “cuando comenzaron a elevarse internacionalmente los precios de minerales como el estaño y la plata”. En La Paz, según los casos más

relevantes, la Empresa Minera Himalaya fue tomada por comunarios de la Central Agraria Cayinbayá sector III, provincia Murillo. Hasta el momento, un equipo de auditores trabaja con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) para solucionar el conflicto y se emitió una resolución interministerial. Otro de los casos que se registran, es la denuncia de la Comunidad Agua Blanca sobre daños al nevado del cerro Presidente por parte de la Cooperativa Flor de Nevado. Al menos 180 familias, que se proveen de agua por el deshielo del nevado son afectadas por la contaminación. El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas realiza inspecciones para corroborar las denuncias. También se registró el avasallamiento y desalojo a la empresa minera Mauricio Ignacio por la Central Agraria de Zongo. Las partes tienen voluntad de diálogo y fueron citadas por el Ministerio de Gobierno, se lee en el informe. En el departamento de Oruro, el Ministerio de Minería recibió denuncias de que comunarios de la provincia Cercado piden resarcimiento de daños ambientales de sus tierras ocasionados por la Empresa Minera Inti Raymi. La empresa fue convocada por el ministerio y la Gobernación. En Potosí, se denunció la explotación irracional del Cerro Rico, por lo que una comisión técnica estatal trabaja en el levantamiento topográfico del cerro y otra comisión analiza las posibles soluciones al patrimonio.

En La Paz, representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y del viceministerio de Pensiones determinan conformar una comisión técnica para zanjar la diferencia del porcentaje que se debe pagar a las viudas de los jubilados fallecidos, en el marco de la nueva Ley de Pensiones. Mientras la COB plantea el 100% de la jubilación, el gobierno propone 80%. Mientras tanto, se ha declarado un cuarto intermedio en las negociaciones del Reglamento de la Ley de Pensiones, debido a que el viceministerio del ramo plantea que cuando el titular de una jubilación haya fallecido la cónyuge reciba sólo el 80% de la renta. Esta propuesta fue rechazada por la mayoría de los representantes de las organizaciones que integran esta comisión.

Lunes 31

En La Paz, un grupo de discapacitados y sus familiares intentan ingresar con violencia a la Plaza Murillo para instalar una movilización frente al Palacio de Gobierno en demanda de un bono de 3.000 bolivianos que aseguran fue comprometido por el Estado, mediante un acuerdo que firmaron con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Evelyn Llanos, quien se habría comprometido para que hoy salga un decreto orientado a descentralizar de un fondo común un ítem para gente con discapacidad en cada departamento.

En Cochabamba, más de 500 productores lecheros bloquean la avenida Blanco Galindo, en demanda de un subsidio estatal que aminore los costos de producción. Germán Terán, presidente de la Asociación de Lecheros, asegura que el precio de la leche fresca se va a incrementar indefectiblemente, aunque una subvención del Estado haría que la subida no sea de gran impacto. Germán Terán también anuncia que hoy, a partir de las 15:00 horas, se reunirá en La Paz con la Ministra de Desarrollo Productivo. El dirigente afirma

que el incremento no está en discusión, sino el límite del porcentaje de éste, el cual se reduciría en caso de que el gobierno accediese en ayudar al sector lechero.

En La Paz, los afiliados a la Cámara de Transporte Pesado de El Alto (CTPEA) toman las instalaciones de Depósitos Aduaneros de Bolivia (DAB) y declaran un paro indefinido hasta que el gobierno destituya al gerente general de esa empresa estatal. Despues de la toma del depósito aduanero, ubicado en El Alto, la CTPEA envía una carta al presidente Evo Morales donde le hace conocer el inicio de un paro indefinido a consecuencia “del mal manejo y la corrupción existente” en la empresa, y por la “excesiva burocracia y negligencia” de su gerente General, Yoni Molina Dávalos. Los transportistas dicen haber intentado dialogar en busca de soluciones, sobre todo en cuanto al cargado y descargue de mercancías, en donde se encuentran las principales dificultades. Sin embargo, afirman que ninguna propuesta fue atendida por la administración de DAB, dependiente del Ministerio de Economía. Por tanto, añaden, la medida de presión será adoptada hasta la destitución del actual gerente de DAB. El conflicto se inició por la saturación de los espacios en los galpones que administra Depósitos Aduaneros, que no cuenta con los almacenes suficientes que demanda el sector del transporte pesado. Por esta razón, el trámite para el ingreso de mercaderías, que debería demorar un máximo de 72 horas, tarda ahora de 15 a 20 días.

En Cochabamba, trabajadores de la Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental (EMSA), protagonizan en inmediaciones de la plaza 14 de Septiembre, una masiva marcha demandando ser tomados en cuenta en la reingeniería de la empresa de recojo de basura, que viene siendo encaminada por la Alcaldía del Cercado. El justificativo para rechazar la medida por parte de los trabajadores radica en que habría sido aprobada sin la participación directa de los obreros. A esto se suma que los trabajadores temen una posible restructuración en las planillas de sueldos de los trabajadores. Del otro lado, el gerente general de EMSA, David Rocha, califica las medidas de protesta como un “exceso de susceptibilidad”, a tiempo de explicar que la medida está basada en la reestructuración administrativa y que ésta “no toca la parte operativa” de la empresa.

Glosario de siglas

AFP Administradora de Fondo de Pensiones

CANALMIN Cámara Nacional de Minería

CGTFB Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia

CNS Caja Nacional de Salud

COB Central Obrera Boliviana

COD Central Obrera Departamental

COMIBOL	Corporación Minera de Bolivia
CONARE	Comisión Nacional del Refugiado de Paraguay
CTPEA	Cámara de Transporte Pesado de El Alto
DAB	Depósitos Aduaneros de Bolivia
EMAPA	Empresa Estatal de Apoyo a la Producción de Alimentos
EMBAS	Empresa Minera Barrosquira
EMSA	Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental
FDTFLP	Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz
FELCC	Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen
FMSB	Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
MAS	Movimiento Al Socialismo
ONU	Organización de las Naciones Unidas

Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinadoras y encargadas del relevamiento y sistematización: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes: Los Tiempos, La Razón, Bolpress, ABI y El Deber.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL
Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

País

Mes de Año

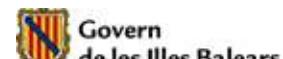
Editada en el MES de AÑO



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears
Conselleria d' Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 000

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de*



Integrantes

Nombres

Fuentes

Nombres

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Febrero de 2011

Martes 1

La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, convoca a los representantes de la Cámara del Transporte Pesado de El Alto (CTPA) a un diálogo y a levantar la toma de instalaciones de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) que se realizó el día 31 de enero como medida de protesta para denunciar la excesiva burocracia y la mala administración en la ANB, exigir la renuncia de su gerente, demandar la adquisición de maquinaria pesada y el arreglo de vías. Respecto a la adquisición de maquinarias, Ríos informa que se acaban de comprar 12 montecargas y un portacontenedor de 45 toneladas, acción que demuestra la voluntad gubernamental de resolver el conflicto.

En Cochabamba, un grupo de vecinos y vecinas de la zona del cruce Taquiña bloquean la avenida Simón López frente a las oficinas de Insumos Bolivia, en protesta por la paralización de la venta de azúcar. Los vecinos, que estaban haciendo largas filas desde tempranas horas de la mañana para comprar azúcar, se molestan cuando los trabajadores de Insumos Bolivia anuncian que no iban a vender sus productos por la tarde, debido a que sólo tenían azúcar en grandes cantidades y no fraccionada por kilos. Después de que la Policía llega al lugar para evitar confrontaciones mayores, los manifestantes acuerdan realizar una lista para que el grupo que no fue atendido sea primero en las filas de Insumos Bolivia.

Miércoles 2

En Cochabamba, cientos de productores lecheros bloquean por algunas horas las vías de acceso a PIL Andina, exigiendo reunirse con los ejecutivos de la empresa para acordar el nuevo precio de venta de la leche cruda. Frente a la amenaza de radicalizar las medidas de presión, el gerente general de PIL Andina, Pablo Vallejos, se reúne con los dirigentes de los productores lecheros para informarles de los avances en la reunión con el gobierno. Ayer, el presidente de la Federación de Productores Lecheros (FEPROLEC) de este departamento, Germán Terán, informa que su sector decidió incrementar el precio de la leche cruda de Bs 2,68 a Bs 4,50 el litro.

Jueves 3

En Cochabamba, dos bandos de vecinas y vecinos de diversos distritos se enfrentan en la zona de Sacaba debido a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para el lugar. Para uno de los bandos, la instalación de la planta es perjudicial porque será emplazada cerca de sus viviendas y temen que se convierta en un foco de contaminación, mientras que el otro bando, que apoya a la Alcaldía, exige su

construcción y la ejecución del proyecto que permitiría purificar el líquido para reutilizarlo en el riego de los sembradíos, que el año pasado fueron afectados por la sequía. Pese a la intervención policial la tensión prosigue en este municipio, ya que el grupo que apoya al municipio amenazó con intervenir el distrito donde residen los que se oponen.

En La Paz, la Policía desaloja y dispersa de manera violenta una marcha organizada por personas con capacidades diferentes que exigen el pago del bono Equidad de Bs 3 mil, y que bloquea el ingreso al Ministerio de Justicia y a una vía de El Prado. El comandante departamental, coronel Roberto Tórrez, asegura que se trató de un “traslado” en el que utilizaron 43 mujeres policías y que “el plan fue elaborado desde el Ministerio de Gobierno, para garantizar el libre tránsito de los ciudadanos por esta vía”. Los discapacitados exigen el desembolso de Bs 160 millones que se habrían acumulado desde el 2007 para el pago del bono Equidad. Por su parte, la ministra de Salud, Nila Heredia, asegura que “el presupuesto de Bs 40 millones no alcanzará para los más de 80 mil discapacitados ni a cuatrocientos bolivianos al año”. Por eso propone la creación de un centro de rehabilitación.

Sábado 5

En el Chapare, se desencadena un conflicto por paradas entre los sindicatos Germán Bush (Shinaota) y 2 de Junio (Chimoré), que instalan cuatro puntos de bloqueo en la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz. El bloqueo se radicaliza al avanzar la tarde, cuando la población de Chimoré, indignada porque un día antes alrededor de un centenar de miembros del sindicato Germán Busch propició una golpiza y destrozó la movilidad de su alcalde, Víctor Blanco, decide salir en su defensa y, por instrucción del Comité Cívico, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y la Federación de Chimoré instalan las cuatro barricadas para exigir que las autoridades hagan justicia por la agresión perpetrada contra Blanco. Horas más tarde, los transportistas de Shinahota y Chimoré aceptan dialogar para encontrar soluciones a sus demandas y suspenden el bloqueo.

Domingo 6

En La Paz, considerando la existencia de denuncias de avasallamiento de algunos cooperativistas a las áreas de explotación que son controladas por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) informa que se ha conformado una comisión mixta con autoridades del Ministerio de Minería y de la COMIBOL, que viajará entre el lunes y martes a las poblaciones donde se presentaron problemas entre cooperativistas mineros y de la empresa estatal por posesión de yacimientos. Las cooperativas denunciadas son Japo, Morcocala y San Pablo. Según dirigentes de FENCOMIN, la distribución en el ámbito minero se hace por cuadrantes, pero surgen problemas debido a que los comunarios de la zona consideran otra forma de división, la que habitualmente tienen y quieren hacer prevalecer y es eso lo que crea la confusión y el problema.

Lunes 7

En Santa Cruz, vecinas y vecinos de la urbanización Satélite Norte, ubicada en el kilómetro 17 de la carretera al norte, bloquean la vía durante varias horas para protestar porque la factura de enero por consumo de agua potable les llegó con sobreprecio; sin embargo la Cooperativa de Servicios Públicos de Santa Cruz (SAGUAPAC) justifica el cobro. Según los vecinos, de Bs 25 que pagaban hasta diciembre del año pasado, ahora las facturas por consumo de agua se duplicaron en algunos casos, en otros subieron hasta Bs 400 y hasta hubo uno en que se debe pagar Bs 3.000. Los vecinos advirtieron que si la cooperativa no les soluciona su demanda volverán a tomar medidas drásticas. Sin embargo, según explicó el gerente comercial de SAGUAPAC, Robert Becerra, los cobros sufrieron cambios debido a que a partir de enero entró en vigencia el servicio de consumo controlado, es decir, a través del medidor, cosa que no se hizo durante ocho años porque se mantuvo en vigencia la tarifa plana de Bs 25. De acuerdo con el descargo de SAGUAPAC, el año pasado se hizo un estudio técnico en el que la Cooperativa invirtió \$us 123.000 y se colocaron medidores a 2.500 usuarios de Satélite Norte; pero, a pesar de que acordaron con los dirigentes de la junta vecinal que iban a añadir en las facturas el costo de reposición, esto no se hizo efectivo y se limitaron a cobrar únicamente el consumo de agua potable.

En Cochabamba, comerciantes de abarrotes y vecinos se encuentran asentados en las calles Lanza y Brasil, exigiendo la venta libre de azúcar para el abastecimiento de la población y el rechazo a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). Sin embargo, en el afán de habilitar esta vía para la normal circulación de los motorizados, efectivos policiales llegan al lugar para controlar la situación que se torna violenta y obliga a los uniformados a dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos. Otros comerciantes como las reposteras se unieron a esta protesta indicando que se ven severamente afectadas por la inestabilidad en los precios de azúcar para la venta y, peor aún, por la escasez.

En Cochabamba, en el kilómetro ocho de la carretera nueva a Santa Cruz, otra vez las y los vecinos de Sacaba bloquean la avenida Villazón desde primeras horas de la mañana, en rechazo a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona sur de este municipio. Tras conocer esta situación, autoridades del municipio de Sacaba llevan adelante una reunión con autoridades de la Gobernación en busca de una solución que evite el perjuicio a quienes transitan la carretera interdepartamental. La pasada semana, por esta misma demanda, se registró un violento enfrentamiento entre los vecinos de Sacaba que dejó varios heridos.

Martes 8

En Santa Cruz, los trabajadores/as de salud realizan un paro de 24 horas, para exigir la restitución del bono de antigüedad a los trabajadores pagados con fondos propios de los hospitales. Según la Federación Departamental de Trabajadores de Salud, la medida de protesta responde al hecho que se ha esperado dos meses y este beneficio aún no ha sido restituido por el gobierno municipal, por lo que hoy no habrá atención en los centros

asistenciales ni en las redes de salud y sólo funcionarán los servicios de emergencia. Quienes se pliegan a la medida son más de 1.200 trabajadores que son pagados con fondos propios, a los cuales el municipio decidió otorgar dicho beneficio en base a un sueldo mínimo nacional, como lo establece la Ley del Funcionario Público, y no sobre los tres salarios mínimos nacionales, como lo estipula la Ley General del Trabajo. Los salubristas del hospital Japonés y San Juan de Dios fueron los primeros en protestar, luego se sumaron los del Oncológico, los del hospital de niños y los de algunos centros de salud.

En La Paz, la Confederación Nacional de Jubilados realiza una marcha en pleno centro de la ciudad demandando un mayor incremento en las rentas que perciben. El secretario ejecutivo de este sector, Néstor Muñoz, indica que se está considerando como segunda alternativa solicitar un bono para los rentistas que perciben entre Bs. 200, 300 y 400. Asimismo, anuncia que, de no ser atendidos en la plaza Murillo, se dirigirán al Ministerio de Economía y Finanzas para instalar una "alfombra humana" alrededor de la entidad en las próximas horas. Las medidas de presión se realizarán en los diferentes departamentos del país y se instruirá a los diferentes jubilados de otras ciudades a llevar adelante bloqueos y tomar las diferentes oficinas departamentales del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), en caso de que el gobierno nacional no atienda sus demandas.

En Cochabamba, se lleva a cabo un paro convocado por el Sindicato de Transportistas Urbanos de esta ciudad (micros y colectivos), en demanda del cumplimiento de la Ordenanza Municipal 41/95, cuya aplicación rigurosa derivaría en el repliegue del centro de la ciudad de al menos 23 líneas de taxitrujis. Los transportistas toman el centro de la ciudad con una marcha exigiendo la modificación o abrogación de la ordenanza 4027 que, según éstos, perjudica al gremio al igual que a la población.

En Cochabamba, miembros de dos cooperativas mineras se enfrentan en la provincia Bolívar en defensa de lo que cada bando considera su derecho de concesiones mineras. El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, confirma que estas pugnas se relacionan con demandas por los derechos mineros, descartando enfrentamientos por límites, como ocurrió en pasadas gestiones entre comunidades rurales de Bolívar y el departamento de Oruro. Asimismo, a través de la Dirección de Minería de la Gobernación se convoca a las partes en conflicto a un diálogo y a solucionar definitivamente las pugnas, ya que por informaciones que llegan desde la zona de conflicto se conoce que los mineros hicieron detonar en varias ocasiones fulminantes y dinamitas.

Miércoles 9

En La Paz, reclusos de la cárcel de San Pedro realizan una protesta y deciden no concurrir a las audiencias públicas, así como impedir el ingreso a ese reclusorio de un preso más, denunciando el hacinamiento y la falta de una infraestructura adecuada, además de exigir un incremento en el pago diario para alimentación, que reciben los privados de libertad. Según los internos, en 2010 el gobierno firmó un acuerdo en el que

se comprometió a reajustar el pre diario de 5,50 a 15 bolivianos, y a realizar obras de infraestructura para evitar el colapso de las secciones Pinos, Álamos, Prefectura, Palmar, Cancha, San Martín y Guanay. Sin embargo, el mismo aún no se cumple.

El presidente de la COMIBOL, Hugo Miranda, pide a los cooperativistas mineros de Oruro y Cochabamba dejar de lado posiciones caprichosas para encontrar un acuerdo sereno al conflicto que existe en el yacimiento de estaño de Japo, ubicado en los límites de ambos departamentos. Asimismo, Miranda exhorta a las cooperativas mineras de El Porvenir, Japo y Nueva San Pablo a dialogar con los comunarios de Pumiri, que se agruparon en la Cooperativa 16 de Marzo, aunque sin tener un yacimiento donde explotar mineral, y que protestan en el centro de La Paz desde hace dos días por una concesión en el cerro la Colorada. En septiembre del año pasado se registraron los primeros enfrentamientos en esa región, cuando los comunarios de Pumiri arremetieron contra los trabajadores de las dos cooperativas orureñas con una saldo de ocho heridos.

En Oruro, una masiva movilización convocada por la Central Obrera Departamental (COD) colapsa las principales vías en Oruro en protesta por el alza en las tarifas del transporte público y los precios de los productos de la canasta familiar y la escasez. Por su parte, los choferes del transporte público se movilizan para explicar a la población los motivos del incremento en un 50% en las tarifas del transporte público.

En Cochabamba, los choferes de taxitrujis, cuyas líneas atraviesan el centro de la ciudad, realizan una marcha de protesta que incluyó amagos de pelea con sus eventuales rivales, los transportistas urbanos de micros y trufis, que por medio día hicieron un alto en sus servicios. Los taxitrujistas protestan contra la ordenanza 40/27, que prohíbe el ingreso al centro de la ciudad de estas líneas de transporte debido a que sus vehículos son considerados ilegales y que provocan caos en el casco viejo. La ordenanza fue aprobada por el Concejo Municipal en diciembre del pasado año luego de cuatro meses de concertaciones.

Jueves 10

En La Paz, el Consejo de Delegados del penal de San Pedro y el Director Nacional de Régimen Penitenciario, Jorge Antonio Sueiro, inician negociaciones para escuchar las demandas de los reclusos y dar fin a las medidas de presión que asumieron desde el pasado miércoles.

En Cochabamba, las negociaciones entre COMIBOL para solucionar el prolongado conflicto entre los cooperativistas mineros de Oruro y de Cochabamba, que se disputaban concesiones para la explotación del yacimiento de estaño de Japo, ubicado en los límites de ambos departamentos, tienen un efecto positivo y logran el establecimiento de un acuerdo que garantiza un puesto de trabajo para todos los afiliados. La solución hallada implica que los comunarios de Pumiri (Cochabamba), agrupados en la Cooperativa 16 de Marzo, quienes protestaban los últimos días en el centro de La Paz, serán "absorbidos" por las sociedades mineras de El Porvenir Japo y Nueva San Pablo, que explotan el cerro la Colorada desde hace 20 años. Asimismo, el área de seguridad o zona franca de aproximadamente 2.500 metros cuadrados-entre Japo

y San Pablo-donde se asentaron irregularmente los comunarios de Pumiri, será distribuida entre las dos grandes cooperativas mineras con la condición de que los miembros de la Cooperativa 16 de Marzo se integren a una u otra cooperativa.

En siete ciudades del país, el sector de los gremiales realiza protestas, bloqueando calles y carreteras, para exigir el cierre de EMAPA y la venta libre de azúcar en el mercado interno. Los comerciantes minoristas advierten con radicalizar sus protestas el día 18 de este mes con la inclusión de otros sectores. La principal exigencia es el alejamiento de la firma estatal de la comercialización de productos alimenticios, principalmente del azúcar.

En Cochabamba, la intención de un grupo de asentados en Loma de Andalucía de abrir un camino “ilegal” aprovechando la oscuridad de la noche deriva en una pelea campal con un contingente policial, que deja un saldo de al menos cinco heridos y seis detenidos. Anoticiados de la contratación de un tractor oruga para abrir un camino de acceso hacia el asentamiento irregular, ubicado en las faldas del cerro San Pedro, en la jurisdicción del municipio de Sacaba, una comisión del Ministerio Público y un contingente policial se presentan en el lugar para impedir la concreción de la vía, pero son atacados por los pobladores que exigían el camino. Los efectivos deben hacer uso de la fuerza y utilizar gases lacrimógenos para decomisar y llevarse la maquinaria, además de detener a seis personas. En Lomas de Andalucía, cerca de 50 familias de escasos recursos viven en carpas improvisadas. Su situación es incierta, pues alegan que compraron los terrenos, cuando éstos se encuentran en áreas verdes y en las faldas del cerro San Pedro.

Martes 15

Desde la ciudad de El Alto, centenares de manifestantes de la FEJUVE bajan a la ciudad de La Paz en marcha de protesta por el alza de precios de la canasta familiar, colapsando el centro de la sede de gobierno. Las y los marchantes intentan ingresar a la Plaza Murillo, exigiendo la renuncia de la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Producción, Teresa Morales, a quien acusan de no haber sido capaz de frenar el incremento de precios desde que asumió el cargo, en enero pasado. Por su parte, en un ampliado, el sector transporte determina buscar el dialogo con las organizaciones sociales para consensuar conjuntamente el incremento de tarifas. De esta manera, se busca evitar conflictos con la población. La dirigencia señala que entre los puntos que quieren tratar está el compromiso de mejora del servicio, pues, según quejas de las y los vecinos en muchas ocasiones los choferes no cumplen ni con el recorrido asignado.

En Cochabamba, trabajadores de la fábrica Manaco salen en una movilización por el centro de la ciudad contra la decisión de los transportistas de elevar los precios de los pasajes de Quillacollo a Cochabamba, de 2 a 2,50 bolivianos, y obligan a los transportistas a replegar sus vehículos, con palos y chicotazos, mientras sus vehículos sufren la rotura de parabrisas y pinchazos de llantas. Fruto de ello, se dan amagos de enfrentamiento. Tras los conflictos, Lucio Gómez, principal dirigente de la Federación

del Autotransporte, señala que luego de la agresión, choferes “federados y libres deciden replegar los vehículos por el término de 24 horas a partir de las cero horas de hoy. Las y los marchistas obligan, a su paso, a cerrar comercios y puestos de venta.

En Cochabamba, en el municipio de Quillacollo, más de 300 comerciantes y gremialistas se movilizan en la ciudad contra el alza de los productos básicos de la canasta familiar y de las tarifas de transporte. De igual manera, vecinas y vecinos del Quillacollo marchan contra la subida de los precios del transporte. Un grupo de marchantes rompe faroles, vidrios, guiñadores de los vehículos de los transportistas que circulaban por la zona. Por su parte, trabajadores y trabajadoras municipales, realizan actos de protesta contra el alza de los precios, bloqueando los puentes Wayculi y Tacata, dejando, de esta forma, a decenas de vehículos del transporte pesado y buses de servicio interdepartamental varados por el lapso de ocho horas. Asimismo, la COD bloquea puntos estratégicos de salida al interior del país.

En la ciudad de Santa Cruz, choferes se movilizan por el centro de la ciudad demanda del incremento de pasajes de Bs 1,50 a Bs 2.

En la ciudad de La Paz, en la zona de Alto Irpavi, comunarios y comunarias del Sindicato Agrario del Fundo Irpavi, realizan una marcha de protesta en contra de la dotación del terreno del único campo deportivo del lugar, por parte de la alcaldía, a las 118 familias damnificadas del deslizamiento de Huanu Huanuni, en febrero del año pasado. Con la marcha irrumpen en una conferencia de prensa del director de Coordinación Territorial de gobierno autónomo municipal de La Paz, Fabián Siñani, quien, a su vez, señala que el municipio tiene los papeles que le dan el “derecho de propietario” y que los mismos han sido inscritos en las oficinas de Derechos Reales y que todas las certificaciones sobre el tema fueron presentadas al Ministerio de Obras Públicas para que el gobierno nacional pueda solucionar el problema. Entretanto, vecinos y vecinas de Peña Azul, Virgen de las Nieves, Las Lomas y Evenecer de Alto Irpavi piden que la alcaldía no les quite su “cancha”, que en el último tiempo la destinó para la construcción de viviendas para los afectados/as.

Los internos de la cárcel de San Pedro, en La Paz, protestan en demanda de atención y mejores condiciones de reclusión. Las acciones se inician en la sección 'Chonchocorito', pasada las 16h00, y obligan a movilizar al personal de la seguridad penitenciaria para evitar la violencia desatada. Media hora más tarde, se hacen presentes el director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro, el alcaide de San Pedro, Roberto Casas, y el defensor del Pueblo, Rolando Villena para mediar en el conflicto. Los internos señalan no estar en contra el Director de Régimen Penitenciario, ni de la policía, sino que reclaman temas estructurales, que por muchos años no fueron resueltos y que ocasionan las condiciones actuales de hacinamiento. Entre las demandas están mayor acceso a la educación, atención en salud, infraestructura y la elevación del pre diario (monto que reciben los reclusos para su manutención) de 5,50 a 15 bolivianos. Para tratar estos temas, la Defensoría del Pueblo convoca a una reunión a los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti; de Economía, Luis Arce; a la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, Teresa Rescalá; a representantes de la Corte Superior de Justicia del Distrito y a de la Fiscalía de Distrito de La Paz.

Miércoles 16

Autoridades nacionales y municipales no se ponen aún de acuerdo sobre el manejo del conflicto con los transportistas. Frente a las movilizaciones masivas de este sector, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) deja en manos de los municipios la resolución del conflicto con los choferes por el alza de los pasajes, señalando que esta es una competencia municipal. Sin embargo, el 27 de diciembre del 2010, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), mediante Resolución 0584, autorizará un incremento del 30% en los pasajes ante la incertidumbre generada por el decreto del llamado “Gasolinazo”. Sobre el tema, el director ejecutivo de la ATT, Fernando Llanos, explica que en virtud del artículo 96 de la Ley de Autonomías, la regulación del servicio y las tarifas del transporte urbano son de competencia de los municipios. Estos últimos piden al gobierno que defina rangos para su regulación, el presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), Óscar Montes, asegura que los municipios sólo pueden regular las tarifas después de que el gobierno nacional defina rangos o promedios para todo el país. Entretanto, autoridades municipales de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre promueven el diálogo entre juntas vecinales y choferes. El máximo dirigente nacional de los choferes, Franklin Durán, critica a la ATT señalando que al buscar traspasar funciones a las alcaldías puede generar enfrentamientos entre choferes, alcaldías y sectores sociales organizados.

En Cochabamba, trasportistas de los sectores libre y federado inician un paro de actividades de 48 horas y protagonizan una multitudinaria marcha que cubre, en su avance, más de diez cuadras. Bajo la consigna: “*Nivelación justa de precios*” protestan contra el alza de los productos básicos de la canasta familiar y la resistencia de la población a un incremento en los pasajes. La dirigencia señala que los transportistas también tienen familias que mantener y piden la comprensión de la población en general, señalando que están pidiendo un incremento razonable. Según datos del sector, la nivelación de precios, no afectaría a los escolares ni a los universitarios, solo el pasaje de adultos que se incrementaría de Bs. 1.50 se incrementaría a Bs. 2.00. En su trayecto, atacan la sede de los fabriles, en represalia por los hechos protagonizados por algunos trabajadores de la fábrica Manaco, en la jornada de protesta de ayer, cuando atacaron varios vehículos del transporte público. El ataque a la sede fabril deja vidrios rotos, computadoras y material de escritorio destrozados. Frente a estos hechos, los secretarios generales de los 57 sindicatos afiliados a la Federación de Fabriles de Cochabamba (FTFC) se declaran en emergencia y exigen que el secretario general del autotransporte, Lucio Gómez, se disculpe públicamente por los excesos, señalando que si no lo hace, ellos asumirán nuevas acciones al respecto. La Federación de Rentistas Mineros de Cochabamba, cuyas oficinas funcionan en el mismo edificio, denuncia el robo de 15000 Bs. La Policía llega al lugar e inicia una investigación. Los transportistas también atacan a la sede matriz de la FEJUVE en Cochabamba, ocasionando destrozos a sus inmuebles en revancha contra las acciones de un grupo de vecinos/as, que el día de ayer, en una marcha en Quillacollo ocasionaron daños a sus vehículos. Durante la marcha de los transportistas también se registran hechos de agresión verbal y física a periodistas, impidiendo que los mismos realicen sus labores. En este marco, El Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) suspende las actividades escolares en la ciudad y provincias aledañas a Cochabamba, como medida preventiva de protección a

las y los estudiantes y maestros, quienes, además, tendrían dificultades para llegar a sus centros educativos por el paro de transportes. La dirigencia del sector del autotransporte afirma el repliegue de sus vehículos para el jueves 17, señalando que temen posibles represalias de parte de los sindicatos de fabriles y de las juntas vecinales. La Unidad Operativa de Tránsito (UOT) de la Policía departamental instruye la prohibición de la salida de flotas de servicio interdepartamental, desde las 07:00 a 17:00, cuando se reinicia el flujo vehicular interdepartamental.

En Cochabamba, la asociación de Organizaciones Territoriales de Base (OTB) de Sacaba protesta exigiendo que las autoridades municipales y departamentales controlen el alza indiscriminada de los precios de la canasta familiar y de las tarifa del autotransporte. Las y los vecinos de Sacaba saquean mercados, tiendas comerciales y agrede a los propietarios que decidieron comercializar sus productos pese a la determinación asumida por la población de cerrar los centros de abasto. Producto de ello, se da un enfrentamiento entre marchistas y comerciantes.

En la ciudad de Oruro, con una marcha de protesta, obreros, mineros y juntas vecinales de barrios periféricos rechazan el alza de precios del transporte. Con una estrategia de movilización denominada "*Bloqueo de las mil esquinas*", obligan a los transportistas a replegar sus movilidades y a quitar los carteles con los que anunciaban tarifas incrementadas. Entretanto, el Concejo municipal, los choferes y las juntas de vecinos declaran un cuarto intermedio de 15 días en un diálogo de acercamiento que habían comenzado.

En Santa Cruz, transportistas marchan desde tres puntos de la ciudad rumbo a las oficinas del Concejo municipal, donde se analiza el posible ajuste tarifario. Los transportistas pretenden que el pasaje suba de Bs 1.50 a Bs.2.00. Sin embargo, no logran ingresar a la manzana cero, por el fuerte resguardo policial en la zona. Como otra medida de presión determinan replegar sus vehículos con placa impar y prestar su servicio sólo en un 50% hasta que se logre la nivelación de tarifas. Los choferes movilizados, al descubrir a vehículos de placa impar aún prestaban servicios, les rompen los parabrisas y pinchan las llantas. Por su parte, una marcha de estudiantes, que se desplaza por varias calles de la ciudad protesta por la subida del precio de los pasajes.

En Santa Cruz, la Federación de Sindicatos y Ramas Médicas de Salud (FESIRMES) declara un paro indefinido para exigir el pago de sueldos correspondiente a enero. A raíz de ello, se suspende la consulta externa del hospital de niños Mario Ortiz, pero los servicios de emergencia, de internación y de vacunación atienden con normalidad. La atención es irregular en el hospital San Juan de Dios, mientras que en la maternidad Percy Boland y en el Japonés nos e acata la medida. Autoridades del gobierno departamental explican que la demora en el pago de sueldos se debe a modificaciones en el software de las planillas por la aplicación de la nueva Ley de Pensiones.

Jueves 17

En conferencia de prensa, el presidente Evo Morales informa que en la mayor parte de las ciudades capitales el gobierno nacional impulsó la reconversión de los motorizados a

GNV, lo cual redujo los costos de operación de los transportistas públicos, por lo que pide a los choferes identificar a los motorizados que ahora usan gas natural y establezcan una tarifa especial. Plantea que, únicamente, en ciudades donde se justifique un ajuste se discuta ATT. El presidente condena los hechos de violencia suscitados el miércoles en Cochabamba de parte de los transportistas que atacaron sedes sindicales.

En Cochabamba, en Quillacollo, nuevamente las protestas de los choferes generaran violencia, cuando apedrean la fábrica Manaco, acusando a los trabajadores de esta fábrica de haber destrozado 15 motorizados durante su movilización de días pasados. La Policía interviene con el uso de gases lacrimógenos. La dirigencia fabril pide nuevamente que el dirigente máximo del transporte pida disculpas públicas a todo el sector y señala que los abogados de su organización están trabajando para que los transportistas repongan los daños causados a sus oficinas y que los responsables sean sancionados. Frente a los destrozos ocasionados en la fábrica Manaco, pobladores/as de Quillacollo determinan la implementación de un paro cívico indefinido.

En Sacaba, a la altura del kilómetro 20, en Villa Obrajes, comunarios/as de varias OTB cierran el tráfico vehicular con ramas, piedras y llantas e instalan una vigilia en cuatro puntos, demandando que se baje el precio de los pasajes de transporte público y de los artículos de primera necesidad. Las OTB de Sacaba declaran esta medida como indefinida.

En Santa Cruz, los transportistas trabajan sólo en un 30% de su capacidad vehicular, replegando sus vehículos para marchar hasta la plaza 24 de Septiembre, exigiendo nivelar la tarifa de Bs. 1.50 a Bs.2.00, arguyen que con los precios anteriores no logran cubrir los gastos de la canasta familiar, indicando que el arroz subió en 25%; el azúcar, en 100%. También señalan que su economía no da para hacer frente a los gastos de útiles escolares. La dirigencia no descarta declararse en huelga de hambre o llegar a medidas extremas como la de enterrarse vivos.

En La Paz, el alcalde Luis Revilla reitera su posición de no dar curso a ningún incremento hasta que el gobierno nacional no fije los parámetros respectivos. Añade que el municipio sólo dialogará con los choferes para encontrar alternativas. Entretanto, en Tarija, se informa que un ampliado de choferes definirá el alza de las tarifas de micro de Bs 1.50 a Bs 2.00. En Sucre, se anuncia que el municipio, choferes y juntas vecinales definirán el incremento de las tarifas de manera conjunta.

La Central Obrera Boliviana (COB) abandona la reunión que sostenía con los ministros de Trabajo, Félix Rojas; de Educación, Roberto Aguilar; de la Presidencia; Óscar Coca; de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, exigiendo tratar el tema salarial directamente con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García. En respuesta, el ministro de la Presidencia señala que el pedido no puede ser atendido, porque la definición del incremento salarial es competencia de los ministros del área. Con la ruptura del diálogo, COB define la realización de un paro de 24 horas con movilizaciones. Entre las demandas planteadas al gobierno está un salario mínimo nacional acorde a una canasta básica para cinco personas, calculada en de Bs 8.309,50 (\$us 1.183). La dirigencia sindical señala haber hecho el cálculo yendo a los mercados, pues lo consideran más

operativo y objetivo, dadas las consecuencias del Decreto 0748 de diciembre pasado (“Gasolinazo”), que pese a haber sido anulado, no paró la tendencia a un alza creciente de los precios en el mercado. El presidente Evo Morales señala que la demanda no es racional y que este planteamiento respondería a intereses de algunos dirigentes sindicales ante la proximidad del congreso nacional de la COB. El presidente señala que es obligación del gobierno nacional cuidar la economía del país, evitando que todos los recursos disponibles sean destinados a salarios y distribuyéndolos en proyectos que impulsen el aparato productivo. Por su parte, la Décima Conferencia Extraordinaria Nacional de Universidades decide que, al ser parte COB, los tres gremios de las universidades públicas se plegarán a las manifestaciones y marchas convocadas por el ente laboral.

Jueves 18

Luego de la ruptura de negociaciones, entre la COB y el gobierno nacional, el ente matriz de las y los trabajadores convoca a un paro nacional de 24 horas. En la sede de gobierno la secretaría general coordina las movilizaciones, mientras en el resto del país, las misma están a cargo de las centrales obreras departamentales y regionales. Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), durante un ampliado nacional, resuelve no acatar el paro, según informa su dirigente, Rodolfo Machaca, señalando que apoyarán “al hermano Evo Morales”. Los gremiales de La Paz, por su parte, no acuden a la convocatoria del ente laboral y deciden seguir con sus actividades normales. En este marco, desde El Alto, en horas de la mañana, una masiva marcha, de aproximadamente 15 000 personas, encabezada por el secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, sale para ocupar al centro paceño. El dirigente señala que la movilización ha sido convocada para respaldar el pedido de un aumento salarial de Bs. 8.309,50, en rechazo al alza de precios de los alimentos, la falta de avance en un nuevo código del trabajo y la falta de políticas de reactivación económica. Por su lado, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia (CSCB), Franklin Durán, informa que su sector decidió replegar a sus bases para evitar enfrentamientos. En Cochabamba, fabriles, el magisterio, juntas vecinales, entre otras entidades afiliadas la COD, desde las 06:00 am, bloquean siete de los principales puentes y avenidas de ingreso a la ciudad. La Universidad Mayor de San Simón también acata la medida. Los transportistas cochabambinos se repliegan a su sede sindical para evitar enfrentamientos y para resguardarla, ante posibles represalias de los fabriles como respuesta a los destrozos ocasionados por los choferes en su sede. El principal dirigente del transporte señala, al respecto, que los hechos de violencia habrían sido cometidos por personas infiltradas y que deben sancionarse y esclarecerse. En Santa Cruz, maestras y maestros salen a las calles en marcha de protesta acatando el paro decretado por la COB por el incremento salarial, mientras que los transportistas continúan con la protesta por quinto día consecutivo pidiendo el incremento del precio de los pasajes. La COD de Oruro toma las calles de la ciudad, obligando a los comercios a cerrar sus puertas y determina ingresar a un bloqueo de carreteras y paro indefinido a partir del próximo Lunes 21 de febrero, si es que el gobierno no da solución a las demandas. En Tarija, centenares de trabajadores de 37 organizaciones afiliadas a la COD participan de una multitudinaria marcha; en la ciudad de Cobija, trabajadores

afiliados a la COD y a la FEJUVE paralizan las labores cotidianas y en el Beni, en la ciudad de Riberalta, marchan fabriles, salubristas y mototaxistas. A pesar de la misma, mercados, hospitales, bancos y otras instituciones privadas y públicas realizan sus actividades con normalidad. La FEJUVE convoca a las y los vecinos de esta ciudad a sumarse al paro de actividades con movilizaciones, convocado por la COD contra el alza de los precios de los alimentos, señalando que es un problema que atañe a toda la población y no sólo a los sectores sindicalizados. Las marchas en Potosí y Sucre no logran paralizar de manera contundente las actividades de estas ciudades. Desde el gobierno, se convoca a la COB a reiniciar el diálogo, en una primera instancia con los ministros, para buscar salidas concertadas a sus demandas. Tanto el presidente Evo Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera acusan a sectores de “la derecha” de manejar las movilizaciones. Y señalan que el aumento salarial demandado por la COB supondría descartar los bonos, las rentas destinadas a la tercera esas, las inversiones en plantas separadoras, en termoeléctricas y en las grandes industrias del Estado.

Viernes 19

En el departamento de Tarija, se suspende el bloqueo protagonizado por trabajadores de la empresa Techint, contratada por Repsol para las tareas de ingeniería, aprovisionamiento, construcción y montaje de líneas de recolección, evacuación para los campos gasíferos Margarita y Huacaya. Los trabajadores declaran un cuarto intermedio, con la finalidad de que la empresa considere su última propuesta de nivelar los sueldos con los trabajadores de otras empresas que trabajan en el área del Bloque Caipipendi. El relacionador Comunitario de la Unidad de Medio Ambiente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señala que el bloqueo es contra la empresa perjudicó las actividades que se desarrolla en el Bloque Caipipendi,

Lunes 21

Más de un centenar de afiliados a la Asociación de Transporte Libre (ATL) marchan y tienden un cerco alrededor de la alcaldía de La Paz, denunciando el destrozo de dos minibuses de las líneas 944 y 949, que hacen el servicio a Pampahasi Bajo Central. Acusan a las líneas del transporte sindicalizado: Simón Bolívar, Trans Miraflores, San Cristóbal y Trans Copacabana de agresiones contra sus vehículos, que habrían puesto en peligro a los choferes y pasajeros. Señalan que, con este tipo de hechos, no se respeta sus áreas de trabajo, pese a que ellos cuentan con autorización de la alcaldía de La Paz. Exigen al alcalde, Luis Revilla, dar pronta solución a este problema, garantizando condiciones mínimas de trabajo. Por su parte, el secretario de Hacienda del Sindicato Trans Miraflores, Raúl Condori, informa que el problema surge porque los del transporte libre usan dos líneas para hacer el mismo recorrido y que eso estaría en contra al acuerdo firmado por los sindicalistas y también denuncia el destrozo parabrisas de sus movilidades, por parte de choferes de ATL, en represalia. El comandante de la Policía de tránsito, coronel Johnny Troncoso, confirma el enfrentamiento denunciado por la ATL, señalando que se reportaron el destrozo de tres minibuses y que, producto de los ataques, tres pasajeros quedaron con cortaduras leves por la rotura de un

parabrisas. En la marcha de la ATL también participa un grupo de vecinos/as de la zona de Villa Litoral, que denuncian malos tratos de parte de los conductores de del sindicato Simón Bolívar y piden se autorice una línea adicional de la ATL, que haga el recorrido de y hacia el centro de la ciudad.

En Cochabamba, por tercera vez consecutiva, el diálogo para tratar el tema del ajuste tarifario del transporte no se reinicia, ya que los transportistas federados y libres no asisten a la reunión prevista con autoridades departamentales, municipales y juntas vecinales. El gobernador Edmundo Novillo, junto al alcalde, Edwin Castellanos y la dirigencia vecinal anuncian la suspensión del encuentro y su predisposición para continuar con las negociaciones.

Los reclusos de las cárceles de Cochabamba, de los penales de San Sebastián Varones y Mujeres, San Antonio, El Abra, San Pedro (Sacaba) ingresan en huelga. Su pliego de peticiones incluye las siguientes demandas: poner fin al hacinamiento; incremento de los prediarios; respeto a la jornada laboral: aplicación del dos por uno irrestricto, que consiste en que el interno que trabaja dos quintas partes de su condena puede someterse a una redención; respeto a los plazos procesales para evitar la retardación de justicia; fijación de fianzas conforme a la realidad económica del recluso y sus familias para poder acceder a la libertad condicional, y que se valore a los garantes que presentan. El representante del Consejo de delegados advierte que en caso de no ser escuchados en sus peticiones, las y los reclusos amenazan con un motín.

Dirigencia de la COB se retira de una nueva reunión de con el Ejecutivo nacional para tratar el tema del incremento salarial e insiste en su propuesta de una “canasta familiar” de Bs 8.309. Según el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, la COB propuso, para la reunión, una agenda de tres puntos: canasta familiar, reactivación del aparato productivo y abrogación del Decreto Supremo 21060. El tema que trtó, nuevamente, la discusión fue el referido al incremento salarial. Por su parte, el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de la COB, Ramiro Leaño, confirma para este martes la realización del ampliado nacional donde se evaluará el paro movilizado del pasado viernes y se informará sobre la reunión sostenida con las autoridades del Órgano Ejecutivo.

Martes 22

En ampliado nacional, en el que participaron alrededor de 40 organizaciones, la COB se declara en estado de emergencia a la vez que decide aceptar el diálogo propuesto por el gobierno nacional planteando discutir el tema de la canasta familiar, el incremento salarial y la reactivación productiva en una sola comisión de alto nivel, y no tres, como propusiera éste. También se determina que esa comisión debería sesionar por tiempo y materia, en un lapso máximo de tres días. Respecto a la comisión que propusiera el gobierno para discutir el decreto 21060, el ampliado aprueba por unanimidad rechazar esa propuesta y exigir "la inmediata abrogación total del ese Decreto, impuesto por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que era un gobierno neoliberal".

Internos de las cárceles de San Pedro y Chonchocoro de La Paz; de San Antonio; San Pedro (Sacaba) y San Pablo (Quillacollo) en Cochabamba; de San Roque de Sucre y Villa Busch de Pando amenazan con iniciar una huelga de hambre para exigir el incremento de sus bonos de alimentación (prediario) de Bs 5,5 a 15 y el cambio de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, vigente desde mayo del 2010, pues señalan que la misma viola normas fundamentales de derecho universal, al ser aplicada con carácter retroactivo. El Ministerio de Gobierno, a través del director de Régimen Penitenciario, Antonio Sueiro, informa que se está trabajando para dar una respuesta a la demanda de incremento los prediarios, aclarando que la respuesta a la segunda demanda le corresponde a los poderes legislativo y judicial por tratarse de un pedido de modificación a una ley y de su aplicación.

En Cochabamba, frente a las acciones de efectivos de la policía de tránsito, que durante el fin de semana salieron en operativo para sancionar a los choferes que aumentaron el precio de los pasajes, transportistas federados paralizan actividades de manera indefinida a partir de las cero horas de hoy y se movilizan instalando varios puntos de bloqueo, principalmente en las salidas a las carreteras a La Paz y Santa Cruz. El sector califica el operativo como un atropello a su demanda de incrementar el pasaje debido al alza en el costo de vida. La policía dispersa los bloqueos, generando tensión y enfrentamientos. Por su parte, el alcalde, Edwin Castellanos, pide a la ciudadanía ejercer control y no pagar más de lo establecido mientras no exista una nueva disposición. En Santa Cruz, el sector del transporte urbano realiza una masiva marcha desde el Parque Urbano hasta las oficinas del Concejo Municipal, exigiendo atención a su demanda de nivelación tarifaria. Por su parte, el secretario ejecutivo de la CSCB, Franklin Durán critica la transferencia de competencias que hizo la ATT a los municipios y señala que, con ello, el gobierno nacional estaría esperando que se enfrenten transportistas con usuarios/as. También critica a algunos dirigentes de la COB, indicando que éstos no consideran a su sector como parte de los trabajadores del país.

En el departamento de La Paz, autoridades del gobierno nacional y representantes de los municipios de Yaco y Malla (3ra. Y 4ta. Sección de la provincia Loayza) suscriben un convenio de entendimiento para solucionar el conflicto, surgido el mes de enero, en el que se disputaba la pertenencia del yacimiento minero Laramcota en la provincia. El acuerdo es firmado por campesinos, mineros cooperativistas, el ministro de Minería y Metalurgia José Pimentel; el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán; el director del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales, Lucio Callacagua, y representantes de la empresa minera Barrosquiraambas y en él las partes en conflicto expresan su voluntad de evitar enfrentamientos y en un ambiente de paz proseguir las negociaciones. Se señala que los problemas de límites existentes en esa región serán resueltos por las autoridades y la nueva normatividad jurídica que regule sobre este tema, respetando ambas partes la jurisdicción de los municipios establecidos por ley. Además, se determina que, para dar continuidad al diálogo se realizará una reunión para la firma de los contratos con la Empresa Barrosquira el primero de marzo de 2011, con la participación de autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia.

En la ciudad de Santa Cruz, el magisterio urbano y rural se moviliza en una marcha que termina en la plaza principal las calles, demandando un incremento salarial del orden del 30%. La medida provoca la suspensión de clases en los colegios fiscales ni en los de convenio.

Miércoles 23

En la ciudad de Santa Cruz, transportistas urbanos llegan a un acuerdo con diversos sectores sociales para elevar las tarifas del servicio público de Bs 1,50 a 1,80 de manera transitoria. El acuerdo es suscrito con la FEJUVE, la COD, la Federación Universitaria Local (FUL), entre otras organizaciones. Con el acuerdo se logra congelar las tarifas para estudiantes y universitarios, el compromiso de mejoramiento del servicio, se establece la transitoriedad de esta tarifa hasta que se dé el ajuste salarial con el gobierno y se dejan sin efecto las medidas de presión anunciadas. El Concejo municipal rechaza la medida, su presidenta, Desirée Bravo, declara que la fiscalía debería salir a defender a la sociedad civil, pues es una medida que atenta la economía familiar. Frente a esta declaración, Mario Guerrero, principal dirigente del transporte urbano cruceño, señala que fue la propia concejala Bravo quien los enviara a negociar con los sectores sociales, por lo que no considera correcto que, ahora que se llegó a un acuerdo, se pretenda desconocer la legitimidad de su demanda.

En la ciudad de Cochabamba, en un ampliado nacional, la CSCB determina, paralizar actividades este Viernes en todo el país y dejar en manos de las federaciones departamentales la negociación del incremento tarifario. Advierten que, de no tener una respuesta a sus demandas, el lunes ingresarán a paro de 72 horas, con la posibilidad de decretar el paro general indefinido. En este marco se anuncian bloqueos y movilización desde las cero horas de mañana. Según la dirigencia nacional, incluso en Santa Cruz, donde se logró consensuar las tarifas con organizaciones sociales y juntas vecinales, se debería acatar la medida de por tratarse de un tema nacional. La CSCB espera la invitación del gobierno para dialogar. El ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, plantea a la dirigencia sindical de este sector mantener congeladas las tarifas vigentes hasta que se pueda hacer un nuevo estudio en consenso con las juntas de vecinos, para lo cual sugiere la conformación de una comisión conjunta entre el gobierno, juntas vecinales y choferes para encontrar puntos de convergencia que permitan negociar tarifas en diferentes departamentos. Los transportistas de Cochabamba radicalizan sus medidas de presión, bloqueando las principales avenidas de la ciudad en horas de la noche.

Jueves 24

En Sucre, internos de la cárcel de San Roque de Sucre anuncian el inicio de una huelga de hambre escalonada, al cumplirse el ultimátum de los internos para que se atienda su demanda de resolución del problema de hacinamiento en ese penal que, señalando que ese recinto alberga a más 200 presos, siendo que el recinto sólo tiene capacidad para 100. Piden también el incremento de sus prediarios (bono de alimentación) de Bs 5,5 a 15. Entretanto, los presos de Cochabamba ingresan en cuarto intermedio en la huelga de hambre que cumplían por tercer día, tras la firma de un acuerdo para atender sus demandas que son similares a la de reos de Sucre. En La Paz, los presos de San Pedro mantienen su estado de emergencia con las mismas demandas, esperando una reunión con autoridades, prevista para hoy. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informa sobre los avances en las gestiones de resolución del conflicto señalando que: luego de una reunión con autoridades judiciales y fiscales, se acordó aplicar criterios uniformes

para el respeto a la jornada laboral y el acceso a la educación; que los jueces se comprometen a ser flexibles en los requisitos para las garantías y a revisar el tema de las fianzas elevada; que en el legislativo se comprometieron a tramitar una ley sobre el dos por uno irrestricto (reducción de la pena por trabajo y educación), la revisión de la retroactividad que establece la Ley 007 de Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal y el apoyo a la construcción y mejoramiento de carceletas y que sean éstas de competencia regional y edil y que en lo que respecta a la demanda de incremento del prediario, en las próximas horas se dará una respuesta a nivel nacional.

La COB retoma el diálogo, en una sola comisión de alto nivel, con autoridades gubernamentales en busca de un acuerdo sobre la canasta familiar, el incremento salarial y la reactivación productiva. La comisión de la COB en el diálogo está integrada por el Comité Ejecutivo, ejecutivos de las confederaciones y federaciones nacionales, centrales obreras departamentales y regionales. El Ministro de Trabajo sostiene que el Ejecutivo se mantiene en su posición de aprobar incrementos acordes a los niveles inflacionarios registrados que, según versiones oficiales, habría llegado a aproximadamente el 7% en la pasada gestión. Sin embargo, para la COB, este cálculo no considera el efecto del “gasolinazo” en el incremento de los precios de la canasta familiar. La dirigencia cobista COB había demandado una reunión con el presidente Evo Morales, el Ejecutivo señala, al respecto, que este encuentro sólo se producirá, una vez que se logren algunas definiciones preliminares en el encuentro con los ministros.

En Cochabamba, representantes del autotransporte deciden suspender el paro indefinido y los bloqueos que sostenían como medida de presión en demanda de un incremento de Bs.1.5 Bs. 2.00. Según informa el secretario ejecutivo departamental del sector, Lucio Gómez, los choferes declaran un cuarto intermedio, tras la liberación de los 36 de sus compañeros detenidos hace dos días y luego de definir el incremento de los pasajes a 1, 80 para adultos y Bs. 1.00 para escolares, universitarios y personas de la tercera edad,. El dirigente señala que la propuesta ha sido puesta a consideración de los transportistas y las juntas vecinales mientras se aplican las nuevas tarifas. Frente a este hecho, el dirigente de la COD, Gustavo Moreira, afirma que la medida asumida por los transportistas son unilaterales, no consensuadas y pide a la ciudadanía que no pague más 1, 50 Bs por el pasaje de transporte urbano, además anuncia nuevas movilizaciones para no permitir el incremento. Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, que la tarifa vigente para el servicio público urbano es de 1,50 bolivianos y así debe mantenerse hasta las conclusiones del estudio que se encomendará a la ATT y pide al gobierno municipal organizar junto al Comando Departamental de la Policía el control en el cobro de los pasajes. Por su parte, el alcalde demanda a los transportistas definir fecha y hora para el diálogo. El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE), Efraín Chambi, a la conclusión del ampliado de emergencia ratifica “el rechazo absoluto a cualquier incremento de pasaje en el país”. La CONALJUVE, en reunión con el ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo y a los representantes de la ATT acuerda conformar de una gran comisión. En esa instancia se aguarda también la participación de la confederación de choferes. Sin embargo, aún no tienen fecha para empezar a trabajar.

Viernes 25

El paro convocado por CSCB es acatado en las ciudades de El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre. La medida se da de manera parcial en Cochabamba. En La Paz, desde las 07.30 am, los choferes se concentran en diferentes puntos de bloqueo; en El Alto, el paro se siente con fuerza y la gente tuvo que trasladarse a pie y haciendo transbordo en taxis o movilidades particulares. Las Fuerzas Armadas pone a disposición de la población buses y camiones que hacen el recorrido por autopista que conecta las ciudades de La Paz y El Alto. Los choferes movilizados agreden, con azotes, la rotura de parabrisas, pinchazos de llantas a los choferes que se atreven a salir a trabajar. En Oruro, los transportistas se movilizan, haciendo detonar petardos y dinamita. En Potosí y Sucre la mayoría de los sindicatos de los transportistas paraliza labores y en Cobija los choferes también acatan el paro. En Santa Cruz, los transportistas trabajan con normalidad, cobrando Bs 1.80. En Tarija el 90% de los sindicatos y cooperativas prestan el servicio a la población. En Cochabamba la medida de presión no se da de manera contundente como en otras jornadas.

En el sur departamento Potosí, en el municipio de Atocha, cooperativistas mineros marchan contra el alza de precios de la canasta familiar, a su paso, destrozan el frontis de la alcaldía y saquean algunas tiendas, según reportes del Ministerio de Gobierno. El ministro de esa cartera, Sacha Llorenti, en una conferencia de prensa, señala que los cooperativistas mineros, en una primera instancia, movilizaron en contra del párroco del pueblo, a quien buscan expulsar de esa población y que posteriormente marcharon por el alza de precios de la canasta familiar.

Lunes 28

Los transportistas vuelven hoy a las calles, luego de una fin de semana en receso. Los ejecutivos de la CSCB y el gobierno nacional anuncian una reunión para considerar la posibilidad de incrementar las tarifas del pasaje del transporte público, en base al estudio realizado por la ATT. Los transportistas advierten con un paro de 48 horas para esta semana.

Glosario de siglas

AMB	Asociación de Municipios de Bolivia
ANB	Aduana Nacional de Bolivia
ATT	Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes
ATL	Asociación del Transporte Libre
COB	Central Obrera Boliviana
COD	Central Obrera Departamental
COMIBOL	Corporación Minera de Bolivia
CONALJUVE	Confederación Nacional de Juntas Vecinales

CSCB	Confederación Sindical de Choferes de Bolivia
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
CTPA	Cámara del Transporte Pesado de El Alto
EMAPA	Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
FEJUVE	Federación de Juntas Vecinales
FENCOMIN	Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia
FEPROLEC	Federación de Productores Lecheros de Cochabamba
FESIRMES	Federación de Sindicatos y Ramas Médicas de Salud
FTFC	Federación de Fabriles de Cochabamba
OTB	Organizaciones Territoriales de Base
SAGUAPAC	Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz
SEDUCA	Servicio Departamental de Educación
SENASIR	Servicio Nacional del Sistema de Reparto
UOT	Unidad Operativa de Tránsito
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinadoras y encargadas del relevamiento y sistematización: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes: Los Tiempos, La Razón, ABI y El Deber.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL
Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

País

Mes de Año

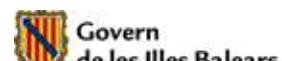
Editada en el MES de AÑO



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears
Conselleria d' Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 000

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de*



Integrantes

Nombres

Fuentes

Nombres

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Marzo de 2011

Martes 1

Cientos de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) marchan y bloquean el peaje de la autopista que une las ciudades de La Paz y El Alto, exigiendo el 50% de coparticipación tributaria del monto asignado a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, por el gobierno nacional. Dicho monto asciende a Bs. 275 millones. El rector de la UPEA, Dámaso Quispe, señala que el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, no habría cumplido el compromiso adquirido con la ciudad de El Alto de dar curso a esta demanda y advierte con la radicalización de sus medidas de presión si no encuentran una respuesta favorable del gobierno.

En el departamento de La Paz, Barqueros que hacen el servicio de transporte en estrecho de Tiquina, en el Lago Titicaca cumplen con un paro de 24 horas, suspendiendo el paso de lanchas, en exigencia de que el gobernador del departamento de La Paz, César Cocarico, rectifique sus declaraciones hechas a la prensa el 25 de enero, después del hundimiento de dos vehículos durante el crece del estrecho, según las cuales existen avances en las negociaciones entre la gobernación, las autoridades municipales de la provincia Manco Kápac y un grupo de los lancheros de Tiquina, para la construcción del puente sobre el estrecho. Según la dirigencia de los lancheros, el gobernador nunca se reunió con ellos para plantearles la construcción de este puente, que implicaría dejar desempleadas a dos mil personas; así mismo señala que su gremio demanda proyectos alternativos para los habitantes del sector. El anterior gobernador, Pablo Ramos, ya tuvo que enfrentar este conflicto, dejando su resolución a la nueva gestión.

Miércoles 2

Luego de que el municipio de la ciudad de Santa cruz, a través de una ordenanza, dejara sin efecto el alza de tarifas dispuesta por los transportistas, estos decretan un paro, que en principio se define por 24 horas y que, posteriormente, se amplía a 48 horas. Las 122 líneas de micros que prestan servicio en la ciudad de Santa Cruz protestan señalando que los parámetros para fijar tarifas deben de ser determinados por el gobierno nacional, mediante disposiciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Los transportistas denuncian que los gendarmes municipales estarían actuando con prepotencia, obligando a los choferes a devolver a los pasajeros el monto extra que estarían cobrando en relación a las tarifas vigentes. Durante el paro, la población recurre al uso de transportes alternativos, como camionetas que, por lo general, no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad. La dirigencia del transporte advierte que, de no ser atendidas sus demandas, ingresarán a un paro indefinido a partir del miércoles de la próxima semana.

En la ciudad de Cochabamba, organizaciones sociales entre las que se encuentran la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC), rentistas, comerciantes, Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) marchan por las principales calles y avenidas en rechazo a las tarifas que pretende imponer el transporte público de Bs. 1.80, siendo la vigente de 1.50. El presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales

(CONALJUVE), Efraím Chambi, señala que es disposición de este ente ejercer control social sobre el “cobro exagerado” en los pasajes e indica que existe un número grande de transportistas dispuestos a trabajar con la tarifa vigente y así iniciar un proyecto de transporte municipal o comunitario. Por su parte, la jefa departamental de Cochabamba, Leonilda Zurita, señala que más del 80 % del parque automotor funciona con gas y que éste no subió de precio. Frente a la protesta, los transportistas determinan, en ampliado de emergencia, replegar sus vehículos para evitar agresiones. En horas de la noche, vecinos y vecinas de Villa Pagador realizan un cabildo abierto para tratar el tema del alza de tarifas en el transporte. En medio de la concentración se registran amagos de pelea con los transportistas de la zona, con provocaciones mutuas e intercambio de insultos, mismas que se extienden por cerca de tres horas. La Policía llega al lugar, con un contingente de cerca de 20 policías, impidiendo el desborde de violencia. Pese a que la Gobernación y la Alcaldía de Cochabamba han solicitado a la Policía de tránsito ejercer un riguroso control sobre el cobro de pasajes, existen problemas para hacer efectivo este control debido a que el municipio no tiene aún potestades claras para poder aplicar sanciones y el tránsito ya le ha remitido una lista de infractores. El jefe de Ordenamiento y Movilidad Urbana del municipio, Ever Rojas, explica que sólo después del 22 de junio de 2011 se podrá tener claridad al respecto, siendo ésta la fecha límite para la presentación de la carta orgánica y de todos los instrumentos legales que fijen el marco legal en el que se regirán las nuevas competencias de las autoridades municipales y departamentales y que, hasta entonces, el control de la tarifa sigue siendo tuición de la ATT.

Jueves 3

Choferes sindicalizados de la ciudad de El Alto, en ampliado regional, deciden subir el costo de los pasajes de Bs. 1 a Bs.1.50 señalando que los precios actuales no son suficientes para cubrir los costos de insumos para el autotransporte y por el alza en los precios de los productos de la canasta familiar. Frente a esta medida, el Comité Cívico se organiza para realizar controles y decomisar los letreros de los minibuses que indican las nuevas tarifas. La Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto se declara en emergencia, rechazando el incremento

La Central Obrera Boliviana (COB), en un ampliado de emergencia decide que únicamente volverá al diálogo con el gobierno, si es que las autoridades abrogan el Decreto Supremo 809 por el que se incrementó los salarios en un 10%, ya que consideran que el reajuste salarial dispuesto por las autoridades es insuficiente y discriminatorio, ya que beneficia sólo a cuatro sectores: maestros, trabajadores en salud, militares y policías. La dirigencia señala que el gobierno debe demostrar que el presidente gobierna escuchando al pueblo y no imponiendo un decreto sin consulta previa.

Viernes 4

En Cochabamba, en la zona Lomas de Andalucía se enfrenta un grupo de personas que se había asentado en unos terrenos y otro grupo de presuntos propietarios, que ingresa a los predios, señalando que cuentan con una orden de desalojo. El conflicto se inicia en horas de la mañana cuando un grupo de hombres con papeles en mano y picotas

ingresan con petardos a los terrenos donde había varias viviendas precarias, destrozando algunas y quemando otras. Al principio las y los ocupantes del terreno no ponen resistencia hasta que, del otro lado del cerro, se escucha un estallido de dinamita y descienden del mismo jóvenes armados con hondas y piedras. La gente que bajó del cerro ataca directamente a periodistas de Los Tiempos y La Red Uno, mientras los supuestos propietarios huyen del lugar. Un grupo ataca al vehículo de transporte de Los Tiempos, agrediendo al chofer, mientras que otro grupo corretea y atrapa a una periodista, quien es golpeada y amenazada. En medio del conflicto también se secuestra a algunos periodistas quienes, con mucha dificultad, logran convencer a la multitud para que ésta los deje ir y, mientras se alejan en el vehículo de Los Tiempos, con las llantas pinchadas, el equipo periodístico es agredido nuevamente a pedradas. Entretanto, periodistas de La Red UNO retornan al lugar para ayudar a sus colegas. La Policía llega dos horas después, cuando ya no había mucho que hacer. El alcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, manifiesta su solidaridad con las y los periodistas agredidos.

Sábado 5

En la ciudad de El Alto, frente a la decisión de los transportistas de incrementar los pasajes, vecinas y vecinos se movilizan para controlar que no se haga efectiva el alza, decomisando a los choferes los letreros con los que anunciaban los nuevos precios. El alcalde de El Alto, Édgar Patana, convoca a los choferes a un diálogo para el miércoles y la FEJUVE pide participar de ese encuentro. La directora Técnica Sectorial de Transportes de la ATT, Verónica Jordán, afirma que, al no tener autorización del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), el incremento tarifario efectuado por el autotransporte sindicalizado de esa ciudad es ilegal.

En la ciudad de Potosí, conforme a la resolución de la ATT, policías de tránsito y miembros de Ministerio Público inician operativos para controlar que los transportistas de esa ciudad no incrementen sus tarifas de Bs 1.20 a Bs 1.50, obligando a los choferes a retirar sus letreros de Bs 1.50 e instruyendo a los pasajeros a no pagar más de Bs 1.20. Frente a la medida, choferes amenazan con replegar sus vehículos y dejar de prestar el servicio. El gobierno nacional informa que se ha iniciado un estudio tarifario que tendrá parámetros regionales vinculados a factores de eficiencia en el servicio, con la finalidad de regular el costo de las tarifas de autotransporte

Miércoles 9

La COB, en un ampliado, rechaza cualquier aumento en las tarifas del transporte público, señalando que esto implicaría elevar más el costo de vida y piden a las autoridades nacionales, departamentales y municipales dar solución a este problema para prevenir cualquier tipo de enfrentamientos con los transportistas.

Jueves 10

Los sindicatos de transportistas de Cochabamba, en un ampliado departamental, definen iniciar un paro indefinido, con movilizaciones, contra el incremento de tarifas y

lo que consideran prácticas abusivas de parte de los policías de tránsito, quienes en sus operativos les quitan letreros con lo que anuncian nuevas tarifas y emiten notificaciones para multas. La dirigencia del sector informa que el ampliado determinó realizar un nuevo estudio de la estructura de costos de los pasajes en Cochabamba con participación de la gobernación, alcaldías y vecinos, excepto la ATT. Por su parte, el gobernador, Edmundo Novillo, lamenta la decisión de los transportistas de radicalizar sus medidas de presión y señala, a través de la Dirección de Comunicación de la Gobernación, que las nuevas medidas no harán retroceder la decisión de mantener vigentes los precios de los pasajes, de Bs.1.50 en la ciudad y de Bs.2.00 en las rutas a Sacaba y Quillacollo. De igual manera, la alcaldía informa que no negociará ningún incremento de tarifas porque esto afectaría la economía de la población por sus efectos multiplicadores.

En la ciudad de Sucre, transportistas deciden replegar las 1.300 unidades con las que prestan servicio público en la ciudad y decretan un paro indefinido a partir del próximo lunes, debido a que las autoridades municipales no responden aún a sus demandas. La dirigencia señala que siguen abiertos al diálogo sobre la base del estudio que realiza la ATT. Por su lado, el secretario general de la Alcaldía de Sucre, señala que la postura asumida dificulta las posibilidades de diálogo.

Las federaciones de transportistas de la ciudad de La Paz y El Alto determinan ir al diálogo con autoridades municipales. En la ciudad de El Alto, los transportistas suspenden por 10 días el incremento del costo de los pasajes, dando, de esta manera, una tregua para que la alcaldía de esa ciudad realice un estudio y determine el ajuste de tarifas en su jurisdicción. Mientras, en la ciudad de La Paz, el alcalde Luis Revilla Herrero convoca a una cumbre social, con la participación de organizaciones sociales y transportistas para discutir el conjunto de la problemática que hace al transporte urbano en la ciudad de La Paz, con temas tales como la calidad del transporte, las medidas para mejorar el servicio, las medidas para un buen mantenimiento de los motorizados, la tarifa escolar y para la tercera edad y donde se prevé que los propios transportistas planteen sus preocupaciones respecto al incremento de tarifas. La cita está marcada para el 24 y 25 del mes en curso.

Sábado 12

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Rural de La Paz (FDTERLP), en un ampliado, determina rechazar el incremento salarial del 10% dispuesto por el gobierno, por considerar que el mismo no se ajusta a la realidad económica actual, debido al alza elevada de precios de los alimentos. En este marco, demandan que el gobierno tome como base de referencia para el ajuste salarial el costo de la canasta familiar, efectuado por la COB. El ampliado también exige a la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz, convocar a un ampliado para considerar expresamente el tema salarial.

Martes 15

La COB, en un ampliado nacional, en el que participan alrededor de 47 organizaciones -entre confederaciones, federaciones nacionales y centrales obreras departamentales y regionales- convoca a un paro nacional, con movilizaciones de 48 horas, para el 21 y 22 del mes en curso. Según determinaciones del ampliado, con estas medidas la COB demandará: a) la derogación Decreto Supremo 809, que dispone el incremento salarial del 10%, señalando que éste fue impuesto unilateralmente por el gobierno, sin una negociación previa con las organizaciones sociales; b) la derogación el artículo 23 de la Ley Financial, que busca que las cajas de salud transfieran todos sus bienes y recursos para que sean administrados por el Ejecutivo, para, de esta manera, financiar la implementación del Sistema Único de Salud (SUS); c) la derogación del Decreto Supremo 21060, que marcó el inicio de la implementación del modelo neoliberal hace 26 años; d) la implementación de políticas orientadas a una verdadera reactivación del aparato productivo. La dirigencia cobista señala que no retornarán al diálogo si no es con el presidente Evo Morales

Las universidades del sistema público nacional protagonizan marchas, en diferentes ciudades del país, en defensa del seguro universitario de salud, rechazando el proyecto de ley del SUS, debido a que en su artículo cuarto establece la anulación de los seguros universitarios a través de un ente gestor único. También rechazan la Ley Financial en el punto en que se obliga a registrar los recursos de los seguros sociales universitarios en cuentas fiscales. En la ciudad de Santa Cruz, una multitudinaria marcha de universitarios, docentes y administrativos de la Universidad Autónoma Gabriel René (UAGRM) llega hasta la plaza principal. A la movilización se suman representantes de la Caja Nacional de Salud (CNS) y de la Caja Petrolera de Salud (CPS), además de dirigentes de la COD y de las juntas vecinales. En Camiri, estudiantes, docentes y administrativos de la Facultad Integral del Chaco bloquean la carretera que une Santa Cruz con Argentina. En la ciudad de Oruro, estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) marchan al igual que los alumnos de la UMSA de La Paz, quienes, además, realizan bloqueos esporádicos en diferentes puntos de la ciudad. En Cochabamba, estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) toman el centro de la ciudad desde tempranas horas de la mañana y bloquean los principales puentes. El vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, señala que en reunión sostenida por el presidente Evo Morales con los dirigentes de los universitarios se acordó que el traspaso de los seguros universitarios al SUS sea opcional. Según la autoridad, no hay un proyecto definitivo de Ley del SUS en la Asamblea Plurinacional, por lo que las movilizaciones no tendrían razón de ser. Las diferentes universidades públicas de los departamentos preparan para una marcha mayor, señalada para el próximo 21 de marzo, en la que confluirán diferentes universidades del sistema nacional en la sede de gobierno, para continuar con sus medidas de presión.

Miércoles 16

En la ciudad de Sucre, choferes realizan una masiva marcha en demanda del incremento de las tarifas del transporte. Finalizada la misma, inician el diálogo con autoridades del municipio. Tras varios cuartos intermedios se rompe el diálogo y los transportistas se retiran de la reunión, anunciando la radicalización de las medidas de presión con el

repliegue de micros y taxis. El transporte interdepartamental también se une a la medida de protesta.

Luego de la promulgación del Decreto Supremo 821, que autoriza a las gobernaciones y alcaldías la regulación transitoria de la tarifa para el transporte público, el presidente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia (CSCB), Franklin Durán, informa la suspensión de las medidas de presión, que su sector planeaba realizar. Sin embargo, el dirigente señala que aún falta analizar los pormenores de la aplicación de dicho decreto.

Jueves 17

A pesar de que en días pasados la CSCB suspendió sus medidas de presión luego de la aprobación del Decreto Supremo 821 (en cuyo artículo único se autoriza a las gobernaciones y alcaldías la regulación transitoria de las tarifas del servicio de transporte público), hoy los dirigentes de la misma señalan que el decreto no cubre completamente las expectativas del sector. Sin embargo, la Confederación reconoce que los compromisos asumidos por el gobierno con el transporte no están condicionados al decreto ni a convenios que se logren en cada municipio. Entre tales acuerdos se encuentran la reconversión al Gas Natural Vehicular (GNV) y la recalificación del 100% del parque automotor como tareas que corren a cuenta del gobierno y que se debe llevar adelante al margen de los convenios que cada federación realice con su respectivo municipio. Otro punto tratado con el gobierno es la necesidad de un seguro o jubilación para el transportista. Según los dirigentes, la nueva Ley de Pensiones incluye la jubilación para el sector y que para que este derecho entre en vigencia y pueda tramitarse sólo se está a la espera de un decreto que reglamente dicha ley.

En Cochabamba, los maestros de este departamento realizan una marcha de protesta que concluye en la plaza principal de esa urbe para manifestar su rechazo al decreto supremo que instruye el incremento salarial del 10% al sector, porcentaje que el magisterio considera insuficiente para cubrir los gastos de la canasta familiar. Asimismo, los maestros ratifican que acatarán el paro de 48 horas convocado para la próxima semana por la COB en el país. Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, señala que el aumento salarial que propone el gobierno es el máximo que puede ofrecer y el mayor que se ha dado en la historia del país en los últimos años.

Lunes 21

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, convoca a autoridades de Oruro y Potosí a un nuevo diálogo para superar el conflicto limítrofe que existe entre las poblaciones de Coroma y Quillacas, que data de varios años. Ya a fines de 2010, autoridades de ambos departamentos y el gobierno nacional suscribieron un acuerdo para que una comisión mixta desarrolle el procedimiento especial de delimitación territorial en esa región. Sin embargo, en días pasados el Ministerio de Autonomías recibió denuncias de las Unidades Técnicas de Límites (UTL) de Oruro y de Potosí sobre avasallamientos y actividades de cultivos y siembra en el sector en conflicto, donde está prohibido ese tipo de trabajos. Asimismo, se realizan inspecciones de campo que verifican parcialmente estas denuncias, que no pueden concluirse debido a que un grupo de comunarios en la

zona de Incamisa (Oruro), que no sabían de esa verificación, impide que el trabajo continúe.

En La Paz, se inicia el primer día del paro general de 48 horas convocado por la COB para rechazar el 10% de incremento salarial propuesto por el gobierno a los trabajadores. La protesta, en la que no participan campesinos, fabriles y mineros, es llevada adelante por los gremios de profesores, uno de los cuatro sectores, junto a militares, policías y salubristas, beneficiados por el alza salarial. Por su parte, los sindicatos de chóferes, que las últimas semanas presionaron por un incremento de tarifas, tampoco participaron en el paro de la COB, cuyo líder, Pedro Montes, demanda, además, la reactivación del aparato productivo boliviano y la anulación del decreto 21060 que hace 26 años instaló a Bolivia dentro de la economía de mercado y abrió las puertas de las empresas públicas, incluso las estratégicas, al capital privado nacional e internacional. La medida de fuerza de la COB paralizó parcialmente la ciudad de Trinidad, capital del departamento del Beni, pero no fue contundente en Santa Cruz. El paro movilizado continuará el martes 22, como se aprobó la pasada semana; la dirigencia de la COB ratifica que se evaluarán nuevas medidas de presión en el ampliado nacional que se efectuará el miércoles 23 en rechazo al incremento salarial del 10% y el 20% al salario mínimo. Asimismo, las manifestaciones de la COB coinciden con las marchas realizadas por la Universidad estatal para demandar una posible vulneración a los principios de su autonomía administrativa, que estaría corriendo riesgo por la existencia, desde 2007, de un proyecto del gobierno de Evo Morales para la creación de un seguro universal de salud que, según la Confederación de la Universidad Boliviana (CUB), apuntaría a insumir el Seguro Universitario. Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Iván Canelas, señala que el gobierno hizo todos los esfuerzos enviando tres invitaciones a las autoridades universitarias y a la dirigencia estudiantil para dialogar sobre sus demandas y afirma que no existe ningún proyecto para incluir a las cajas universitarias en el SUS y menos quebrantar la autonomía.

En Santa Cruz, tiene lugar un enfrentamiento en la zona sur de Cotoca, cuando 50 familias son desalojadas a la fuerza por un grupo de jóvenes que los ataca por sorpresa. Los afectados indican que adquirieron los 33 lotes, de 300 metros cuadrados cada uno, por vía del exalcalde de Cotoca Estanislao Araúz, al cual acordaron pagarle 82 cuotas de \$us 50.

Martes 22

En La Paz, los internos de la cárcel de San Pedro deciden iniciar medidas de presión y oponerse al ingreso de nuevos reclusos en protesta contra la respuesta del gobierno ante el pedido de incremento de sus prediarios, de Bs 5,50 a 15 y de realización de mejoras a la infraestructura de las cárceles, con sólo un aumento del 20%, o sea de Bs 5,50 a Bs 6,60. Según el delegado de los reos, Dante Escobar, el artículo 83 de la Ley 2.298 (Ejecución de Penas) sobre la capacidad de los establecimientos penitenciarios, les daba el fundamento legal para rechazar el ingreso de nuevos presos. Asimismo, señala que se tomarán medidas diferentes cada tres días hasta encontrar respuestas que satisfagan sus demandas.

En Cochabamba, vecinos del municipio de Sipe Sipe bloquean la carretera hacia el departamento de Oruro, a la altura de la población de Suticollo por algunas horas para

reclamar por el incumplimiento de obras públicas. La medida se levanta luego de que se llega a un acuerdo con la Alcaldía de Sipe Sipe para viabilizar y poner en ejecución inmediatamente las mismas.

En La Paz, se inicia la XI Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades en cuyo marco se resuelve aceptar la invitación del gobierno a dialogar sobre el conflicto suscitado en torno a la autonomía universitaria. Así, una delegación compuesta por Teresa Rescalá, presidenta de la Conferencia y rectora de la UMSA; Eduardo Cortez, secretario ejecutivo del Confederación Ejecutiva de la Universidad Boliviana (CEUB); y Johan Herbas, ejecutivo de la CUB, se reúnen con los ministros de Educación, Economía y Finanzas y de Trabajo. En el diálogo se discuten aspectos técnicos. Por su parte, el ejecutivo de la Federación de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés (FEDUMSA), Alberto Arce, confirma que sus homólogos de todo el sistema resuelven quedarse en La Paz hasta lograr que el gobierno entregue por escrito las respuestas a sus demandas, en sentido de que la autonomía no será vulnerada y que los seguros de salud no serán parte del SUS.

En Cochabamba, trabajadores de la Caja de Salud de esa ciudad marchan en contra de la posibilidad de ser incluidos en el proyecto del SUS, exigiendo además que se abroguen los artículos de la Ley Financial y del Reglamento N° 772, que intentarían confiscar los recursos que son de los trabajadores.

Miércoles 23

En La Paz, estudiantes de la Universidad estatal realizan una nueva marcha y se dirigen a la Plaza Murillo, donde quieren ingresar de forma violenta y se enfrentan con la Policía. En el enfrentamiento se da una explosión de dinamita a raíz de la cual un policía resulta gravemente herido y 12 estudiantes son detenidos.

En Cochabamba, surgen problemas internos y pugnas políticas en la Federación de Regantes de Cochabamba (FEDECOR) y la Federación de Sistemas de Riego (FEDERESCO) que ocasionan el bloqueo de varias rutas troncales del departamento e impiden la libre circulación de decenas de vehículos en dos carreteras. El conflicto surgió hace varias semanas cuando un sector de regantes del valle alto cuestionó la dirigencia de la máxima autoridad de la FEDECOR, Omar Fernández, a quien acusaron de no rendir cuentas, de aferrarse al cargo por 16 años y de no permitir la renovación. Ante estas denuncias, Fernández aclaró públicamente que la medida es totalmente política y aseguró que todos los informes están en regla, fueron debidamente socializados e incluso que hay una auditoría que confirma el manejo transparente de la gestión de la FEDECOR. Sin embargo, los regantes están divididos ya que la FEDECOR ha sido fragmentada en dos federaciones paralelas.

Jueves 24

En La Paz y Cochabamba, las personas privadas de libertad radicalizan sus medidas de presión en rechazo a la oferta del gobierno de incrementar sus prediarios -el bono de alimentación- en un 20%; es decir de Bs 5,50 a Bs 6,60, cuando ellos pedían Bs 15. Así,

los internos de la cárcel de San Pedro (La Paz) y San Sebastián y El Abra (Cochabamba) informan que las medidas en rechazo a la propuesta van desde los motines, la huelga de hambre, la costura de labios, la crucifixión, hasta el entierro de los presos, para lograr el aumento a Bs 15 del prediario. Asimismo, los internos de la cárcel de Palmasola en Santa Cruz y San Pedro de Oruro inician hoy sus medidas. Por su parte, los reclusos del penal de San Pablo de Quillacollo piden celeridad en la revisión de los casos que tengan detención preventiva. Luego de varias horas de protesta, los presos de los penales cochabambinos aceptan detener las medidas de presión y declarar un cuarto intermedio hasta mañana, fecha en la que negociarán con el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, un acuerdo para subir el precio de los prediarios. El acuerdo se logra luego de las negociaciones efectuadas entre las autoridades de Régimen Penitenciario, la Gobernación cochabambina y los delegados de las cárceles.

Viernes 25

En La Paz, los reclusos del penal de San Pedro radicalizan sus medidas y se amotinan para exigir el incremento al "pre diario", un bono gubernamental para la alimentación de los privados de libertad, y otras demandas, parapetándose en el interior y en los techos de esa cárcel. Según reportes extraoficiales, más de 1.500 presos se sumaron a la medida ocasionando destrozos en la infraestructura y portando pancartas, lo que obliga a la intervención de la Policía que toma previsiones en inmediaciones del penal. Mientras tanto, en Cochabamba, luego de dos días de negociación, los presos de los seis penales que se encontraban realizando medidas de protesta aceptan el incremento de los prediarios del 20% y levantan sus medidas de presión. Asimismo, en Potosí los internos del penal de Cantumarca deciden como en La Paz radicalizar sus medidas y dos reos se entierran mientras que otro se crucifica demandando al gobierno el incremento de los prediarios.

Sábado 26

En La Paz, los privados de libertad del penal de San Pedro deciden aceptar el 20% de incremento al derecho alimentario del pre diario. Así, la Dirección General de Régimen Penitenciario firma un acuerdo con el Consejo de Delegados del Penal en los mismos términos del suscrito con los detenidos en cárceles de Cochabamba para aprobar un 20% de reajuste al prediario. Con ello, los detenidos de la cárcel de San Pedro suspenden sus medidas de presión que se tornaron violentas cuando un grupo que había planificado generar una fuga masiva instó al amotinamiento en días pasados. Por su parte, el director de Asuntos Penitenciarios asegura que el Ministerio de Gobierno aprobó un presupuesto de 480.000 bolivianos para la ejecución de obras de refacción en la cárcel de San Pedro y así garantizar la habitabilidad de los detenidos y reparar los destrozos provocados en el motín.

En Santa Cruz, en la localidad de Yapacaní, el Concejo Municipal decide suspender de sus funciones por 20 días al alcalde David Carvajal, para que aclare el uso que dio a los recursos municipales y el estado de avance en la realización de obras de desarrollo regional. A raíz de esta decisión surgen enfrentamientos entre quienes apoyan la gestión del alcalde y los pobladores que consideran acertada la medida asumida por el Concejo.

Lunes 28

En La Paz, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, los reclusos inician una huelga de hambre en rechazo al aumento del 20% a sus prediarios, de Bs 5,50 a Bs 6,60, por considerar que es insuficiente para su alimentación. Asimismo, en la cárcel de mujeres de Miraflores, las reclusas se declaran en estado de emergencia y desde las cero horas de hoy inician una huelga de hambre alrededor de 50 internas de las más de 60 que están allí. Por otro lado, en la cárcel de Obrajes, un grupo de internas instaló una huelga de hambre para demandar un prediario de Bs 15, mejoramiento de su infraestructura y el cambio de la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal de mayo del 2010. Finalmente, en Beni, las internas del penal de mujeres de Trinidad rechazan el incremento del prediario a Bs 6,60 propuesto por el gobierno.

Miércoles 30

En Santa Cruz, en la localidad de Yapacaní, se producen nuevos enfrentamientos entre seguidores del alcalde suspendido, David Carvajal, y los pobladores que apoyan la decisión del Concejo Municipal. El problema surgió el pasado 25 de marzo cuando el Concejo Municipal suspendió de manera temporal al alcalde del MAS, David Carvajal, por tener dos querellas en su contra y designó de manera interina en su lugar a Federico Ortiz, concejal del mismo partido. De acuerdo con el informe de radio ERBOL, los pobladores que apoyan al Concejo Municipal realizan un cabildo al mediodía para adoptar determinaciones ante las presiones de Carvajal por volver a su cargo. Paralelamente, un grupo que apoya a Carvajal hizo otra reunión justo al frente del Cabildo, lo que provoca un cruce de insultos y posteriormente agresiones con palos y piedras. Ante la gravedad del problema, la Policía interviene para evitar que los hechos se agraven. Por su parte Carvajal señala que su suspensión por un tiempo de 20 días es injusta y solamente responde a intereses políticos en el seno del Concejo Municipal para que aclare el uso de recursos durante su gestión, subrayó el presidente de ese organismo, Federico Ortiz.

Jueves 31

En La Paz, el director de Régimen Penitenciario, José Antonio Sueiro, exhora a los privados de libertad a deponer sus medidas de presión y les pide que aguarden la respuesta de las gobernaciones para resolver el problema del pre diario y otras necesidades. El llamado va dirigido sobre todo a las privadas de libertad de Obrajes, Miraflores y a los internos de Chonchocoro, donde se iniciaron huelgas de hambre por una mejor dieta alimentaria y otras demandas que, según Sueiro, no atañen al ejecutivo. Respecto al pre diario, ratifica que el Ministerio de Gobierno ofreció un incremento del 20%, además de encarar obras en los penales, insistiendo en que son las gobernaciones las que deben atender la demanda de los presos, en el marco de la Ley 3.302, que establece que "deben financiar el costo de los pre diarios y los gastos de funcionamiento de Régimen Penitenciario". Sobre el pedido de los reclusos de cambiar la Ley 007, de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, Sueiro aclara que ese tema, como el problema de retardación de justicia, una de las principales causas del hacinamiento, no atañe al ejecutivo, sino al Ministerio Público y al poder judicial. Mientras tanto, en

Chonchocoro, de los 93 reos en huelga de hambre, 35 cumplen desde hoy una huelga de hambre seca.

En Santa Cruz, los trabajadores del hospital Japonés ingresan a un paro de 48 horas para exigir el pago del bono de antigüedad. Sin embargo, las autoridades municipales han pedido que se suspenda la medida, toda vez que los cheques ya están listos y hoy pueden ser cobrados. Por su parte, Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores, manifiesta que “la Alcaldía tuvo el tiempo suficiente para cumplir con esa deuda, pero como no lo hizo se han visto obligados a tomar dicha medida”.

Glosario de siglas

ATT	Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes
CEUB	Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana
CNS	Caja Nacional de Salud
COB	Central Obrera Boliviana
COD	Central Obrera Departamental
CONALJUVE	Confederación Nacional de Juntas Vecinales
CPS	Caja Petrolera de Salud
CSCB	Confederación Sindical de Choferes de Bolivia
CUB	Confederación Universitaria de Bolivia
FDTERLP	Federación Departamental de Trabajadores de Educación Rural de La Paz
FEDECOR	Federación de Regantes de Cochabamba
FEDERESCO	Federación de Sistemas de Riego
FEDUMSA	Federación de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés
FEJUVE	Federación de Juntas Vecinales
FSUTCC	Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba
GAMEA	Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

GNV	Gas Natural Vehicular
OTB	Organizaciones Territoriales de Base
SUS	Sistema Único de Salud
UAGRM	Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
UMSA	Universidad Mayor de San Andrés
UMSS	Universidad Mayor de San Simón
UPEA	Universidad Pública de El Alto
UTL	Unidades Técnicas de Límites
UTO	Universidad Técnica de Oruro

Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinadoras y encargadas del relevamiento y sistematización: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes: Los Tiempos, La Razón, ABI y El Deber.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL
Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Bolivia

Abril de 2011

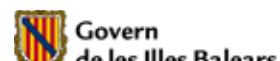
Editada en junio



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears
Conselleria d' Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 895

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Bolivia***



Integrantes

Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez
(coordinadoras)

Fuentes

Los Tiempos, La Razón, ABI y El Deber.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Abril de 2011

Viernes 1

En el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, grupos sociales seguidores del alcalde interino Federico Ortiz- entre los que se destacan colonizadores y transportistas- inician, en horas de la noche , un bloqueo en la carretera Cochabamba -Santa Cruz y emiten una resolución con cuatro puntos en la que plantean las siguientes demandas: a) la renuncia del ex alcalde, David Carvajal, quien fuera destituido de su por el consejo municipal y presentara un amparo constitucional, ante del Juzgado de Instrucción Mixto de Yapacaní; b) el desalojo de cocaleros (as) chapareños(as), que tomaron el edificio municipal en días pasados; c) que las y los ocupantes de la reserva de Choré no destruyan esa área natural; d) respeto a los transportistas locales. Entretanto, vecinas y vecinos se quejan por el perjuicio que les representa tener la alcaldía cerrada desde hace ocho días, y funcionarios (as) municipales advierten que es probable el congelamiento de cuentas del municipio. El bloqueo es levantado a las 11:00, con la intervención de 40 efectivos policiales de la Unidad Técnica Operativa de Tránsito (UTOP). Por su parte, desde el concejo municipal recusan a la jueza asignada al caso, argumentando que tiene amistad con el alcalde suspendido, por lo que el caso pasa a la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz. La situación obliga a las partes en conflicto a declarar un cuarto intermedio hasta que el recurso sea resuelto en la capital cruceña. El ejecutivo de la Federación de Colonizadores de Ichilo, Cirilo Sonabi, informa que sus dirigidos esperarán que la Corte de Distrito se pronuncie sobre el caso, pero que la emergencia se mantiene y si Carvajal es ratificado en el cargo los campesinos reiniciarán de inmediato el bloqueo de carreteras.

En el departamento de Santa Cruz, en municipio de Porongo, el concejo municipal decide no dar curso a la suspensión del alcalde Julio César Carrillo, luego de recibir una comunicación, enviada por el Ministerio Público, de que esa autoridad está imputada por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, dentro del proceso seguido por Enrique Luis Cruz, un explotador de áridos, por un daño económico de Bs 90.000. El presidente del Concejo, Plácido Barón, informa que esa instancia legislativa no estaba al tanto de las acusaciones de la fiscalía, por lo que los concejales decidieron que el asesor legal dé un informe jurídico, disponiendo un cuarto intermedio en las sesiones legislativas, sin fecha de reiniciación. Como respuesta a este determinación, productores de frutas de Porongo y otros sectores sociales, identificados como afines al Movimiento al Socialismo (MAS), dan un ultimátum al concejo municipal para que aleje del cargo al alcalde hasta el martes próximo, advirtiendo que, de lo contrario, realizarán movilizaciones y bloqueos.

Sábado 2

En el departamento de Potosí, el sindicato de trabajadores de la empresa Minera San Cristóbal (MSC), el yacimiento de plata, plomo y zinc más grande de Bolivia, suspende una huelga de 10 días, que llevaba a cabo en demanda de servicios de salud, luego de alcanzar un acuerdo, con la mediación del Ministerio de trabajo, con la empresa que gerencia el consorcio japonés Sumimoto. El conflicto se originó tras el fallecimiento de un trabajador que era trasladado a la ciudad de La Paz para recibir atención médica. En ese marco, el sindicato de trabajadores de ese centro minero y las y los comunarios se movilizaron en demanda del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en particular y de la población de la región en general. Los trabajadores de la empresa paralizaron operaciones para exigir la destitución de los administradores y jefes del Seguro Médico Delegado (SMD). Tras diez días de paralización de los trabajos de explotación de la mina, los representantes de los trabajadores y de las comunidades aledañas al área de operación minera y directivos de la empresa firman un acuerdo de entendimiento en las instalaciones del Ministerio de Trabajo. Tras el acuerdo, la empresa contrata un Seguro Médico que beneficia a 8.000 personas, incluidos sus 1.380 obreros y sus familias, 1.000 trabajadores contratistas y atención gratuita para más de 2.500 habitantes de las comunidades indígenas de la zona. Por su parte, los representantes sindicales informan que la misma será puesta a consideración de la asamblea, y sólo si la asamblea la aprueba se reanudarán las labores mineras. De acuerdo a información vertida por el Ministerio de Trabajo, se estima que la paralización de actividades originó la pérdida de 2 millones de dólares, 180.000 dólares por concepto de regalías, de las cuales el 85% estaban destinados fondos de la gobernación de Potosí y el restante 15% a las arcas del municipio rural de Colcha K. La empresa genera 400.000 dólares al día. La paralización de la mina estuvo a punto de afectar a los mercados mundiales de zinc y plata. Según datos oficiales, en la gestión 2010, la empresa exportó 902 millones de dólares, cifra que representa mitad de las exportaciones bolivianas de minerales no fundidos.

Lunes 4

La Federación de Trabajadores del Seguro Social de Bolivia (FENSEGURAL) inicia una huelga general indefinida, con movilizaciones a nivel nacional, en rechazo al Decreto Reglamentario de la nueva Ley de Pensiones que, a su juicio, atenta contra la estabilidad de la Caja Nacional de Salud (CNS). Las y los trabajadores exigen la derogatoria del artículo 23 de la Ley Financial 062, además de los artículos 8 y 9 del Decreto Reglamentario 772, que establece que las entidades de Seguridad Social deberán abrir una cuenta fiscal autorizada por el viceministerio de Economía y Finanzas, lo que según su interpretación, establece la confiscación de los recursos económicos financieros de los trabajadores afiliados a la CNS. El secretario ejecutivo de FENSEGURAL, Miguel Flores, anuncia movilizaciones contundentes e informa que su sector no está en contra del Seguro Único de Salud, que exigen que se implante pero con recursos del Estado y no con los aportes de las y los trabajadores.

En la ciudad de Cochabamba, vecinas y vecinos de la zona sur de la ciudad, del barrio San Juan Minero, protagonizan una marcha de protesta, exigiendo que las autoridades concluyan los proyectos de instalación de agua potable y que definan los límites de pertenencia entre el municipio de Cochabamba y el de Arrietó. Representantes

vecinales informan que cuentan con medidores, cañerías y cisternas, su pedido es que las autoridades, de una vez por todas, instalen agua potable. Actualmente se encuentran gestionando el proyecto con la empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA). La marcha se dirige rumbo a la gobernación de Cochabamba en busca de convenios específicos con las autoridades y amenazan con que si no se dan los mismos, radicalizarán sus medidas de presión, también exigen que las autoridades definan su pertenencia al municipio de Cochabamba y no al de Arbieto.

En el departamento de Santa Cruz, el Comité de vigilancia del municipio y pobladores (as) de la localidad de Cotoca realizan un bloqueo de la ruta que une este departamento con la ciudad de Trinidad (Beni), exigiendo la realización de obras. Antonio Álvarez, presidente del Comité de Vigilancia, explica que las organizaciones sociales y las comunidades de ese municipio están molestas porque hasta el momento la justicia y el Ministerio de Transparencia no agilizan los procesos contra ex alcaldes que están acusados de presuntas irregularidades. Por lo que el municipio arrastra una pesada deuda que imposibilita la ejecución de obras. De acuerdo con los bloqueadores, la medida de presión es indefinida hasta lograr la solución a sus reivindicaciones. En horas de la noche, una comisión en la que estuvo como mediador el diputado Bienvenido Sacu, da a conocer la decisión del Ministerio Público, de nombrar dos nuevos fiscales para agilizar y transparentar las investigaciones de corrupción que hay en ese municipio. Sin embargo, las organizaciones sociales no aceptan levantar el bloqueo hasta que las autoridades determinen la destitución del fiscal asignado al caso.

Martes 5

En La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) ratifica que realizará la movilización social programada para el día seis del presente mes, con el fin de protestar junto a todos los afiliados de esta organización contra el incremento salarial aprobado por el gobierno que alcanza un 10% y que la COB rechaza, solicitando que el porcentaje propuesto aumente a un 15%. La dirigencia de la COB insiste en que sólo dialogará sobre el tema con el presidente Evo Morales y no con sus ministros, a quienes acusa de haber ignorado su pliego petitorio.

Reclusos y reclusas de tres penales de La Paz: San Pedro, Choncocoro y el Centro de Orientación Femenina (COF) Miraflores, radicalizan sus medidas de presión en demanda del aumento del monto que reciben diariamente para cubrir sus gastos de alimentación. También exigen soluciones a la retardación de justicia y modificaciones a la Ley 007, ya que consideran que es la causante del hacinamiento. Exigen que se incremente el prediario de Bs. 5,50 a Bs.15. El gobierno nacional, durante las negociaciones ya sostenidas con las y los manifestantes, accedió en aumentar el prediario a Bs 6,6. La propuesta es rechazada, por lo que se radicalizan las medidas. En este sentido, las y los privados de libertad recurren, además de a la huelga de hambre, a medidas extremas como la crucifixión, se cosen los labios, se entierran, y se sacan sangre, con la que escriben carteles de protesta. En Sucre, los internos de San Roque esperan, hasta hoy, tener respuestas a sus solicitudes, caso contrario, amenazan con iniciar nuevas medidas de presión. El representante de los reos de Mocoví (Beni), informa que están en estado de emergencia y amenaza con instalar desde hoy un piquete de huelga de hambre de 10 internos. Por su parte, el director general de

Régimen Penitenciario, José Antonio Sueiro, informa que las demandas de mejora en los predios se atenderán sobre la base de las posibilidades económicas del Ejecutivo nacional, pero también de las gobernaciones departamentales y señala que es imposible dialogar bajo medidas de presión, por lo que exhorta a las y los reos a levantar sus medidas para retomar el diálogo.

En la ciudad de La Paz se concentran trabajadoras y trabajadores de la CNS de diferentes puntos del país realizan una marcha por el centro de la sede de gobierno y un mitin en las puertas del Ministerio de Salud, exigiendo la derogatoria del artículo 23 de la Ley Financial y de los artículos 8 y 9 del Decreto Reglamentario 772. Las delegaciones que llegaron de del interior del país se sumarán a las medidas anunciadas por la COB. La ministra de Salud, Nila Heredia, señala que el paro es ilegal y lo califica de “criminal” en una época de epidemia como la del dengue que aqueja a la región oriental del país.

Miércoles 6

La COB decide declarar una huelga nacional indefinida a iniciarse el día siete de este mes, luego de que se registran en La Paz una serie de protestas violentas para solicitar un incremento salarial. Al paro se suman más de 30 organizaciones que integran a mineros estatales, empleados universitarios y trabajadores sanitarios quienes participan en un ampliado nacional y se tiene previsto continuar con las movilizaciones en la sede del gobierno así como ampliar la protesta a otros departamentos apoyándose en las centrales de esas zonas así como en las regionales. Por su parte, el gobierno nacional califica de injustas e ilegítimas las demandas de la COB y señala que esta organización defiende tan sólo intereses sectorizados y particulares.

Jueves 7

En La Paz, la COB masifica las marchas y realiza bloqueos callejeros, atacando en el camino algunas instituciones públicas e intentando ingresar a la Plaza Murillo, centro donde se encuentra el órgano legislativo y el palacio de gobierno, siendo detenidos por la Policía que se enfrenta sobre todo con los trabajadores mineros que emplean dinamita para intentar lograr su propósito. Según el dirigente principal de la COB, Pedro Montes, las demandas planteadas no son sólo de carácter salarial para el sector sino que se exige también la reactivación productiva para crear fuentes de trabajo para los desocupados/as, la derogatoria del Decreto Supremo (DS) 21060 que permitió la adopción del neoliberalismo como modelo económico hace casi veinticinco años, medidas que, a su juicio, no son sólo importantes para los trabajadores sino para toda la ciudadanía en general.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de La Paz, William Alave, logra un acuerdo con las privadas de libertad del COF de Obras y Miraflores, tras una reunión en la que se tocaron temas relativos a la retardación de justicia, a la situación de mayores de edad, se acuerda tener reuniones permanentes cada 20 días para hacer un seguimiento y analizar los casos y temas que son preocupantes para las privadas de libertad. La autoridad judicial señala que se evaluarán eventuales sanciones para los jueces que demoran en sus fallos y ocasionan retardación de justicia.

Sábado 9

El gobierno y la COB inician un primer diálogo para intentar resolver el conflicto suscitado desde inicios de este mes con el sector de los trabajadores (as). Se propone trabajar con una agenda abierta y se señala que en el encuentro participará el presidente Evo Morales y algunos de los ministros de su gabinete. Por su parte, la COB ha planteado crear una comisión que trabaje por tiempo y materia hasta encontrar soluciones a todos los puntos que conforman su pliego petitorio, que incluye: el incremento salarial, la abrogación del Decreto 809, que dispone el aumento salarial del 10% para salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía y el incremento del salario mínimo nacional a Bs 815, la abrogación del DS 21060, la rehabilitación del aparato productivo, la defensa de la Caja Nacional de Salud (CNS), el respeto al acuerdo de Panduro alcanzado en abril pasado, según el cual antes de que se trate el proyecto de Ley de Pensiones por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debía haber sido acordado con la COB y, finalmente, la seguridad alimentaria. Horas más tarde, debido a los compromisos del presidente Morales agendados para este fin de semana, la reunión entra en cuarto intermedio hasta mañana.

Domingo 10

Luego de reanudar el diálogo suspendido ayer, la COB y el gobierno nacional alcanzan un preacuerdo respecto a tres puntos del pliego petitorio de la organización: analizar la posibilidad de modificar el porcentaje del incremento salarial, tratar el tema de la reactivación productiva y establecer el compromiso para derogar el DS 21060.

En la sede de gobierno, estudiantes y docentes de la Escuela Superior de Maestros de Educación Física (INSEF) toman el estadio Obrero, exigiendo su reversión a favor del su institución. El dirigente de los estudiantes, Paolo Gemio, informa que más de 800 estudiantes y docentes del INSEF decidieron tomar el campo deportivo pues, a 80 años de existencia, la institución no tiene una infraestructura propia, por lo que las y los alumnos no tienen un espacio dónde pasar clases. Añade que para acceder al estadio Obrero, cada estudiante debe pagar un alquiler de Bs 100 anual por el uso de la cancha de césped. En este sentido acusan a la Asociación Obrera Deportiva de Miraflores (AODM) de irregularidades económicas. La directora del INSEF, Juana Soto, afirma que el gobierno de Morales dispuso estos ambientes para el uso de los estudiantes y que la medida tiene el apoyo de otras normales. Por su parte, el presidente de la AODM, Freddy Murillo, asegura que el Estado boliviano les habría otorgado las instalaciones del estadio Obrero desde 1942 que por lo tanto se trata de una propiedad privada perteneciente a una asociación deportiva”, aseguró Murillo. Asimismo, el representante de la asociación indica que el aporte destinado de forma obligatoria a la contratación de los ambientes del estadio no cubre el consumo de los servicios básicos de electricidad y agua, ni los de mantenimiento de su infraestructura.

Lunes 11

El gobierno y la COB alcanzan un preacuerdo de ocho puntos, en el cual se contempla un posible aumento salarial de entre el 10 y el 15%, a expensas de las Reservas

Internacionales Netas (RIN). La COB insiste en que este incremento llegue mínimamente al 15% y el debate sobre este punto dura casi seis horas. Para el órgano ejecutivo esta demanda es excesiva pues supone provocar un déficit en las arcas del Estado. Se calcula que en lo que va del 2011 el Tesoro General enfrenta un déficit de 880 millones de dólares, que se convertirían en cerca de 913 millones si se emplean las RIN para aumentar el salario de los trabajadores. Asimismo, se logran acuerdos sobre el feroz sindical, la reactivación del aparato productivo y la abrogación del DS 21060, la recuperación de empresas privatizadas en los gobiernos neoliberales (1985-2005) a favor del Estado. Finalmente, los sindicatos y el ejecutivo acuerdan crear una comisión bilateral, encabezada por la COB, para tratar el caso de la CNS donde los trabajadores denuncian la existencia de hechos de corrupción y negligencia médica. El gobierno se compromete a su vez a respetar las cuentas fiscales de las cajas de seguridad social en el país y de las cajas de salud. El documento del acuerdo será analizado desde esta tarde en un ampliado, en el cual la COB plantea trasladar a los sindicatos la decisión de aceptar o rechazar el preacuerdo concertado con el gobierno y definir una posición final. El preacuerdo contempla finalmente el cese de la presión sindical que implica la toma de calles y el enfrentamiento con las fuerzas policiales.

Luego de que en días pasados el Jefe de Estado señalara que “entre el gobierno y la COB deben cerrar la Caja de Salud y construir otra institución para los asegurados”, las y los trabajadores de salud determinan cerrar filas en defensa de esta institución. De acuerdo con su punto de vista, en el conflicto con la COB el futuro de la CNS no está en discusión, pues la demanda de los trabajadores es que se abroge el artículo 23 de la Ley Financial, que confisca los recursos de los trabajadores, siendo otro tema que se va a hacer con la Caja en el futuro. Para los dirigentes de la CNS, esta institución “es obra de las y los trabajadores, y los distintos gobiernos lo único que han hecho es utilizarla como un botín político”. En ese marco, se señala que las y los trabajadores de la Caja han planteado a las autoridades gubernamentales realizar un “control colectivo” a los manejos que se hacen de la institución aseguradora.

Martes 12

Al finalizar un ampliado realizado el día 11, la COB decide rechazar el principio de acuerdo con el gobierno de Evo Morales, alcanzado la víspera, y anuncia una “contrapropuesta” que presentará hoy mismo en el palacio de gobierno sin prescindir de las medidas de fuerza con que la organización tiene paralizadas las actividades en La Paz desde la semana pasada. De acuerdo con la dirigencia de la COB, el documento discutido con el gobierno ha sido analizado cuidadosamente por las bases quienes han querido añadir propuestas más sólidas, viendo que el tema del incremento salarial es el más conflictivo. Mientras tanto, los trabajadores continuarán sus movilizaciones de protesta en La Paz.

Miércoles 13

Desde La Paz, las organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) se declaran en emergencia y anuncian la realización de una marcha nacional en defensa del proceso de cambio, denunciando que las movilizaciones de la COB son un intento por desestabilizar al gobierno. Asimismo, dan

a conocer un manifiesto donde afirman su apoyo a la decisión del gobierno de realizar un incremento salarial que sólo llegue al 10%. La dirigencia del CONALCAM define asimismo a los dirigentes de la COB como “individuos o caudillos que promueven marchas y bloqueos contra el gobierno y que son los principales enemigos de la revolución democrática y cultural”. Finalmente, en su manifiesto recuerdan a los trabajadores que el aumento salarial en los gobiernos neoliberales era menor a la inflación anual y que el Estado se endeudaba extremadamente para cumplir con los aumentos salariales y los aguinaldos.

Jueves 14

En La Paz, se inicia el octavo día de violentas protestas realizadas por la COB para lograr un incremento salarial del 15%. Entre las cinco y seis de la mañana, grupos de manifestantes bloquean las arterias principales de la sede del gobierno y El Alto. Con ello se aísla el centro de la ciudad. A la protesta de la COB, iniciada el miércoles de la anterior semana por maestros, mineros, salubristas y universitarios, se suman hoy jubilados y trabajadores municipales. A diferencia de las anteriores, la protesta de esta jornada es la más violenta, porque las organizaciones sociales afiliadas a la COB causan destrozos en el ornato público de la urbe paceña. Los sectores afiliados a la COB exigen al gobierno un incremento salarial del 15%, cinco puntos más del aprobado por el órgano ejecutivo. Mientras, el sector salud pide la derogatoria del artículo 23 de la Ley Financial, porque considera que establece la confiscación de sus recursos económicos. Por otra parte, en Oruro, Potosí, Chuquisaca, Pando y Beni, los trabajadores bloquean rutas interdepartamentales y en Tarija una marcha y posterior gasificación afecta las actividades del presidente, quien se encontraba en esa ciudad para celebrar su aniversario. En otras ciudades capitales, los bloqueos y las marchas se suceden durante todo el día. Asimismo, en el oriente los sectores que reclaman un incremento salarial superior al 10% aprobado por el gobierno realizan marchas y bloqueos en Santa Cruz, Beni y Pando. En Beni, maestros (as), universitarios (as) y otras organizaciones afiliadas a la Central Obrera Departamental (COD) marchan e instalan dos puntos de bloqueo, uno a 35 kilómetros en la carretera que conecta con el departamento de Pando. En este último departamento, las y los maestros urbanos bloquean también el ingreso al aeropuerto Aníbal Arab, mientras que las y los salubristas toman la céntrica calle 9 de Abril y maestros (as) rurales se instalan en la carretera Cobija-Riberalta. De igual forma, en Santa Cruz trabajadores (as) de la CNS y maestros (as) plantan varios puntos de bloqueo y realizan marchas de protesta, mientras que un grupo de manifestantes cierra la salida de las flotas interdepartamentales de la terminal Bimodal. Las y los funcionarios de la CNS anuncian que masificarán sus protestas a partir de este viernes, denunciando que el gobierno intenta apoderarse de las aportaciones de los trabajadores y alegando que con esta medida se viene violentando el código de Seguridad Social. Igualmente, tanto en Oruro como en Potosí, se registran marchas y bloqueos tanto en el área urbana de las capitales como en las carreteras de interconexión con otros departamentos. Por último, en la ciudad de Cochabamba se dan una serie de marchas y bloqueos protagonizados por los sectores afiliados a la COB. Lo mismo ocurre en Sucre, donde además se corta el paso de los vehículos en las carreteras que conectan con Potosí y Cochabamba.

Viernes 15

En La Paz, grupos de maestros (as) rurales se suman a las protestas de la COB iniciando un bloqueo de carreteras entre las ciudades de La Paz y de Oruro, apedreando autobuses de transporte interdepartamental, lo que ocasiona que este tipo de servicios se paralice. Nuevamente, el gobierno nacional remite una carta a la COB para invitarla otra vez a reanudar el diálogo el día 16 ratificando que el único tema en disenso es el incremento salarial. Asimismo, recuerda que en la reunión sostenida el 9, 10 y 11 de abril se elaboró de manera conjunta con los representantes de los trabajadores un "Acta de Acuerdo" donde siete de los ocho puntos estaban consensuados. Dicha Acta, según el gobierno, habría sido desvirtuada al ser modificada luego por las bases de la COB. Por su parte, la COB decide aceptar la invitación del gobierno y encontrar así una solución definitiva, señalando además que tienen absoluta predisposición a encontrar el diálogo y a dejar en claro que los trabajadores sólo han hecho uso de su derecho constitucional a la huelga, la protesta y la demanda.

Sábado 16

El gobierno y la COB ingresan a una fase de construcción y de mejoramiento de los textos pre-acordados el pasado fin de semana, en base a los lineamientos del presidente Evo Morales. La reunión se desarrolla sin fijar horarios ni plazos, y la dirigencia de la COB ha observado algunos asuntos de forma del pre acuerdo, por lo que se trabaja en la redacción del mismo para perfeccionar el texto. La metodología empleada involucra el intercambio de ideas y propuestas y el mejoramiento del pre acuerdo en los ocho puntos que incluye el pliego de peticiones presentado por los dirigentes sindicales. Por otra parte, de común acuerdo se ha decidido agotar inicialmente en el debate todos los puntos que no se refieren al incremento de los salarios y dejar este tema para el final. Sobre la exigencia sindical para la eliminación del DS 21060, aprobado en 1985, se enfatiza que hay una coincidencia entre el gobierno y la COB, pero, según el primero, "no para eliminar esa disposición con otro decreto, sino con la aprobación de Leyes que lo desmonten totalmente".

Lunes 18

Luego de un ampliado, la COB acepta el acuerdo de ocho puntos trabajados por los dirigentes del Comité Ejecutivo con el gobierno y suspende la huelga general indefinida, así como las movilizaciones que se implementaron hace 10 días. El ampliado nacional realiza un balance exhaustivo y un análisis detallado de todos los aspectos y autoriza por unanimidad al Comité Ejecutivo Nacional y a toda la dirigencia de los sectores a firmar el acuerdo con el gobierno nacional. En el documento acordado por la COB y el gobierno se establece finalmente un incremento salarial del 11%, con la posibilidad de subir a 12% para maestros y salubristas después de identificar una fuente de financiamiento que no ocasione déficit fiscal. Finalmente, los trabajadores solicitan al gobierno levantar todas las amenazas de sanciones y de despidos, de descuentos o cualquier tipo de represalias por haber ejercido el derecho a la huelga, reconocido por la Constitución Política del Estado (CPE) y las normas internacionales del trabajo. También se acordó la reactivación productiva, la restructuración de la

CNS, la vigencia plena del fuero sindical, el acuerdo firmado en Panduro en abril de 2010, gestiones para garantizar la seguridad alimentaria y la adecuación de las leyes 2027 y 2028, del funcionario público y de municipalidades a la nueva CPE.

Martes 19

El líder de la COB, Pedro Montes, informa que el Comité Ejecutivo Nacional de esta organización conformará este martes las primeras dos comisiones para velar el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el gobierno de Evo Morales, así como para definir la fuente de financiamiento para el restante uno por ciento para alcanzar el incremento del 12% a los salarios de profesores, maestros, policías y militares.

Miércoles 20

En La Paz, el líder de la COB, Pedro Montes, confirma la entrega al gobierno del acuerdo de ocho puntos ya firmado. Con ello se pone fin al conflicto que tuvo paralizada la ciudad de La Paz diez días para exigir el cumplimiento del pliego presentado por la organización del gobierno a fines del pasado marzo.

En la ciudad de La Paz, a 10 días de la toma de estadio Obrero de Miraflores por parte de estudiantes y docentes del INSEF, quienes exigen la reversión del campo deportivo a favor de su institución, la UTOP interviene la toma, en horas de la madrugada, para desalojar a quienes ocupaban el campo. Según denuncias del INSEF, el accionar de los agentes policiales fue muy violento y dejó, al menos, tres heridos, que están en el hospital, por lo que advierte que se hará una denuncia contra la Policía ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). Por su parte, la Policial señala que los alumnos reaccionaron violentamente contra los policías, causando daños a inmuebles aledaños al estadio. Afirman que los estudiantes tenían bombas molotov, cachorros de dinamitas, piedras y palos con los que habrían herido a un efectivo y dos vehículos de la Policía. Tras los hechos, 21 estudiantes del INSEF son trasladados a la FELCC. Familiares de los detenidos exigen a la Policía que deje en libertad a los alumnos apresados, señalando que no se trata de delincuentes. En este marco, en horas de la mañana, estudiantes del INSEF realizan una marcha de protesta contra la intervención policial por el centro paceño.

Viernes 22

El conflicto suscitado el mes pasado por tierras en la urbanización Colinas de Andalucía y Lomas de Santa Lucía, en el municipio de Sacaba en Cochabamba, se reinicia cuando 50 familias intentan retomar un asentamiento destruido el cuatro de abril, con un operativo policial que culminara con la demolición de unas 130 viviendas. Las familias que buscan re-ocupar los predios en conflicto, llegan al lugar haciendo uso de detonantes, lo que moviliza, inmediatamente a vecinos (as), quienes llaman a la Policía para que vuelva a intervenir. En esta ocasión, la toma se efectúa por rutas alternativas, lo que permite esquivar el control de los guardias de las urbanizaciones, que desde el día del desalojo están a cargo de la vigilancia. En menos de una hora, un contingente policial llega a la zona, rodea a los asentados y convoca a una reunión a las dirigencias.

Estos últimos se niegan a abandonar los lotes, argumentando haber pagado 1.000 \$US americanos a los supuestos propietarios. Después de una negociación, las y los asentados se marchan de los terrenos. Tras su partida, vecinos (as) de las urbanizaciones armados con palos y botellas de gasolina proceden a destruir calaminas, mojones, listones y carpas, que quedaban luego del asentamiento. También queman, ante las miradas de las y los hijos de las y los ocupantes, unas casas precarias que estos habían levantado como medida de protesta por el desalojo del cuatro de abril, en la entrada a las urbanizaciones, a unos dos kilómetros de los terrenos en conflicto. Finalmente la Policía interviene en la disputa entre vecinos (as) de la urbanización y las y los asentados con el fin de evitar nuevos enfrentamientos.

Miércoles 27

La Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia (CNJRB) marcha desde Oruro hacia la ciudad de La Paz exigiendo un incremento a sus rentas mayor al del 5 % fijado por el gobierno Nacional. Las y los jubilados exigen un aumento del 10 %, como el ofrecido al sector laboralmente activos. Se calcula que unas seis mil personas, encabezadas por mineros jubilados, iniciaron la marcha en el punto de concentración de la marcha, fijado en la población de Quemalla, ubicada a 188 kilómetros de la sede de gobierno; en este marco, el dirigente rentista, Gustavo Carrero, denuncia que la Policía habría detenido a tres buses en los que viajaban rentistas desde Santa Cruz para sumarse a las protestas. De manera simultánea a la marcha, organizaciones departamentales de rentistas, se manifiestan con marchas y bloqueos en los diferentes departamentos. Desde el gobierno nacional se señala que, por ley está fijado un porcentaje de incremento anual de acuerdo a la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), que el año pasado llegó a 1,75 % y que pese a ello el Ejecutivo dispuso un aumento del 3,25 % de UFV a fin de que se llegue a un 5% de incremento en las rentas. El ministro de Comunicación Social, Iván Canelas, convoca a las dirigencias de los rentistas a dialogar para evitar una medida que podría afectar gravemente a la salud de los marchistas por lo avanzado de su edad. El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, informa que se ha propuesto al sector incrementar en 50 bolivianos la renta. Por su parte, el ministro de Trabajo, Félix Rojas, señala la disposición del gobierno de desplazar una comisión oficial a la marcha para buscar una solución a la protesta mediante el diálogo. Tanto el gobierno como algunos colegios de profesionales en medicina desplazan servicios de asistencia médica a diferentes puntos de la marcha. Al cabo de varias horas de caminata, cientos de marchistas sienten molestias y calambres en los pies. La dirigencia advierte que si algo llega a ocurrir a alguno (a) de los (as) marchistas el directo responsable será el presidente Evo Morales y sus ministros. Tras recorrer una distancia de 15 kilómetros, las y los marchitas llegan a la localidad de Panduro, donde hacen una pausa de descanso, previendo retomar la caminata después de una hora para llegar a La Paz el día de mañana. En la primera jornada de marcha, de las seis mil personas que la iniciaron, logran continuarla sólo dos mil.

Jueves 28

La CNJRB acepta iniciar el diálogo propuesto por el gobierno, tras lo cual una comisión oficial, compuesta por los ministros de la Presidencia y Economía se trasladan a la localidad altiplánica de Koani, ubicada en la carretera Oruro-La Paz donde se

encuentra estacionada la marcha. Simultáneamente en la ciudad de la Paz, algunos muy ancianos (as) apoyados en bastones, cortaron varias calles de la sede de gobierno creando un caos en el transporte, mientras otros realizaron marchas y amenazan con bloqueos generalizados en la ciudad. Entretanto, la dirigencia de la COB anuncia que, si el diálogo no prospera, la entidad matriz de trabajadores se sumará a la marcha.

Viernes 29

En la madrugada, tras una reunión que duró alrededor de 12 horas consecutivas, el gobierno nacional y la CNJRB llegan a un acuerdo que pone fin a dos días de movilizaciones de este sector en demanda de un incremento de sus rentas en un 10%. El máximo dirigente del sector movilizado, Mamerto Goyochea, informa de la firma de un acuerdo que establece un incremento del 6,5 % en las rentas de los jubilados. Con el acuerdo se pone fin a las medidas de presión. Sin embargo, la dirigencia rentista puntualiza que aún deben informar a sus bases para ratificar la decisión de la dirigencia. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Arce, quien fuera parte de la comisión negociadora señala que el incremento extraordinario del 1,5 por ciento porcentuales a los aprobados inicialmente afectará el déficit fiscal que arrastrará el Gobierno este año.

Glosario de siglas

ALP	Asamblea Legislativa Plurinacional
AODM	Asociación Obrera Deportiva de Miraflores
APDH	Asamblea Permanente de Derechos Humanos
CNJRB	Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia
CNS	Caja Nacional de Salud
COB	Central Obrera Boliviana
COD	Central Obrera Departamental
COF	Centro de Orientación Femenina
CONALCAM	Coordinadora Nacional para el Cambio
CPE	Constitución Política del Estado
DS	Decreto Supremo
FENSEGURAL	Federación de Trabajadores del Seguro Social de Bolivia
INSEF	Escuela Superior de Maestros de Educación Física
MAS	Movimiento al Socialismo
MSC	Minera San Cristóbal
RIN	Reservas Internacionales Netas
SEMAPA	Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba
SMD	Seguro Médico Delegado
UFV	Unidad de Fomento a la Vivienda
UTOP	Unidad Técnica Operativa de Tránsito

Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinadoras y encargadas del relevamiento y sistematización: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes: Los Tiempos, La Razón, ABI y El Deber.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Bolivia

Mayo de 2011

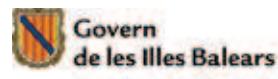
Editada en septiembre



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears
Conselleria d' Afers Socials;
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 914

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Bolivia***



Integrantes

Pilar Uriona Crespo
Dunia Mokrani Chávez

Fuentes

Los Tiempos, La Razón, ABI y El Deber

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Mayo de 2011

Domingo 1

El presidente del Estado plurinacional, a través de un mensaje difundido en los medios de comunicación, rinde homenaje a los trabajadores del país, en ocasión de celebrarse el Día Internacional de los Trabajadores, señalándolos como una parte importante de las transformaciones sociales y del proceso de cambio. El primer mandatario recuerda que el 1º de mayo de 2006 se nacionalizó el petróleo y el gas y remarca, como uno de los principales logros de su gestión gubernamental, que el salario mínimo nacional haya duplicado de 440 Bs. a 815 Bs. Durante el homenaje por el día de los trabajadores, en la localidad minera de Huanuni, departamento de Oruro, el gobierno deroga el decreto 21060, promulgado en 1985 por Víctor Paz Estensoro en el marco de varias reformas estructurales, y que dio inicio a dos décadas de políticas neoliberales. Evo Morales señala que dicha derogación ha sido una demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) y dispone la conformación de una comisión de alto nivel entre el órgano ejecutivo, la COB y otras organizaciones para la revisión de las leyes orientadas a operativizar el decreto; entre ellas se destacan la Ley de Inversiones, la de Exportación, la Ley Forestal, el Código de Minería y la Ley de Bancos y Entidades Financieras. Se plantea que, a partir de esta revisión, se diseñarán y aprobarán nuevas leyes para revertir las normas neoliberales. Como parte de las medidas lanzadas por el gobierno, durante una concentración con trabajadores petroleros realizada en la planta de Senkata, en El Alto, se aprueba la nueva escala salarial para el sector hidrocarburos a través de la promulgación del Decreto Supremo Nº 863, una disposición que beneficiará con incrementos de hasta un 70% de los salarios de los trabajadores petroleros. El primer mandatario señala que dicha reforma dispone una escala inversamente proporcional, según la cual los que ganan menos obtendrán incrementos mayores. Asimismo, remarca que el sector no ha recibido ningún incremento desde hace diez años y destaca la actitud de los trabajadores petroleros, quienes manifestaron su interés en contribuir al proceso de reforma, aún sin esperar un incremento salarial, hecho que el mandatario califica de compromiso incondicional y alentador para trabajar de manera conjunta para el cambio. Evo Morales señala que, gracias a la nacionalización y a los trabajadores petroleros, Bolivia ya no es un “Estado mendigo”. Según la nueva escala salarial, como explica el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los especialistas y técnicos ganarán por encima del monto que percibe el presidente del Estado plurinacional de Bolivia y resultarán beneficiados, en particular modo, los trabajadores de planta y los eventuales. En el mes de marzo, el gobierno dispuso el aumento salarial del 10% para los empleados públicos y un alza del 20% del salario mínimo.

La COB conmemora el Día Internacional de los Trabajadores con marchas multitudinarias en proximidad de la sede de gobierno y en las capitales de otros departamentos del país. El principal dirigente de la COB, el minero Pedro Montes, en su alocución durante la concentración de trabajadores realizada en la plaza San Francisco de la ciudad de La Paz, expresa que seguirán luchando por un trabajo digno y estable. La dirigencia cobista, hoy distanciada del gobierno, critica al ejecutivo por no haber concertado con los trabajadores la derogación del decreto 21060 e indica que, en un ampliado nacional a realizarse el viernes 13, se analizará el nuevo decreto promulgado. Finalmente, advierte que la COB no permitirá que el ejecutivo aplique descuentos por la huelga general indefinida y que, si lo hiciera, se iniciarán nuevas medidas de protesta.

Martes 3

En la Paz, con una marcha que atraviesa el centro de la ciudad, los maestros urbanos rechazan los descuentos por las dos semanas de paro para exigir un incremento salarial mayor al 10% anunciado por el gobierno. La dirigencia de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de La Paz (FDMULP) acusa al ejecutivo de actuar de manera discriminatoria, diferenciando entre los trabajadores petroleros, a quienes se les aprueba hasta el 70%, mientras al magisterio se le da el 10% y además se le amenaza con descuentos por las medidas de presión realizadas en defensa de sus derechos. La dirigencia señala que las movilizaciones no sólo responden al rechazo frente al anuncio del descuento salarial, sino también a que el gobierno no responde a su pliego sectorial, que incluye demandas como el equilibrio salarial entre los maestros urbanos y rurales, la nivelación de horas de trabajo de 88 a 108, la convocatoria para ascensos de categoría y la institucionalización de cargos. Frente a ello, se anuncia una próxima movilización a nivel nacional. Por su parte, en Cochabamba, el magisterio urbano determina el trabajo en turnos alternos para evitar los descuentos.

Viernes 6

En un ampliado nacional, la COB determina convocar a marchas de protesta para frenar los despidos y descuentos arbitrarios y prepara una huelga de hambre selectiva a nivel nacional. Además, aprueba la presentación de una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación al derecho a huelga, a la protesta y a la movilización. Entretanto, el ministro de Trabajo, Félix Rojas, confirma que el descuento a maestros y salubristas ya figura en la papeleta de abril y advierte que, si la movilización convocada por la COB contemplase la paralización de actividades, se procederá con nuevos descuentos.

Lunes 9

En la ciudad de Santa Cruz, trabajadores de la maternidad Percy Boland inician un paro de actividades hasta el miércoles 10, exigiendo al municipio dar solución a la crisis que enfrenta ese hospital por falta de personal para reemplazos y bajas; determinan también realizar movilizaciones de protesta. Por su parte, la oficial mayor de desarrollo humano, Ana María Encinas, informa que se contrató a 11 personas para la maternidad, siete de las cuales para remplazar a los trabajadores manuales de vacaciones y cuatro para suplir a los de administración, y que se entregarán una central telefónica y 30 teléfonos, con una inversión de 48 mil Bs., con la cual el municipio habría invertido 2,2 millones de Bs. en equipamiento, mientras que, en el concejo municipal, está lista la aprobación de otros 4,5 millones para inversión. Respecto a la demanda de personal que origina la protesta, la autoridad municipal indica que la maternidad cuenta con 54 administrativos y casi 70 encargados de limpieza, por lo que pide optimizar recursos y no considerar los hospitales una fuente de trabajo, sino de servicio. Entretanto, el conflicto se agrava por la escasez de alimentos, debido a que los proveedores decidieron suspender el servicio por falta de pago. Esto provoca que el senador Isaac Ávalos y un concejal inicien un proceso legal en contra del alcalde. Los médicos también se suman a la protesta, demandando equipos, materiales y el mejoramiento de la infraestructura.

En la ciudad de Santa Cruz, la subalcaldía del distrito 12 suspende la atención al público debido a la disputa que enfrenta a dos organizaciones vecinales del barrio Nuevo Palmar por la conducción de la misma. El conflicto, que se manifiesta durante los festejos de los 12 años de fundación del distrito, tiene origen en la salida del subalcalde Víctor Pocho Escobar, destituido, lo que ha generado la movilización del grupo que lo respalda, el cual asegura que seguirá protestando hasta conseguir la restitución de Escobar en el cargo que ocupaba desde el 2005. Mientras tanto, el nuevo

subalcalde designado no ha podido asumir, hecho que ha movilizado a su propio grupo de apoyo.

Martes 10

Unos 300 jubilados inician una marcha desde la localidad de Calamarca, La Paz, en demanda de un incremento del 6,5% a sus rentas y la nivelación de las rentas más bajas que el salario mínimo (de 815 Bs.). La policía envía efectivos hasta Calamarca, con la finalidad de resguardar la marcha. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, llama a los marchistas al diálogo e informa que la mayor parte de los jubilados dentro del sistema anterior serán absorbidos en la Ley de Pensiones Solidaria. Añade que sólo una mínima porción, los que cobran rentas altas, no serán considerados por el fondo solidario y que, desde el punto de vista del gobierno, sería ilegal otorgarles dinero del Tesoro General de la Nación (TGN), pues, además, no existe presupuesto para ello. El director general de pensiones, Marcelo Ticona, explica que, con la nueva Ley de Pensiones, se ha creado el fondo solidario, gracias al cual al menos 14 mil jubilados recibirán un aumento mayor al 6,5%.

Jueves 12

Una marcha de jubilados integrados en el nuevo sistema de pensiones arriba a la población de Achica Arriba, distante en 18 kms. de la ciudad de El Alto. En el lugar los marchistas bloquean durante unas horas la carretera que conecta la sede de gobierno con el interior del país en demanda del incremento de sus rentas y la nivelación de las más bajas al salario mínimo. La marcha se acerca a la ciudad de La Paz y espera llegar el sábado 14 a la sede del gobierno.

La COB realiza una marcha de protesta ratificando su rechazo a la decisión del ejecutivo de descontar a maestros y salubristas por los días no trabajados, acción que los dirigentes consideraron una provocación. Unos 3 mil trabajadores, del sector salud y educación, además de mineros que se pliegan de manera solidaria, se movilizan hacia la sede de gobierno.

En Santa Cruz, padres de familia y maestros del cantón Clara Chuchío, municipio de Warnes, bloquean la carretera norte, cerca del kilómetro 18, manifestando su protesta por la falta de ítems y mantenimiento de la infraestructura de seis unidades educativas de la zona. La medida paraliza durante seis horas la ruta de alto tráfico comercial, lo que provoca la formación de dos largas filas de camiones y autos particulares, de al menos cinco kilómetros, a cada lado del corte de ruta. Un contingente de 40 policías procede a despejar la vía.

En Santa Cruz, vecinos de los distritos 8 y 14 del Plan Tres Mil inician un piquete de huelga, exigiendo que la alcaldía no designe subalcaldes de manera arbitraria y sin consultar a las juntas vecinales. El malestar surge por el cambio repentino del subalcalde del distrito 8, Eduardo Correa, que, en julio del año pasado, fue posesionado por contar con el apoyo de las juntas vecinales de la zona.

Viernes 13

En la localidad fronteriza del Desaguadero, el grupo de defensa de los recursos naturales de Puno bloquea el paso entre Bolivia y Perú, exigiendo al gobierno peruano medidas para prohibir las concesiones mineras en la zona. Camioneros de carga pesada se ven impedidos de pasar la frontera y exportadores bolivianos también expresan su molestia por el bloqueo, que les provoca graves perjuicios económicos. El presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona

Sur de la región Puno, Walter Aduviri Calizaya, advierte la posibilidad de una movilización de por lo menos 50 mil comuneros de las provincias aimaras si el ministro peruano de Energía y Minas no se presenta para escuchar sus demandas.

En Santa Cruz, vecinos de los distritos 8 y 14 del Plan Tres Mil, que en la noche iniciaron un huelga de hambre contra las designaciones, que consideran arbitrarias, de los subalcaldes por parte de la alcaldía cruceña, bloquean el ingreso al vertedero de Normandía. La gerente técnica de Emacruz, Sandra Velarde, aclara que la medida de presión tiene que ver con el servicio de recojo de basura y que los camiones están pasando al vertedero con dificultad; ante el peligro de una crisis medioambiental, insta a las partes a solucionar el problema para no perjudicar a la ciudad.

Alrededor de 600 jubilados del nuevo sistema de pensiones bloquean la carretera La Paz-Oruro a la altura de Mazocruz, luego de haber reanudado su caminata por la mañana desde la localidad de Achica Arriba tras haber pernoctado en esa localidad. El bloqueo se realiza mediante la formación de una suerte de “alfombra humana”. Otro bloqueo del sector tiene lugar, por la tarde, al llegar la marcha a la zona alteña de Ventilla. En ambas paradas, los jubilados aprovechan la parada para curar sus heridas y dolores y, en algunos casos, son atendidos por efectivos de bomberos. Un grupo de policías resguarda la marcha.

En el departamento de Santa Cruz, se paralizan las sesiones de la asamblea legislativa de la gobernación, luego de que la jueza Valeria Salas decidiera enviar a prisión al presidente del consejo departamental, Alcides Villagómez, por no haber acatado fallos judiciales que ordenaban la posesión de Rosmery Gutiérrez como asambleísta en representación del pueblo yuracaré-mojeño. Luego de conocerse la orden de detención, asambleístas de la agrupación Verdad Democracia Social (VERDES) se declaran en emergencia y paralizan cualquier convocatoria a sesiones. El presidente de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Muñoz, convoca a sus colegas de la agrupación VERDES a reanudar los labores legislativos. Por su parte, el ministro de Autonomía, Carlos Romero, califica como “política” la decisión de no reconocer a la representación indígena yuracaré-mojeño.

Domingo 15

El grupo de jubilados que marcha por un incremento a sus rentas llega a la ciudad de El Alto, donde descansarán, para ingresar el lunes 16 a la ciudad de La Paz. La COB compromete su respaldo al sector.

En la frontera con Perú, entre las poblaciones de Kasani y Desaguadero, aproximadamente 250 caminos bolivianos se encuentran varados debido al bloqueo que sostienen, desde la semana pasada, campesinos y activistas ecologistas en demanda de la reversión de las licencias de operación minera al gobierno peruano. Del otro lado del límite binacional, un número similar de coches peruanos espera la liberación de la ruta. Por su parte, turistas nacionales y extranjeros optan por embarcarse en lanchas y recorrer el lago Titicaca desde la localidad peruana de Chucuito, Juli, para continuar su viaje hacia la población de Copacabana, en Bolivia. Se tiene previsto que el lunes 16 una comisión gubernamental de Lima se traslade a Puno para reunirse con los manifestantes.

Lunes 16

La marcha de jubilados del sistema de compensación, que hace seis días partió de la localidad de Calamarca, llega a la sede de gobierno. La dirigencia advierte de otras medidas de presión para lograr un incremento a sus rentas del 6,5%, similar al que recibieron los jubilados del sistema de

reparto, además señala que las casi 300 personas que llegaron del interior ocuparán la ciudad y pernoctarán en parques y plazas. El secretario ejecutivo de la COB acompaña la medida de presión. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, sostiene que quienes se movilizan sólo cuentan con aportes de tres a cinco años, lo que impide que accedan a la jubilación, dado que la actual Ley de Pensiones establece como mínimo 10 años de aportes. Los marchistas exigen negociar de manera directa con Arce o con el Ministro de la Presidencia; hasta ahora, sólo lo hicieron con el viceministro de Pensiones, Mario Guillén.

Tras la decisión de la población peruana de Yunguyo de sumarse a las protestas iniciadas por los habitantes de Desaguadero en contra de las concesiones mineras en la zona y el consecuente cierre de la segunda ruta alterna para el transporte comercial, un grupo de camioneros bolivianos intenta romper el bloqueo y se enfrenta a campesinos que llevan adelante la medida de presión. El hecho deja como saldo varias personas heridas.

Martes 17

El gobierno y los jubilados que llegaron en marcha a La Paz en demanda de un incremento a sus rentas se reúnen en diálogo. A la cita asisten el ministro de Economía, Luis Arce Catacora; el viceministro de Pensiones, Mario Guillén; y la dirigencia de los jubilados del nuevo sistema de pensiones, además del ejecutivo máximo de la COB, Pedro Montes. La reunión dura desde las 18 a las 21 hs., sin lograrse resolver el conflicto. Las autoridades gubernamentales rechazan elevar al nivel de renta al salario mínimo e incrementar del 6,5% a los que ya lo superan, un incremento logrado por los jubilados del sistema de reparto. El argumento con que el gobierno justifica su negativa es que existen 14 mil personas que se benefician con más de lo que se estaría demandando. Señala además que el único problema sería el de 250 personas que tienen menos de 10 años de aportes, tema que quiere dejar fuera de las negociaciones. Planteadas las desavenencias, se declara un cuarto intermedio, sin fecha determinada para el reinicio del diálogo. El ejecutivo de la COB, Pedro Montes, critica a las autoridades gubernamentales por cerrarse al planteamiento de los jubilados. Los dirigentes del sector informan que analizarán si retomar el diálogo o asumir nuevas medidas de presión.

Miércoles 18

La asociación de familiares caídos en defensa del gas protestan en la puerta de la fiscalía de La Paz, a dos años de iniciado el juicio oral, exigiendo el dictamen de un fallo contra los culpables de la masacre de octubre del 2003 y la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y ocho de sus ministros. Familiares de las víctimas denuncian que sigue vigente un sistema de impunidad.

La Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (FESIRMES) realiza un paro de 24 horas, en contra de los descuentos que les impuso el gobierno nacional en las boletas de pago de abril, señalando que este sector no participó del paro a causa del cual se ejecutó dicha medida. Advierten que continuarán con las medidas de presión si no se les reintegra el monto descontado. Por otra parte, exigen al gobierno la institucionalización de cargos en salud. Como consecuencia del paro sólo funcionan los servicios de emergencias.

Jueves 19

La Asamblea Legislativa Departamental reinicia sus sesiones con el mandato de habilitar a Rosmeri Gutiérrez como representante de la fusión de los pueblos yuracaré y moxeño. En la sesión, que dura

ocho horas, la postergada posesión se realiza con un respaldo de 17 votos y 10 votos en contra. Personeros de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y el Centro de Estudios Jurídicos (CEJIS) asisten como observadores. La reunión legislativa se da en un clima de tensión debido a acusaciones y denuncias de ilegalidad mutuas entre el MAS y la agrupación del gobernador Rubén Costas, además de intentos frustrados de los asambleístas de VERDES de presentar un recurso de nulidad, por considerar que la sesión fue convocada bajo presión por el presidente de la asamblea, Alcides Villagómez, que se encuentra internado en la clínica Niño Jesús II y con orden de traslado a la cárcel de Palmasola por no haber acatado fallos judiciales que ordenaban la posesión de Rosmery Gutiérrez.

Domingo 22

A quince días del inicio del bloqueo del paso fronterizo entre Bolivia y Perú -en demanda de la reversión de concesiones mineras en la zona- el gobierno peruano autoriza a las fuerzas armadas a apoyar a la policía de ese país e intervenir para despejar la ruta. Entretanto, transportistas bolivianos, que quedaron varados en la zona, optan retornar a La Paz y dejar sus vehículos en la carretera al cuidado de algunos de sus compañeros. El presidente de la Cámara del Transporte Pesado de El Alto (CTPEA), Gustavo Rivadeneira, manifiesta que los choferes han pedido al gobierno boliviano realizar las gestiones ante su par peruano para que pudieran ser evacuados de forma inmediata. Actualmente, se encuentran bloqueados los pasos por el puente internacional en Desaguadero y las carreteras de Ilave, Juli y Yunguyo.

Lunes 23

En la ciudad de Santa Cruz, dirigentes vecinales de 65 barrios del distrito 12 llegan en manifestación y bloquean los dos ingresos del edificio central de la alcaldía, exigiendo que se restituya en el cargo al subalcalde Víctor Hugo Escobar. La medida de presión obstaculiza el tráfico vehicular en el centro de la ciudad.

Martes 24

En el departamento de Chuquisaca, se realiza una marcha de desagravio a las humillaciones contra indígenas y campesinos acaecidas el 24 de mayo del 2008 en la ciudad de Sucre. La movilización, encabezada por los dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca (FSUTC-CHUQ), pide castigo a los culpables y se pronuncia con estribillos contra el racismo y a favor de la ley contra el mismo en Bolivia. Los manifestantes portan pancartas con inscripciones como “libertad sin racismo”, “no a la discriminación”, “no al racismo, sí al respeto de las personas”, “racismo nunca más” y “stop, no al racismo.”

Miércoles 25

En el marco del conflicto por las concesiones mineras en las localidades fronterizas con Perú, se impide el paso en lanchas, el mismo que se había constituido como vía alternativa de transporte. Actualmente, 800 conductores de vehículos se encuentran varados en diferentes puntos de la frontera. Entretanto, los transportistas bolivianos que siguen en el lugar se dedican a cazar patos y conejos silvestres para evitar pasar hambre.

Viernes 27

La Cámara de Transporte del Oriente (CTO) expresa su preocupación por la persistencia y agravamiento del conflicto por las concesiones mineras en la frontera del altiplano norte con Perú, al momento de conocerse la noticia del incendio de las oficinas de la aduana y de migraciones de este país. La CTO informa estar enviando cargamento con alimentos y víveres para sus compañeros atrapados en el lado peruano, donde la población es reacia a proporcionarles ayuda. Por su parte, los empresarios cruceños declaran estar buscando rutas alternas para desviar la carga que debe ser embarcada a mercados de ultramar.

Lunes 30

La Federación de Transporte Interprovincial de La Paz (FTILP) realiza bloqueos esporádicos en el camino a Copacabana, a la altura de la tranca de Corapata, en protesta por la presencia de conductores del transporte urbano en su área de trabajo y por la nacionalización de vehículos indocumentados, internados al país de manera irregular. Amenazan con masificar sus medidas de presión.

Martes 31

En un cabildo de más de tres mil personas, realizado en la plaza central de la ciudad de Puno, campesinos y comunarios peruanos declaran un cuarto intermedio en sus movilizaciones contra las concesiones mineras en la zona para garantizar así la segunda vuelta de las elecciones presidencial a realizarse el domingo 5 de junio. Según informan dirigentes sindicales, las medidas de presión se suspenderán hasta el próximo martes, cuando se reanudarán las huelgas y bloqueos hasta que el gobierno peruano emita un decreto supremo cancelando toda concesión minera en la zona sur de Puno.

Afiliados de más de cien empresas de la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba (ARAMCO) paralizan el tráfico en dicha ciudad utilizando sus vehículos para bloquear las calles y avenidas en rechazo a una ordenanza municipal que regula las tarifas para los servicios de radiotaxi, taxi asociado y taxi libre. Los manifestantes consideran que las nuevas tarifas fijadas por el municipio van en contra de la economía de los conductores. La estrategia de bloqueo consiste en desplazar desde temprano en la mañana sus vehículos, sin placas para evitar sanciones, al cruce de las arterias principales y secundarias, cerrando así el ingreso al casco viejo de la ciudad. La contundencia de la movilización deriva en el repliegue de las líneas de transporte urbano. Estudiantes, trabajadores y peatones tienen que realizar transbordos, caminar por tramos largos y pagar tarifas elevadas a los contados transportistas que prestan su servicio. Poco antes del medio día, los manifestantes se desplazan hacia la plaza central con la intención de hacer una vigilia en el lugar. Sin embargo, la policía impide su ingreso. El bloqueo obliga al alcalde Edwin Castellanos ofrecer el diálogo, con lo que se abre una tregua para modificar la norma. La directiva del concejo municipal, el comandante de la policía y la unidad de tránsito se reúnen con los representantes de ARAMCO para acordar la instalación de una mesa de trabajo con el objetivo de que se revise la ordenanza, que regula las tarifas y obliga a las empresas a contar con medidas de seguridad como la Tarjeta de Identificación del Conductor (TIC).

Glosario de siglas

ARAMCO	Asociación de Radiomóviles de Cochabamba
CEJIS	Centro de Estudios Jurídicos
COB	Central Obrera Boliviana
CTO	Cámara de Transporte del Oriente
CTPEA	Cámara del Transporte Pesado de El Alto
FDMULP	Federación Departamental de Maestros Urbanos de La Paz
FESIRMES	Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines
FSUTC-CHUQ	Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca
FTILP	Federación de Transporte Interprovincial de La Paz
MAS	Movimiento al Socialismo
OIT	Organización Internacional del Trabajo
TGN	Tesoro General de la Nación
VERDES	Verdad Democracia Social
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinadoras y encargadas del relevamiento y sistematización: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes: Los Tiempos, La Razón, ABI y El Deber.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Bolivia

Junio de 2011

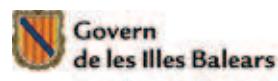
Editada en septiembre



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears
Conselleria d' Afers Socials;
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 933

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Bolivia***



Integrantes

Pilar Uriona Crespo
Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes

Los Tiempos, La Razón, Bolpress, ABI y El Deber

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Junio de 2011

Miércoles 1

En La Paz, cinco vecinos que viven en el barrio Cervecería inician una huelga de hambre para exigir al gobierno municipal, que amenaza con desalojarlos de sus casas, cumplir con el compromiso que asumió en meses pasados de proceder al trámite de expropiación, el cual supone pagarles el 100% del costo de sus viviendas, promesa hecha después de que ese barrio fuera afectado por el mega deslizamiento de abril pasado. Los vecinos señalan que son alrededor de 22 las viviendas afectadas, mientras que son 50 las familias que deberán ser desalojadas.

El gobierno y la comunidad de no-videntes de Bolivia firman un acuerdo que ratifica el 6,5% de incremento al bono anual que reciben más de 4 mil personas de este sector. De esta manera, los no-videntes suspenden las medidas de presión y movilizaciones que iniciaron en días pasados para solicitar dicho aumento.

Jueves 2

En Cochabamba, la Federación Carrasco Tropical, integrada por estudiantes y padres de familia, cocaleros, juntas escolares y el comité cívico de esa población, bloquea la carretera que vincula la ciudad con Santa Cruz para demandar la creación de la facultad de Agronomía Tropical, dependiente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Los dirigentes de la federación justifican su pedido señalando que de esa región egresan al menos mil bachilleres por año, los cuales no tienen posibilidades económicas para concurrir a la universidad de Cochabamba, por el alto costo de la vida urbana y los bajos ingresos. Por su parte, los padres de familia no quieren que sus hijos salgan de la provincia, por los riesgos de “perdición” en la capital y porque pretenden supervisar sus estudios.

Viernes 3

En La Paz, el gobierno municipal logra que miembros de la junta de vecinos del barrio IV Centenario y la Asociación de Transporte Libre (ATL) acepten una tregua de 15 días y suspendan la medida de presión iniciada en días pasados con el fin de pedir la expulsión de la ATL -a la cual exigen mejoras en servicio (más número de vehículos de los que proporciona y en todos los horarios)- y para demandar que se permita el ingreso de nuevas líneas de transporte público al sector a través de los Puentes Trillizos.

Los cocaleros y estudiantes de la Federación Carrasco Tropical que bloquean el kilómetro 232 de la nueva carretera Cochabamba-Santa Cruz levantan temporalmente sus medidas, pero se mantienen en vigilia esperando la respuesta de las autoridades universitarias sobre el pedido de creación de una facultad intercultural del trópico en el Valle de Sajta. Los cientos de vehículos y pasajeros que se encontraban parados desde el 2 de junio reinician su recorrido, mientras que los manifestantes mantienen reuniones permanentes en espera de avances en el diálogo entre la comisión y las autoridades universitarias. Al final del día, se logra acordar un compromiso mediante el cual se da vía libre a la construcción de una unidad académica interfacultativa de la UMSS, con aulas, albergues para estudiantes y docentes, además de otras dependencias en Carrasco.

Sábado 4

En La Paz, el viceministro de Telecomunicaciones, Wilber Flores, convoca a los trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) a reanudar el diálogo para suspender el paro de actividades y la huelga de hambre que los trabajadores de esta institución mantienen desde hace 18 días. Flores señala que la semana pasada se realizaron “varias rondas de negociación” junto a representantes de la Central Obrera de Bolivia (COB) e instituciones que se ocupan de los derechos humanos, pero denuncia que, después de encontrar una solución alternativa, “los trabajadores continuaron en huelga de hambre” y en su posición de exigir la renuncia del gerente de esa empresa, Hugo Choquehuanca, a quien acusan de haber cometido actos de corrupción en la realización de la auditoría de las gestiones del 2009 y 2010. Sin embargo, según la autoridad, dicha auditoría está aún por concluirse y recién, cuando se finalice la misma, es que podrán presentarse las denuncias, las cuales deben verificarse antes de realizar el cambio en el ejecutivo.

En Santa Cruz, en el municipio de La Guardia, se desata un conflicto edil entre la agrupación ciudadana Voces (a la que pertenece el alcalde de la zona) y los representantes municipales del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la directiva del concejo municipal. Luego de que el proceso de elección y posesión del órgano se ha retrasado por más de una semana, los representantes de Voces acusan a aquellos del MAS señalando que estos pretenden acaparar una de las alcaldías del país, donde, sin embargo, sus candidatos no consiguieron el triunfo en las elecciones del 2010. La Guardia tiene un presupuesto para 2011 de más de 50 millones Bs. y es uno de los municipios de mejor ejecución presupuestaria, con promedios anuales que superan el 80% de lo programado, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

En La Paz, continúa el bloqueo que realizan vecinos del barrio IV Centenario en los Puentes Trillizos para evitar el paso del transporte público masivo, pese a haber pactado en días pasados una tregua con la ATL comprometiéndose a suspender la medida de presión por 15 días. Los vecinos exigen una propuesta por escrito de mejora del servicio.

Lunes 6

En La Paz, luego de que se diera la intervención de agentes del ministerio público y de la policía, se restablece, tras casi tres semanas de parálisis, el servicio postal en ECOBOL. De acuerdo con el gerente de esa institución, la huelga de los trabajadores estaba perjudicando económicamente a los usuarios y atentando contra los mismos, razón por la cual decidió solicitar a las fuerzas públicas para que obligaran los trabajadores a levantar la medida. El restablecimiento de las labores se realiza vía el empleo de métodos violentos por parte de la policía, hecho que la COB denuncia, señalando que dos dirigentes y una trabajadora de base fueron arrestados.

En Santa Cruz, pobladores de La Guardia exigen a las autoridades políticas del municipio que se restablezca el clima pacífico por medio de una salida legal y de concertación al conflicto edil que enfrenta a la agrupación ciudadana Voces con el MAS al interior del concejo municipal. De acuerdo con ellos, la estabilidad de las gestiones municipales se ha visto afectada a partir de la entrada del MAS a la cancha política en esa alcaldía y denuncian que la polarización en el pueblo se agudiza por la ‘tozudez’ de los líderes políticos de ambos bandos.

En Cochabamba, se instala el primer piquete de huelga de hambre de los trabajadores de los Servicios de Aeropuerto Bolivia (SABSA), en demanda de un alza salarial proporcional al de los ejecutivos de la empresa. Si bien el servicio no se interrumpe, se anuncian medidas más radicales. El piquete, que se enmarca en la movilización nacional de los trabajadores, incluye a tres empleados del aeropuerto Jorge Wilstermann, los cuales se han sumado a la huelga de sus compañeros en el

aeropuerto de El Alto, los mismos que rompieron el diálogo con la empresa. Por su parte, el gerente general de SABSA, Anthony Alicastro, explica que la propuesta de la entidad es aplicar en los incrementos la fórmula inversamente proporcional.

Al menos 150 camiones pertenecientes a los transportistas de carga nacional e internacional bloquean la carretera Cochabamba-Oruro, a la altura del retén de Suticollo, como medida de presión para protestar porque la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos incluye a los remolques y semi-remolques como si fueran vehículos, por lo que deberán pagar impuestos y multas. Según los transportistas, los remolques y semi-remolques, conocidos como ‘chatas’ o ‘acoples’, “no tienen motor y no andan con combustible, por lo que no pueden ser tomados en cuenta como vehículos y menos indocumentados, porque hace 20 años que cuentan con el registro en la aduana”.

En Cochabamba, luego de que vecinos del municipio de Arbieto bloquearan la avenida Petrolera a la altura del kilómetro 10 y se enfrentasen a pedradas con pobladores del distrito 8 de Cercado por un problema de límites, las partes en conflicto aceptan la mediación de la gobernación departamental para sostener una reunión el próximo 9 de junio y hallar una vía de resolución. El conflicto tiene ya varios años, pero ha ido agravándose durante las últimas semanas por el anuncio de que se elaborará una nueva ley de régimen territorial, la cual debería promulgarse en los próximos meses, para determinar claramente los límites de cada municipio del país.

Martes 7

En San Salvador, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que sesiona en esa ciudad, Bolivia pide a Chile encontrar una solución a la centenaria demanda de una salida soberana al océano Pacífico, esto a través de un diálogo bilateral directo y sobre la base de una propuesta escrita, útil, concreta y factible. Luego de recordar los principales contenidos de los tratados bilaterales firmados por Bolivia y Chile a finales del siglo XIX, específicamente los de 1895 y 1896 en que Chile reconoció los derechos marítimos de Bolivia, el canciller de este país, David Choquehuanca, resalta los esfuerzos pacíficos seculares para recuperar la cualidad marítima. Asimismo, Choquehuanca señala que, desde el 1879, cuando Bolivia perdió a manos de Chile 400 kilómetros lineales de costas y 120 mil kilómetros cuadrados de territorios, tras una guerra territorial que implicó a Perú ¹, Chile patentó una política exterior sistemáticamente evasiva con respecto al reclamo marítimo boliviano. La 41^a asamblea de la OEA que se celebra en la capital salvadoreña trata de manera extensa el histórico contencioso boliviano-chileno, luego de abordar el primer punto de la agenda del organismo hemisférico, es decir, el reclamo de Argentina sobre su soberanía en las islas Malvinas.

En Santa Cruz, el conflicto político en La Guardia se agudiza con la detención del alcalde Jorge Morales en un operativo sorpresa de la policía que concluye con el traslado del mismo a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). Aunque sus opositores lo acusan de varios delitos y, sobre todo, de malversación de fondos, el arresto responde a la denuncia realizada por concejales del MAS, quienes señalaron que Morales tenía previsto fugarse a Miami, aprovechando una invitación oficial para visitar Estados Unidos y así no encarar las acusaciones de corrupción hechas en su contra por algunos miembros del concejo municipal. En respuesta, los seguidores del alcalde deciden realizar bloqueos en varios puntos de la vía pública.

En La Paz, después de más de una semana, seis de las 24 líneas de transporte público autorizadas por la alcaldía comienzan a transitar por los Puentes Trillizos. Sin embargo, afiliados a la ATL no permiten aún que las que vienen de El Alto lleguen a sus paradas en Alto Obrajes. Según la ATL, los sindicatos de El Alto se han agarrado zonas enteras en Villa Fátima, Kupini y Alto Sopocachi, y

ahora pretenderían extender sus servicios hasta Alto Obrajes, quitándoles, con ello, sus fuentes de trabajo.

Miércoles 8

En La Paz, los trabajadores de ECOBOL deciden trasladar su huelga de hambre a instalaciones de la COB, instancia que se ha solidarizado con ellos por considerar que los mismos se vieron obligados a asumir una huelga de hambre en protesta contra la corrupción y la serie de actos violentos en contra de los trabajadores realizados por el gerente general Hugo Choquehuanca. A juicio de la dirigencia de la COB, la detención de tres personas y la intervención violenta para disipar esta medida de protesta no sólo son un atropello al derecho a la huelga, sino que atentan contra el fuero sindical.

En La Guardia, Santa Cruz, el alcalde Jorge Morales es liberado luego de haber permanecido más de 30 horas detenido en la FELCC, acusado por los concejales del MAS de intentar escapar a Estados Unidos. Luego de una audiencia que se extendió por más de dos horas y media, el juez Zenón Rodríguez dispone la libertad del burgomaestre a cambio de la presentación periódica ante las autoridades competentes, el arraigo, la prohibición de hacer actos que ejerzan influencia sobre los funcionarios subalternos de la Alcaldía y el pago de una fianza de 35 mil Bs. Los abogados de Morales tienen un plazo de siete días para cumplir con los procedimientos. Con la liberación del alcalde se levantan las medidas de presión que incluían el bloqueo de la carretera Santa Cruz de la Sierra-La Guardia- Camiri.

En Portachuelo, Santa Cruz, alrededor de 850 estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) toman las instalaciones de esta entidad y bloquean durante tres horas la carretera Santa Cruz-Cochabamba, con la finalidad de hacer escuchar sus demandas ante las autoridades, entre las cuales la destitución del director general de formación docente del Ministerio de Educación, Rubén Darío Ustárez, una petición apoyada por las 29 normales que funcionan en el país. Piden también piden un reglamento interno para que los estudiantes del sistema anualizado estén respaldados por el Ministerio de Educación.

El puente internacional de Desaguadero que conecta Perú y Bolivia se encuentra fuertemente resguardado por efectivos de la policía peruana para evitar un nuevo bloqueo por parte de los pobladores de la región de Puno. Mientras tanto, en el distrito de Desaguadero y Zepita, varios pobladores se reúnen en las plazas, donde discuten las estrategias de protesta, decidir si continuar analizando si bloquear o no las vías, como también si emprender una marcha hacia la ciudad de Puno. Se conoce que alrededor de 500 efectivos policiales se han trasladado a varios distritos para resguardar la seguridad de la población. Hace una semana, pobladores aymaras de la región habían concedido una tregua luego de bloquear más de 20 días el puente, en rechazo, en principio, a la empresa minera canadiense Bear Creek, con el argumento de que sus trabajos de explotación contaminarán toda la zona; los reclamos se extendieron luego a toda la actividad minera y petrolera en esa región.

En La Paz, vecinos del distrito 14 realizan un bloqueo en las carreteras que van a Desaguadero y Copacabana para exigir a la alcaldía de la zona la dotación de maquinaria pesada, volquetas y topadoras, comprometidas en su Plan Operativo Anual (POA) y que debían usarse para mejorar caminos y realizar obras de infraestructura.

Jueves 9

Los vecinos del distrito 14 logran su principal demanda, es decir, la dotación de maquinaria municipal, y levantan el bloqueo de caminos iniciado el miércoles 8. La solución llega luego de que vecinos de los distritos 5 y 7 se habían sumado a la medida de presión, y luego de que el alcalde accediera a firmar el convenio que declara un cuarto intermedio en la protesta.

En la carretera binacional entre Bolivia y Perú y que vincula las poblaciones de Puno y Desaguadero se reinstala el bloqueo de caminos que deja paralizados a decenas de vehículos de carga con productos de exportación e importación. Quienes impulsan la medida (pobladores de comunidades aymaras de Puno) exigen al gobierno peruano que suspenda una concesión minera por considerar que provocará serios daños ecológicos a la región. El bloqueo deja varados a centenas de camiones de carga bolivianos, imposibilitados de traspasar la frontera en ambos lados.

Viernes 10

El paso fronterizo entre Perú y Bolivia, en el distrito de Desaguadero, permanece cerrado al tránsito vehicular por tercer día consecutivo, a raíz de la reanudación de la protesta que pide suspender las concesiones mineras en Puno. Un número indeterminado de manifestantes se moviliza en las regiones de Desaguadero, provincia de Chucuito, y de Macusani, provincia de Carabaya, y coloca piedras y montículos de tierra en las vías para impedir el tránsito. El paro indefinido en varios distritos de la provincia de Chucuito fue reanudado el miércoles, tras una pausa por la segunda vuelta electoral en Perú.

En El Alto, se da un enfrentamiento entre choferes de la zona sur de La Paz y del sindicato 18 de Mayo por las rutas que van a Alto Obrajes. El saldo del mismo son siete heridos y 23 minibuses y ‘carry’s’ con parabrisas y vidrios destrozados. Los choferes paceños se oponen a que los de El Alto circulen por los Puentes Trillizos porque creen que les quitarán su fuente de trabajo, pese a la opinión vecinal de que el paso de nuevas líneas de transporte sería beneficioso y a que existe un acuerdo entre la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros (CUTUP) y la alcaldía, el cual permite el ingreso de ocho líneas de transporte de El Alto por los puentes.

Lunes 13

En Santa Cruz, en predios de la normal Enrique Finot, 30 alumnos de dicha institución y de las unidades académicas de San Julián y Vallegrande, además de la normal de Portachuelo, inician un ayuno voluntario para presionar a las autoridades del Ministerio de Educación y exigir la aprobación de una malla curricular para los anualizados, la licenciatura para los semestralizados, que se defina el área de trabajo para el tercer ciclo del sistema semestral y la revisión del nuevo reglamento estudiantil, aprobado hace algunas semanas por el Ministerio de Educación, sin participación y consenso de los estudiantes, los cuales rechazan el instrumento y plantean elaborar otro de manera consensuada. Consultado al respecto, el viceministro de Educación Superior de Formación Profesional, Armando Terrazas, manifiesta que con la dirigencia nacional de los normalistas ya se ha acordado trabajar en la elaboración de la malla curricular y la revisión del reglamento en cuestión, por lo que, según su criterio, las medidas son injustificadas.

La Confederación de Choferes de Bolivia efectúa un paro nacional con marchas y bloqueos en protesta por la aprobación de la ley que legaliza los vehículos ‘chutos’ (indocumentados) en el país. La medida de los choferes, prevista para 24 horas, es una forma de rechazar la ley vigente desde la anterior semana y que permite legalizar miles de vehículos ingresados de contrabando al país. El

Ministerio de Economía y Finanzas había previsto registrar unos 10 mil vehículos en 15 días, pero, sólo en los primeros tres de vigencia de la medida, 31.092 automóviles fueron inscritos. De esa cifra, más de 4.300 solicitudes han sido rechazadas por irregularidades en el registro. Los choferes han dicho que temen que el servicio público colapse y que surjan problemas de abastecimiento de combustible, cuyo precio es subvencionado por el Estado. Desde el gobierno se explica que, de todas maneras, los motorizados ‘chutos’ consumen ya el combustible, pues circulan con placas falsas o en áreas rurales.

Martes 14

Las medidas de protesta iniciadas por un sector de los estudiantes de las escuelas superiores de educación de maestros del país se radicalizan con bloqueos. En Santa Cruz, la medida se realiza en la población de Portachuelo y, según explican los dirigentes estudiantiles, el corte de carreteras se dará también en La Paz, Cochabamba, Pando, Tarija, Oruro y Riberalta. Además de los cortes de rutas, continúa también la huelga de hambre que, en todo el país, congrega a unos 150 ayunadores. Con la aprobación de la Ley Educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez, las normales se convirtieron en escuelas superiores de educación de maestros. Según esta norma, los estudiantes saldrán con título de licenciatura. En el camino quedaron los alumnos que se preparaban para ser técnicos, los cuales piden acogerse a la licenciatura. Casi al concluir el día, el Ministerio de Educación y los dirigentes de los estudiantes de las normales firman un preacuerdo e inician el diálogo para analizar demandas relacionadas con el currículo y reglamento estudiantil. Con este paso se suspende el bloqueo de carretera que se había iniciado en Portachuelo y se levantan los piquetes de huelga instalados en diferentes partes del país.

En Santa Cruz, el comité de vigilancia de La Guardia, presidido por Carlos Ruiz Pedraza, decide bloquear la doble vía que conecta con los valles cruceños, desde primeras horas de la mañana, para exigir la renuncia del concejal Mario Subirana, disidente de la agrupación Voces, que preside el organismo deliberante con apoyo del MAS. Ante esta situación, Subirana indica que no renunciará a su curul; por el contrario, anuncia que demandará ante las instancias correspondientes al comité de vigilancia por impedir que se lleve a cabo la fiscalización del alcalde Jorge Morales.

En La Paz, la mina Sayaquira, en la provincia Inquisivi, es avasallada violentamente por aproximadamente tres centenares de campesinos que intentan tomar posesión ilegal de la misma para explotarla y arrebatar esta propiedad a la empresa Barrosquira, que tiene los derechos legales de posesión sobre la misma. En el transcurso del día, una docena de policías intenta desalojarlos, siendo atacados por los comunarios con la utilización de cartuchos de dinamita, palos, piedras y otros objetos contundentes.

Miércoles 15

En La Paz, la mina Sayaquira es retomada pacíficamente por cien policías y una comisión gubernamental para frenar los actos de vandalismo denunciados por los mineros. La comisión se designó desde el gobierno central y es conformada por representantes de los ministerios de Minería, Trabajo y Gobierno; dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB); ejecutivos de la empresa Killman, que es administradora de la mina; además de las autoridades originarias. Asimismo, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, ratifica que el gobierno respeta y respetará la propiedad privada y pide que se inicie una investigación minuciosa en el caso de la toma violenta de la mina para identificar a los responsables de ese hecho ilegal. Al final de la jornada se logra firmar un acta de pacificación, lo cual establece que las partes involucradas se reunirán en la ciudad de La Paz para concretar un acuerdo. Entretanto, un

contingente policial permanece en el centro minero de Sayaquira con el fin de garantizar la paz y el normal desarrollo de las actividades mineras.

En la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz, estudiantes de las normales inician una serie de bloqueos esporádicos para manifestar su rechazo al reglamento de faltas y sanciones del sistema anualizado que firmó el Ministerio de Educación con un grupo de la confederación de estudiantes y al que el gobierno reconoce como representante de los normalistas. En el reglamento no se incluye el pedido de que la institucionalización de directivos se realice a fin de año, la admisión de una malla curricular estable para el sistema anualizado y semestralizado y una resolución que establezca que los normalistas pueden optar por la licenciatura, dado que sólo con el nivel técnico no tienen oportunidad de ejercer la profesión.

Jueves 16

Alrededor de 2.500 chóferes, nucleados en 40 sindicatos del transporte de pasajeros al norte de La Paz, marchan hasta las puertas de la alcaldía para exigir la construcción de una terminal de autobuses en el barrio de Villa Fátima y demandando que se cumpla un convenio suscrito en el 2009 con ese objetivo. El proyecto establece la edificación de una terminal internacional, interdepartamental e interprovincial.

En el sector de Salar de Coipasa, a unos 270 kilómetros al noreste de Iquique (norte chileno), carabineros de Chile detienen a 14 militares bolivianos (algunos de los cuales iban armados) por ingreso ilegal al país, dejándolos a disposición del ministerio público de Pozo Almonte y la fiscalía militar.

En la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz se registra un enfrentamiento entre la policía y los estudiantes de las normales que bloquean la misma desde miércoles 15, quedando al menos 25 personas heridas con contusiones y por el uso de agentes químicos empleados en el operativo para despejar la vía.

Viernes 17

En La Paz, la ATL determina acatar el paro indefinido en demanda de la anulación del Decreto 890, que proyecta sacar de circulación -desde el 2018- los vehículos de transporte público con una antigüedad mayor a 12 años. La decisión es tomada en un ampliado departamental de emergencia realizado en esa ciudad. Las 24 asociaciones afiliadas a ese sector deciden iniciar un bloqueo de sus rutas desde las primeras horas del próximo lunes 20, cuando se sumarán a la marcha convocada por la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia.

En Santa Cruz, la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (FESIRMES) determina ingresar en un paro médico de 24 horas debido a la falta de pago de los profesionales, cuyos salarios corren por cuenta de la gobernación cruceña (ex prefectura). Hasta ahora, los médicos que tienen ítems prefectoral y municipal no lo han recibido, motivo por el que se ha determinado ingresar al paro de labores.

Alrededor de mil estudiantes de las normales de Cochabamba toman el centro de la ciudad en una marcha de protesta en repudio a las represiones que sufrieron el jueves 16 un grupo de manifestantes en la zona de Huayllani, hecho que dejó como saldo más de 30 heridos y una decena de arrestados.

Sábado 18

El presidente Evo Morales convoca a una reunión a los dirigentes del servicio de transporte público boliviano para iniciar el diálogo, cuyo objetivo es alcanzar una solución al conflicto que desató el Decreto Supremo 890, el cual proyecta el relevo, desde el 2018, de motorizados con una antigüedad mayor a 12 años. La convocatoria es anunciada después de que los transportistas decretaran un paro general indefinido a partir del lunes 20 en rechazo a la medida legal. Según la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, la aplicación de ese decreto significaría, en los hechos, la cancelación del 95% de las fuentes de trabajo de sus afiliados y, por ello, “es preferible parar unos 15 o 20 días, o un mes, a parar toda la vida”.

Domingo 19

Los sindicatos del autotransporte público deciden suspender el paro general indefinido que pretendían iniciar el lunes 20, esto una vez haber logrado un acuerdo con el gobierno, luego de una reunión de casi cinco horas con el presidente Evo Morales, quien promulga un decreto (el 915) con modificaciones sustanciales al 890, que diera origen al conflicto. El acuerdo incluye la derogación de la imposición para sustituir los vehículos con antigüedades mayores a los 12 años y conviene someterlos a permanentes revisiones técnicas en resguardo de la seguridad de los usuarios y los propios conductores.

Lunes 20

En Chile, concluye la audiencia judicial que se celebra para definir si liberar o no a los 14 militares bolivianos que atravesaron la frontera en días pasados. Los mismos son puestos en libertad y trasladados a la ciudad de Oruro, donde se incorporan a su respectivo regimiento. Sin embargo, las cinco armas que les fueron confiscadas—dos pistolas marca Norinko, calibre 9 milímetros, otra pistola calibre 9 milímetros y dos fusiles Galil de 5,56 milímetros—quedan en poder de las autoridades chilenas. La devolución de esas armas será demandada por Bolivia vía diplomática, a través de la Cancillería.

Al declarar un receso académico obligatorio en las normales de Cochabamba y Tarija, el gobierno logra desmovilizar a los normalistas del valle, quienes ahora determinan acatar el cronograma emitido por el Ministerio de Educación para presentar observaciones y propuestas a la malla curricular de base. Después de dos semanas de bloqueos y marchas de protesta por parte de los estudiantes de tres normales de Cochabamba, los mismos no lograron conseguir sus objetivos y ahora apuntan a diseñar, conjuntamente con el gobierno, una malla curricular acorde a la realidad local y nacional. Los normalistas del país tienen hasta el 28 de junio para presentar las observaciones a la malla propuesta por el gobierno, fecha en que las discusiones para la elaboración del plan de estudios se realizarán en la sede de gobierno con los directores de las 45 normales del país.

Miércoles 22

En Santa Cruz, pobladores de 10 barrios de la zona de Valle Sánchez bloquean por un par de horas la carretera que conduce a las provincias del norte y a Cochabamba, hasta que la policía interviene y los dispersa con gases. El motivo de la protesta es que los vecinos exigen la renuncia del alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, a quien acusan de incumplir las promesas de ejecutar obras en los barrios. En respuesta, el alcalde Cronenbold califica de “político” el movimiento vecinal porque,

según él, está organizado por ex-autoridades que han sido afectadas por su administración. Paralelamente, se registran enfrentamientos con piedras y palos entre los bloqueadores y los transportistas que transitan por esa carretera; la intervención policial evita que el conflicto degenera en actos de mayor violencia.

En Atocha, Potosí, mineros cooperativistas de las poblaciones de Áimas, Chorolque y Tapasi ocupan los predios de la Caja Nacional de Salud (CNS). Los cooperativistas toman como rehenes a 11 funcionarios y exigen la presencia de la ministra de Salud, Nila Heredia, para solicitarle la dotación de ambulancias, el aumento de medicamentos y más ítems para los médicos. Se inicia asimismo un bloqueo de caminos en la carretera Uyuni-Oruro y Tupiza-Cotagaita.

Viernes 24

En la ciudad de Santa Cruz, en el barrio Santa María del Plan 3.000, se dan nuevos enfrentamientos a causa de la ocupación de terrenos, a raíz de que alrededor de 180 familias tumbaran algunas chozas de los asentados, a quienes acusan de ser loteadores. Según los afectados, los terrenos fueron adquiridos por ellos mismos aproximadamente hace un año, y aducen que incluso se consiguió que se les instalaran los servicios de agua y energía eléctrica, pero que hace algunos meses apareció un grupo de personas que se dedicó a vender discrecionalmente los predios, sin respetar el derecho propietario.

En Santa Cruz, en la carretera al norte, alrededor de mil vecinos de la urbanización Buena Fe, colindante con el club de golf Mapaizo, se enfrentan a unas 250 personas que habrían roto la malla perimetral para asentarse en el lugar. Las personas asentadas, al verse acorraladas, intentan tomar las oficinas del club.

Se agrava el conflicto suscitado entre Bolivia y Chile por el ingreso de 14 militares bolivianos a territorio del país vecino, considerado ilegal por parte de sus autoridades, así como por los posteriores reclamos de malos tratos a los primeros por parte del gobierno boliviano. Por un lado, algunas autoridades chilenas habrían felicitado al grupo de policías que podría haber cometido actos de abuso contra los soldados bolivianos. Por otro, el presidente Evo Morales, a menos de 24 horas de que el subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, felicitara a los carabineros que detuvieron a los militares en Colchane, impuso la condecoración Eduardo Abaroa al grupo de jóvenes soldados del ejército, seguida de ascenso de grado a siete de ellos y entrega de memorandos de felicitación. A partir de estos hechos se dio una serie de acusaciones mutuas entre las autoridades de ambos países.

Domingo 26

En la ciudad de La Paz, en un acto realizado en el coliseo Julio Borelli, el presidente Evo Morales promulga la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria. El acto cuenta con la presencia central de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y autoridades del ejecutivo y legislativo. El presidente señala que esta ley constituye un hecho histórico que permitirá a los pueblos indígenas y campesinos contar con las condiciones legales para que el Estado genere inversión productivas. Por su parte, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), que se opone a la incorporación del uso de transgénicos en la ley, denuncia que el gobierno emitió memorandos que obligaron a los funcionarios públicos a asistir al acto; el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, desmiente esta versión.

El gobierno peruano accede a anular por irregularidades una concesión minera a una empresa canadiense, establece una moratoria de concesiones y condiciona las operaciones extractivas a consultas con las comunidades, además de dictar un decreto que declara prioritaria la descontaminación del río Ramis por sustancias tóxicas usadas por la minería informal. En una asamblea masiva de indígenas en la localidad de Desaguadero-Perú, se decide levantar las medidas de presión, con lo que se normaliza el tránsito entre Perú y Bolivia.

Lunes 27

En el departamento de La Paz, dos ayllus de la tercera sección municipal, Yaco, y la cuarta sección municipal, Malla, de la provincia Loayza, se enfrentan con dinamitas y piedras por la posesión de la mina Chojñacota, en Cerro verde, que se encuentra a los pies del nevado Illimani. Los enfrentamientos terminan con el saldo de un muerto, además de varios heridos. Según dirigentes de la cuarta sección, el motivo de la pelea sería porque su sector consiguió, en el marco de la legalidad, arrendar la mina y se disponía a trabajar con todos los contratos pertinentes organizándose como cooperativa minera. Del otro lado, se señala que la mina está ubicada en la jurisdicción de la tercera sección, por lo que ya la estarían explotando los originarios del ayllu Yaco, se advierte que no permitirán que personas de otros lados ingresen a sus territorios originarios y se subraya que los cooperativistas que pertenecen a la cuarta sección deberían luchar por las minas que están en sus territorios. La policía inicia investigaciones sobre el enfrentamiento y la muerte de éste derivada.

Martes 28

El gobierno nacional envía un contingente de policías a la región limítrofe de los ayllus de Malla y Yaco, en el departamento de La Paz, para pacificar el conflicto entre comunarios por la tenencia de la mina abandonada de Chajñacota, el cual, hasta ahora, ha cobrado un muerto. El ministro de Minería, Metalurgia y Minería, José Pimentel, explica que se espera el informe correspondiente para que su ministerio, junto al de Autonomías, ingresen a esa zona para buscar una solución definitiva y evitar más enfrentamientos. Por su parte, la FSTMB expresa su preocupación por los avasallamientos de comunarios a minas que se encuentran operando.

En el departamento de Santa cruz, un grupo de personas realiza un bloqueo en la carretera que conecta a La Guardia con los valles y Cordillera, exigiendo la renuncia del presidente del concejo municipal, Mario Subirana, y que se dejen sin efecto las citaciones en contra de los dirigentes que participaron en la revuelta de hace dos semanas, cuando impidieron la instalación de la directiva del órgano deliberante. El bloqueo dura más de 13 horas, hasta que la policía despeja la vía y arresta al delegado del comité de vigilancia de la cooperativa El Carmen, como uno de los principales dirigentes de la movilización.

Glosario de siglas

ATL	Asociación de Transporte Libre
CNS	Caja Nacional de Salud
COB	Central Obrera Boliviana
CONAMAQ	Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
CUTUP	Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros

ECOBOL	Empresa de Correos de Bolivia
FELCC	Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
FESIRMES	Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines
FSTMB	Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
ISFD	Instituto Superior de Formación Docente
MAS	Movimiento Al Socialismo
OEA	Organización de Estados Americanos
SABSA	Servicios de Aeropuerto de Bolivia Sociedad Anónima
UMSS	Universidad Mayor de San Simón

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinadoras: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, Bolpress, ABI y El Deber.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Bolivia

Julio de 2011

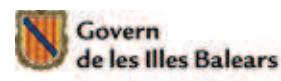
Editada en septiembre



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears
Conselleria d'Afers Socials;
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 952

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Bolivia***



Integrantes

Pilar Uriona Crespo

Dunia Mokrani Chávez

Fuentes

Los Tiempos, La Razón, Bolpress, ABI y El Deber

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Julio de 2011

Lunes 4

En Cochabamba, en el barrio Colinas de Andalucía, un grupo de loteadores toma esa zona, ubicada en el cerro San Pedro, y, argumentando la ilegalidad del desalojo realizado hace tres meses de aproximadamente 120 familias, procede a efectuar un nuevo asentamiento. Los vecinos del lugar y los que defienden con papeles su derecho propietario desde hace más de tres años alertan a la policía sobre la nueva ocupación. Por su parte, el subcomandante departamental de la policía, coronel Erwin Montaño, no procede al desalojo por no contar con la orden fiscal, necesaria en este caso, y pide tiempo para revisar la documentación que llevó a la policía al realizar el desalojo anterior, mientras que decide mantener una vigilia en el lugar para evitar posibles enfrentamientos.

En Santa Cruz, miembros de la asociación de propietarios profesionales de farmacias protagonizan una protesta en las afueras de la gobernación contra las cadenas que comercializan medicamentos en Santa Cruz, exigiendo ser atendidos por el gobernador y por los asambleístas, sin obtener resultados. La asociación, que aglutina a más de 1.500 negocios, afirma que los mismos están siendo marginados por monopolios farmacéuticos abiertos en Santa Cruz y que han copado el centro de la ciudad y las zonas periféricas, como el Plan Tres Mil y la Villa Primero de Mayo, perjudicando las ventas y el trabajo de quienes no integran dichas cadenas. En respuesta, el secretario de salud de la gobernación, Óscar Urenda, señala que no es su atribución suspender nuevas sucursales del comercio farmacéutico, por lo que pide al sector que acuda al parlamento para modificar la ley.

Jueves 7

En Santa Cruz, cívicos y transportistas de Puerto Suárez realizan un bloqueo de 24 horas exigiendo que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) los tome en cuenta en la nacionalización de los automotores indocumentados, cuyos dueños buscan obtener beneficios de la ley de saneamiento legal. El transporte organizado de Puerto Suárez y Puerto Quijarro cierra la frontera con Brasil en apoyo a las gestiones de los dirigentes cívicos, argumentando que en la capital de la provincia Germán Busch existen las oficinas requeridas para dicho proceso, como las dependencias de la Aduana Nacional, la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) y distintas agencias financieras.

En Cochabamba, ante la pasividad de la policía departamental, la cual ha ratificado que no intervendrá en el conflicto entre los dueños de Lomas de Andalucía y grupos de asentados que reclaman derecho propietario, los vecinos de la zona deciden proceder al desalojo por cuenta propia. La decisión se toma luego de una reunión para determinar las acciones a seguir, ante la indiferencia de las autoridades de la Alcaldía de Sacaba y la fuerza pública. Los asentados, entre tanto, aseguran que permanecerán en el área y defenderán su posesión. Por su parte, los propietarios que presentaron papeles y que ahora cuentan con el permiso de la Alcaldía de Sacaba para amurallar la zona, denuncian que, en días pasados, fueron agredidos con piedras por los asentados. Pese a que ya existía una orden de desalojo y demolición de viviendas precarias, ejecutada en abril del 2011, la misma ya no tiene validez. Por lo tanto, si se presentara nuevamente una ocupación ilegal se debería proceder a denunciar, investigar y tramitar una nueva orden fiscal, siempre en caso de comprobarse la supuesta ilegalidad. Para los vecinos de Andalucía, reiniciar el proceso demanda una serie de

trámites y, con el transcurso del tiempo, temen que los loteadores puedan llegar a legalizar los asentamientos.

Viernes 8

En La Paz, choferes de la asociación de transporte interprovincial del departamento se enfrentan a los choferes urbanos de El Alto para que los últimos no extiendan sus líneas hacia un territorio que los primeros consideran suyo. La confrontación se produce cerca del mediodía, cuando los interprovinciales despejan a pedradas y dinamitazos un bloqueo de la carretera a Copacabana, a la altura de la tranca de Corapata, bloqueo protagonizado por los sindicalizados urbanos. Los minibuseros de la ciudad de El Alto habían cerrado la carretera en protesta porque los rurales no les permiten extender sus líneas. El resultado del enfrentamiento es un chofer interprovincial herido en la cabeza con una pedrada.

Lunes 11

En La Paz, los afiliados a la federación de personas con discapacidad realizan una marcha por las calles principales para reclamar atención a sus demandas y una audiencia con el Ministro de la Presidencia que van requeriendo desde el mes de abril para que se efectúe de una vez el desembolso de un fondo de 40 millones destinado para el sector.

En Santa Cruz, luego de realizar un cabildo, unas 150 personas —entre campesinos, indígenas de la central de comunidades del municipio de San Miguel de Velasco y funcionarios del gobierno municipal— toman las oficinas de la Cooperativa de Agua Potable de San Miguel de Velasco (COOSESMI), para protestar porque no se estaría suministrando agua en condiciones aptas para el consumo, por no estar la misma tratada y porque la planta ubicada a orillas de la represa La Suiza no funciona. El informe policial en San Ignacio revela que no hubo enfrentamientos y que la toma fue pacífica por decisión de los socios y el pueblo.

En La Paz, a la altura de Ventilla, por la tranca de Senkata, los vecinos del distrito 8 de El Alto realizan un bloqueo de caminos para exigir la instalación de alcantarillado en la zona. La medida de protesta, que involucra a vecinos de las 185 zonas del distrito, provoca caos y desabastecimiento de combustible en El Alto y en la ciudad de La Paz. En horas de la noche, inicia una negociación con los ministros de Hidrocarburos y Obras Públicas, José Luis Gutiérrez y Wálter Delgadillo, respectivamente, pero los vecinos exigen la presencia de los responsables de las carteras de Gobierno, Educación y Aguas, además del presidente Evo Morales Ayma.

Martes 12

El gobierno nacional, la alcaldía de El Alto y los representantes del distrito 8 de esa urbe firman un acuerdo que pone fin al bloqueo de vías alrededor de las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata y que atenderá en 70 días las demandas de construcción de la primera fase del sistema de alcantarillado sanitario y la conexión a la planta de tratamiento de aguas residuales de Puchokollo. Ese acuerdo abre paso para que un centenar de carros cisterna que permanecían varados desde el lunes pasado en la planta de YPFB comiencen a suministrar combustible a La Paz y a El Alto. El bloqueo había interrumpido el tránsito por la carretera La Paz-Oruro, el mismo que se restablece después del acuerdo. El paquete de obras demandadas incluía, además, la dotación de avenidas, centros educativos, puestos policiales y de salud, las cuales, en su mayoría, serán viabilizadas a corto plazo.

Miércoles 13

En La Paz, el centro minero Sayaquira, ubicado en el municipio Ichoca, es avasallado por un grupo de campesinos y comunarios de la zona que quieren apropiarse de los yacimientos. Dicho grupo se enfrenta con los mineros que trabajan en Sayaquira y, como producto de ello, se registra un muerto. Al parecer, detrás de la toma efectuada se encuentra el sector de los cooperativistas mineros, los cuales pretenden apropiarse de las tomas de los minerales que, en este momento, se comercializan a muy alto precio, como es el caso del estaño.

Jueves 14

En La Paz, la policía retoma el control de la mina Sayaquira avasallada el día 13 por los comunarios. A fin de proteger la propiedad privada, el contingente policial interviene pacíficamente para retomar el control de la mina, ocupada por campesinos de la comunidad de Ichoca, en la provincia Inquisivi de La Paz. La policía adopta como primera medida la decisión de reforzar la seguridad de esa región con 100 efectivos, que se suman a los 40 que ya permanecían en la mina luego de otros intentos de avasallamiento.

En Santa Cruz, trabajadores del centro de salud de Pailón cumplen un paro de brazos caídos por la falta de insumos y por el mal estado de los equipos del centro. Después de realizar una reunión, enfermeras, médicos y administrativos deciden plegarse a la medida de presión. Según el personal, no existen condiciones para trabajar ya que hay desabastecimiento en la farmacia, faltan reactivos para los exámenes de laboratorio, el microscopio está descompuesto y tampoco se cuenta con equipamiento ni medicamentos necesarios en el servicio de emergencia, pues los termómetros y tensiómetros están en mal estado desde hace tres meses. Por su parte, el administrador, Juan Carlos Meneses, admite problemas con los insumos y el retraso en la licitación necesaria para la compra de medicamentos.

Viernes 15

En Santa Cruz, son incendiadas las instalaciones de la COOSESMI, mientras que dirigentes vecinales señalan como autores a los miembros del comité cívico y de la unión juvenil local. Al momento de los actos de violencia, en el interior de la cooperativa se encontraban dirigentes y pobladores de los diez barrios de la zona urbana y rural miguelena, quienes fueron agredidos por los unionistas. El presidente de la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCISM), Nilson López, califica las acciones como actos vandálicos planificados por la oposición política. Horas más tarde, llegan efectivos del regimiento Warnes X para resguardar el orden hasta que lleguen las autoridades nacionales. El conflicto comenzó a gestarse el 15 de junio pasado, cuando la población urbana de San Miguel quedó sin el servicio de agua, lo que originó un cabildo y la toma de COOSESMI, el 10 de julio, por parte de las organizaciones sociales del lugar. Hace tiempo que se denunció que la población de San Miguel consume agua contaminada.

Martes 19

En Oruro, estudiantes de la facultad agroindustrial de la Universidad Técnica (UTO) bloquean la carretera Oruro-La Paz, a la altura de la localidad de Caracollo, demandando a sus autoridades la anulación de la resolución que creó una carrera paralela en la ciudad. El bloqueo se extiende hasta el mediodía, cuando un representante de la UTO se traslada a la ciudad para participar al diálogo. Asimismo, un contingente de efectivos policiales llega hasta el lugar al fin de posibilitar el libre

tránsito en la vía. El director de extensión universitaria, Tito Aguilar, en representación de la UTO, explica que “se tuvo una reunión con el concejo municipal de Caracollo y autoridades sindicales donde se estableció un diálogo y se acordó una reunión este jueves con la primera autoridad de UTO”, agregando que la protesta de los estudiantes se debe a la falta de comunicación e información entre ellos.

Miércoles 20

En La Paz, el gobierno nacional rechaza los pronunciamientos políticos “extra Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécur (TIPNIS)”, que tendrían por finalidad paralizar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y ratifica que hará prevalecer la opinión y los intereses de los indígenas que viven en esa región de Bolivia. El gobierno busca consensuar una reunión con los indígenas, para tratar el diseño y la construcción del tramo II de esa carretera, que atravesará el TIPNIS para unir los departamentos de Cochabamba y Beni, señalando que el mismo se realizará en el lugar que ellos elijan. Por su parte, la ministra de Medio Ambiente y Agua, Mabel Monje, asegura estar al tanto de las preocupaciones de los comunarios del TIPNIS, pero insiste en instaurar una reunión permanente con los representantes del sector para “blindar” ese hábitat. Las comunidades y sus representantes temen el avasallamiento de tierras y el saqueo de recursos naturales como consecuencia de la construcción de esa carretera, mientras que anuncian una marcha desde la Amazonía hasta la ciudad de La Paz, el 2 de agosto próximo, con el objetivo de evitar que la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos pase por su territorio.

Trabajadores del hospital Cochabamba inician un paro de 48 horas exigiendo a la alcaldía de Cercado cumplir con el compromiso asumido de entregar medicamentos para que la entidad funcione con normalidad por al menos un mes y medio. La entrega debió haberse realizado el pasado 12 de julio, pero, como no llegó a cumplirse, los empleados decidieron realizar el paro, además de un bloqueo junto al hospital, en las avenidas Aroma y Nataniel Aguirre, provocando así un grave congestionamiento vehicular, por la gran afluencia de gente a la zona. Según las enfermeras, durante los últimos días, los pacientes tuvieron que financiar sus medicamentos, pues, a pesar de que el municipio se comprometió a solucionar el problema de abastecimiento, sólo les entregó fármacos para dos días. Casi al finalizar la jornada, los trabajadores suspenden el paro al lograrse un compromiso con la Dirección de Administración de Salud (DIASA) del municipio, mediante el cual se proveerá al hospital de uno stock de material por el valor de 18 millones de bolivianos hasta el 18 de agosto próximo. Asimismo, hasta el 14 de agosto, las necesidades primarias del hospital serán atendidas mediante compras de emergencia.

En Oruro, Tarija, Potosí y Cochabamba trabajadores administrativos del sistema de universidades públicas cumplen un paro de 48 horas y advierten con radicalizar las medidas de presión. De acuerdo con un reporte de la *Red Erbol*, los administrativos de los cuatro departamentos demandan el cumplimiento de un incremento salarial del 11% acordado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) en abril. La medida de protesta fue asumida en un ampliado nacional de trabajadores administrativos del sistema universitario realizado en Tarija en días pasados. Los trabajadores advierten que, de no tener una respuesta favorable a sus demandas, paralizarán sus actividades por otras 72 horas.

Viernes 22

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) decide realizar un ampliado nacional para declarar el estado de emergencia en el sector por los reiterados avasallamientos vividos en el país y determina organizar marchas de protesta en contra de los mismos en los

departamentos de Oruro y Potosí, en las que participará todo el sector minero asalariado, estatal y privado, así como un cabildo contra la delincuencia en las zonas de producción minera, donde, con el pretexto de avasallamiento, se cometan actos delictivos a título de comunarios y originarios.

En La Paz, pobladores de la zona de Calamarca instalan un bloqueo de caminos para protestar contra la detención del alcalde Yessid Luin Mamani, quien se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro acusado de narcotráfico. La medida de presión deriva en la suspensión de las salidas de los buses desde la terminal paceña hacia el interior del país, mientras que la policía intenta intervenir el bloqueo lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los campesinos. Horas más tarde, el bloqueo es levantado, lo que permite restablecer las salidas de los medios de transporte. El alcalde de Calamarca fue detenido el martes 25 de enero de este año en la tranca de Achica Arriba por trasladar 2,9 kilos de cocaína ocultos en la parte posterior de una vagoneta. En ese entonces, el edil culpó a opositores que, según él, montaron un plan para involucrarlo en el delito.

Lunes 25

En Oruro, tras una toma fallida de la gerencia de operaciones de la empresa chilena Cruz Andina, que administra la Red Andina de ferrocarriles, una veintena de ex trabajadores ferroviarios inicia una huelga de hambre en las instalaciones de la Central Obrera Departamental (COD), en demanda de la reversión de los ferrocarriles a favor del Estado. Las dos redes de ferrocarriles bolivianos, Andina y Oriental, fueron privatizadas en 1996, durante el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. A la huelga de hambre participan 18 personas, cuatro mujeres y 14 varones, los cuales advierten que llevarán la medida de presión hasta las últimas consecuencias.

Martes 26

En Oruro, los ex trabajadores ferroviarios que exigen al Estado boliviano la nacionalización del servicio cumplen el segundo día de ayuno en ambientes de la COD. El pliego petitorio de los huelguistas subraya que el ramal andino está condenado a perecer, todo lo contrario de lo que sucede con el oriental, que, en esos días, sumó a su parque una locomotora moderna, valuada en cinco millones de dólares, con capacidad para jalar 2.200 toneladas. Asimismo, los huelguistas ratifican su exigencia de reversión pública de los ferrocarriles y estar esperando la llegada de las principales autoridades del país, entre las cuales la del vicepresidente Álvaro García Linera.

Miércoles 27

En Tarija, trabajadores administrativos de la Universidad Juan Misael Saracho (UJMS) cumplen el primero de tres días de paro en demanda de la reposición de un incremento salarial del 12%, retroactivo a enero último. La dirigencia de la UJMS señala que la medida de presión no perjudica el desarrollo de las clases universitarias.

En Santa Cruz, en el barrio Libertad, se registra un enfrentamiento entre 500 policías y un grupo de personas que ocupa un terreno reclamado como propio por un particular, el mismo que exige su desalojo. La refriega deja casi una docena de personas heridas y 13 detenidas. La barriada que, según algunos, estaría en la jurisdicción de Cotoca y, según otros, en la de Santa Cruz de la Sierra, es afectada por un conflicto de posesión en el cual, al parecer de los vecinos, participarían más de 2 mil residentes del lugar, que regularmente pagan sus cuotas de 100 dólares mensuales a la cooperativa El Paúro Ltda.

Jueves 28

En Santa Cruz, en el barrio Libertad, las personas desalojadas de unos terrenos que ocupaban ilegalmente están en vigilia ante la presencia de policías que cumplen con una orden judicial. Los afectados aseguran que no dejarán sus predios por tener construcciones que datan de hace dos años. Por su parte, la policía indica que permanecerá en el lugar para que el desalojo siga dándose de forma pacífica. La disputa es por la posesión de 67 hectáreas en las que viven 1.500 familias, que pagaron a privados entre mil y 1.500 dólares para acceder a los lotes, sin lograr adueñarse de los mismos.

Viernes 29

Los sindicatos mineros del departamento de Potosí, acatando la convocatoria de la FSTMB, realizan una marcha por las principales calles de esa ciudad para repudiar los avasallamientos de varias minas en distintas regiones del país y en defensa de sus fuentes de trabajo y seguridad laboral.

En Santa Cruz, un grupo de alrededor de 80 personas, presuntamente contratado por loteadores, quema cuatro casas y provoca destrozos en un número no cuantificado de viviendas en la urbanización Santa María, ubicada en el Plan Tres Mil. Según los afectados, el incendio fue causado en represalia porque los ocupantes de los domicilios llegaron a un arreglo con el propietario para la compra legal de los terrenos. La llegada de un camión de bomberos de la policía impide que el fuego se propague. Además, los agentes de dos patrullas de la policía del Plan Tres Mil logran capturar a cinco sujetos que, aparentemente, estarían involucrados en el caso.

Glosario de siglas

ANB	Aduana Nacional de Bolivia
CCISM	Central de Comunidades Indígenas de San Miguel
COB	Central Obrera Boliviana
COD	Central Obrera Departamental
COOSESMI	Cooperativa de Agua Potable de San Miguel de Velasco
DIASA	Dirección de Administración de Salud
DIPROVE	Dirección de Prevención de Robo de Vehículos
FSTMB	Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
TIPNIS	Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé
UJMS	Universidad Juan Misael Saracho
UTO	Universidad Técnica de Oruro
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinadoras: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes: Los Tiempos, La Razón, Bolpress, ABI y El Deber.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL
Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Bolivia

agosto de 2011

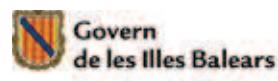
Editada en noviembre



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears
Conselleria d'Afers Socials;
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 971

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Bolivia***



Integrantes

Pilar Uriona Crespo
Dunia Mokrani Chávez

Fuentes

Los Tiempos
La Razón
ABI
El Deber

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Agosto de 2011

Lunes 1

En La Paz, por determinación de una asamblea, trabajadores de la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (EPSAS) inician un paro indefinido, exigiendo la renuncia del gerente y de los miembros del directorio, a quienes acusan de inefficiencia en el desempeño de sus labores. Los huelguistas denuncian la falta de material de trabajo y reclaman la compra de accesorios para cumplir con sus labores, además de exigir un taller de mantenimiento para los vehículos de la empresa y señalar que, hasta la fecha, la EPSAS no adjudica la refacción de las zanjas abiertas para reparar las tuberías, al mismo tiempo que la actual administración no cuenta con un plan para renovarlas. Con la medida de presión se suspende la atención al público en todas las agencias de la empresa del agua en lo que respecta a trámites y cobro en cajas, mientras que se mantiene la dotación de agua potable y la atención de emergencias. La EPSAS fue creada en el 2007, y su objetivo primordial era cubrir la demanda insatisfecha de la ciudad de El Alto, reemplazando a lo que fuera Aguas del Illimani S.A., subsidiaria de la francesa Suez, tras una serie de movilizaciones de las juntas vecinales alteñas. El director de la empresa, nombrado por el presidente Evo Morales, señala que la falta de inversión obstaculiza el cumplimiento de los objetivos y pone a disposición su cargo; sin embargo, los otros miembros del directorio aún no se han manifestado al respecto.

Miércoles 3

Las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécur (TIPNIS) ratifican que el próximo 15 de agosto marcharán desde la ciudad Trinidad, en Beni, rumbo a la sede de gobierno, en contra de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo segundo tramo, de 177 kilómetros, atravesaría el corazón del territorio indígena y parque nacional. Los tramos I y III de la mencionada carretera están en proceso de construcción. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, señala que el gobierno no dialogará en medio de las movilizaciones y que las autoridades no se trasladarán a la marcha, pues la consideran injustificada. Romero exhorta a la dirigencia indígena del TIPNIS a sentarse lo antes posible en una mesa para evaluar con calma los estudios técnicos, las cifras económicas, los posibles daños ambientales y los mecanismos para mitigar los impactos y multiplicar los beneficios.

En la ciudad de Cochabamba, pobladores del municipio de Santiváñez realizan una marcha de protesta exigiendo a las autoridades departamentales y municipales la reanudación de la obras de la carretera que va hacia la población de Lacma y cuya construcción no supera el 50% de avance, según los marchistas. La carretera vincula el parque industrial de Santiváñez con la zona sur de la ciudad de Cochabamba. El proyecto tiene una longitud de 18 kilómetros, con dos carriles y un costo que supera los 5,5 millones de dólares. Autoridades de la gobernación departamental señalan que los problemas los debe resolver la empresa Bartos, a cargo de la obra, mientras el nuevo oficial mayor técnico de la alcaldía no se manifiesta aún al respecto.

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los trabajadores del hospital Japonés inician un paro de 72 horas en protesta por el retraso en el pago del bono de vacunación. Por su parte, autoridades de la oficialía mayor de desarrollo humano de la alcaldía señalan que el retraso se debe a que los beneficiarios no habrían cumplido con los requisitos para recibir el monto.

Jueves 4

Tras cuatro días de paro, la renuncia de Víctor Hugo Rico, gerente de la EPSAS, posibilita un preacuerdo con los trabajadores de la empresa. La ministra de Medio Ambiente y Agua, en una conferencia de prensa, informa la aceptación de la renuncia irrevocable del gerente de la empresa y el inicio de un proceso de transición que durará cinco días. La ex autoridad de la EPSAS seguirá trabajando hasta que el nuevo directorio designe su sucesor. Por su parte, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, informa que se conformará un nuevo directorio en el que participarán delegados de las alcaldías de La Paz y El Alto, por medio del cual se buscará hacer una reestructuración y definir el nuevo modelo de la empresa. Pedro Castro, secretario de relaciones del sindicato de la EPSAS, señala que, una vez que el acuerdo sea concertado con sus bases, se levantarán las medidas de presión.

Lunes 8

En el departamento de La Paz, vecinos de Achocalla bloquean con promontorios de tierra el paso de camiones al relleno sanitario de Alpacoma, en demanda de la construcción de una avenida en el sector, la dotación de servicios básicos y la admisión, por parte del municipio paceño, de que el sector pertenece a la jurisdicción de Achocalla. Además, los vecinos denuncian que el relleno incumple con las normas ambientales. Las autoridades de La Paz informan que los terrenos del relleno sanitario de Alpacoma fueron adquiridos por la alcaldía por 1.164.000 bolívares y condicionan el diálogo a la suspensión del bloqueo, mientras que los pobladores de Achocalla anuncian la radicalización de sus medidas con el apoyo de otros dos municipios paceños de Palca y Mecapaca. Según datos del municipio de Achocalla, Alpacoma tiene 23 urbanizaciones y alberga a unas 6 mil familias, todas las cuales, así como señala la dirigencia vecinal de Achocalla, emitieron resoluciones confirmando que pertenecen a ese municipio, mientras que las autoridades del municipio paceño aseguran que 14 urbanizaciones se declararon pertenecientes a La Paz. Por otra parte, el director de gobernabilidad de la alcaldía de La Paz señala que la acumulación de la basura en los camiones puede generar una emergencia sanitaria y recomienda a los vecinos paceños no dejar la basura en las calles hasta que el conflicto sea superado. Entretanto, desde el municipio paceño se habilitan puntos de acopio de residuos y se analiza un plan de contingencia a realizarse mientras dure el bloqueo del relleno. La directora del Sistema de Regulación Municipal (SIREMU) explica que diariamente la empresa municipal de aseo recoge alrededor de 500 toneladas de basura de las calles de La Paz.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) señala que no negociará con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) el martes 9 en la ciudad de Trinidad, y advierte que la única manera de frenar la marcha de protesta convocada para el día 15 es el desvío del trazo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos lejos del territorio indígena en el parque nacional Isiboro Sécure.

En el departamento de Santa Cruz, en horas de la noche, la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios Yapacaní (FSCIPAY) inicia un bloqueo de la carretera que une los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba en demanda de la electrificación de las zonas rurales, la instalación de gas domiciliario y vehicular, la aceleración del proceso de saneamiento de tierras, el freno al avasallamiento de la reserva ecológica del Choré y del parque nacional Amboró, además de la adquisición de productos a un precio justo por parte del gobierno.

En el departamento de La Paz, vecinos de la localidad de Zongo, de la comunidad Islani Bajo, realizan un bloqueo de ruta y amenazan con tomar la central hidroeléctrica de Harca, que se encuentra en el lugar, exigiendo que la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. realice obras

de asfaltado de la ruta. El superintendente de responsabilidad social empresarial de la compañía señala que el servicio mencionado no es una responsabilidad ni una obligación de la empresa.

Martes 9

En el departamento de Santa Cruz, un contingente de aproximadamente 200 efectivos policiales desbloquean por la fuerza, con el uso de gases lacrimógenos, la carretera nueva que une a los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba y que había sido cerrada por la FSCIPAY, la noche del lunes 8. La medida de presión mantenía varados a cientos de vehículos en más de cinco kilómetros al ingreso y salida del municipio de Yapacaní, a 120 kilómetros al norte de Santa Cruz. Los manifestantes pedían la presencia de las autoridades del gobierno para suspender la medida. La policía lanza gases lacrimógenos para dispersar a los bloqueadores atrincherados sobre la carretera. Luego de la operación, un grupo de uniformados se queda en el lugar y los campesinos amenazan retomar la medida con más fuerza y califican como un “abuso” la intervención policial, señalando que su protesta se realizaba dentro del marco legal y de manera pacífica y que, producto de la intervención violenta de los uniformados, varios campesinos quedaron heridos, al mismo tiempo que los uniformados golpearon a mujeres, ancianos y menores que se encontraban en el lugar. Por su parte, el comandante de la policía departamental informa que ante la resistencia de los bloqueadores se procedió al uso de los gases lacrimógenos, que se arrestaron a cuatro personas, liberadas horas más tarde, y que varios policías habrían resultado levemente heridos en los brazos y piernas, a causa de las piedras lanzadas por los manifestantes.

En la sede de gobierno, en las puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Coordinadora de la Mujer realiza un acto de protesta en contra de lo que considera un acto de “discriminación de género” cometido por este organismo, que ordenó suspender la difusión de la campaña “Vota Mujer: por una justicia con equidad”, destinada a garantizar la paridad de género en la conformación del órgano judicial, en el marco de las elecciones de magistrados de octubre. Las responsables de la organización convocante de la protesta son recibidas por la vicepresidenta del TSE, Vilma Velasco, quien se compromete a dar a conocer la solicitud ante los representantes de los tribunales electorales de todo el país. Entretanto, las movilizadas se mantienen en emergencia.

Damnificados del mega-deslizamiento ocurrido en la ciudad de La Paz el mes de febrero pasado que tienen deudas bancarias protestan rechazando el nuevo año de gracia dispuesto por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para el pago de sus deudas y cobros coactivos, mismo que rige desde el 27 de agosto del 2011 hasta la misma fecha del 2012. Tras conocerse la ampliación dispuesta por la ASFI, medio centenar de afectados marcha hasta las puertas de las oficinas de dicha institución, bloqueando el tráfico vehicular en la avenida Arce. La dirigencia del sector movilizado explica que su demanda es la condonación de las deudas y pide una reunión con la directora de la ASFI, quien, sin embargo, no los recibe. Por lo anterior, advierten que persistirán en sus medidas de presión. Entretanto, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) sostiene que el sistema bancario habría dado solución a casi el 90% de los casos de damnificados, sin especificar el tipo de solución a que se refieren y señalando que la banca ha estado desplegando esfuerzos para aliviar la situación crediticia de los deudores, en el marco del respeto a la cultura de pago y las posibilidades de los afectados.

Cerca de las 5 hs. de la mañana, un contingente de 80 efectivos policiales arriba hasta el ingreso al relleno sanitario en Alpacoma y con el uso de agentes químicos procede al desbloqueo. Los bloqueadores son replegados y los policías despejan la vía para que ingresen dos grupos de camiones recolectores de basura. El primer contingente, de 23 camiones, pasa por el sitio detrás de un tractor que se encargaba de limpiar la vía de los escombros que fueron dejados por los bloqueadores. Los vecinos reaccionan lanzando piedras a los camiones basureros. Como resultado

de esta acción, tres coches quedan con los parabrisas destrozados. El segundo contingente ingresa con otros 12 camiones recolectores, pero no logran salir del relleno sanitario porque los vecinos retoman el bloqueo. Los manifestantes denuncian que la policía no habría respetado ni a las autoridades ni a mujeres y ancianos. Tras el operativo de la policía, el servicio de recolección de basura logra depositar 430 de las 1.150 toneladas que se acumularon durante dos días de bloqueo, según informa la directora del SIREMU. Entretanto, las tensiones entre los municipios de La Paz y Achocalla se agudizan. Por un lado, Luis Revilla, el alcalde paceño, señala que no existe ningún problema pendiente de límites con Achocalla y que prueba de ello es que los propios manifestantes están solicitando que se realicen obras en el lugar, al mismo tiempo que denuncia que detrás de las movilizaciones estarían intereses de las autoridades municipales de Achocalla de aprobar de manera irregular urbanizaciones en áreas circundantes al relleno sanitario, avasallando propiedad que le corresponde al municipio de La Paz. Por su parte, el alcalde de Achocalla, Thelmo Mamani, señala que hace cinco años comenzó el proceso de urbanización en áreas circundantes al relleno, pero niega que exista un afán de avasallamiento y aduce que los terrenos pertenecen a la jurisdicción de Achocalla, que no quieren seguir siendo “el basurero de La Paz” y que, desde el lunes 8, los pobladores de Palca se sumaron a los bloqueos en Alpacoma. El alcalde paceño descarta una reunión con su homólogo de Achocalla, señalando que no se puede negociar lo “ilegal”.

En La localidad de Zongo, La Paz, en horas de la noche, la policía interviene el bloqueo que realizaban comunarios de la región, amenazando con tomar la central hidroeléctrica de Harca en demanda de asfalto. Tras el repliegue de la gente movilizada, se anuncian nuevas medidas de presión a ser analizadas en un ampliado.

Miércoles 10

En Cochabamba, pobladores de Villa Candelaria y Corani Pampa se enfrentan con palos y piedras a pobladores del centro del municipio de Colomi, cuando los primeros –afines al Movimiento al Socialismo (MAS)– tomaran el edificio de la alcaldía de Colomi para expulsar al alcalde del Movimiento Sin Miedo (MSM), Víctor Terán Castro, a quien acusan de presuntas irregularidades y retrasos en la gestión municipal. Los hechos movilizan a vecinos de Colomi, que salen en defensa del alcalde armados con garrotes, warakas y fierros, contra quienes protagonizan la toma. El enfrentamiento deja un saldo de más de 100 heridos, de los cuales diez se encuentran en estado de gravedad. Dos contingentes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) llegan al lugar e intervienen logrando apaciguar temporalmente a los enfrentados. Sin embargo, ambos grupos se atrincheran en las esquinas, construyen barricadas y manteniendo mantienen una vigilia permanente con bloqueos esporádicos y amagues de enfrentamiento. El servicio de energía eléctrica se interrumpe. Tras una jornada tensa, con posibilidades constantes de choques entre las partes, al anochecer se instala una mesa de diálogo, se refuerza la seguridad con más policías y se restablece el servicio de luz. Al final del día, llega a Colomi el defensor del pueblo de Cochabamba, para intentar pacificar la región.

En el departamento de Santa Cruz de la Sierra, la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productoras y Agropecuarias de la provincia Ichilo retoma el bloqueo de la carretera que une los departamentos Santa Cruz y Cochabamba, luego de haber decidido en un ampliado retomar las medidas de presión y restablecer tres piquetes de bloqueos, antes de Yapacaní y en el sector de Hoyo Hondo, a tres kilómetros del pueblo. Más de 100 autobuses y camiones se encuentran parados a la altura de Yapacaní.

En el departamento de Tarija, más de 500 campesinos marchan por el centro de la ciudad en demanda a la Asamblea Legislativa Departamental de la aprobación del reglamento del Programa Solidario (PROSOL), que entrega un bono departamental a familias campesinas de Tarija. Entre

2006 y 2009, el PROSOL entregó 1.800 bolívares a cada familia del campo para la producción de la tierra. El PROSOL consta de un aporte en efectivo a cada una de los núcleos campesinos, pero no se entrega de manera individual sino colectiva, vale decir, a nombre de la comunidad que, a su vez, realiza compras para el beneficio común. En la gestión 2010, fruto de medidas de presión por parte del sector campesino a la gobernación, el PROSOL se incrementó a 4.500 bolívares. Actualmente, la ejecución del incremento depende de la reglamentación exigida.

Jueves 11

En La Paz, en horas de madrugada, vecinos de Alpacoma deciden declarar un cuarto intermedio en sus medidas de presión y suspender temporalmente el bloqueo al relleno sanitario de la zona para asistir al diálogo convocado por el gobernador del departamento César Cocarico, quien oficiara de mediador entre las autoridades de las alcaldías de Achocalla y La Paz, en disputa por la jurisdicción de Alpacoma. Por su parte, en horas de la tarde, instituciones paceñas reunidas con el alcalde Luis Revilla conminan a los bloqueadores a despejar el ingreso al relleno sanitario y anuncian el inicio de acciones penales contra las autoridades y dirigentes de Achocalla que protagonizan el bloqueo.

Desde las 2 hs. de la madrugada, la carretera que une a Santa Cruz con la ciudad de Trinidad en el sector de Puerto Pailas y la vía férrea rumbo a Puerto Suárez son bloqueadas por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz Apiguaiki Tumpa (FSUTCSC), en exigencia de la renuncia de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemecia Achacollo, a quien acusan de dividir el sector campesino y de tráfico de tierras, hecho en el que también involucran al senador masista Isaac Ávalos. El ejecutivo de la Empresa de Ferrocarril Oriental (EFO) determina cancelar el viaje del tren que salía a las 14 hs. rumbo a Quijarro y del ferrobús que debía salir a las 18. Centenares de vehículos permanecen varados en la carretera.

En la ciudad de El Alto, en horas de la mañana, alrededor de mil padres y madres de familia de 50 unidades educativas protestan denunciando la entrega de raciones de desayuno escolar en mal estado y de manera irregular y demandando la ejecución de obras en las escuelas. Molestos por la falta de respuesta de las autoridades, los manifestantes comienzan a forcejear la puerta del edificio municipal. La policía interviene con el uso de gases lacrimógenos. La intervención deja un saldo de siete heridos leves y el destrozo de la puerta de ingreso a la alcaldía. Los padres de familia logran ingresar al edificio, mientras las autoridades, entre ellas el alcalde Edgar Patana (del MAS), escapan para evitar agresiones. La policía detiene a cuatro personas y logra retomar el control. El director de seguridad ciudadana de la alcaldía informa que las instalaciones de la empresa encargada del desayuno escolar fueron clausuradas por tres días por haberse detectado “falta de higiene” en la elaboración de los productos. Por otra parte, el director de educación de la alcaldía alteña informa la destitución del funcionario municipal responsable de la verificación de la calidad del desayuno escolar.

En el departamento de Tarija, catorce campesinos realizan una huelga de hambre en plena plaza central de la ciudad capital exigiendo a la Asamblea Legislativa Departamental la aprobación del reglamento del PROSOL, como parte de las medidas de presión que iniciaron el día 10 con una marcha.

Viernes 12

En Santa Cruz, la dirigencia de la FSCIPAY firma un convenio con autoridades del gobierno nacional, según el cual este último se compromete a conformar mesas de diálogo para atender las demandas de ese sector en temáticas centrales como el precio justo, los proyectos de desarrollo

agropecuario, el proceso de saneamiento y del medio ambiente. Con este acuerdo se pone fin al bloqueo de carreteras que se mantenía desde el pasado lunes 8, pese a las intervenciones policiales y que logró cortar la vía carretera a la altura de la población de Yapacaní, además de la ferrovía que comunica con Brasil y de otros puntos como Puerto Pailas, que vincula Santa Cruz con Trinidad, capital del departamento Beni. La firma del acuerdo se da en el marco de una larga reunión de la dirigencia sindical con los ministros de la Presidencia, Carlos Romero; de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales; con el viceministro de Tierras, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el director de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y la senadora por Santa Cruz, Gabriela Montaño. Las comisiones de trabajo presentarán su informe de evaluación el primero de septiembre. En lo que concierne a la demanda de precio justo para los productos, se determina conformar una mesa técnica para calcular de manera conjunta una estructura de costos de la producción de arroz que permita establecer precios y volúmenes de compra para la campaña arrocera del próximo año. De igual manera, las autoridades gubernamentales se comprometen a continuar con las gestiones necesarias a nivel del Ministerio de Defensa y del Alto Mando Militar para la compra de 31 mil quintales de arroz por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), además de la policía y de sindicatos de empresas públicas y cooperativas. Por otra parte, se determina que el 15 de agosto próximo, los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural presentarán informes técnicos que especifiquen el estado de la situación, la factibilidad financiera y los plazos para la ejecución de los proyectos del camino asfaltado faja norte y norte integrado, de gas natural vehicular y domiciliario, de expansión de la producción lechera e y de la industria de leche en polvo. Sobre los proyectos presentados por la FSCIPAY relativos a los centros de acopio de arroz, a la planta procesadora de frutas, a la electrificación rural, a el agua para el consumo humano y el riego, al camino empedrado para la zona sur, faja central, a la circunvalación Distrito II, al puente de bajada, al surtidor comunitario y al arroz bajo riesgo se acuerda que se analizará la viabilidad técnica de los mismos para poderles dar curso. En lo que respecta al proceso de saneamiento de tierras, se establece una agenda de reuniones con las poblaciones de Cuatro Cañadas, Berlín, San Julián y Yapacaní. Relativamente al tema ambiental, se determina formar una comisión interinstitucional para evaluar las denuncias sobre el avasallamiento cocalero de la reserva forestal El Choré y del parque nacional Amboró, la misma que inventariará y procesará las denuncias sobre extracciones ilegales de madera, así como realizará inspecciones de campo, verificará los asentamientos ilegales, adoptará las medidas que correspondan y, asimismo, elaborará un plan para la erradicación de la coca ilegal en la reserva forestal.

En Oruro, trabajadores municipales inician un piquete de huelga en demanda de mejoras salariales a la alcaldesa Rossío Pimentel, quien rechazara cualquier reajuste a la nómina, señalando que el mismo no se ajusta a la norma. El ejecutivo del Sindicato Mixto de los Trabajadores Municipales señala que la alcaldesa se habría deslindado de su responsabilidad pasando la consulta del incremento salarial al consejo municipal, que pidió mayor información sobre las fuentes presupuestarias para un posible incremento.

Lunes 15

En Potosí, en horas de la mañana diferentes sectores marchan recordando un año del paro de 19 días del 2010 y exigiendo al gobierno nacional que acelere la atención, precisamente, de las demandas presentadas en ese entonces. Entretanto, el Consejo Consultivo del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) resuelve iniciar el diálogo con el gobierno nacional, luego de haber anunciado un paro cívico para exigir el cumplimiento de las demandas regionales acordadas a mediados del 2010. Para el inicio del diálogo, el COMCIPO pone dos condiciones: la primera, que se negocie el pliego regional de seis puntos; la segunda, que los ministros delegados para el diálogo tengan poder de decisión. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, acepta ambas condiciones,

precisando que los ministros delegados serán los de los sectores involucrados. A pesar de la apertura al diálogo, el CONCIPO se declara en estado de emergencia y mantiene la convocatoria a un cabildo sobre el diferendo limítrofe entre Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro), y da un plazo de 15 días a su Asamblea Departamental y a la Gobernación para que promulguen una ley de creación de una fábrica de cemento. También exigen la conclusión de los estudios sobre el Cerro Rico, la construcción de un aeropuerto, la puesta en marcha del complejo polimetálgico de Karachipampa y el desarrollo de los proyectos viales demandados. Por su parte, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, informa el lunes que se abrieron los sobres para conformar una comisión de expertos que calificará las propuestas de las gobernaciones de Oruro y Potosí para resolver el conflicto limítrofe entre ambos departamentos.

En La Paz, las juntas vecinales se movilizan y declaran un paro de actividades indefinido exigiendo la realización del censo este año. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, acuden a las oficinas de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) para viabilizar el diálogo. La dirigencia exige la presencia del presidente. El gobierno anuncia que espera a representantes de la FEJUVE y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto en Palacio, a las 16 hs., una vez que las organizaciones alteñas declaran un cuarto intermedio en el paro, a lo cual la dirigencia responde que se realizará la consulta correspondiente con sus bases antes de dar una respuesta.

Desde Trinidad, cientos de indígenas moxeños, yuracarés y chimanos del TIPNIS, acompañados y acompañadas por delegaciones de la CIDOB y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), inician una marcha hasta la sede del gobierno nacional para evitar a la construcción del segundo tramo de la carretera Cochabamba-Beni, que se pretende pase por el territorio indígena y parque nacional. Los marchistas deberán recorrer 500 kms. para llegar a La Paz. La iglesia católica, a través de un comunicado, convoca al gobierno nacional y a los indígenas del TIPNIS a dialogar. El vicepresidente del Estado conmina a las y los marchistas a presentar propuestas. Entretanto, el presidente Evo Morales resta importancia a la marcha y a las movilizaciones de El Alto y Potosí, señalando que responden a “intereses políticos” y que la marcha de los indígenas estaría financiada por organizaciones no gubernamentales y fundaciones. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, señala que los contrabandistas de madera “son los que impulsan la marcha”. A lo que el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, responde exigiendo al viceministro demostrar su acusación y pide al gobierno nacional y a la ABC mejorar las vías que conectan a Trinidad con Santa Cruz y con La Paz, antes de destruir el TIPNIS; plantea que el gobierno hace tiempo que ya no piensa en los indígenas y que sólo quiere abrir otra carretera que permitirá el avasallamiento a las tierras comunitarias y la plantación de hectáreas de coca. En su primer día, las y los marchistas recorren una distancia de 16 kilómetros hasta el sector denominado Los Puentes, a orillas del río Mamoré, donde pernoctaran. A 90 kilómetros del lugar, en San Ignacio de Moxos, una comisión conformada por asambleístas del departamento del Beni y autoridades de ese municipio espera el arribo de la marcha para intentar encaminar el diálogo con el órgano ejecutivo. Desde la marcha anticipan que el único diálogo posible es con el presidente Evo Morales. Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) expresa su preocupación por las movilizaciones de los indígenas del TIPNIS y de los cívicos en Potosí y de El Alto, y pide a las organizaciones sociales y al gobierno a insistir en los esfuerzos para establecer el diálogo.

Martes 16

Se dilata el inicio del diálogo entre la FEJUVE alteña y el gobierno, pues mientras en instalaciones de la vicepresidencia del Estado Plurinacional el jefe de Estado y sus ministros esperan a la dirigencia vecinal, no existe todavía un acuerdo sobre la cantidad de participantes en la reunión,

pues las dirigencias de la FEJUVE y la COR habrían presentado una lista de 52 personas mientras que el acuerdo, según personeros gubernamentales, contemplaba la mitad, con la presencia de ocho representantes de FEJUVE, más un representante por distrito y 15 delegados de la COR. Con unas horas de retraso, se inicia el diálogo entre dirigentes alteños y una comisión del gobierno encabezada por el presidente Evo Morales. La principal demanda alteña es la realización del censo nacional en la presente gestión, después de diez años de la realización del anterior. Durante el encuentro se dan momentos de tensión, el mayor cuando representantes de los distritos 7 y 14 abandonan el encuentro anunciando la reactivación de las movilizaciones y bloqueos. Después de seis horas de diálogo, las partes determinan realizar un cuarto intermedio para continuar con la negociación, sobre la base de un preacuerdo según el cual la dirigencia podría ceder respecto a que el censo se realice el 2012 a cambio de la ejecución de obras como una terminal bimodal y caminos para El Alto.

En el departamento de La Paz, los choferes de la Subfederación de Autotransporte Volantes a los Yungas bloquean la tranca de Urujara en demanda de mantenimiento de la carretera a Alto Beni y a Rurrenabaque.

Miércoles 17

En la sede de gobierno, una multitudinaria marcha recorre las calles del centro de la ciudad en defensa de los límites territoriales del municipio La Paz, frente a los conflictos suscitados con los municipios vecinos de Palca, Mecapaca y Achocalla, quienes firmaron un “pacto de unidad” y anunciaron un cerco contra la sede de la administración nacional. En la movilización, encabezada por el alcalde Luis Revilla y la dirigencia de dirigentes de la FEJUVE paceña, participan representantes de los 23 distritos de la ciudad, además de instituciones cívicas y organizaciones sociales. En la víspera, a través de un comunicado, el Ministerio de Autonomías informó que “las jurisdicciones de La Paz, Achocalla, Mecapaca y Palca no se encuentran definidas” y que la determinación de sus límites “se realizará una vez concluido el procedimiento administrativo y la promulgación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de las leyes de delimitación correspondientes”. La alcaldía de La Paz, organizaciones vecinales y cívicas, reunidas en la Asamblea de la Paceñidad, defienden los límites definidos para el radio urbano de La Paz por la Ley 453, aprobada el 27 de diciembre de 1968, y la Ley 1669, que define los límites de Palca, la cual establece que Zongo es parte del municipio paceño. Autoridades municipales y dirigencias vecinales señalan que la movilización se da contra un proceso según el cual los tres municipios en conflicto y otros siete pretenden arrebatarle a La Paz más de 158 mil hectáreas de las 201 mil que posee, lo que equivale al 78% de su territorio. Del otro lado, el dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz – Túpac Katari anuncia la realización de medidas en defensa de los límites de los municipios de Palca, Mecapaca y Achocalla, señalando que antes del encuentro cada municipio analizará en un ampliado las acciones a tomarse. El gobernador de La Paz, César Cocarico, reprocha que organizaciones sociales afines a la alcaldía paceña hayan convocado a una marcha, pues la considera una medida provocadora.

En el departamento de Santa Cruz, desde las 10 hs. de la mañana, transportistas de seis municipios de la Chiquitanía bloquean la ruta que une a la ciudad de Santa Cruz con el departamento Beni exigiendo a las autoridades de la aduana nacional agilizar el proceso de nacionalización de los llamados “autos chutos” que, en muchos casos, son vehículos denunciados como robados en países limítrofes.

Luego de que la noche del 16 los distritos 7 y 14 se desmarcaran de la FEJUVE alteña, cuando sus delegados abandonaron la mesa de negociación con el gobierno, la jornada comienza con bloqueos y manifestaciones de vecinos de ambos distritos en demanda de un pliego de 14 puntos, en el que

además de exigir la realización del censo 2011, reclaman, entre otros puntos, la realización de la doble vía ex tranca Río Seco-San Roque y de la carretera Laja, la proporción de servicios básicos, la construcción de la planta de tratamiento de Tacachira y de un hospital de tercer nivel. Los manifestantes piden también la destitución del ejecutivo de la FEJUVE, Rubén Paz, quien encabezara las negociaciones con el gobierno que concluyeron con un preacuerdo. En horas de la mañana, la autopista y las vías alternas resultan bloqueadas, hasta que, al mediodía, la policía dispersa la marcha con el uso de gas lacrimógeno y chorros de agua. Como resultado del operativo policial, un policía es herido por una pedrada y un manifestante detenido. En horas de la tarde, el ministro de la Presidencia anuncia la decisión gubernamental de dialogar con los sectores movilizados. Entretanto, las mesas del diálogo avanzan y se acuerda que el censo se realizará en los meses de junio y julio del siguiente año, mientras que los resultados del censo se aplicarán a partir del 2013.

Los choferes de la Subfederación de Autotransporte Volantes a los Yungas que iniciaran el día 16 el bloqueo de la tranca de Urujara, en demanda de mantenimiento de la carretera que conduce a Alto Beni y a Rurrenabaque, ingresan en un cuarto intermedio en su medida de presión en atención al pedido del Automóvil Club Boliviano (ACB) de suspender el bloqueo para dar paso a la carrera automovilística 'Gran Premio Nacional Evo Morales', que recorrerá ese camino.

Los indígenas que marchan desde Trinidad hacia La Paz en contra de la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en el TIPNIS están dispuestos a dialogar con el presidente Evo Morales en cualquier sitio del trayecto. La dirigencia destaca la solidaridad recibida por las poblaciones que travesaron a su paso y manifiestan que si es que no llega el presidente a la marcha, esta última llegará a La Paz. Por otra parte, los indígenas acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para impedir el avance del proyecto carretero. Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera señala que quienes se oponen a la carretera son dirigentes y no la población indígena de base. Entretanto la CIDOB inicia la primera campaña de recolección de alimentos, agua y vítaullas. Siete integrantes de una familia, entre ellos un niño de seis años que se fracturó el pie, son dados de baja de la movilización, con lo que suman 30 personas entre adultos mayores y niños los que abandonaron la marcha por motivos de fuerza mayor.

En Santa Cruz, vecinos del distrito 9 instalan 12 puntos de bloqueos en los ingresos principales a la zona sur de la ciudad y bloquean el ingreso de a la refinería de Palmasola exigiendo la pavimentación de la avenida Santos Dumont. El alcalde Percy Fernández dijo que la obra está contemplada en el presupuesto para la gestión de 2012. El representante del comité de vigilancia del distrito 9 advierte que continuarán con la medida de presión hasta conseguir que las autoridades municipales firmen un compromiso de la ejecución de la obra. La gerencia general de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (ASOSUR) informa que el bloqueo no afectó la distribución de gasolina y diesel, pero que de continuar la medida se empezarán a sentir los efectos de la misma en el abastecimiento a las gasolineras. El oficial mayor de obras públicas del municipio señala que se está elaborando la ficha ambiental correspondiente, que la obra tendrá un costo de 55 millones de bolívares y que se ejecutará una vez que esté aprobado el crédito.

Jueves 18

La junta de vecinos del barrio de Santa Fe de San Ignacio de Moxos se reúne en un cabildo para respaldar la construcción del segundo tramo de la carretera que, atravesando el TIPNIS, uniría esa población con Villa Tunari. La dirigencia vecinal señala que la falta de vinculación caminera provoca el encarecimiento de los artículos de primera necesidad, como el azúcar.

Viernes 19

El presidente Evo Morales envía una comisión de ministros a San Ignacio de Moxos, localidad donde se dieron manifestaciones a favor de la construcción de la carretera y a la que, tras una caminata de 70 kilómetros, llegará la marcha indígena por la preservación del TIPNIS. Frente a la demanda de los indígenas de dialogar con el presidente, éste responde que, por razones de tiempo, no puede trasladarse al lugar, por lo que delegó esta tarea a una comisión de ministros, compuesta por el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, y el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, además de algunos viceministros y equipos técnicos. Por su parte, los marchistas ratifican su posición de que no dialogarán si el presidente no llega a San Ignacio de Moxos. Entretanto, la dirigencia de la marcha informa que ya empiezan a sentirse los problemas de falta de alimentos y agua, mientras la solidaridad empieza a hacerse manifiesta. Por su parte, las dirigencias cocaleras del trópico cochabambino anuncian medidas en contra de la marcha indígena y en favor de la construcción de la carretera, señalando que éstas se definirán en un ampliado convocado para el sábado 27. De igual manera, dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) amenazan con “asumir medidas” en contra de la marcha indígena si sus dirigentes no dialogan con la comisión delegada por el gobierno nacional. Por su parte, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquiza (del MAS), señala que pedirá al presidente Evo Morales que el financiamiento destinado a la carretera por el TIPNIS sea transferido a su departamento, debido a que considera que la dirigencia indígena del TIPNIS estaría siendo intransigente. Entretanto, el ex viceministro de Tierra, junto al ex dirigente fabril Óscar Olivera, denuncia un sobreprecio en la carretera, argumentando que informes técnicos de instancias del gobierno dan cuenta de esta situación. En horas de la noche, cuando la marcha llega a San Ignacio de Moxos, se vive un clima de tensión, pues campesinos se instalan cerca del surtidor a la salida del municipio y un grupo de cívicos que apoya la carretera bloquea la tranca que conduce a San Borja, próxima parada de los marchistas. La comisión gubernamental que recibirá a la marcha se reúne con los sectores que en esa localidad apoyan la medida de protesta, esperando la respuesta de los manifestantes a su invitación al diálogo.

Personal médico de la Caja Petrolera de Salud (CPS) se suma a la demanda de otros trabajadores que exigen la destitución del director nacional, Víctor Hugo Vargas, a quien acusan de irregularidades en su gestión. Por su parte, la autoridad cuestionada asegura que las acusaciones en su contra no tienen fundamento y que no es a los sindicatos a quienes les corresponde juzgar su gestión, sino al Ministerio de Transparencia o a la fiscalía. Además, amenaza con descuentos y despidos a quienes se mantengan en una huelga que considera ilegal.

Sábado 20

Frente a la negativa de la dirigencia de la “VII Gran Marcha Indígena por el Territorio, las autonomías y los derechos de los pueblos indígenas” de dialogar en San Ignacio de Moxos con la delegación de ministros enviada por el presidente, el gobierno informa que el presidente Evo Morales recibiría a una comisión de los indígenas en el palacio nacional. Los manifestantes ratifican nuevamente su posición de que sea el presidente quien se traslade a San Ignacio de Moxos para el diálogo y que, de lo contrario, la marcha llegará hasta La Paz. Señalan que esperarán al presidente Morales hasta el lunes 22 y, al mismo tiempo, presentan su pliego de demandas, expresadas de la siguiente manera: “1. Rechazamos la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que afecta los territorios del TIPNIS. Demandamos la paralización inmediata del estudio socio ambiental y de cualquier otro estudio. 2. Exigimos la paralización de todas las actividades hidrocarburíferas en el parque Aguarangue. 3. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe garantizar que los territorios indígenas sean respetados en la nueva legislación agraria. 4. Demandamos que el gobierno reconozca el derecho de recibir la retribución

por compensación de la mitigación de gases. 5. Pedimos el desarrollo normativo y el derecho a la consulta. 6. Exigimos el desarrollo productivo, la descentralización a las regiones del Oriente Chaco y Amazonia con asignación de recursos económicos. 7. Demandamos que el gobierno del Estado Plurinacional provea los recursos económicos para la implementación en todos los territorios indígenas titulados, como medio para avanzar en la ‘autonomía indígena’, Ley de Bosques y Directrices. 9. Contemplar el parque en la elaboración especial de las áreas protegidas. 10. Desembolsar inmediatamente los recursos económicos asignados para la construcción de la infraestructura apropiada y el funcionamiento de la Universidad Indígena Boliviana (UIB). 11. Incorporar en forma efectiva a los pueblos indígenas como beneficiarios del seguro universal de salud. 12. Realizar el Censo de Población y Vivienda a la brevedad posible. 13. Implementar planes de vivienda. 14. Implementar políticas de manejo, protección y conservación para resolver el problema del río Pilcomayo. 15. Garantizar el derecho pleno del acceso y uso de la información y la comunicación a los pueblos indígenas. 16. El cumpliendo del acuerdo de mayo de 2010 con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)”. Entretanto, el presidente se reúne con las organizaciones indígenas del TIPNIS que apoyan el proyecto de la carretera y con caciques del Consejo Nacional del Sur (CONISUR).

Domingo 21

En Cochabamba, la Coordinadora Departamental para el Cambio (CODECAM), que aglutina a organizaciones sociales afines al gobierno, se declara en vigilia permanente en respaldo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y convoca a otras organizaciones a asumir medidas similares. La CODECAM plantea que el proyecto carretero permitirá dar respuesta a la demanda histórica de integración interdepartamental entre Cochabamba y Beni y entre la Amazonía y el occidente, para así generar progreso y desarrollo en beneficio de sectores hasta ahora marginados.

Lunes 22

Después de escuchar las acusaciones del primer mandatario sobre supuestas llamadas telefónicas que los dirigentes indígenas Pedro Nuni, Rafael Quispe y la esposa del presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, habrían sostenido con la embajada de EE.UU., los marchistas reunidos en un ampliado deciden reanudar la medida de protesta y convocan a más comunidades para masificarla. El presidente Morales informa que recibirá a los manifestantes sólo una vez que éstos se reúnan con un equipo de ministros. Por su parte, desde la embajada de Estados Unidos se informa que no se dio ningún tipo de apoyo a la marcha indígena y que los únicos posibles contactos con dirigentes debieron haber sido en el marco del trabajo cotidiano de la diplomacia de la legación.

En San Ignacio de Moxos, el líder del pueblo ayoreo Paúl Núñez informa que las 80 personas que llegaron desde las provincias Germán Busch y Chiquitos, Santa Cruz, deciden abandonar a la marcha denunciando que la CIDOB y la APG les habrían dejado librados a su suerte. En una escuela de la población de San Ignacio de Moxos, a 80 kms. de Trinidad, donde los manifestantes se han guarnecido, Nuñez denuncia que los niños que incorporaron a la marcha “están tomando agua sucia” y que “ahorita nadie se acuerda de nosotros”.

En Santa Cruz, tres sectores movilizados llegan a la plaza 24 de Septiembre a expresar sus demandas y protestas. Por un lado, bajo una carpeta, familiares y amigos del asambleísta departamental Alcides Villagómez, del Frente Amplio, se organizan para recaudar 40 mil bolívares para pagar la fianza impuesta por un juez al fin de recuperar la libertad del legislador. Este último está detenido en Palmasola desde junio, acusado de incumplir una resolución judicial que ordenaba

la asignación de un escaño a los representantes de los pueblos yuracaré-moxeño. Por otro lado, un grupo de ayoreos recauda dinero, víveres y ropa para los indígenas que marchan en contra de la construcción de la carretera por el TIPNIS. El tercer grupo está compuesto por vecinos y vecinas del distrito 9, que reclaman obras municipales.

Martes 23

En Santa Cruz, vecinos de los distritos 9 y 12 se movilizan exigiendo a la alcaldía la ejecución de obras que figuran en el Plan Operativo Anual (POA) desde el 2010 y que no se han construido aún. Por un lado, representantes vecinales de barrios del distrito 12 bloquean el ingreso de camiones a la refinería de Palmasola. Por otro lado, vecinos del distrito 9 inician una huelga de hambre en la plaza 24 de Septiembre. Autoridades municipales ofrecen a los vecinos del distrito beneficiar, hasta el 2013, de 13 kilómetros de pavimento en varias unidades vecinales y de la construcción de la primera fase de la doble vía, de 2,5 kilómetros. Las juntas vecinales se reúnen para analizar la propuesta, mientras que la huelga de hambre persistirá hasta la firma de un acuerdo. Mientras tanto, el diálogo con el distrito 12 queda pendiente.

Miércoles 24

En Cochabamba, vecinos de 40 Organizaciones Territoriales de Base (OTB) de Sacaba, provenientes de los distritos 6 y 7, bloquean la avenida Villazón con barricadas en tres puntos de la ruta. Los manifestantes exigen la presencia de las autoridades tanto del municipio de Sacaba como de Cochabamba y también de la gobernación para responder a sus demandas de infraestructura educativa, construcción de un cementerio y presentación a diseño final del proyecto del túnel de El Abra –obra paralizada desde la gestión anterior y para la que el presidente Morales habría entregado 40 millones de bolívares y cuya ejecución depende de la firma de un convenio que defina las competencias de los municipios de Sacaba y Cochabamba y de la gobernación, aún pendiente. También se demanda la creación de líneas de transporte público que cubran la ruta del túnel, además de la apertura o arreglo de varias calles y la realización de un censo para establecer cuántos habitantes tiene el distrito, con miras a mejorar la asignación de presupuesto en esta área, cuya población habría crecido considerablemente, ya que, según sostienen los manifestantes, cuando se realizó el censo del 2001 en la zona había 3.500 habitantes, mientras que actualmente habría 25 mil. De la misma manera, se exige el cumplimiento de los trámites de cambio de uso de suelo de la zona, a fin de evitar problemas de loteamiento. Las autoridades del municipio de Sacaba envían una comisión negociadora. Al final de la tarde, se suspenden las medidas de presión como resultado de la reunión entre el alcalde de Sacaba, la dirigencia vecinal y representantes de la gobernación y de la alcaldía de Cochabamba, mismos con los cuales se fija una próxima reunión de trabajo.

El ministro de Comunicación, Iván Canelas, anuncia que el gobierno nacional enviará una nueva comisión conformada por el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, y los viceministros de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, quienes recibirán en Puerto San Borja a la marcha indígena dirigida a la sede del gobierno en protesta de por la construcción de la carretera que atravesará el TIPNIS. El vocero gubernamental aclara que la comisión no negociará “en absoluto la paralización de la explotación de los hidrocarburos”, como piden los indígenas en su pliego, y tampoco permitirá la venta ilegal de troncos, ni la paralización de los caminos y carreteras que se están construyendo en todo el país.

Trabajadores de la CPS declaran un paro nacional de 72 horas exigiendo la destitución del director nacional de la entidad, a quien los dirigentes de los sindicatos acusan de cometer actos irregulares.

Se suspenderá así la atención a los usuarios el viernes 26, manteniéndose abierto sólo el servicio de emergencias. En la ciudad de La Paz, los huelguistas marchan por la avenida 16 de Julio.

En Santa Cruz, una treintena de vecinos del distrito 9 realiza el segundo día de huelga de hambre en la plaza 24 de Septiembre, para exigir a la comuna que ejecute las obras contempladas en el POA de este año y de gestiones pasadas.

Jueves 25

En San Borja, Beni, la comisión escogida por el gabinete para escuchar las demandas de la marcha indígena del TIPNIS, conformada por el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, y el presidente de la ABC, Luis Sánchez, se reúnen con los marchistas y acuerdan conformar seis mesas de trabajo para abordar con la APG los 16 puntos de las demandas presentadas en días pasados por la dirigencia indígena en temas referidos a comunicación y educación, medio ambiente-TIPNIS, tierra y territorio, autonomías y consulta previa, salud, vivienda y desarrollo productivo y explotación petrolera en el Aguararague. Con este acercamiento se sientan las bases para un acuerdo inicial para proseguir el diálogo. La dirigencia indígena solicita la presencia de los ministros de Educación, Medio Ambiente y Agua, Autonomías, Salud, Desarrollo Rural y Tierras, Justicia y Obras Públicas, Servicios y Vivienda, junto a instituciones que son parte de esas entidades, como la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el INRA, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y otros. La consulta sobre el posible traslado de una comisión ampliada es enviada al gabinete.

El comité cívico de Monteagudo se declara en estado de emergencia por el pedido de la CIDOB y la APG de paralizar obras en la carretera Monteagudo-Muyupampa-Ipati (diagonal Jaime Mendoza) para que se realice una consulta previa, tema que está incluido en el punto 5 del pliego petitorio de la marcha en defensa del TIPNIS.

Sábado 27

En el Totaizal, localidad a la que arriba la marcha, la dirigencia indígena da plazo hasta el domingo 28 para que se efectivice la instalación del diálogo y que, de lo contrario, se iniciarán frentes de bloqueo en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

Lunes 29

En el departamento de Santa Cruz, en el municipio de Cabezas, provincia Cordillera, más de 400 miembros de la APG inician un bloqueo de la carretera internacional Yacuiba - Santa Cruz para exigir al gobierno que instale el diálogo con los indígenas que marchan en defensa del TIPNIS. Más de 70 vehículos quedan varados en el lugar. En horas de la tarde, la policía interviene el bloqueo. El presidente del consejo de capitanes de la APG — Santa Cruz, Ernesto García, advierte que las medidas de presión continuarán y que podrían restablecerse después de la intervención. El dirigente ratifica los puntos del pliego de peticiones y señala que desde su capitánía se solicita al presidente “bajar” para entablar el diálogo y agendar los puntos a tratar. Por su parte, en declaraciones públicas, Evo Morales critica la marcha, señalando que no se trata de una movilización de reivindicación social, sino de “mero turismo” hacia la ciudad de La Paz, por las constantes paradas, los vehículos y las carpas con las que cuentan los marchistas, y señala que él, en su época de

dirigente cocalero, no marchaba con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales ni de empresarios. Por su parte, la ministra de Salud informa que la comisión de médicos que su despacho envió para acompañar a la marcha, con la finalidad de atender cualquier dolencia que podría presentarse, habría sido invitada a abandonar la misma por los manifestantes.

En Oruro, la dirigencia cívica cumple un paro de 24 horas por el diferendo limítrofe entre este departamento y el de Potosí. Desde las primeras horas de la mañana, las calles quedan desiertas, mientras que los centros de abasto y entidades públicas y privadas no abren sus puertas. Únicamente trabajan funcionarios de la gobernación, los choferes y las gremiales, por considerar que la medida no fue de consenso. De manera paralela al paro cívico, la dirigencia de los comerciantes marcha contra un proyecto de ordenanza municipal. El gobernador de Potosí, Félix Gonzales (del MAS), señala que este paro representa un signo de “intolerancia”, indicando que el tema limítrofe sigue su curso a nivel técnico. El presidente Evo Morales convoca a la dirigencia cívica orureña a una reunión en el palacio de gobierno, a través de una carta en la que se especifica que se convoca a no más de diez dirigentes a una cita con el jefe de Estado a las 16 hs. del día 30.

Martes 30

En Santa Cruz, vecinos del distrito 12 cercan la refinería de Palmasola para exigir a la alcaldía el reconocimiento de un dirigente vecinal como delegado ante el comité de vigilancia en lugar de Hermógenes Lupa, al que sindican de no informar de nada a los vecinos. Además, demandan la ejecución de obras municipales. El conflicto se da en medio de una división al interior de las juntas vecinales. La dirigente del otro sector, Loreto Moreno, asegura que esta protesta no tiene razón de ser, pues hace dos semanas este distrito se unió a la demanda del distrito 9 de la construcción de una doble vía pavimentada hasta el ingreso a la refinería, mientras que ahora el pedido se orienta a la ejecución del POA 2011. La provisión de combustible para la ciudad está garantizada hasta el mediodía, si es que la medida continua, según informan autoridades del YPFB.

En Cochabamba, en horas de la noche, en el barrio Alto Mirador, un grupo de personas cerca en virtual situación de rehenes al alcalde de Vinto, Édgar Soliz, a dos concejales y a una decena de funcionarios municipales en demanda de que varias viviendas sean legalizadas en el sector denominado “Colina Ecológica”. Los movilizados exigen que las casas que construyeron sean reconocidas como parte de la mancha urbana del municipio por medio de una ordenanza y que cese la intención de desalojarlos.

Miércoles 31

Una comisión ministerial que viajó a San Borja, Beni, para buscar el diálogo con los indígenas marchistas retorna a La Paz luego de no conseguir reunirse con la dirigencia del sector movilizado. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, ofrece una conferencia de prensa explicando que los indígenas no habrían mostrado su disposición al diálogo. Por su parte, Sacha Llorenti, ministro de Gobierno, cuestiona que los indígenas insistan en mantener su pliego de peticiones, con demandas que considera inatendibles. Por su parte, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, señala que el viaje de la comisión ministerial a San Borja es una prueba de la predisposición que tiene el gobierno a favor del diálogo. Al mismo tiempo, el funcionario reitera la condición del gobierno de dialogar sólo con una representación de los marchistas y no con todos, pues considera que hablar con 700 u 800 personas sería “una pérdida de tiempo”. Además, Canelas reitera que no se puede atender el pedido de paralizar la explotación de hidrocarburos y detener los trabajos en otras carreteras del país, y al mismo tiempo informa que el gobierno está proponiendo la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa para evitar asentamientos en el TIPNIS.

En La Paz, alrededor de 300 estudiantes de la facultad de ciencias sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) marchan contra el “etnocidio” del TIPNIS, bajo las consignas “estamos en las calles apoyando a los indígenas” y “el TIPNIS no se toca”.

En Cochabamba, desde el mediodía, más de 500 vecinos de la zona de El Paso bloquean la carretera a La Paz, a la altura del retén de Piñani, exigiendo la devolución de 14 pozos de agua que explota desde hace 20 años el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA) explota dejando en escasez a las más de 40 mil familias que habitan la zona, para así aprovisionar de agua a la ciudad de Cochabamba. Los manifestantes esperan la llegada de una comisión de la gobernación y del municipio. Entretanto, dirigentes informan que sus pozos tienen 60 metros y que se están secando, por lo que necesitan fuentes de agua para el consumo humano y la producción agrícola. Explican que, en el distrito 8 de El Paso, tienen 14 pozos de 430 metros de profundidad y que se estarían yendo unos 400 litros por segundo a la ciudad, mientras la gente del lugar no recibe algún beneficio de los mismos.

Glosario de siglas

ABC	Administradora Boliviana de Carreteras
ABT	Autoridad de Bosques y Tierras
ACB	Automóvil Club Boliviano
APG	Asamblea del Pueblo Guaraní
ASFI	Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
ASOBAN	Asociación de Bancos Privados de Bolivia
ASOSUR	Asociación de Surtidores de Santa Cruz
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
COB	Central Obrera Boliviana
CODECAM	Coordinadora Departamental para el Cambio
COMCIPÓ	Comité Cívico Potosinista
CONAMAQ	Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
CONISUR	Consejo Nacional del Sur
COR	Central Obrera Regional
CPS	Caja Petrolera de Salud
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
EFO	Empresa de Ferrocarril Oriental
EMAPA	Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
EPSAS	Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento
FF.AA.	Fuerzas Armadas
FEJUVE	Federación de Juntas Vecinales de El Alto
FSCIPAY	Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios Yapacaní
FSUTCSC	Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz
	Apiguaiki Tumpa
INE	Instituto Nacional de Estadísticas
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
MAS	Movimiento al Socialismo
MSM	Movimiento Sin Miedo
OEA	Organización de Estados Americanos

OTB	Organizaciones Territoriales de Base
POA	Plan Operativo Anual
PROSOL	Programa Solidario
SEMAPA	Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba
SIREMU	Sistema de Regulación Municipal
TIPNIS	Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé
TSE	Tribunal Supremo Electoral
UIB	Universidad Indígena Boliviana
UMSA	Universidad Mayor de San Andrés
UTOP	Unidad Táctica de Operaciones Policiales
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinadoras: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes: Los Tiempos, La Razón, ABI y El Deber.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL
Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Bolivia

Septiembre de 2011

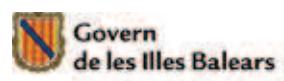
Editada en diciembre



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears
Conselleria d'Afers Socials;
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 990

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Bolivia***



Integrantes

Pilar Uriona Crespo

Dunia Mokrani Chávez

Fuentes

Los Tiempos

La Razón, Bolpress

ABI

El Deber

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Septiembre de 2011

Viernes 2

Una comisión de alto nivel conformada por cinco ministros y por representantes de los indígenas que marchan en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) acuerda iniciar el diálogo para tratar los 16 puntos del pliego petitorio presentado por los habitantes del parque. Después de cinco intentos infructuosos se da comienzo al debate fijando la instalación de la primera mesa para el sábado 3 en la población amazónica de San Borja. Para esa primera instancia de diálogo viajarán a la mencionada población el ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Luis Sánchez, y el de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), Clíver Rocha. Los tramos I y III de la carretera que unirá el centro subandino y el nordeste amazónico están ya en ejecución, mientras que las comunidades del TIPNIS se oponen a que el tramo II atraviese la reserva natural, argumentando daños a su *hábitat* y el saqueo de recursos naturales, principalmente de maderas. Por esa razón, los pueblos originarios iniciaron su marcha de protesta desde hace 18 días.

Sábado 3

En San Borja, se reúne la comisión gubernamental de alto nivel para presentar la explicación técnica de las alternativas para la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Después de más de ocho horas de debate, durante el cual el gerente de la ABC, Leonardo Ossío, y la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, explicaron las alternativas del trazo carretero en la parte técnica y de impacto medioambiental, se determina suspender la reunión hasta el próximo domingo para escuchar la posición de los indígenas que marchan desde hace 20 días en dirección hacia La Paz.

En Cochabamba, autoridades departamentales, dirigentes de organizaciones sociales, cívicas y vecinales de la ciudad y del área rural realizan una marcha de respaldo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Luego de movilizarse por distintas calles de la ciudad, los manifestantes se concentran en un acto durante el cual califican de vital a la necesidad de integración territorial y, a tal fin, que se realice el camino carretero que conectaría a Cochabamba con Beni.

Domingo 4

Los indígenas que marchan en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos ratifican su decisión de evitar que esa vía atraviese el TIPNIS y declaran un cuarto intermedio movilizado hasta que el gobierno revise su posición y proponga un trazo por fuera del parque nacional. Luego de señalar que no están en contra de la construcción de una carretera que uniría el departamento central de Cochabamba con la región amazónica del Beni, los indígenas remarcan que la misma, sin embargo, no deberá afectar el TIPNIS, dado que, de lo contrario, pondría su “territorio bajo amenaza” e implicaría un peligro para “la vida misma y la de las futuras generaciones”.

Lunes 5

El presidente Evo Morales anticipa su decisión de realizar una consulta a los pobladores del TIPNIS sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Según el jefe de Estado, desde el poder ejecutivo se respetarán las normas internacionales y, sobre todo, la voluntad de los pobladores del TIPNIS respecto a la implementación del proyecto, por lo que el primer mandatario invitará a observadores de organismos internacionales para que sean testigos de la consulta en el marco de los convenios suscritos por Bolivia con la comunidad mundial. El tramo I de esa carretera de 306 kilómetros tiene licencia ambiental y, por lo tanto, comenzará a ser construido, mientras que contra de la realización del tramo II, el que debería pasar por el TIPNIS, se han manifestado algunos pueblos indígenas que habitan el territorio por el alto impacto ambiental del proyecto y por temor a avasallamientos.

En La Paz, el cabildo convocado por los municipios de Achocalla, Mecapaca y Palca, los tres municipios que desde hace meses enfrentan un conflicto por límites territoriales, comienza a la alcaldía de La Paz a retirar sus subalcaldías en 48 horas, porque estas últimas, así como asegura, estarían avasallando la autonomía administrativa de sus territorios, por representar sus autoridades a la alcaldía de La Paz y no a las suyas. Asimismo, los tres municipios declaran al alcalde de La Paz, Luis Revilla, al jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, y al diputado de esa misma fuerza política, Fabián Yaksic, “personas *non gratas*” en esas localidades. La resolución señala también que se debe “formalizar orgánicamente la declaratoria de estado de emergencia a toda la provincia Murillo hasta que se logre definitivamente frenar el avasallamiento de la alcaldía de La Paz a la jurisdicción de los municipios de Palca, Mecapaca y Achocalla”. Por otro lado, el documento demanda frenar la contaminación del río Choqueyapu y del relleno sanitario de Alpacoma. La resolución del cabildo convoca a otras poblaciones a unirse a la lucha para defender sus territorios de la alcaldía de La Paz.

Martes 6

En Cochabamba, la provisión de agua para 160 mil familias de la zona sur de la ciudad de Cochabamba queda en riesgo luego de que habitantes de la región de El Paso, en Quillacollo, se declarasen en pie de guerra y amenazaran con cortar el suministro para lograr la devolución y el aprovechamiento de 18 pozos profundos en su región. Asimismo, los vecinos de la zona emiten una resolución en la que demandan que el uso de los pozos abiertos hace 15 años en El Paso vuelva bajo control de los habitantes del lugar dedicados a la agricultura, con lo que quedaría cortado el suministro de agua al área sur de la urbe cochabambina. El comunicado público es lanzado porque las autoridades del viceministerio del Agua, la gobernación de Cochabamba y el concejo municipal de Cercado dejaron “plantados” a los representantes del área al momento de realizarse una nueva reunión para buscar una solución al problema. Por su parte, el alcalde del municipio de Cercado, Edwin Castellanos, anuncia que un equipo técnico irá a la zona para ofrecer soluciones y así evitar que se cumpla la amenaza de los movilizados. La resolución vecinal surge de manera casi paralela a la solución de otro problema provocado por los comunarios de Chapisirca, en la parte alta de Tiquipaya, quienes, desde el pasado domingo, cerraron las válvulas de provisión de agua de la represa de Escalerani por el incumplimiento de varias promesas gubernamentales. Una comisión liderada por el jefe de coordinación con los movimientos sociales de la gobernación de Cochabamba, Feliciano Vega Monte, logra la firma de un acuerdo para reactivar proyectos productivos, de construcción y de mejoramiento de caminos en el lugar, los mismos que fueron prometidos hace meses por la primera entidad regional y el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA).

En Oruro, la Federación Departamental de Comerciantes Minoristas protagoniza una marcha de

protesta y posterior bloqueo de las calles de ingreso a la plaza 10 de Febrero, en demanda de una audiencia con la alcaldesa Rossio Pimentel. La movilización, la segunda medida de protesta de los comerciantes minoristas en menos de 15 días, se realiza en rechazo al proyecto de ordenanza de control y regularización de actividades económicas en el departamento, el mismo que fue elaborado por la unidad de recaudación del municipio con el objetivo de lograr mayores ingresos, tener un diagnóstico fidedigno de toda actividad económica y que esta misma funcione en el marco de las normas vigentes. Los comerciantes minoristas y los gremialistas consideran que la nueva normativa los perjudicará en sus actividades y que incluso pretende sancionarlos con multas elevadas. La molestia de los comerciantes se debe a que las autoridades municipales convocaron a una reunión de socialización del proyecto de ordenanza a la que no se presentó la alcaldesa, quien, junto a sus técnicos, debía explicar qué se pretende con la normativa.

Los dirigentes de los indígenas que marchan desde el departamento amazónico de Trinidad hacia La Paz en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos rechazan una vez más los planteamientos de la comisión gubernamental y deciden ratificar el cuarto intermedio para así continuar la medida de protesta que iniciaron el 15 de agosto pasado. En conferencia de prensa, el líder de la Confederación Indígena de los Pueblos del Oriente de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, asegura que los ministros abandonaron el diálogo y enviaron una carta en la que niegan la posibilidad de que el presidente Evo Morales se presente en la columna de la marcha, como ellos mismos habían pedido una vez más. A su juicio, los indígenas habían reiniciado el diálogo con la comisión gubernamental de “buena fe” y a solicitud de los ministros que conforman esa comitiva, pero sólo enviaron una carta después de un cuarto intermedio pedido por ellos. Luego de una reunión sostenida entre el comité político de la octava marcha y la comisión de alto nivel del gobierno, reunión durante la cual se rechazaron todas las propuestas de este último, no llegándose a presentar otra alternativa se solicitó la presencia del primer mandatario como único instrumento para dar continuidad al dialogo. Paralelamente, la CIDOB ratificó la necesidad del proceso de consulta con los actores involucrados en aplicación de la Constitución Política de Estado (CPE) y las normativas internacionales.

En La Paz, representantes de los pueblos indígenas de la nación Mosetén dan a conocer un pronunciamiento en el que esta comunidad apoya la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que atravesará el TIPNIS y piden a los marchistas que dialoguen con el gobierno para acordar un trazo que preserve el medio ambiente y consolide el desarrollo de esa región amazónica. Asimismo, aseveran que los pueblos indígenas Mosetén están de acuerdo con la realización de una consulta a las 64 comunidades que integran el TIPNIS para verificar el apoyo a la construcción de la carretera.

En La Paz, el director de gobernabilidad de la alcaldía, Pedro Susz, ratifica que esta instancia no cerrará las subalcaldías de los municipios de Achocalla, Mecapaca y Palca, ni el relleno sanitario de Alpacoma, por encontrarse los mismos dentro de la jurisdicción de la ciudad sede de gobierno, indicando a la vez que se tomarán las medidas necesarias para resguardar las instalaciones y proveer de seguridad a los funcionarios.

Desde La Paz, el gobierno nacional insta a los representantes de los pueblos indígenas del oriente a presentar una alternativa técnica para la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), mientras que confirma el reinicio del diálogo con la dirigencia de la CIDOB y la decisión política de concretar la construcción de la carretera, la que a la vez requiere de decisiones técnicas que viabilicen el proyecto.

En Santa Cruz, un grupo de vecinos de los barrios El Recreo, Villa Flor, El Mesón y Las Lomitas realiza una marcha y termina bloqueando la avenida Paurito en protesta porque la subalcaldesa del distrito 13, Blanca Méndez, los demandó por tentativa de homicidio y desacato, por lo que deben

acudir a declarar ante el ministerio público. Los manifestantes indican que la autoridad no cumple con la ejecución de obras contempladas en el Plan Operativo Anual (POA), por lo que piden al alcalde Percy Fernández que la destituya. A su turno, Méndez señala tener pruebas de la ejecución de obras y de que sus detractores sólo buscan desestimigarla.

Miércoles 7

En Cochabamba, autoridades de la gobernación y técnicos de SEMAPA inician un diálogo con los vecinos de El Paso, en Quillacollo, para solucionar la pugna por el control de varios pozos profundos de agua. La primera jornada de diálogo viabiliza la conformación de una instancia técnica que deberá realizar un informe sobre cuánto de agua proveen los pozos en pugna, su capacidad de bombeo y cómo sería posible distribuirla de mejor manera. Los resultados finales serán expuestos el viernes 9 por la tarde, por lo que queda suspendida la amenaza de corte en la provisión del líquido para más de 160 mil familias del sur de la ciudad de Cochabamba que se abastecen de los pozos de El Paso. La definición del cuarto intermedio se produjo luego de que los habitantes del sector visitaran el lugar en que se hallan tres pozos y pidieran que no se perfore más por el temor de que su provisión actual quede afectada.

Jueves 8

En la población de San Borja, el gobierno nacional decide ampliar su propuesta de solución al conflicto del TIPNIS incluyendo ocho ejes de acuerdo enfocados a la atención de las demandas del sector indígena y para garantizar la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos con altos cuidados medioambientales. Sin embargo, los dirigentes indígenas insisten en proseguir la marcha de protesta entre Trinidad y La Paz que comenzó el 15 de agosto pasado. Los ejes de acuerdo que propone el gobierno son: 1) el reconocimiento mutuo, en sentido de que la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos tiene por un lado características estratégicas para el Estado y, por el otro, se reconoce la preocupación de las comunidades indígenas del TIPNIS por los impactos ambientales y sociales que la misma produciría; 2) el gobierno ratifica su posición para estudiar otras alternativas para el diseño del tramo II de la vía; 3) el gobierno se compromete a velar por mejores mecanismos para evitar, mitigar y reparar los posibles daños a producirse por la construcción de la carretera; 4) el gobierno se compromete con las organizaciones indígenas a trabajar conjuntamente para solucionar problemas que se podrían producir, como en el caso de avasallamientos; 5) el gobierno asegura que la consulta será abierta, transparente e informada con todas las comunidades del TIPNIS, invitando a observadores nacionales e internacionales; 6) se proponen dos leyes para preservar el *hábitat*, una de desarrollo y construcción de calidad de vida y la otra de protección al TIPNIS; 7) se propone tratar los 16 puntos incluidos en el pliego petitorio de la CIDOB en seis mesas; y, 8) el gobierno considera que, una vez tratados los puntos, se tendrían las condiciones necesarias para la firma de acuerdos y, en consecuencia, el levantamiento de las medidas de presión.

Viernes 9

El comandante general de la Policía Boliviana, Jorge Santiesteban, señala que “un contingente de 400 policías que no portan sus armas de reglamento está en alerta en Yucumo para evitar un enfrentamiento entre colonos e indígenas”. Los colonizadores demandan diálogo y continuidad en la construcción de la carretera San Borja-Rurrenabaque, mientras que la marcha indígena exige la paralización de esta obra, la misma incluida entre las 16 demandas planteadas al gobierno. Para prevenir contingencias en el punto de bloqueo, los efectivos policiales no llevan armas de

reglamento. Asimismo, el comandante señala que el policía que no acate la orden superior será sometido a un proceso disciplinario bajo la Ley 101. Las fuerzas del orden portan equipos antimotines, escudos humanos, armas lanza gases o agentes químicos y chalecos anti fragmentarios para impedir actos de violencia entre colonizadores e indígenas.

En Oruro, las pugnas entre la alcaldesa Rossio Pimentel y los concejales se agravan debido a que ambas partes se acusan públicamente de aumentarse los recursos. La alcaldesa Pimentel plantea disminuir su sueldo a 5 mil bolivianos y pide a los concejales, la mayoría integrantes del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), a rebajar sus sueldos al mismo monto. Dicha propuesta es consecuencia de la discusión que originó el incremento de los presupuestos del concejo para la gestión 2012. Pimentel afirma haber “aceptado un reto del presidente del concejo [Germán Delgado] de rebajar los sueldos” y que ella “acepta y hace una propuesta de que los concejales rebajen [el suyo]”. La alcaldesa de Oruro percibe un salario mensual de 10 mil bolivianos y los concejales municipales uno de 9.200. Se aclara que la alcaldesa, del opositor MSM, no tiene gastos de representación, como era el caso de alcaldes de otras gestiones, un monto que representaba el 40% del sueldo asignado.

En Cochabamba, el diálogo para la solución del conflicto que enfrenta a vecinos de El Paso, en Quillacollo, con las autoridades del municipio de Cercado por el control del agua de varios pozos profundos entra en cuarto intermedio. La búsqueda de una solución al problema se prolonga por más de 11 horas en un encuentro a puerta cerrada, que cuenta con la participación de representantes del Ministerio de Agua y Medio Ambiente y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). El encuentro congrega también a autoridades de los municipios de Quillacollo y Cercado, la empresa Misicuni, el servicio municipal de agua potable y alcantarillado y los vecinos de El Paso. El debate hace posible que las partes del conflicto expongan sus criterios y la documentación legal y técnica para sostener sus posiciones. Los comunarios de El Paso demandan la recuperación del control pleno de cerca de 18 pozos profundos perforados en su región desde hace 15 años, mientras que las autoridades de la ciudad de Cochabamba se niegan a entregarlos porque ahora proveen de agua a más de 160 mil familias de la zona sur urbanizada. Asimismo, el gobernador de Cochabamba explica que los representantes de las dos partes analizarán la información proporcionada, así como varias propuestas de solución, con el apoyo de una comisión conformada por equipos del Ministerio de Agua y Medio Ambiente y los municipios de Cercado y Quillacollo. Los miembros de esa instancia tendrán que presentar un plan de trabajo sobre la posibilidad de alternativas, plan que tendrá más insumos una vez realizados una visita al lugar de los pozos profundos y un encuentro previo entre vecinos y autoridades.

El gobernador de La Paz, César Cocarico, convoca nuevamente a los alcaldes de los municipios de Achocalla, Palca, Mecapaca y La Paz a dialogar el próximo lunes 12 de septiembre para buscar soluciones al problema limítrofe entre esas comunas. Asimismo, el funcionario asegura que la invitación al alcalde de La Paz, Luis Revilla, fue enviada aunque la asamblea de la Paceñidad le haya prohibido asistir a encuentros convocados para resolver el conflicto.

En Santa Cruz, más de 70 personas, entre familiares y víctimas de negligencia médica, realizan una marcha por las calles del centro de la ciudad para demandar sanciones más severas contra los responsables de mala praxis y la promulgación de una ley relacionada con el tema. Muchos de ellos piden hasta 30 años de cárcel para los responsables, mientras que otros muestran fotografías de cómo eran sus seres queridos antes de quedar postrados en sillas de ruedas o con daño cerebral. La marcha inicia en la plaza 24 de Septiembre y culmina fuera del palacio de Justicia. En los próximos días se esperan marchas similares en La Paz, Tarija y Potosí.

Sábado 10

Las comunidades interculturales de Bolivia piden a los pueblos del TIPNIS reinstalar la mesa de diálogo con el gobierno para resolver el conflicto sobre el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En declaraciones al canal estatal, el ejecutivo de la confederación de comunidades interculturales, Pedro Calderón, insta a los marchistas a aceptar la convocatoria al dialogo que el gobierno insiste en plantear, todavía sin éxito, al mismo tiempo que aclara que no habrá ningún enfrentamiento. Paralelamente, en un ampliado de emergencia, las comunidades de Yucumo, departamento del Beni, deciden radicalizar el bloqueo de caminos con el objetivo de presionar a los indígenas marchistas para que dialoguen con el gobierno y acuerden el trazado del segundo tramo.

En San Ignacio de Moxos, los ministros de la Presidencia y de Obras Públicas, Carlos Romero y Walter Delgadillo, respectivamente, se reúnen con más de un centenar de marchistas indígenas del oriente que decidieron abandonar la movilización. Delgadillo señala haber sido convocado por los marchistas para escuchar su posición y las causas de su decisión de retirarse de la caminata que comenzó el pasado 15 de agosto en Trinidad y que, al momento, se encuentra en San Borja. El ministro menciona que los marchistas expresaron a las autoridades su descontento con los dirigentes de la CIDOB por haberse negado a proseguir el diálogo con el gobierno para lograr acuerdos sobre la carretera que unirá a las poblaciones de Villa Tunari, Cochabamba, y San Ignacio de Moxos, Beni.

Lunes 12

En Trinidad, Beni, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Juan Acosta, convoca a una marcha para el día 15 en apoyo a los originarios que se dirigen a La Paz en oposición a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Se espera contar con la asistencia a la marcha de las organizaciones afiliadas al ente laboral para así organizar el bloqueo de la carretera Trinidad-Santa Cruz en apoyo a las demandas del movimiento indígena.

En Tarija, trabajadores administrativos de la Universidad Juan Misael Saracho (UJMS) ingresan a la cuarta semana de paro en demanda de un incremento salarial del 11% y retroactivo al mes de enero, esto debido a que la última asamblea no dio ninguna solución al pedido de aumento de sueldo para los administrativos del centro educativo. Asimismo, docentes y administrativos anuncian una asamblea en la que podrían adoptarse nuevas medidas de presión. Por su lado, el rector interino de la UJMS, Ricardo Colpari, menciona haber formulado una propuesta a docentes y administrativos de un incremento salarial del 3,5% para esta gestión.

Los líderes originarios que abandonaron la marcha indígena en oposición a la construcción de la carretera VillaTunari-San Ignacio de Moxos deciden solicitar al gobierno nacional iniciar un diálogo el próximo viernes 16 en la comunidad Santo Domingo, ella misma parte del TIPNIS. La invitación formal ha sido firmada por los corregidores y enviada al gobierno nacional. Se estiman en más de 100 los marchistas que se replegaron a sus comunidades y a quienes se presta ahora asistencia para que retornen y organicen la concentración en Santo Domingo.

En La Paz, el gobierno de Evo Morales acepta la nueva demanda de los marchistas del TIPNIS de enviar una séptima comisión gubernamental de alto nivel encabezada por el canciller, David Choquehuanca, quien, junto a los ministros de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, y de la Presidencia, Carlos Romero, buscará concertar el diálogo sobre el pliego petitorio de 16 puntos. En conferencia de prensa dictada en el Palacio de Gobierno, Romero señala que el ejecutivo ha

respondido favorablemente a la solicitud oficial de los dirigentes del TIPNIS de que el proceso de diálogo entre el gobierno y la representación de los marchistas sea liderado por el canciller.

Martes 13

La Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de Música (ABAITEM), filial Oruro, instala un piquete de huelga de hambre en el kiosco de la plaza de armas 10 de Febrero, en protesta porque el municipio local no pagó aún los premios a los ganadores del XIXº festival nacional de la canción boliviana “Aquí canta Bolivia”, en 2010. En dicha ocasión se presentaron diez categorías, cada una dotada con premios en efectivo a partir de mil bolivianos y cuyo monto total sumaba los 60.900. La alcaldesa Rocío Pimentel acusa al concejo municipal de no viabilizar la homologación del convenio para efectivizar el pago de los premios, al tiempo que firma con los artistas de Oruro un acuerdo para cancelar los premios a los ganadores del festival del 2010. El compromiso es asumido por Pimentel tras 10 meses de dilatar el problema zanjado con el desembolso de 60.900 bolivianos comprometidos por el municipio de Oruro. Durante la reunión, la alcaldesa ratifica su predisposición de cancelar los premios “porque los recursos están en el POA y solo restaba la aprobación del convenio [entre la alcaldía y la gobernación]”.

En San Isidro de la Embocada, la comisión ministerial enviada por el presidente Evo Morales inicia un nuevo diálogo con los principales dirigentes de los pueblos indígenas del oriente. Dicha comisión está integrada por los titulares de Relaciones Exteriores, de la Presidencia y de Obras Públicas, David Choquehuanca, Carlos Romero y Walter Delgadillo, respectivamente. A su vez, la delegación de dirigentes indígenas está conformada por el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, el diputado Pedro Nuni, el dirigente de la Confederación Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quispe, y por los presidentes de las comunidades indígenas del oriente.

Miércoles 14

La viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, anuncia el asenso del presidente Evo Morales a la invitación de la dirección de la subcentral del parque Isiboro Sécuré para que discuta con ellos en la población de Santo Domingo sobre diversos temas, entre los cuales la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La invitación fuera formulada por pobladores del TIPNIS que formaban parte de la marcha indígena que se opone a la construcción de esa carretera y que partió el pasado 15 de agosto de Trinidad, dirigiéndose hacia La Paz, los mismos que decidieron dejar la movilización por entrar en desacuerdo con sus dirigentes.

Jueves 15

La carretera Trinidad-Santa Cruz amanece bloqueada por campesinos y organizaciones que demandan atención a seis puntos, básicamente referidos a la dotación y saneamiento de tierras, entre los cuales destacan el pedido de renuncia de la directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la responsable regional de la ABT, por la poca atención del INRA respecto de la titulación de sus propiedades, por un lado, y las trabas de la ABT para que puedan proceder a chaquear y luego sembrar, por el otro, siendo la actual la época para hacerlo. Otro de los puntos tiene que ver con la deuda de tres millones de bolivianos que la gobernación del Beni mantiene con el municipio de San Andrés. Igualmente, los campesinos piden la desconcentración del Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM), en el marco de la implementación de una autonomía plena.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, ratifica que el paro cívico convocado por la asamblea de la Paceñidad y la municipalidad para el viernes 16 próximo se realizará como fue programado y solicita al Ministerio de Educación que instruya a las unidades educativas a suspender las clases. Según el alcalde, el conjunto de las organizaciones sociales “más grandes e importantes” de la ciudad acatarán el paro y se movilizarán en demanda de respeto a las autoridades de la alcaldía. Además, el funcionario pide a los padres de familia no enviar sus hijos a clases y que tampoco asistan a sus fuentes laborales.

El despliegue táctico de la policía en la ruta hacia La Paz y la movilización de colonizadores en Yucumo alertan a los marchistas indígenas, quienes temen una repentina intervención policiaca contra de la marcha que actualmente acampa en La Embocada. Debido a la alerta, los originarios se declaran en vigilia. Mientras, se presenta en Yucumo un contingente de 465 efectivos policiales en relevo de la anterior compañía. Paralelamente, un grupo de dirigentes de los colonizadores llega hasta La Embocada, cuya presencia moviliza a la guardia indígena, la cual obliga a los campesinos a retirarse del lugar poco antes de la llegada de la comisión de diálogo del gobierno, presidida por el canciller Choquehuanca.

Viernes 16

En la población de Santo Domingo, el presidente Evo Morales inicia reuniones con las comunidades del TIPNIS para conocer de manera directa sus expectativas sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y otras demandas, atendiendo de esta manera una invitación de los pobladores del parque nacional. El jefe de Estado llega a Santo Domingo acompañado del ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, de la viceministra de Medio Ambiente, Chyntia Silva, y del gerente de la ABC, Antonio Mullisaca, quienes explican la posición del ejecutivo respecto a la construcción de la carretera, considerada una respuesta a la necesidad de integración nacional.

En La Paz, el paro cívico se cumple de forma contundente, muestra del rechazo de los ciudadanos de la urbe a las amenazas vertidas en el cabildo convocado por los municipios de Achocalla, Palca y Mecapaca para reclamar “límites ancestrales”.

En Santa Cruz, representantes de diversas instituciones sociales adhieren a la protesta contra la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en una vigilia instalada en la plaza principal de Santa Cruz en apoyo de los intereses de los pueblos indígenas. Por su parte, la dirigente indígena Justa Cabrera señala que la reunión sostenida con el presidente Evo Morales alejó más a los indígenas del diálogo con el gobierno. Tras siete intentos oficiales por reanudar el diálogo con los marchistas, el primer mandatario se encontró el viernes pasado en la localidad de Santo Domingo, Beni, con marchistas que habían abandonado la medida de protesta a principios de semana.

Los indígenas del TIPNIS permanecen varados en la zona de La Embocada a la espera de que sus dirigentes definan respuestas a un comunicado enviado por el gobierno la noche del jueves 15, el cual contenía 12 hojas por revisar y 16 respuestas del ejecutivo a las otras tantas demandas de los indígenas, quienes, esencialmente, rechazan el paso del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS.

Domingo 18

El ministro de la Presidencia informa que el gobierno plantea a los marchistas del TIPNIS tres opciones para retomar y viabilizar el diálogo mediante mesas de trabajo, las mismas que suponen: el envío de una comisión de diálogo y negociación por parte de la marcha indígena para trabajar con el gobierno en la ciudad de La Paz, la instalación de comisiones de trabajo en el lugar donde se encuentra la marcha y la realización de comisiones de trabajo en la localidad de San Borja, departamento del Beni.

El presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes, César Aguilar, instruye un corte de las rutas que conectan el sur y este de Bolivia con Argentina, región del Chaco boliviano, en apoyo a la marcha indígena en oposición a que una carretera cruce el TIPNIS en el área de la Amazonía. En Yacuiba, miembros de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) comienzan los bloqueos de los caminos que unen Yacuiba, Santa Cruz y la Argentina, exigiendo que el gobierno atienda a los marchistas.

En La Paz, la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, confirma que un militar resultó herido durante un enfrentamiento que sostuvieron efectivos del Control Fronterizo y contrabandistas, en la franja andina limítrofe entre Bolivia y Chile, a la altura del Salar de Uyuni, departamento de Potosí. La agresión de parte de grupos de contrabandistas se debería a que el control ha extinguido sus actividades y a que se está optando por medidas mucho más agresivas que terminan por afectar la integridad física de los soldados. La ministra señala también que los militares instalados en la región fronteriza serán equipados para que enfrenten en mejores condiciones al contrabando, que merma el erario público, en lo que a tributos refiere, por acerca de mil millones de dólares, según estimaciones oficiales.

Se cumple el día número 34 de la “VIII Marcha Indígena”, la misma que llega a la zona de Limoncito. La mayoría de los marchistas dejó La Embocada y se acercó a seis kilómetros de la entrada a Yucumo, hecho que moviliza a la policía y a los colonizadores, quienes bloquean el puente San Lorenzo. Estos últimos anuncian que una contramarcha se va a desprender de Yucumo para obligar a los dirigentes indígenas a retirar cinco demandas de su pliego petitorio, mientras que los dirigentes de los “bloqueadores” declaran estar dispuestos a dialogar con los marchistas y hasta apoyarlos en sus demandas ante el gobierno si retiran de sus peticiones cinco puntos, es decir: la paralización de la construcción de la carretera que atravesará el TIPNIS, el cobro de ingresos por el aire limpio que producen sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO), el retiro de colonos de las TCO, la paralización de actividades petroleras en el parque nacional Aguaragüe y la descentralización del fondo indígena para los pueblos de tierras bajas. Por su lado, los marchistas de ningún modo quieren negociar los puntos mencionados con los colonos.

Lunes 19

En La Paz, trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) cumplen una huelga general y la toma de las oficinas centrales en protesta por la designación, sin haberseles consultado, de un nuevo presidente de esa repartición estatal y en rechazo a un artículo en la nueva Ley Minera que, a su juicio, apunta a la desintegración de la misma. Los trabajadores de la COMIBOL demandan también una mejora salarial, dado que, desde el 1998, no han sido favorecidos con ningún aumento de sueldo.

La Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia (CCIB) ratifica estar en vigilia y no tener la “mínima intención” de enfrentarse con los pobladores del TIPNIS que marchan en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Asimismo, la CCIB explica que se realizan ampliados permanentes a la espera de que los marchistas acudan al diálogo y

remarca que en la vigilia participan representantes de la federación de Yucumo, Rurrenabaque, Ixiamas, la Voz de Iturralde y Palos Blancos, así como anuncia la adhesión de delegados de Alto Beni y Caranavi, “todos exigiendo siempre que los marchistas vayan al diálogo”.

Martes 20

El presidente de la brigada parlamentaria de La Paz, Roberto Rojas, anuncia que esa instancia propiciará una reunión entre autoridades del gobierno municipal de El Alto, representantes del órgano ejecutivo y dirigentes de Consejo Distrital de Juntas Escolares (CODIJE), para solucionar el conflicto del Distrito 8 que derivó en el bloqueo de la carretera La Paz-Oruro. Dicho conflicto ha sido propiciado por las juntas escolares de tres distritos de El Alto, en demanda de infraestructura educativa. El bloqueo impide el tráfico de vehículos y la salida de camiones que distribuyen gas licuado y gasolina a la ciudad de La Paz, aledaña a El Alto. Asimismo, el legislador manifiesta la necesidad de entender que las demandas de infraestructura y proyectos sociales que requieren de mucha inversión deberán ser inscritas en el POA de la siguiente gestión, por lo que insta al diálogo para concertar soluciones al pliego petitorio de diez puntos.

La marcha en defensa del TIPNIS sale de su campamento de Limoncito con la expectativa de pasar la contención de la policía y sortear el bloqueo del puente San Lorenzo de Yucumo. Cuando se cumple más de un mes de movilización, bajo el anuncio del cerco policial que, según los uniformados, busca evitar enfrentamientos entre marchistas y colonos, el movimiento originario ha definido seguir su paso hacia La Paz sin cerrar la posibilidad de resolver el conflicto con el gobierno por la vía del diálogo. La posición de los marchistas es clara: sí al diálogo, pero sin bloqueo de colonizadores, sin contingente policial y a realizarse en Quiquibey, una localidad ubicada en el límite entre Beni y La Paz, 43 kilómetros más delante de Yucumo.

Indígenas de tierras bajas realizan bloqueos en las vías principales del Chaco y la amazonia boliviana. En Yacuiba y Urundaiti se registran enfrentamientos entre guaraníes y efectivos policiales, con el saldo inicial de dos uniformados heridos. En La Paz, activistas alteños que apoyan a los marchistas son reprimidos por agentes en la plaza Murillo. Mientras tanto, el CONAMAQ, que apoya la marcha en contra del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, acude ante la oficina de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (Suiza) para denunciar al gobierno por la violación a los derechos de los habitantes del TIPNIS y anuncia que el bloqueo de carreteras se replicará pronto en las rutas del occidente del país. Asimismo, en Santa Cruz, provincia Cordillera, alrededor de 500 guaraníes de diferentes comunidades bloquean el paso de vehículos en la zona de Urundaiti, algunos kilómetros antes de Camiri. Posteriormente, un contingente policial de 150 efectivos que intenta despejar la ruta es repelido por los indígenas, con el saldo de dos uniformados heridos al recibir piedrazos en diferentes partes del cuerpo. Igualmente, los indígenas de Riberalta inician un bloqueo de la carretera que vincula a la Amazonia con el interior del país, en apoyo a los marchistas del TIPNIS. Además, organizaciones indígenas del altiplano ratifican su convocatoria a bloquear las rutas de esa región en apoyo a la marcha.

En La Paz, continúa en el distrito 8 de El Alto el bloqueo en la zona Senkata instalado por los padres de familia en demanda de infraestructura educativa, la misma que no obtuvo respuestas claras por parte del gobierno y de la alcaldía. Ante este panorama, se suspenden hasta nuevo aviso los viajes desde la terminal de buses de La Paz hacia al interior del país. En la carretera, las personas tienen que caminar para pasar el lugar de bloqueo y hacer trasbordos, mostrando su molestia con la medida de presión. Los padres de familia alteños amenazan con quedarse a pernoctar en el lugar si es que su demanda no queda atendida.

Una muralla humana de policías antimotines bloquea la marcha indígena desde las 13 hs. y a 300 metros de otro cerco policial que retuvo a una contramarcha de colonizadores. La medida responde, así como aseguran las autoridades del operativo, a una instructiva del gobierno nacional. Dos horas y media antes, la contramarcha de bloqueadores de Yucumo había llegado hasta el lugar exigiendo a punta de dinamitazos que el movimiento originario retirara las cinco demandas principales de su pliego petitorio de 16 puntos, entre estas el rechazo al tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Ni la policía, ni la fiscalía decomisaron los cartuchos de dinamita arrojados por los colonos a unos pasos de los uniformados. Las amenazas y la falta de control de la policía sobre el manejo de cartuchos de dinamita, así como el perjuicio a transeúntes desprevenidos que se vieron retenidos en Chaparina, subieron la tensión en esta intersección del camino hacia Yucumo. Después de 36 días de marcha indígena y de 20 días de bloqueo en Yucumo, ambas organizaciones quedan frente a frente, a unos 300 metros de distancia, separados por los cercos policiales. Alrededor de 300 colonizadores interculturales cargan palos, petardos y dinamita para interceptar a los indígenas que exigen al gobierno el respeto de sus derechos. Del otro lado, la columna indígena había dejado el campamento de Limoncito con algo más de 700 manifestantes cargados de arcos y flechas. Hay que subrayar que, hasta ahora, la marcha se ha mantenido pacífica. La policía negó a los indígenas la provisión de agua del arroyo Chaparina, hecho calificado de “atentado contra la vida humana” por los observadores de la iglesia católica y representantes de la asamblea de derechos humanos, allí presentes.

Miércoles 21

En Cochabamba, se realiza un cabildo en la localidad El Paso para definir la pugna vigente hace semanas entre comunarios del lugar y las autoridades del municipio de Cercado, por el control de varios pozos de agua. Durante la jornada se reanuda el diálogo para buscar una solución al conflicto que se centra en la demanda de los comunarios de El Paso por recuperar casi 21 pozos que actualmente dotan de agua a la zona Sud de la ciudad de Cochabamba. En el encuentro surgen varias propuestas técnicas que serán analizadas. Los comunarios de El Paso quieren recuperar los pozos de agua perforados hace unos 15 años para proveer de agua a la zona Sud de la ciudad de Cochabamba porque sus tierras de cultivo comienzan a secarse y erosionarse por la falta de un mejor riego. Las autoridades de la urbe cochabambina se niegan a dejar su uso porque eso conllevaría dejar sin provisión del líquido a más de 120 mil familias, tomando en cuenta que no habrá más opciones de suministro hasta el funcionamiento en el 2013 del complejo múltiple Misicuni.

Tras los enfrentamientos suscitados la noche del lunes entre efectivos policiales y guaraníes que bloqueaban la carretera a Camiri, los dirigentes de esa etnia acuerdan suspender la medida de presión por 24 horas, mientras esperan el desenlace del paso de los marchistas indígenas por la localidad de Yucumo. Anuncian que, en caso de ser los manifestantes agredidos por los colonizadores afines al partido de gobierno o de intervención de la policía, el corte de rutas en la vía que va hacia Argentina se reanudará con la presencia de un mayor número de bloqueadores.

En La Paz vuelven a la normalidad la distribución de carburantes a esta ciudad y a la del Alto, y con ésta la circulación vehicular, al levantarse el bloqueo en la planta de Senkata luego de que las autoridades del gobierno, las de la municipalidad de El Alto y los padres de familia del Distrito 8 de esta urbe firmaran un acta de entendimiento. La reunión para llegar al acuerdo se realiza en la unidad educativa Topáter, tiene una duración aproximada de cinco horas y cuenta con la participación de la defensoría del pueblo. El documento firmado consta de 12 puntos, poniendo fin al desabastecimiento de GLP, gasolina y *diesel*, cuyas provisiones, desde el pasado lunes 18, se redujeron considerablemente por el bloqueo. Los acuerdos a los que se llegan están centrados en la atención a las demandas de infraestructura y equipamiento mobiliario para las unidades educativas

del distrito, exigiendo para el POA 2012 un presupuesto de 10 millones al fin de atender las demandas de infraestructura de todas las unidades educativas de El Alto. Asimismo, el gobierno reconoce la exigencia de la instalación de redes de alcantarillado y de gas domiciliario para las escuelas del distrito, la descentralización del desayuno escolar y el derecho propietario de las unidades educativas del Distrito 8.

Jueves 22

La Central Obrera Boliviana (COB) realiza un ampliado nacional en el cual anuncia un paro nacional movilizado para el miércoles 28 del presente mes y respalda la marcha de originarios del TIPNIS en oposición a la construcción de la carretera que debería atravesar esa reserva ecológica en la Amazonía boliviana. Uno de los temas abordados es el acuerdo de ocho puntos suscrito entre el gobierno y la COB el 17 de abril pasado y que, hasta la fecha, no habría sido cumplido, por lo que la central ha resuelto convocar a un paro de 24 horas como protesta por lo que los dirigentes califican de “actitud dilatoria e irresponsable”. En el acuerdo figuran, entre otros temas, el cumplimiento del reajuste salarial del 2% para los sectores de educación y salud a regir a partir de agosto de 2011 y retroactivo a enero, el cumplimiento del fuero sindical y la inmediata restitución en sus fuentes de trabajo de los dirigentes sindicales despedidos. Paralelamente, en la ciudad de Trinidad, Beni, un ampliado de la Central Obrera Departamental (COD) determina el paro de actividades con bloqueo de rutas para el próximo martes 27 en apoyo a la “VIII Marcha Indígena”.

En el sector de la comunidad El Naranjal, en la carretera Cobija-La Paz, efectivos policiales gasifican a alrededor de 150 indígenas que bloquean la ruta en apoyo a la marcha del TIPNIS. Como resultado, tres indígenas quedan heridos con balines de goma, muchos otros contusos y un policía herido. Horas más tarde, los originarios comienzan a reagruparse para volver al bloqueo con la advertencia de que “esta vez usaremos la fuerza contra la policía, utilizando incluso los arcos y flechas”, mientras que una parte del contingente policial retorna a la ciudad de Cobija. Entretanto, en el sector de El Triángulo, sobre la carretera Riberalta-La Paz, las autoridades policiales de la región dialogan con los bloqueadores y logran un cuarto intermedio para el paso de los vehículos que esperaban desde la noche anterior, sin lograr convencer a los movilizados a levantar la medida. Asimismo, los pobladores del territorio Chacobo-Pacahuara deciden masificar el bloqueo y piden a la policía que respete la determinación, indicando que volverán a sus comunidades sólo cuando el gobierno atienda los planteamientos de no construir la carretera que atravesaría el corazón del parque nacional Isiboro Sécure.

En Santa Cruz, profesionales médicos realizan una marcha en la plaza central con el fin de pedir a las autoridades y los parlamentarios la revisión de un proyecto de ley sobre mala praxis que, entre otros puntos, contempla una pena de ocho a 15 años de cárcel para los trabajadores del sector salud que sean hallados culpables de negligencia médica comprobada. Según representantes del Colegio Médico, con este anteproyecto se estaría también tergiversando la “verdadera salud”, pues el mismo significaría una clara comercialización del sector y la consecuente generación de servicios más caros.

En Trinidad, Beni, reclusos del penal de Mocoví se declaran en estado de emergencia para demandar el pago del ‘prediario’ que no se ha cancelado desde hace cuatro meses. Debido a esta situación, los privados de libertad anuncian movilizaciones para hacerse escuchar, por considerar que, al no garantizar acceso cotidiano a dicho beneficio, se estaría atentando contra la vida de quienes por diversas circunstancias se encuentran detenidos, en algunos casos preventivamente, siendo el ‘prediario’ la única forma que los reclusos tienen para subsistir.

En La Paz, trabajadores de la COMIBOL reanudan sus medidas de presión con una marcha por las calles principales de la ciudad, mientras que un grupo instala una vigilia frente al edificio de la entidad, ubicado en la avenida Camacho, y algunos mineros se ‘crucifican’. Se trata del tercer día de protestas de los trabajadores que exigen la salida del nuevo presidente ejecutivo de la entidad, Héctor Córdova, posesionado por el ministro de Minería, José Pimentel. El día 21 de agosto una comisión de trabajadores de la COMIBOL sostuvo una reunión con personeros del Ministerio de Minería para buscar una salida al conflicto, sin embargo, el encuentro fue catalogado como “infructífero” por los mineros.

Viernes 23

El Canciller David Choquehuanca informa que la comisión gubernamental que encabeza y los representantes de los indígenas del TIPNIS que se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos han iniciado el proceso de diálogo y han llegado a un cuarto intermedio hasta el sábado 24. Choquehuanca llega a la población donde se encuentra la ‘cabeza’ de la marcha que partió de Trinidad el 15 de agosto pasado, e inmediatamente toma contacto con los dirigentes de los marchistas. El canciller se reunirá también con los dirigentes de los colonizadores de Yucumo que están en vigilia hace más de 20 días en apoyo a la construcción de la vía y en demanda de que los indígenas saquen de su pliego petitorio cuatro puntos que, como argumentan, no tienen que ver con el parque nacional ni con la carretera, mientras que afectan a los interculturales. Choquehuanca ha sido designado por el ejecutivo para intentar una vez más solucionar el conflicto y atender las demandas de los marchistas por medio de una negociación “abierta y sin imposiciones”.

El secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, informa que esa organización se ha declarado en estado de alerta y emergencia por la marcha de los pobladores del TIPNIS, a la cual califican de “marcha política”. Machaca argumenta que la decisión de los indígenas del TIPNIS de oponerse a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos está siendo aprovechada por grupos radicales que pretenden generar una convulsión social en todo el país. Asimismo, el funcionario informa que la CSUTCB declaró al ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, como “enemigo número uno” de la confederación campesina, por la discriminación demostrada cuando ejercía sus funciones públicas.

Sábado 24

Los indígenas que marchan en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos toman como escudo al canciller David Choquehuanca para romper la barrera policial y continuar su camino hacia La Paz. Choquehuanca viajaba con una comisión gubernamental hacia la población de Limoncito, donde se encuentra la ‘cabeza’ de la marcha, para intentar por novena vez entablar una mesa de negociación con los dirigentes de los indígenas. La policía se moviliza para intentar resguardar la integridad del canciller y de su comitiva, integrada por los viceministros Wilfredo Chávez y César Navarro. Horas más tarde, los representantes gubernamentales quedan libres.

En La Paz, por medio de un acuerdo que establece respetar la inamovilidad funcional, se resuelve el conflicto y la huelga de casi dos semanas de trabajadores del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) que se oponían a la designación de José de la Cruz como nuevo director nacional del ente. El convenio es suscrito por la ministra de Medio Ambiente y Agua, Mabel Monje, por los dirigentes sindicales del SENAMHI y por el nuevo director ejecutivo. El acuerdo

establece que De la Cruz desistirá de las acciones jurídicas que había iniciado en contra de los funcionarios del SENAMHI y la reincorporación de la meteoróloga Marisol Portugal, despedida semanas atrás. Los trabajadores aceptan el descuento de media jornada por la huelga de brazos caídos.

Domingo 25

Al cumplirse el día número 42 de la “VIII Marcha Indígena”, alrededor de 500 efectivos de la policía reprimen a golpes y con gases a los manifestantes. Luego de la intervención, el contingente policial rodea el campamento de los marchistas y detiene a varios dirigentes. El operativo deja un saldo indeterminado de heridos (la policía sostiene que son solamente 15) y cerca de 35 desaparecidos, entre ellos siete niños. Muchos marchistas son golpeados antes de ser subidos a unos vehículos. Posteriormente, en la localidad de San Lorenzo, la policía obliga a los marchistas a subir a cuatro buses y seis camionetas sin darles explicación de cuál sería su destino. Pedro Nuni, diputado indígena por el MAS, es detenido y cargado en una camioneta de los uniformados. Entre los detenidos figura también Víctor Hugo Párraga, presidente cívico de San Borja, quien es cargado a un bus maniatado. Las medidas extremas caldean los ánimos de la población borjana(,) que bloquea y enfrenta a la policía cuando trata de ingresar con los buses y camionetas hasta el pueblo. Hay duros choques entre cívicos y uniformados, lo que hace retroceder a estos últimos en dirección a Yucumo. Por su parte, la dirigencia policial justifica sus acciones señalando el requerimiento fiscal de realizar la primera intervención en la marcha indígena para evitar enfrentamientos.

Lunes 26

La COB ratifica la convocatoria a un paro nacional movilizado de 24 horas para el miércoles 28, en protesta por el incumplimiento del acuerdo de ocho puntos firmado con el gobierno, el pasado 17 de abril y rechazando la intervención policial en contra de la marcha de los indígenas del TIPNIS. El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, puntualiza que el paro mencionado “no es sólo por la desatención del gobierno al acuerdo del 17 de abril, sino también para rechazar la intervención a la marcha de los indígenas del TIPNIS”, así como convoca a otros sectores a sumarse a la protesta y asimismo precisa que en el interior del país las centrales obreras departamentales y regionales se encargarán de coordinar la movilización nacional.

En La Paz, el alcalde de esta ciudad, Luis Revilla, se reúne con sus pares de los municipios de Achocalla, Mecapaca y Palca para iniciar un diálogo referido al conflicto de límites, señalando que el objetivo de la reunión debería ser el de plantear la conformación de un gran área metropolitana entre los cuatro municipios.

En La Paz, la ministra de Defensa Cecilia Chacón presenta su renuncia ante el gabinete del presidente Evo Morales argumentando su desacuerdo con la intervención por la fuerza pública a la marcha de indígenas que se oponen a la construcción de la carretera Vila Tunari-San Ignacio de Moxos. En una carta enviada al jefe de Estado y a los medios de comunicación, Chacón remarca su “renuncia irrevocable” a la cartera de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia. A su juicio, las medidas asumidas la víspera, lejos de aislar a la derecha, fortalecen su accionar y manipulación de la octava marcha con el fin de atacar el proceso de cambio que tanto ha costado a los bolivianos.

En Beni, distintas organizaciones de este departamento deciden iniciar un paro cívico y un bloqueo ante la intervención de la policía a la marcha indígena cerca de la población de Yucumo. La decisión se adopta en instalaciones del comité cívico del Beni durante una reunión interinstitucional a la que también asistió el gobernador opositor Ernesto Suárez. En el encuentro también estuvieron

presentes los principales dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, la Central de Pueblos Etnicos Moxeños del Beni y representantes de otras instituciones. Terminada la reunión, los asistentes se dirigen a la plaza principal donde instalan una vigilia, mientras organizan a través de comisiones el paro y bloqueo que, se dijo, serán indefinidos.

En La Paz, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, afirma que la intervención a la marcha de los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos fue realizada por un requerimiento fiscal y exclusivamente para preservar la vida y evitar enfrentamientos con los pobladores de Yucumo, que se oponían a la medida de protesta. En una conferencia de prensa dictada en el Palacio de Gobierno, Llorenti declara que por la misma razón de preservar la vida de los marchistas, los mismos fueron evacuados de las inmediaciones de Yucumo en vehículos y luego trasladados a otra región para que retornen a sus comunidades. Finalmente, el funcionario justifica la medida de fuerza al recordar que en el pasado se registraron enfrentamientos de civiles “con resultados funestos” y que el gobierno, en esta ocasión, quiso evitar.

El presidente Evo Morales Ayma realiza una conferencia de prensa para explicar las razones por las que el gobierno propuso la construcción de la carretera que unirá a los departamentos de Cochabamba y Beni, subrayando que “la decisión de construir el camino entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos es para cumplir con las normas y los pedidos de muchos sectores sociales de los dos departamentos, además de promover la integración y el desarrollo nacional”. Morales a la vez hace una relación de anteriores resoluciones gubernamentales que planteaban el proyecto, afirmando que, en la actualidad, hay 56 pedidos y el apoyo de fuerzas sociales de Cochabamba y Beni que representarían a más de un centenar de movimientos sociales que solicitan la construcción de la polémica carretera. Finalmente, Morales reitera que el ejecutivo sigue un mandato que viene de anteriores administraciones en base a leyes que fueron aprobadas y que responden a la demanda de los pueblos del Beni y de Cochabamba para su propio desarrollo y que el mismo ha decidido dejar en suspenso la construcción de la carretera hasta efectuar una consulta nacional centrada en los dos departamentos involucrados en la problemática, para que su población se pronuncie sobre la continuidad o extinción del proyecto.

En Rurrenabaque, Beni, aproximadamente 400 vecinos y 130 indígenas tacanas que han llegado desde comunidades cercanas se movilizan para pedir la liberación de los y las indígenas trasladados al aeropuerto de esa localidad luego de que el día anterior fueron reprimidos por la policía a 500 metros de Yucumo, donde se encontraba el campamento de los marchistas que se oponen a que el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos pase por el medio del TIPNIS. Para liberar a sus compañeros, los pobladores de la zona despliegan la estrategia de hacerse gasificar por los policías que custodian a los detenidos para evitar que estos escapen. Antes de que aterrice un tercer avión enviado por el gobierno para trasladar a 150 indígenas a rumbo desconocido, la multitud entra a la pista, prende fuego a neumáticos y a montículos de leña, mientras que los indígenas detenidos, niños y padres, intentan escapar, salir del aeropuerto y burlar a los policías para buscar agua, dado que, desde el momento del enfrentamiento cerca de Yucumo, tienen la garganta seca así como moretones en todo el cuerpo por la brutal intervención policial.

En La Paz, por lo menos 500 personas se movilizan hacia la plaza San Francisco, en el casco viejo de la ciudad, para apoyar la vigilia de los indígenas del CONAMAQ que se concentran allí, luego de que se conoce la violenta intervención policial a la marcha de los indígenas del TIPNIS. Los manifestantes exigen la destitución del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, así como apoyan la continuidad de la marcha hacia La Paz. Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo, presente en la medida de protesta, manifiesta que se organizará un comité de movilizaciones y considera la instalación de un piquete de huelga de hambre.

Martes 27

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, presenta su renuncia para someterse a una investigación internacional, dado que el ministro Sacha Llorenti lo acusa de haber sido él quien diera la orden para efectuar la brutal intervención policial a la marcha de originarios opuestos a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Asimismo, Llorenti enfatiza que el presidente Evo Morales no conocía y menos aún autorizó el procedimiento, mientras que reafirma la decisión del gobierno de procesar y sancionar a los responsables de aplicar procedimientos bárbaros tales como los que utilizó la policía en dicha ocasión.

En La Paz, cientos de padres de familia bloquean calles y avenidas en diferentes puntos de la ciudad en demanda de infraestructura escolar y computadoras, ocasionando así un gran congestionamiento vehicular y algunos incidentes con los transportistas. El presidente de la junta escolar de padres de familia Distrito Centro, Marco Antonio Aguilar, señala que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, incumplió los compromisos asumidos, principalmente con los estudiantes. Los bloqueos en las calles Ingavi y avenida Montes, que conectan a la autopista La Paz-El Alto, son los que ocasionan mayor congestionamiento vehicular y donde se registran algunos amagues de enfrentamiento entre los padres de familia y los transportistas.

El defensor del pueblo Rolando Villena anuncia que se ha dado inicio a una investigación en la población de Yucumo para establecer lo sucedido durante la intervención policial a la marcha indígena que se opone a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, para así identificar qué tipo de delitos se cometieron. Villena viaja a Yucumo y anticipa que, junto a otros funcionarios, tendrá acceso de primera mano a las informaciones de las víctimas, para así levantar testimonios que puedan constituir indicios de prueba.

Miércoles 28

El ministro de Comunicación, Iván Canelas, informa que el gobierno aceptó una nueva invitación de la APG, una de las organizaciones que impulsa la marcha en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y anuncia que enviará una comisión de alto nivel, con poder de decisión, a la comunidad oriental de Urundaiti, a 17 kilómetros al norte de Camiri, para consensuar soluciones a las demandas regionales. En conferencia de prensa dictada en el Palacio de Gobierno, Canelas recuerda que la reunión programada para el 26 de septiembre entre representantes de la APG y del ejecutivo se suspendió debido a los hechos de violencia suscitados contra la marcha indígena.

Un grupo de cerca de 100 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), a la cabeza del viceministro de antidrogas, Felipe Cáceres, comienza el desalojo de integrantes de seis sindicatos clandestinos que se asentaron fuera del margen derecho de la línea demarcatoria entre el área colonizada del trópico y bordes del TIPNIS. El contingente se mantendrá en la zona el tiempo necesario para sacar a todos los avasalladores, la tarea siendo la de evitar que continúen los asentamientos; se solicitará que una medida similar sea efectuada por lo menos cada tres meses. Cuatro de los sindicatos involucrados han sido identificados con los nombres de Estrella, 16 de Octubre, Valle Alto 2 y Británico, mientras que son todavía investigados los denominativos de dos. Se presume que cada uno tenga entre 15 y 20 afiliados.

En Trinidad, una marcha de organizaciones lideradas por la COD exige justicia para los indígenas marchistas reprimidos por la policía el domingo 25 en Chaparina, cerca de la población de Yucumo. La COD ratifica estar firme en su respaldo a los originarios que defienden pacíficamente el TIPNIS, siendo este último no solamente el pulmón de Bolivia, sino del mundo. Asimismo, en Oruro, los

sindicatos de la COD y COB convocan a una multitudinaria marcha de protesta, que termina en mitin, en rechazo a la represión violenta desatada contra los indígenas del TIPNIS. Por su parte, el líder de la COD-Oruro, Jaime Solares, plantea al gobierno de Evo Morales realizar “una asamblea popular si es que quiere gobernar escuchando al pueblo”. También se observa la presencia de varias delegaciones de mineros de las cercanías de la ciudad, quienes detonan fulminantes de dinamita para acrecentar el impacto de la manifestación.

El departamento del Beni ingresa a su tercer día de paro y bloqueo indefinido coordinados por la COD, en rechazo a la represión desatada contra los indígenas de tierras bajas por la policía. El acatamiento de la medida no varía con relación a los días anteriores, es decir, se impide la circulación de motorizados en el radio urbano y resultan cerradas las salidas a las provincias y al departamento de Santa Cruz. Lo que sin embargo se observa, incluso desde el primer día de paralización de actividades, es la necesidad de la gente de proveerse de combustible en los surtidores, ya que quienes controlan el cumplimiento del paro se encargaron de hacer suspender, por la fuerza, la venta de gasolina, *diesel* y otros combustibles.

Las movilizaciones en respaldo al movimiento indígena toman fuerza en Santa Cruz. La atención en los hospitales se reduce a las emergencias y las clases quedan suspendidas en las escuelas del área rural y urbana por ser estos sectores afiliados a la COB y cumplir un paro en repudio a las agresiones contra de los indígenas. Los colegios particulares deciden realizar las clases, pero participarán de las marchas a realizarse durante el día. El paro será acompañado con movilizaciones que llegarán hasta el atrio de la catedral, donde se encuentra un piquete de más de 30 huelguistas, el mismo que será reforzado después de las marchas. La primera movilización está encabezada por un sector de la COD, liderado por Mario Vidal, y partirá desde la plaza del Estudiante en horas de la mañana. Según Vidal, la medida es un mandato de la COB en apoyo a los indígenas, por el no cumplimiento de algunos compromisos asumidos por el gobierno y a causa del irrespeto al feroe sindical.

El parque nacional Amboró, que se encuentra en el límite de los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba y que abarca al 63% del municipio de Comarapa (provincia Manuel María Caballero) ha sido avasallado por personas procedentes de Cochabamba, Sucre y Potosí. La denuncia es efectuada por el responsable del parque, Apolinario Mareño, después de una inspección conjunta entre la sub-gobernación y el municipio. Las autoridades locales especifican que el asentamiento se encuentra en Playa Ancha, donde se ha ilegalmente realizado la apertura de caminos, chaqueos y corte de madera, además del loteamiento de terrenos. Mareño explica que esta medida va en contra de la vocación del municipio, que se caracteriza por ser conservacionista del medioambiente, motivo por el cual el 30 del presente mes habrá una reunión en la que participarán la institución Aires, Bosques y Tierras, la sub-gobernación, el concejo municipal, las comunidades afectadas y el INRA.

Jueves 29

En Trinidad, Beni, se instala un piquete de huelga de hambre en la plaza principal en apoyo a la “VIII Marcha Indígena” en defensa del TIPNIS. Los primeros en asumir la medida son el asambleísta indígena del pueblo Sirionó, Willam Cuéllar, el representante del pueblo Canichana, Eusebio Soto, y el ciudadano Alvaro Aguilera. Se espera que otras personas se incorporen durante las siguientes horas y se aspira a que con esta medida el gobierno comprenda que el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no debe pasar por el TIPNIS.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ratifica su solidaridad con los manifestantes del TIPNIS y al mismo tiempo expresa su desacuerdo con tres de los 16 puntos del

pliego planteado por la CIDOB, porque, a su parecer, afectan negativamente al sector minero, de hidrocarburos, hidroeléctrico y otros. La FSTMB señala que si los indígenas deciden, en el marco de la consulta, que los recursos naturales no deban explotarse, las obras de exploración o explotación, según el caso, tendrán que paralizarse. En esos tres puntos, los originarios no sólo están involucrando el uso de los parques de la reserva natural, sino también todo aprovechamiento de recursos naturales, como hidrocarburos, recursos hidroeléctricos, mineralógicos, plantas hidroeléctricas, recursos hídricos y proyectos camineros.

Los alcaldes y presidentes cívicos de Puerto Suárez, Puerto Quijarro y El Carmen Rivero Torrez, mediante una resolución conjunta, dan un plazo de 24 horas al Ministerio de Minería y Metalurgia para que el gobierno destituya oficialmente al presidente de la Empresa Siderúrgica de Mutún (ESM), Sergio Alandia. En una misiva dirigida a esta repartición gubernamental, los mencionados acusan que las acciones de Alandia vulneran la Ley de Contrato de Riesgo Compartido con la Jindal sobre la explotación del hierro. Además, piden que se instaure una investigación profunda por las innumerables denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia y Anticorrupción por el incumplimiento de deberes y omisión, caso contrario amenazan con expulsar a los directores de la ESM. Al mismo tiempo, en Puerto Quijarro, la aduana nacional instruye proceder al precintado de los depósitos y locales que realizan operaciones con mercadería nacionalizada en la central Aguirre; se acusa a la empresa de hacer caso omiso para suspender las actividades al interior de módulos comerciales.

En Santa Cruz, a una semana de la inauguración del túnel Percy Fernández, comienzan a surgir las quejas de los vecinos. Un grupo de personas del barrio Guaracal bloquea el ingreso a este paso vehicular en protesta por el aislamiento que provocaron en la zona el corte de la avenida Centinelas del Chaco y el desvío de tres líneas de micro que pasaban por esa vía. El túnel dejó incomunicados al Guaracal y a La Colorada y los micros ahora pasan por la radial 13, mientras que algunos vecinos tienen que caminar hasta un kilómetro para encontrar transporte. Asimismo, la dirección de Tráfico y Transporte afirma que desconocía el reclamo de los vecinos.

Viernes 30

La comisión gubernamental de alto nivel conformada por cinco ministros de Estado y la APG instala el diálogo y firma un primer acuerdo que abre el panorama para una negociación positiva. El diálogo se instala después de algunos inconvenientes para llegar a la población de Urundaytí, a 15 kilómetros de Camiri, en el noreste boliviano. Luego de una reunión de varias horas se firma el primer acuerdo de entendimiento para avanzar en la solución de las demandas del pueblo indígena guaraní. El mismo es suscrito por la APG y por las capitánías zonales y comunales. Básicamente, el acuerdo establece una serie de elementos preparatorios para la elaboración de una agenda de temas de fondo con la APG y, al mismo tiempo, plantea elementos para superar el conflicto generado por la movilización indígena que se opone a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Se establecen puntos como la conformación de una comisión humanitaria para examinar la condición en la que se encontrarían los manifestantes golpeados durante la acción policial de la pasada semana, a fin de prestarle la atención correspondiente; acordar la participación indígena en la comisión imparcial de investigación de la intervención policial a la marcha, misma que propuso el gobierno, y que los indígenas levanten toda medida de huelga de hambre y de bloqueo de caminos por parte de la APG.

La Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz realiza una marcha de apoyo al gobierno y al proceso de cambio junto a la Federación de Mujeres Campesinas de La Paz “Bartolina Sisa” y otras organizaciones. La multitudinaria marcha baja desde la ciudad de El Alto a La Paz, donde atraviesa las principales calles y avenidas. La federación señala que la movilización

es en apoyo al presidente Evo Morales, al proceso de cambio y en defensa de la democracia, contando con delegaciones de las 20 provincias del departamento de La Paz. Con esta manifestación pacífica se busca “demostrar a la derecha que pretende debilitar el proceso de cambio, que los campesinos están unidos y no están de acuerdo con quienes pretenden dividirnos y enfrentarnos entre hermanos”. Por su parte, la ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas de La Paz, Felipa Huanca, afirma que “no podemos permitir que la oposición trate de dañar el proceso de cambio aprovechándose de un problema de nuestros hermanos indígenas del TIPNIS, esta marcha es para defender el proceso de cambio”.

El presidente de la ESM, Sergio Alandia, informa que Aceros del Paraguay (ACEPAR) ha decidido suspender temporalmente la importación de un importante cargamento de hierro del mega-yacimiento de El Mutún, ubicado en el departamento de Santa Cruz, debido a los conflictos que se registran en esa región desde hace dos días. Alandia señala que esta sería la segunda vez que se suspende la exportación de acero a Paraguay debido a conflictos regionales que provocan el retraso en la llegada de maquinaria pesada para incrementar la producción del yacimiento. Según fuentes oficiales, ACEPAR comprará al menos 144 mil toneladas de hierro que generarán un ingreso de 6 millones de dólares para Bolivia. Por su parte, el presidente de la ESM informa que hasta el momento los predios de esa empresa se encuentran precintados por la fiscalía para que los manifestantes de esa región no ingresen. Según medios locales, desde hace dos días, organizaciones sociales de Puerto Suárez protestan por la deficiente fiscalización que hace la ESM a la empresa india Jindal Steel a cargo de parte del proyecto de explotación del yacimiento de hierro de El Mutún. Dichas organizaciones sociales exigen, además, la renuncia del ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, y del presidente de la ESM, Sergio Alandia.

Glosario de siglas

AAPS	Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico
ABAIEM	Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de Música
ABC	Administradora Boliviana de Carreteras
ABT	Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras
ACEPAR	Aceros del Paraguay
APG	Asamblea del Pueblo Guaraní
CCIB	Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia
CIDOB	Central Indígena de los Pueblos del Oriente de Bolivia
COB	Central Obrera Boliviana
COD	Central Obrera Departamental
CODIJE	Consejo Distrital de Juntas Escolares
COMIBOL	Corporación Minera de Bolivia
CONAMAQ	Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu
CPE	Constitución Política del Estado
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
ESM	Empresa Siderúrgica Mutún
FSTMB	Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
FTC	Fuerza de Tarea Conjunta
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
MAS	Movimiento Al Socialismo
MSM	Movimiento Sin Miedo
ONU	Organización de las Naciones Unidas

POA	Plan Operativo Anual
SEMAPA	Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
SENAMHI	Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SEPCAM	Servicio Prefectural de Caminos
TCO	Tierras Comunitarias de Origen
TIPNIS	Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécuré
UJMS	Universidad Juan Misael Saracho

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinadoras: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, Bolpress, ABI y El Deber.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL
Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Bolivia

Octubre de 2011

Editada en marzo 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d' Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1009

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Bolivia***



Integrantes

Pilar Uriona Crespo
Dunia Mokrani Chávez

Fuentes

diarios Los Tiempos, Bolpress, ABI y El
Deber

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Octubre de 2011

Domingo 2

Se reinicia la marcha en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécuré (TIPNIS), luego de que más de 600 indígenas se reencontraran en la localidad de Quiquibey tras haber sido dispersados durante la violenta represión sufrida el día 25 de septiembre pasado. La marcha recorre 20 kilómetros luego de siete de caminata y llega a Las Delicias, una comunidad de colonos, donde acampan a orillas de río. Entretanto, una comisión de la Asamblea Plurinacional encabezada por los senadores Gabriela Montaño y Adolfo Chávez, del Movimiento al Socialismo (MAS), llega a Las Delicias para intentar conversar con la dirigencia indígena. Sin embargo, la comitiva se encuentra con la negativa de diálogo por parte de las y los marchistas, quienes señalan que mientras el gobierno no asuma la responsabilidad por los hechos de violencia protagonizados por la policía no hay condiciones para el diálogo. La comitiva logra, finalmente, que diputados indígenas que integran la marcha –Blanca Cartagena, Pedro Nuni, Justino Leaños y Bienvenido Sacu– accedan reunirse en La Paz para trabajar en conjunto un proyecto de ley que garantice que la carretera no atravesará el TIPNIS. Sin embargo, la dirigencia y los asambleístas indígenas aclaran que aceptar avanzar en el diálogo con el órgano legislativo no significa detener la marcha. Por su parte, el presidente Evo Morales, durante una concentración de las seis federaciones del trópico efectuada en apoyo al llamado proceso de cambio, se exime de su responsabilidad por la intervención policial a la marcha y señala que si se suspende la construcción de la vía está seguro de que serán los habitantes del Chapare quienes lo acusen por no haber realizado el proyecto caminero. En este sentido plantea que la decisión debe darse en una consulta, pero plantea sus dudas sobre la población a ser consultada. Finalmente, a tiempo de señalar que no son ciertas las acusaciones sobre el hecho de que la carretera en cuestión sería la más cara de las carreteras hasta ahora construidas en el país, dando ejemplos de otras que habría tenido costos más elevados, agrega que quienes se oponen a la carretera estarían haciendo “política” sin conocer la realidad de la zona ni cómo viven los pobladores en la región, e invita a los representantes de los organismos internacionales y a los medios de comunicación a realizar una visita a la zona.

En el departamento de Santa Cruz, las y los vecinos de Santa Rosa de Sara se declaran en alerta luego de que un grupo de colonos asentados en la Reserva Forestal Choré retuviera nueve camiones cargados con madera de propiedad de los concesionarios de las Asociaciones Sociales del Lugar (ASL) de Santa Rosa. Las y los colonos exigen a los concesionarios madereros la construcción de caminos y puentes dentro de la reserva, a lo que éstos responden que no cuentan con los recursos y que no pueden ejecutar ningún tipo de construcción vial debido a que el área es una reserva forestal. Los madereros señalan que desde el 2001 cuentan con el Certificado Forestal de Origen para la explotación sostenible de madera, otorgado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el ex-Ministerio de Desarrollo Sostenible, la ex-Superintendencia Forestal y las ASL Arroyo Negro (7.200 ha), Los Tajibos (6.700 ha), Entre Ríos (7.200 ha) y Santa Rosa (7.000 ha).

En Cochabamba, vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Esmeralda Sud, del municipio de Sacaba, bloquean la avenida Villazón en protesta por la instalación de la planta de

tratamiento de aguas servidas en esa jurisdicción, señalando que el proyecto conlleva riesgos para la salud de sus familias por posible focos de infección y que contaminaría las aguas del río con las que riegan sus cultivos. Señalan que aspiran a ver funcionar una planta moderna, pero en Cochabamba, ya que es su zona. Según las autoridades municipales el proyecto estaría destinado a contener la contaminación por el vertido de aguas servidas al río y los canales de riego, y no afectaría la salud del vecindario

Lunes 3

Se suspende la huelga de hambre que iniciaran en días anteriores dirigentes indígenas y de otras organizaciones en la plaza principal de la ciudad de Trinidad, Beni, luego de que el gobierno ofreciera garantías para que la marcha indígena en defensa del TIPNIS llegue sin mayores problemas a la sede de gobierno.

Cientos de trabajadores de las minas de Caracoles y de Viloco bloquen la carretera La Paz - Oruro, a la altura de las poblaciones de Konani, Panduro y Belén, instalando tres barricadas en rechazo al Impuesto al Valor Agregado (IVA) dispuesto por el gobierno nacional para las casas comercializadoras de minerales. La medida de presión ocasiona que las salidas de buses al interior del país desde la estación terminal de La Paz se encuentren suspendidas.

Martes 4

Se levanta el bloqueo que los trabajadores mineros del Centro Minero de Caracoles y de Viloco llevaban a cabo en la ruta La Paz - Oruro, en contra de la imposición del IVA a las casas comercializadoras de minerales por disposición gubernamental. Los trabajadores se alistan para iniciar nuevas protestas en las que esperan que otros mineros se les unan.

Las autoridades del municipio de Sacaba, las y los vecinos de la OTB Esmeralda Sur, el Concejo Municipal en pleno y representantes de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Sacaba (EMAPAS) se reúnen en busca de una solución al conflicto por la instalación de plantas de tratamiento, por el cual se mantiene el bloqueo de la avenida Villazón. La EMAPAS socializa el proyecto frente a las y los vecinos, quienes consideran que la planta de tratamiento provocará malos olores, generando enfermedades para la población. De la reunión no resulta ningún acuerdo que permita dar fin al conflicto.

En Santa Cruz, las y los trabajadores temporales de la Caja Nacional de Salud (CNS) inician un paro de 72 horas exigiendo la nivelación salarial con un incremento del 2% y que el gobierno entregue a la institución 222 ítems, como se habría comprometido hace un tiempo. El secretario ejecutivo del sindicato de la CNS se crucifica en una madera con alambre de púas y con los labios costurados. Paralelamente, 30 trabajadores inician su piquete de huelga.

En Sud Yungas, la marcha indígena contra la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos avanza de la localidad de Palos Blancos a Sapeco. Más de 650 indígenas caminan 11 kilómetros bajo un sol fuerte en su rumbo hacia la sede de gobierno. En el trayecto, en la localidad de Inicua, la marcha es abucheada por una treintena de colonos, mientras que en Sapeco la población la recibe con aplausos. Entretanto, indígenas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas

del Qullasuyu (CONAMAQ) –que apoyan la marcha indígena en defensa del TIPNIS– avanzan en su camino hacia La Paz. Por otra parte, la asesoría jurídica de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) informa que se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz contra el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, el director de Régimen Interior, Boris Villegas, y tres altos jefes de la Policía Nacional por la violenta represión policial a los marchistas indígenas el domingo 25 de septiembre. La denuncia se plantea por delitos de genocidio, asesinato en grado de tentativa, desaparición forzada de personas, trata de seres humanos, lesiones graves y robo agravado.

Miércoles 5

En el departamento de La Paz, detenidos del centro penitenciario de máxima seguridad Chonchocoro se declaran en emergencia en demanda del incremento del bono alimenticio, o pre diario. Demandan que el bono sea de Bs 8. El pedido se dirige a la Dirección General de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno.

En Santa Cruz, trabajadores temporales de la CNS toman la Calle Ballivián exigiendo la nivelación salarial y la asimilación directa de 222 ítems acéfalos. Desde la gerencia nacional de la institución se ofrece concretar desde octubre la nivelación salarial para los 850 trabajadores temporales. Sin embargo, los trabajadores exigen que sea de acuerdo con la resolución del directorio, aprobada por el Ministerio de Hacienda, que señala que este beneficio debe darse desde julio y con efecto de retroactividad. En lo que respecta a la demanda de la asimilación directa de los 222 ítems acéfalos, las autoridades de la CNS informan que los mismos serán otorgados, de manera automática, a los trabajadores temporales que aprueben un examen previo. Los huelguistas ponen en duda el cumplimiento de ese ofrecimiento, señalando que muchos de ellos ya habrían aprobado el examen de competencia y que no se les otorgó aún el ítem correspondiente. En este sentido, anuncian masificar y radicalizar sus medidas de presión.

Jueves 6

El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, informa la suspensión del subcomandante de la policía, General Óscar Muñoz, por la represión policial del pasado 25 de septiembre en contra de los indígenas del TIPNIS que marchan en oposición a la construcción de la carretera que atravesaría la reserva natural y territorio indígena. Muñoz es quien estuvo a cargo del operativo policial, por lo que desde el gobierno nacional se señala que deberá someterse a una investigación, reiterando que las autoridades del poder ejecutivo no habrían dado la orden. Entretanto, crece el malestar en las filas policiales pues se considera que el gobierno tiene la intención de cargar toda la responsabilidad a institución por la violenta represión contra los indígenas. La presidenta de la Federación Nacional Única de Esposas de Policias, Guadalupe Cárdenas, informa que efectivos de baja graduación están dispuestos a amotinarse en todo el país si el gobierno inicia procesos contra los policías y acusa al presidente Evo Morales de deslindarse de su responsabilidad en el caso, señalando que fue él quien ordenó la intervención a la marcha.

La Central Obrera Boliviana (COB) cumple el primer día de paro de 48 horas por sus demandas laborales y en respaldo a los marchistas del TIPNIS. El pliego específico de las instituciones afiliadas a la COB incluye el aumento salarial del 2% adicional al 10% acordado en abril para los

sectores de salud y educación. En la ciudad de La Paz, trabajadores de la CNS y las federaciones de maestros realizan un bloqueo de “las mil esquinas”. En Potosí, los bloqueos comienzan desde las 10 am y son protagonizados principalmente por trabajadores de la empresa de agua, la alcaldía y la empresa de telefonía. En Cochabamba, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el sector de la salud son los que acatan el paro. En la CNS, hospitales y centros de salud pública sólo hubo atención de emergencias. Las puertas de la UMSS son cerradas desde las primeras horas de la mañana y algunos grupos de estudiantes bloquean las principales calles aledañas. Exceptuando los bloqueos de la universidad pública no se registran otros cortes de calle ni movilizaciones, y tampoco se suspenden las actividades escolares en la mayor parte de las unidades educativas del departamento. El órgano ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba señala que la instrucción fue enviada a las más de 30 organizaciones afiliadas la tarde del miércoles, lo que no les dio tiempo para coordinar las movilizaciones. En la ciudad de Trinidad, Beni, la COD realiza una concentración en la plaza principal en la que su ejecutivo máximo critica lo que considera una insensibilidad del gobierno para atender las demandas de los obreros y expresa su apoyo y solidaridad con los marchistas indígenas del TIPNIS. Entretanto, el gabinete de ministros firma un decreto que autoriza el pago de un bono de 1.000 bolivianos, por única vez este año, para más de 30 mil funcionarios públicos. La dirigencia de la COB informa que recibieron una invitación del Ministerio de la Presidencia a una reunión con el presidente Evo Morales, pero sin día ni hora confirmada. El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, asegura que en el encuentro realizado con los sindicalistas el martes se produjeron avances en las negociaciones sobre el incremento salarial retroactivo al mes de enero, los programas de reactivación productiva y la abrogación del Decreto Supremo 21.060.

En Cochabamba se mantiene el bloqueo de la avenida Villazón por parte de vecinos de Esmeralda Sur, luego de que las negociaciones con la alcaldía de Sacaba quedaran nuevamente en punto cero. A pesar de que desde la alcaldía y EMAPAS se ha intentado convencer a la dirigencia vecinal de que las dos plantas de tratamiento de agua son modernas y que no afectarían a la salud de la población, éstos se oponen a su construcción y piden el traslado de las plantas proyectadas. Por su parte, vecinos de Sacaba determinan solicitar formalmente a la gobernación el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) para que garantice la libre circulación, pues la ruta cortada conecta al municipio de Sacaba con la ciudad de Cochabamba y es troncal hacia el departamento de Santa Cruz.

En Santa Cruz, trabajadores temporales de la CNS levantan sus medidas de presión luego de conseguir que las autoridades nacionales del sector les aceptaran sus pedidos de nivelación salarial y dotación de los ítems acéfalos que hay en la institución.

Viernes 7

Más de mil indígenas de la marcha por la defensa del TIPNIS son recibidos por una multitud, con aplausos, al ingresar a la localidad de Caranavi, a pesar de las amenazas de los colonizadores de no dejarlos pasar por ese municipio. El recibimiento se da con una fiesta que se inicia desde la tranca de ingreso al pueblo. La marcha es acompañada con una banda de música y un conjunto de instrumentos nativos en el trayecto a la plaza. La dirigencia indígena expresa su agradecimiento en discursos dirigidos a la población concentrada. Por otra parte, las y los vecinos de Caranavi aprovechan para exigir justicia por las dos personas que murieron y las 29 que resultaron heridas

tras la intervención policial a un bloqueo de caminos de 12 días, que en el 2010 protagonizaron los lugareños de Caranavi en demanda de una planta procesadora de cítricos.

En las principales calles de La Paz, mineros, empleados municipales y sanitarios, obreros fabriles y maestros marchan paralizando el tráfico vehicular. Las y los manifestantes intentan llegar hasta la plaza Murillo para protestar ante el palacio de Gobierno. En el intento se dan forcejeos con la policía, a cuyos efectivos se insulta aludiendo a la violenta represión de la marcha indígena del domingo 25 de septiembre. En Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Potosí y Sucre el paro no fue acatado masivamente por los trabajadores, aunque se registraron marchas por las principales calles y avenidas de estas ciudades. Las medidas de presión concluyen con un nuevo plazo al gobierno para atender las demandas de la COB. La dirigencia advierte que si hasta el domingo se resuelven las demandas, el martes 11, día para el que fijaron la realización de un ampliado nacional, determinarían nuevas medidas de protesta, entre ellas un paro de 72 horas o una concentración en La Paz. Ante la amenaza, el gobierno nacional convoca a una reunión el domingo con el vicepresidente Álvaro García Linera.

Una columna de 3 mil personas entre productores de coca del trópico de Cochabamba y campesinos inicia una marcha desde Caracollo hacia la sede de gobierno: pretenden llegar el miércoles 12 de octubre para participar en una concentración de apoyo al gobierno nacional. Los marchistas señalan que con su movilización buscan demostrar a los enemigos del gobierno que el pueblo está con el proceso de cambio bajo la conducción del presidente Evo Morales. Para sectores opositores la marcha habría sido promovida y financiada por el gobierno.

El presidente Evo Morales sostiene una reunión de cinco horas con la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) para tratar el tema del pliego petitorio por el cual se llevó a cabo un paro de 19 días en ese departamento durante 2010. Por un lado, el primer mandatario confiesa que el gobierno no cuenta con recursos para la fábrica de cemento prometida, pero se compromete a buscarlos. En lo que respecta al conflicto de límites entre Coroma, Potosí, y Quillacas, Oruro, pide a los dos departamentos elaborar en dos semanas un proyecto de ley estableciendo el mecanismo para resolver este tema y garantiza la aprobación inmediata de la ley en el congreso. Sobre la demanda de construcción del aeropuerto internacional, el presidente manifiesta que no se ha encontrado todavía en el municipio de Potosí un terreno con las condiciones aptas para su construcción. Pide realizar estudios de suelos para que se lo pueda construir, ya que asevera que se cuenta con los recursos necesarios. El presidente del COMCIPO, Celestino Condori, agradece la predisposición del presidente al diálogo, por lo que señala que se pedirá que las negociaciones futuras sean directamente con él.

En Cochabamba, vecinos de la OTB Esmeralda que intentaban ampliar el bloqueo de la avenida Villazón a avenida Circunvalación, se enfrentan con vecinas del barrio Guadalupe, que colinda con la misma. El enfrentamiento se da con palos y piedras y deja un saldo de varios heridos. La policía refuerza las medidas de seguridad e intenta mediar entre las partes enfrentadas. Posteriormente se inicia una nueva sesión de diálogo, con dificultades, que concluye a las 21:30 hs, con la firma de un acuerdo entre dirigentes de Esmeralda Sur y la alcaldía de Sacaba. El acuerdo establece la suspensión de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Esmeralda Sur y, por ende, de las medidas de presión. El alcalde de Sacaba se compromete a buscar un nuevo sitio para su emplazamiento, en un plazo de cuatro meses, previo estudio de impacto ambiental y con consenso sobre aspectos técnicos y sociales con los vecinos

Sábado 8

Los jefes y policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), de Polivalentes y de la Escuela de Sargentos, que participaron de la violenta intervención de la marcha indígena el 25 de septiembre, se declaran en alerta para evitar más suspensiones en sus filas. Señalan que si no hubo mayores protestas por la suspensión del general Muñoz es porque este jefe policial no era muy apreciado, pero amenazan con medidas si se suspende a algún coronel, un mayor o policía de base.

Una comisión de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y de la Dirección de Áreas Protegidas de la Gobernación de Santa Cruz realiza una inspección en el ingreso oeste al Parque Amboró y denuncia la existencia de quemas, desmontes, brechas y plantaciones de hoja de coca por parte de un grupo de colonos. Las autoridades departamentales notifican a los colonos para que salgan del área protegida, advirtiendo que de lo contrario se utilizaría a las fuerzas policiales y del Ministerio Público para desalojarlos.

Lunes 10

Cientos de cooperativistas mineros del Norte de Potosí cortan la carretera en los accesos al departamento de Oruro, en la carretera a Potosí, a la altura de la población de Machacamarquita y en la carretera a Cochabamba, en el sector de Cayhuasi, en rechazo al IVA. Una comisión del Ministerio de Minería se reúne con la dirigencia de los cooperativistas mineros para tratar el tema del IVA y un pedido adicional de que la fundidora de Vinto pueda abrir una sucursal en Llallagua que permita una inyección económica a Vinto para que se otorgue un anticipo a los cooperativistas en cuanto entreguen sus minerales.

Representantes de algunas comunidades del TIPNIS se reúnen en el palacio de Gobierno con el presidente Evo Morales para ratificarle su respaldo a la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, señalando que la carretera llevará desarrollo a la región. Señalan que el aislamiento hace que sus hijos no puedan tener servicios de salud ni de educación, lo que hace muy difícil su sobrevivencia. Participan en la reunión corregidores de poblaciones como Puerto Pancho, San Antonio, las de comunidades Yuracaré, Tres de mayo, San Juan del Isiboro, Villa San Juan de Dios, Sanandita, Montegrande y San Ignacio de Moxos.

La marcha en apoyo a la gestión del gobierno de Evo Morales avanza hacia La Paz desde Calamarca, descansando en el Cruce Vilaque de la carretera Panamericana, terminando la jornada en San Antonio.

Martes 11

En el departamento de Oruro 50 comunarios de las provincias Avaroa, Ladislao Cabrera y Dalence, junto a la dirigencia del Comité Cívico, se declaran en huelga de hambre en instalaciones de la gobernación en defensa del territorio de Oruro y contra hechos que consideran de avasallamiento por parte de lugareños de localidades limítrofes del departamento de Potosí. Los huelguistas señalan que hasta ahora se ha dialogado con autoridades nacionales, pero sin resultados. Denuncian que además de los problemas limítrofes entre Coroma, Potosí, con Quillacas, Oruro, ahora se tiene el conflicto del Ayllu Gilanco Tayaquira de la provincia Dalence del departamento de Oruro, que ha

sido incluida erróneamente por el INRA nacional en el Ayllu Chullpa de Potosí. Los comunarios y la dirigencia cívica de Oruro demandan la presencia de la ministra de Autonomías y que se realicen inspecciones frente a las denuncias que presentan de avasallamiento y sembradío de quinua en una extensión de más de 50 hectáreas en el sector de Rodeo, por parte de comunarios de Coroma.

El gobierno nacional, a través de su ministro de Minería, José Pimentel, logra un acuerdo con las cooperativas de mineros del norte de Potosí que se movilizaban contra el IVA, comprometiendo una ley corta de exención de impuestos. Por otra parte, la empresa Metalúrgica de Vinto compromete la instalación de una agencia en el centro minero de Llallagua para la compra de minerales. El acuerdo deriva en el cese de un corte de rutas.

Miércoles 12

Miles de manifestantes entre campesinos de la región andina, cocaleros, mineros, colonizadores y otros sindicatos afines al gobierno y funcionarios gubernamentales marchan por el centro de la ciudad de La Paz en apoyo al presidente Evo Morales. Una buena parte de las y los marchistas llega a la sede de gobierno tras seis días de caminata, provenientes de Oruro, Cochabamba y Potosí; otro grupo llega por Villa Fátima –desde los Yungas–, mientras otros ingresan por la zona Sur de la ciudad desde Río Abajo. La marcha termina en una concentración en la plaza Villarroel. Dirigentes campesinos señalan que la marcha se da frente a lo que consideran un acecho al gobierno de los opositores y para mostrarle al presidente que no está solo. En el acto se manifiestan expresiones a favor de la gestión de Evo Morales, la democracia, las elecciones judiciales y la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. El presidente Morales llega al lugar para cerrar el acto y es recibido con ritos ancestrales.

Martes 18

El gobierno nacional, a través de su ministra de Autonomías, Claudia Peña, firma un acuerdo con el COMCIPÓ para resolver el pliego petitorio de Potosí sobre la base de lo acordado con el presidente Evo Morales en la reunión del pasado 7 de octubre. En lo que respecta a uno de los temas más conflictivos, el de los límites entre Coroma, Potosí, y Quillacas, Oruro, se establece que la ministra convocará a las partes para trabajar en un proyecto de ley especial en una reunión que debe realizarse en 15 días. En caso de no llegar a ningún resultado en el consenso del proyecto de ley especial, el presidente buscará remitir el proceso al Tribunal Supremo de Justicia.

Una de las integrantes de la marcha en defensa del TIPNIS, María Regina Yujo, llega de emergencia a La Paz y a las 11:30 hs da a luz en el hospital La Merced de La Paz a un niño de tres kilos. De la misma manera, en horas de la tarde llega desde la cumbre otra mujer embarazada al hospital La Merced, y es probable que en la madrugada de ese día tenga al bebé. También llegan 40 indígenas marchistas que por su estado de salud son trasladados para ser atendidos en emergencia.

Miércoles 19

Después de 66 días de marchar y de 600 kms recorridos, y luego de haber vivido una brutal represión policial en el trayecto, la marcha en defensa del TIPNIS y contra la construcción de la

carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos llega a la sede del gobierno. Arriban representantes de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán apoyados por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPI LAP), la Organización Indígena Chiquitana (OICH), la APG, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO) y la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). Desde Tierras Altas, el CONAMAQ también respalda la medida y se une a la marcha al igual que activistas sociales, ambientalistas y universitarios que acompañan la llegada de la marcha, habiéndose sumado a la misma, muchos de ellos, desde Caranavi. En La Paz se recibe a la marcha en un ambiente festivo y de solidaridad. Una suerte de callejón humano desde Villa El Carmen hasta la plaza Murillo escolta a las y los marchistas con expresiones de apoyo, ofreciéndoles refrescos, agua, pan, galletas y fruta, entre otros alimentos. El municipio paceño y la universidad pública ofrecen apoyo logístico para cobijar al aproximadamente millar de personas que arriban en la marcha. Médicos de diferentes instituciones brindan apoyo sanitario sobre todo en casos de afecciones provocadas por el frío y la altura a la que los indígenas de Tierras Bajas no están acostumbrados. La marcha termina en una concentración en la plaza Mayor de la basílica de San Francisco, donde tras escuchar el himno nacional se ofrece una liturgia católica y, posteriormente, se da un mitin con discursos de diferentes dirigentes. Finalizado el acto, algunos marchistas se dirigen nuevamente a la plaza Murillo sin encontrar oposición de la fuerza policial, replegada por orden gubernamental. En estas condiciones, un grupo de representantes se instala estratégicamente en el centro del poder político, en una vigilia en espera de que el presidente Evo Morales los reciba. La policía tiende un cordón de seguridad en las cuatro esquinas de ingreso al lugar para evitar que más marchistas tomen la plaza. En un inicio prohíben la entrada con ropa, cobijas y alimentos para los indígenas. Sin embargo, ya cerca a las 23 hs, llega al lugar el comandante de la Policía Departamental, coronel Wenceslao Zea, y ordena que se permita el ingreso de ayuda. Minutos después llegan colchones y ropa. Entretanto, el primer mandatario se encuentra en Cochabamba. Desde el gobierno se informa que se entregó una carta a la dirigencia indígena, a 12 kilómetros de su arribo a La Paz, invitándolos al diálogo. El presidente de las comunidades TIPNIS, Fernando Vargas, afirma que la marcha ha llegado a La Paz para ser recibida por el presidente. Se señala que la carta será analizada por la dirigencia para dar una respuesta al gobierno.

En Santa Cruz, más de 30 trabajadores de la Cooperativa de Agua de la Villa Primero de Mayo (COOPAGUAS) inician una huelga en sus puertas de ingreso exigiendo un aumento de salarios y el pago de horas extras adeudado. A la protesta se suman dirigentes vecinales, que reclaman el pago excesivo de las tarifas, exhibiendo sus facturas, algunas de las cuales alcanzan los Bs 400. El gerente de COOPAGUAS informa que el conflicto no afecta la atención al público ni la provisión de agua a los más de 23 mil socios, y señala que en esta etapa del año se puede aumentar el salario a los trabajadores debido a que el Programa de Operaciones Anual (POA) 2011 ya está ejecutado en un 75%.

Jueves 20

El comandante Departamental de La Paz, coronel Wenceslao Zea, es destituido de sus funciones por haber permitido el ingreso de alimentos, cobijas y demás vituallas para la vigilia que se instaló en la

plaza Murillo, encabezada por los principales dirigentes del TIPNIS y CONAMAQ. Se señala que la autoridad habría incumplido órdenes del comandante general de la Policía Boliviana.

La dirigencia indígena del TIPNIS envía una carta al presidente Evo Morales expresando su determinación de dialogar sólo en el palacio de Gobierno y no en la Vicepresidencia como planteara el ejecutivo. Mientras el presidente espera a la delegación indígena en instalaciones de la vicepresidencia, los dirigentes enfatizan que desde que la marcha partió de Trinidad, el 15 de agosto, se planteó la demanda de una reunión con el propio presidente y esperan que los reciba en el palacio de Gobierno. Además, solicitan que se permita el ingreso a la plaza Murillo a las y los marchistas, mientras en el lugar una veintena de representantes realiza una vigilia. Señalan que, dado el caso, definirían la delegación que ingresará al palacio de Gobierno a reunirse con el presidente, demandando que se coloque una pantalla gigante para que las y los marchistas en pleno puedan seguir el desarrollo de la reunión. Por otra parte, trasladarse a la Vicepresidencia supondría para los marchistas dejar la plaza Murillo, donde se han ubicado estratégicamente. En otro orden, la COB se declara en estado de emergencia nacional para exigir una pronta solución del conflicto. La dirigencia cobista señala que la defensa del TIPNIS no es sólo de los indígenas, sino de orden nacional, por tratarse de un patrimonio de todos los bolivianos. Plantean que es necesario que los indígenas actúen de manera coordinada con los trabajadores y critican a los opositores al gobierno y a los partidos de “derecha” por intentar aprovechar la marcha para sus propios fines políticos. Entretanto, un grupo de personas intenta, desde horas de la tarde, romper el cordón policial para ingresar a apoyar la vigilia instalada en la plaza. Además de algunas personas provenientes de la marcha y activistas que la respaldan, llegan al lugar algunos jóvenes trotskistas y trabajadores del magisterio urbano. Alrededor de las 22 hs un grupo de personas intenta romper el cerco policial y se viven momentos de tensión en un forcejeo con la policía, que haciendo uso de gases lacrimógenos logra dispersarlo. A pesar de la confrontación, otro grupo de indígenas logra mantenerse en la vigilia al otro lado del cerco. En medio del conflicto se conoce la noticia de que agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) cercaron un mega laboratorio de cristalización de cocaína oculto en la selva del TIPNIS, produciéndose un enfrentamiento con el saldo de un policía y un narcotraficante colombiano muertos.

Viernes 21

El presidente Evo Morales veta el proyecto de ley Corta sancionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y propone una nueva redacción que incorpora la prohibición de que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, o cualquier otra, atraviese el parque nacional Isiboro Sécure; además, declara a la región como zona intangible de preservación ecológica. Tras la noticia, las y los marchistas del TIPNIS delegan 20 representantes para instalar el diálogo con el presidente Evo Morales. Se inicia el diálogo y el principal dirigente de las comunidades del TIPNIS, Fernando Vargas, informa que en la primera jornada de diálogo se habrían dado algunos avances. Básicamente se trabaja en la agenda y metodología a utilizarse en el diálogo, que consiste en analizarse de manera conjunta cada uno de los 16 puntos del pliego petitorio, el mismo que plantea los siguientes puntos: “1.- Rechazamos la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, que afectan los territorios TIPNIS. Demandamos la paralización inmediata del estudio socio ambiental y cualquier otro estudio. 2.- Exigimos la paralización de todas las actividades hidrocarburíferas en el Parque Aguaragüe. 3.- El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe garantizar que los territorios indígenas sean respetados en la nueva legislación agraria. 4.- Demandamos que el Gobierno reconozca el derecho de recibir la retribución por

compensación de la mitigación de gases. 5.- Pedimos el desarrollo normativo y el derecho a la consulta. 6.- Exigimos el desarrollo productivo, la descentralización a las regiones del Oriente Chaco y Amazonia con asignación de recursos económicos. 7.- Demandamos que el Gobierno del Estado Plurinacional provea de los recursos económicos para la implementación en todos los territorios indígenas titulados como medio para avanzar en una "Autonomía Indígena". 8.- Ley de Bosques y Directrices. 9.- Contemplar el Parque y Áreas protegidas en la elaboración especial de las áreas protegidas. 10.- Desembolsar inmediatamente los recursos económicos asignados para la construcción de la infraestructura apropiada y el funcionamiento de la Universidad Indígena Boliviana (UIB). 11.- Incorporar en forma efectiva a los pueblos indígenas como beneficiarios del Seguro Universal de Salud. 12.- Realizar el Censo de Población y Vivienda a la brevedad posible. 13.- Implementar planes de vivienda. 14.- Implementar políticas de manejo, protección y conservación para resolver el problema del Río Pilcomayo. 15.- Garantizar el derecho pleno del acceso y uso de la información y la comunicación a los pueblos indígenas. 16.- El cumpliendo del acuerdo de mayo del 2010 con la APG, en temas de autonomía indígena, desarrollo rural, tierras e hidrocarburos". Los dirigentes del TIPNIS destacan la buena predisposición del mandatario, pero informan que la vigilia de marchistas se mantendrá durante la noche en la plaza Murillo, frente al palacio de Gobierno. Agregan que informarán a sus bases sobre lo conversado con el primer mandatario.

Sábado 22

El presidente Evo Morales y la dirigencia indígena del TIPNIS firman un primer acuerdo en el que establecen los siguientes tres puntos: a) que se realizará una inspección mixta a esa zona amazónica en un plazo de 30 días, b) que cualquier asentamiento ilegal fuera de la línea roja del TIPNIS será expulsado de manera inmediata y c) que una vez promulgada una nueva ley –con las observaciones enviadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)– de manera inmediata se trabajará en su reglamento respectivo de forma conjunta. Suscrito el acuerdo, se ha declarado un cuarto intermedio.

Las seis federaciones de productores de coca y campesinos del Trópico de Cochabamba se declaran en emergencia y amenazan con iniciar movilizaciones en defensa del gobierno y manifestando su respaldo al presidente Evo Morales, pues según declaraciones del presidente de la mancomunidad de municipios de la zona, Rimer Ágreda, consideran que existe un plan de la oposición escondido detrás de la movilización indígena del TIPNIS. Además, señalan que existe intransigencia por parte de algunos dirigentes indígenas para encontrar soluciones al conflicto, por lo que definen dar un plazo de 48 horas para que se encuentren soluciones o de lo contrario se movilizarán a la sede de gobierno con la finalidad de instalarse en una vigilia permanente.

Se reinicia el diálogo entre el gobierno y dirigentes de la marcha indígena del TIPNIS, tras un cuarto intermedio de cinco horas en el que el presidente Evo Morales asistió a un acto oficial en la provincia Muñecas, departamento de La Paz, en el que los marchistas logran superar unos problemas internos sobre la delegación de las representaciones a la reunión y por la acreditación de los técnicos que los acompañan en las negociaciones, observada por personeros del gobierno.

El gobierno nacional y la dirigencia del TIPNIS y de organizaciones indígenas declararon un nuevo cuarto intermedio hasta el domingo a las 7 hs en el diálogo que iniciaron en busca de acuerdos sobre el pliego petitorio de 16 puntos.

Domingo 23

A las 7:15 hs de la mañana se reanuda el diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena del TIPNIS y de organizaciones indígenas del oriente en el palacio de Gobierno. Según declaraciones públicas de personeros gubernamentales, en la sesión se habrían logrado avances en los puntos centrales y conflictivos del pliego de demandas de 16 puntos, produciendo acuerdos relativos a la prohibición de la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS y al desalojo de los colonos de esa región para que no haya más asentamientos ilegales en la zona, además de la demanda relacionada con el parque Aguaragüe, en el Chaco de Tarija, en el cual la APG exige una investigación sobre el mal sellado de algunos pozos, que provoca la emisión de gases y la consecuente contaminación.

Lunes 24

La ALP, reunida en congreso, aprueba, con más de dos tercios de los votos de sus asambleístas, la ley de Protección del TIPNIS, según las recomendaciones enviadas por el presidente Evo Morales Ayma, de acuerdo a lo pactado con la dirigencia indígena de Tierras Bajas. La ley es remitida al órgano ejecutivo para su promulgación. En horas de la noche, el presidente Evo Morales promulga la ley de Protección del TIPNIS en un acto celebrado en el palacio de Gobierno en presencia de delegados de la marcha indígena. En su artículo 1, la norma declara al TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas chimán, yuracaré y mojeño-trinitario, señalando que su protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia. Se ratifica al TIPNIS como territorio indígena de los mencionados pueblos, siendo éste de carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable y como área protegida de interés nacional irreversiblemente. Además, se declara la intangibilidad de ese territorio, por lo que se establece que se deberá adoptar las medidas legales correspondientes que permitan revertir, anular o dejar sin efecto los actos que contravengan a esta naturaleza jurídica. La definición del concepto de intangibilidad y sus modos de aplicación quedan pendientes para la reglamentación de la ley. El artículo tercero dispone que la carretera Villa Tunari San - Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atravesará el TIPNIS. El artículo 5 prohíbe los asentamientos y ocupaciones de hecho promovidas o protagonizadas por personas ajenas a los titulares, siendo posible el desalojo con intervención de la fuerza pública.

El Comité Cívico de Oruro (CCO) inicia la primera jornada de paro cívico de 48 horas, exigiendo al gobierno soluciones al conflicto de límites con el departamento de Potosí a través de la promulgación de una ley. Durante la jornada de paro de actividades se instalan bloqueos en varios puntos de la ciudad de Oruro con la participación de distintos sectores sociales, entre los que se destacan la universidad pública, la alcaldía, el magisterio, los trabajadores en salud, la Federación de Juntas Vecinales y gremialistas, entre otros. En horas de la tarde se realiza una multitudinaria marcha encabezada por el CCO y la COD. La protesta parte del parque de la Unión Nacional, recorre las principales calles de la ciudad, pasa por la plaza 10 de febrero y culmina en un mitín en la avenida Cívica. La dirigencia cívica y autoridades departamentales y municipales coinciden en calificar de contundente y exitosa la medida, destacando la participación y el compromiso de la ciudadanía en defensa de lo que consideran la integridad territorial del departamento.

Los mineros cooperativistas de Potosí inician nuevamente medidas de presión en rechazo al IVA debido a que se les plantea la obligación de tener un número de identificación tributaria (NIT), aunque el gobierno asegura que no pagarán dicho impuesto, según lo acordado el día 11 del presente mes. Los cooperativistas protestan por no haber sido consultados sobre la ley Corta, tratada en ALP, que si bien exime del pago de ese impuesto a este sector, consideran que afecta la cadena de comercialización de minerales, por lo que piden dejar sin efecto a esa normativa. Señalan que pese a que la medida les beneficia, el cobro del IVA a las casas comercializadoras de minerales afectará a la pequeña minería privada.

Martes 25

El gobierno nacional y las y los marchistas del TIPNIS conforman una comisión para trabajar por tiempo y materia la reglamentación de la ley de Protección del TIPNIS promulgada el 24 de octubre. El diputado indígena Pedro Nuni explica que el desafío de este trabajo es que se defina con claridad el término “intangibilidad”, incorporado en la ley, señalando sus alcances y límites. Explica que el término de intangibilidad es una figura jurídica que no está en la constitución ni en ninguna de las leyes, sino en el decreto supremo de creación TIPNIS, donde se establece la intangibilidad en ciertas áreas de ese territorio. La dirigencia indígena informa que a la conclusión de la redacción de la reglamentación se prevé un “acto de confraternización” en la plaza San Francisco, donde participarán indígenas del TIPNIS y otros sectores sociales para agradecer la hospitalidad de la ciudad de La Paz.

La vigilia iniciada en días pasados por las seis federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba en demanda de construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos ingresa en un cuarto intermedio para analizar los alcances de la ley 180 de Protección del TIPNIS. Entretanto, la presidenta de la Coordinadora Departamental para el Cambio (CODECAM), Leonilda Zurita, informa que se mantendrá la emergencia en las organizaciones sociales por la demanda de construcción de una carretera que integre a Cochabamba y Beni.

El CCO cumple su segunda jornada de paro cívico por una ley de unidades territoriales que defina los límites con el departamento de Potosí y el cumplimiento de las actas de pacificación previamente firmadas. En la capital del departamento el sector del transporte repliega sus vehículos, mientras las y los vecinos bloquean las principales avenidas. Algunos comerciantes cierran sus puestos de venta. Entretanto, aproximadamente mil comunarios de las provincias Avaroa y Ladislao Cabrera, y las comunidades en conflicto limítrofe con Potosí: Rodeo, Ichalula y Potosillo, declaran el martes un paro indefinido, con bloqueo de carreteras. Por su parte, los representantes cívicos de Potosí replicaron con amenazas de medidas similares y con denuncias sobre defensa de su territorio. De parte del gobierno, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, convoca a los representantes de los departamentos de Oruro y Potosí a una reunión para tomar decisiones sobre la base del consenso e informa que el resultado del estudio técnico limítrofe que se realizará en los municipios en conflicto se conocerá hasta el 15 de diciembre. Del palacio de Gobierno llega una invitación al CCO para asistir a un diálogo en la sede de gobierno, invitación que es rechazada por la representación cívica que pide que el jefe de Estado se traslade a Oruro.

Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud (CPS) inician un paro nacional indefinido exigiendo la renuncia del actual director ejecutivo de esta entidad, Víctor Hugo Vargas, a quien acusan de supuestas irregularidades. Además, reclaman por el despido de varios funcionarios en las oficinas

de La Paz y Potosí, con lo que señalan que se estaría incumpliendo el compromiso de inamovilidad funcionaria pactado entre el gobierno y el sindicato. El paro recibe el respaldo de la COB. Por su parte, el director cuestionado señala que no renunciará al cargo, calificando a las movilizaciones como “políticas” y movidas por intereses personales de algunos funcionarios.

Una comisión gubernamental presidida por el ministro de Minería, José Pimentel, y la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, se traslada hasta la ciudad de Potosí para reunirse con los dirigentes cooperativistas que reiniciaron el día 24 medidas de presión contra la obligatoriedad de obtener un registro de NIT. Tras la negociación con la comisión del gobierno nacional y el gobernador de Potosí, Félix González, los cooperativistas mineros levantan sus medidas de presión. Las autoridades explican que el sector, sin estar al margen del cumplimiento del IVA en el marco de la ley 843, estará gravado con tasa cero por la venta de sus productos.

Miércoles 26

Cocaleros de las seis federaciones del trópico resuelven mantener la demanda de construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos y dan un plazo de 48 horas para que madereros, empresarios y a ONGs que trabajan en la zona salgan del TIPNIS, aduciendo su intangibilidad.

En Cochabamba, choferes afiliados a la Federación Departamental de Transporte (FDT) bloquean con sus propios vehículos estacionados las principales calles y avenidas de la ciudad desde horas de la madrugada. Exigen que la alcaldía haga cumplir las ordenanzas municipales que prohíben el funcionamiento de líneas ilegales de transporte, que según denuncian, han proliferado el último tiempo. Cerca del mediodía, luego de una reunión con autoridades municipales, se firma un acta de entendimiento en la que se acuerda que se aplicarán severas sanciones por desdoblados arbitrarios de rutas y al trabajo de líneas ilegales.

Jueves 27

En el departamento de Cochabamba, alrededor de 200 miembros del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) inician una vigilia en la zona del trópico y convocan a autoridades gubernamentales y a dirigentes de la CIDOB y la CPITCO con la finalidad de que expliquen los alcances de la ley corta de protección de TIPNIS. Señalan que entre sus principales preocupaciones está la interpretación del término “intangibilidad” de la norma.

Las y los trabajadores de la CPS continúan con su paro nacional indefinido por tercer día consecutivo exigiendo la renuncia del actual director ejecutivo de esta entidad, Víctor Hugo Vargas, a quien acusan de supuestas irregularidades y demandan la restitución de tres trabajadores que fueron despedidos. La dirigencia en huelga informa que, a fines del mes de julio, se envió a la ministra de Salud, Nila Heredia, 300 folios que respaldarían las denuncias contra el director de la institución. Amenazan con radicalizar las medidas de presión. Entretanto, otro grupo de trabajadores de la oficina central pide a los huelguistas que no perjudiquen su trabajo y a los asegurados, ya que desde el inicio de las medidas de presión sólo se atienden los servicios de emergencia.

En Santa Cruz, vecinos del puente del Urubo marchan para exigir mejoras en materia de salud, educación, caminos y una explicación sobre obras no ejecutadas a pesar de estar en el programa de gobierno “Bolivia cambia, Evo cumple”.

Cientos de gremialistas marchan por diferentes calles de Santa Cruz en protesta por la acumulación de basura en las calles y mercados de la ciudad. La marcha se dirige hasta las puertas de la fiscalía, donde los manifestantes presentan una denuncia formal en contra de los concejales municipales por su inacción en este tema.

Viernes 28

En Cochabamba, vecinos de la localidad de Colcapirhua inician un paro cívico y bloquean las avenidas Blanco Galindo y Víctor Ustáriz por un conflicto de límites con el municipio de Tiquipaya. Demandan la propiedad del sector de Rumy Mayu, hasta la calle Díaz Rancho, unos 500 metros de área que están en la línea limítrofe entre ambos municipios. Arguyen que la zona le pertenece a su jurisdicción desde que Colcapirhua fue creada el 15 de abril de 1985 como la Quinta Sección de la provincia Quillacollo. Con la mediación de la gobernación del departamento, autoridades de ambos municipios, presidentes de concejos y comités de vigilancia vecinal y de la OTB firman un acta de entendimiento mediante la cual acuerdan conformar una comisión multidisciplinaria que evaluará todos los antecedentes históricos, culturales y democráticos para solucionar definitivamente el conflicto. Para tal efecto, cada municipio nombrará a diez representantes. Se prevé que el próximo 10 de noviembre la comisión se reúna en una nueva jornada de negociación.

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija (FSUCCT) se declara en emergencia luego de haberse cumplido un plazo de 48 horas otorgado a la gobernación del departamento para que deposite los recursos del Programa Solidario Productivo (PROSOL) a las cuentas de la unidad gestora correspondiente. La dirigencia campesina explica que ya se habrían desembolsado los recursos para 100 comunidades, pero que son más de 600 las que se deben beneficiar de este programa.

Sábado 29

En el departamento de Cochabamba, desde las 6 hs de la mañana, alrededor de 300 miembros del CONISUR bloquean con piedras, llantas y troncos la ruta nueva hacia Santa Cruz, a la altura del km 170, en demanda de la continuidad de construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, que ha quedado paralizada por la ley de protección del TIPNIS. La dirigencia aclara que no se trata de una movilización contra el presidente Evo Morales, sino para exigir que la dirigencia de la VIII Marcha Indígena, que llegara a La Paz tras 64 días de caminata desde Trinidad, explique por qué pidieron la aprobación de una ley corta con el término de intangibilidad para el parque. En horas de la tarde se declara un cuarto intermedio en el bloqueo, pero amenazan con reanudar las medidas de presión luego de la conmemoración del la festividad de todos los santos y difuntos.

Glosario de siglas

ALP	Asamblea Legislativa Plurinacional
APG	Asamblea del Pueblo Guaraní
ASL	Asociaciones Sociales del Lugar
CCO	Comité Cívico de Oruro
CIDOB	Central Indígena de los Pueblos del Oriente de Bolivia
CIPOAP	Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando
CIRABO	Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia
CMIB	Central de Mujeres Indígenas del Beni
CNAMIB	Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia
CNS	Caja Nacional de Salud
COB	Central Obrera Boliviana
COD	Central Obrera Departamental
CODECAM	Coordinadora Departamental para el Cambio
CONAMAQ	Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu
COMCIPÓ	Comité Cívico Potosinista
CONISUR	Consejo Indígena del Sur
COOPAGUAS	Cooperativa de Agua de la Villa Primero de Mayo
CPE	Constitución Política del Estado
CPEM-B	Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni
CPIB	Central de Pueblo Indígenas del Beni
CPI LAP	Central de Pueblos Indígenas de La Paz
CPITCO	Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba
CPS	Caja Petrolera de Salud
EMAPAS	Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Sacaba
FELCC	Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
FDT	Federación Departamental de Transporte
FSUCCT	Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
MAS	Movimiento al Socialismo
PROSOL	Programa Solidario Productivo
OICH	Organización Indígena Chiquitana
OTB	Organización Territorial de Base
TIPNIS	Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécuré
UMSS	Universidad Mayor de San Simón
UTOP	Unidad Táctica de Operaciones Policiales

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).
Coordinadoras: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.
Fuentes: diarios Los Tiempos, Bolpress, ABI y El Deber.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Bolivia

Noviembre 2011

Editada en abril 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d' Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1028

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Bolivia***



Integrantes

Pilar Uriona Crespo
Dunia Mokrani Chávez

Fuentes

diarios Los Tiempos, La Razón, Bolpress,
ABI y El Deber

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Noviembre de 2011

Martes 1

En Chuquisaca, la asamblea de instituciones y organizaciones de ese departamento se declara en estado de emergencia ante el incumplimiento del Ministerio de Hidrocarburos en emitir una convocatoria pública internacional para el estudio de relación, extensión y establecimiento del factor de distribución del campo gasífero Margarita, ubicado entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca. Para la asamblea, es esencial tratar el tema de una redistribución de regalías con Tarija, en caso de comprobarse mediante un estudio técnico científico que el campo Huacaya, en Chuquisaca, es uno solo con el campo Margarita, que está en el lado tarijeño, y a partir de ello establecer los porcentajes de participación.

En la carretera Oruro - Potosí, los dueños de vehículos indocumentados que fueron retenidos por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) inician un bloqueo, a 15 kilómetros de Challapata. Carlos Machado, representante del sector, informa que se mantendrá esta medida de presión hasta que la ANB legalice a todos los vehículos que fueron registrados para este fin.

El inicio de las mesas técnicas de diálogo de los cuatro municipios enfrentados por el tema de límites es suspendido a consecuencia de la citación fiscal interpuesta por el municipio de La Paz a alcaldes de Achocalla, Palca y Mecapaca, por el cabildo que realizaron el 5 de septiembre en la plaza Humboldt de la zona sur de La Paz. El director de Coordinación Territorial de La Paz, Fabián Siñañi, justifica la demanda interpuesta por el alcalde paceño, Luis Revilla, quien dijo que la autoridad edil “no hizo denuncia alguna de carácter legal y que el Ministerio Público emitió la citación para que los involucrados presten sus declaraciones informativas por el cabildo efectuado el 5 de septiembre pasado”. Pese a la molestia, los delegados acreditados a las mesas de diálogo no descartaron asistir a una nueva convocatoria para analizar la problemática de límites.

Jueves 3

El Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CASEGURAL) inicia un paro de 48 horas para rechazar la designación de Juan Carlos Alvarado como nuevo gerente general de esa institución, la cual, pese a que responde a una decisión del presidente Evo Morales, es considerada arbitraria e ilegal porque no se habría negociado entre la Comisión de Reestructuración de la Caja Nacional de Salud (CNS) y la Central Obrera Boliviana (COB). A ello se suma la molestia de los dirigentes por la determinación de la ministra de Salud, Nilda Heredia, de poner en vigencia la resolución administrativa que permite la libre afiliación y desafiliación de dicho ente gestor. Paralelamente, la Federación Sindical de Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud (FSTCPS) define un cuarto intermedio en la huelga indefinida que mantienen desde octubre pasado para exigir la destitución definitiva del director de la caja, Víctor Hugo Vargas, que ha sido suspendido temporalmente, acusado de cometer presuntos actos de corrupción. La CNS atiende a cerca de 2 millones de personas en todo el territorio nacional y el 60% de los asegurados pertenece al Estado,

que funge como empleador. Sólo el sector del magisterio urbano y rural alcanza a 120 mil beneficiarios. La gestión para desafiliarse en la CNS no es individual, sino que se hace a través de la empresa empleadora y por medio del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El trámite no tiene costo, pero demora entre uno y tres meses. A ambos conflictos se suma además el de la caja bancaria, cuyos trabajadores cumplen un paro desde hace 16 días demandando una auditoría para los servicios de laboratorio, rayos x y tomografía, y exigiendo el pago de horas extras, fines de semana y feriados.

Domingo 6

La FSTCPS continúa con el paro indefinido, y decide suspender el cuarto intermedio declarando el jueves pasado, en el cual participan también los médicos, porque a este sector tampoco le ha respondido el Ministerio de Salud respecto a su pedido de destitución definitiva de Víctor Hugo Vargas.

Lunes 7

En Oruro, el Comité Cívico de ese departamento se declara en estado de emergencia para exigir una solución al conflicto limítrofe existente con el departamento de Potosí respecto al proyecto de Ley de Unidades Territoriales, las denuncias de avasallamiento y el incumplimiento de las actas de pacificación firmadas en 2010. Por su parte, el gobernador de Oruro informa que hoy se tiene programada una nueva reunión en Quillacas -, Oruro, con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, y dirigentes de esa comunidad para analizar estos temas. El departamento de Oruro reclama un territorio sobre la frontera con Potosí, que abarca a las comunidades de Coroma y Quillacas, donde se han registrado avasallamientos por comunarios de ese departamento. A su vez, los comunarios de Potosí también exigen una solución al problema al reivindicar estos territorios como suyos.

La FSTCPS añade a sus medidas de presión la huelga indefinida para exigir la destitución definitiva del suspendido director general ejecutivo, Víctor Hugo Vargas. Sobre el tema, la ministra de Salud, Nila Heredia, quien dispuso la suspensión de Vargas de la dirección de la Caja Petrolera de Salud (CPS), señala que se llevan adelante las investigaciones para tomar una decisión definitiva, si es que existen las pruebas suficientes. Los sindicatos presentaron un legajo de acusaciones contra Vargas, quien se ha defendido manifestando que las protestas se deben a que “los sindicalistas le impidieron llevar adelante acciones para evitar la corrupción en esa institución”.

Martes 8

Comunarios de Oruro de los municipios de Quillacas, Pampa Aullagas y Salinas de Garcí Mendoza, exigen al gobierno nacional agilizar la elaboración de la nueva ley de las Unidades Territoriales, para encarar una solución al diferendo limítrofe entre ambos departamentos. Esta petición se hace conocer en la reunión realizada en el municipio de Quillacas con la presencia de los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Autonomías, Claudia Peña, además de autoridades nacionales y departamentales. La ministra de Autonomías ratifica el envío de todas las denuncias de avasallamiento registradas en territorio de Oruro ante a la Fiscalía General de Bolivia para el inicio

de los procesos investigativos. Con ello, el Ministerio de Autonomías se convertirá en parte civil o coadyuvante en estos procesos y sancionará a quienes incumplieron las actas de pacificación.

Pese a nuevas ofertas del Ministerio de Salud para normalizar sus actividades, los trabajadores y médicos de la CPS se mantienen en paro exigiendo la destitución o renuncia del suspendido director general ejecutivo, Víctor Vargas.

En Cochabamba, vecinos del Distrito 9 salen a las calles exigiendo a los concejales de Cercado la inmediata aprobación del cambio de uso de suelos. Las autoridades municipales rechazan toda posibilidad de dar curso a este pedido, ya que existen pasos normativos y técnicos que deben ser resueltos. El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) está en plena elaboración y estará listo para los primeros meses de 2012.

Miércoles 9

En Cochabamba, en la localidad de Vinto, un centenar de vecinos inicia un bloqueo de la carretera que conecta al occidente boliviano, a la altura del kilómetro 20, por la tenencia de un pozo de agua potable privado en ese sector. El mismo fue construido hace unos 10 años por los lugareños de la Organización Territorial de Base (OTB) San Jorge; posteriormente se dividió y ahora ambos bandos pelean por el uso del pozo. Actualmente, desde el municipio se negocia la solución del problema con la oferta de perforación de un nuevo pozo.

Los trabajadores de la CNS acatan un paro nacional movilizado de 24 horas, rechazando la designación del nuevo gerente general y el anuncio oficial de libre afiliación o desafiliación, sin suspender la atención a los asegurados, como dispuso el ampliado de la Federación Nacional de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (FENSEGURAL).

En La Paz, se firma un acta de acuerdo entre los departamentos de La Paz y Oruro para garantizar la pacificación en la zona limítrofe de los municipios de Caracollo y Colquiri, tras una reunión entre la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, los gobernadores Santos Tito, de (Oruro), y Cesar Cacarico, de La Paz, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y las autoridades originarias y ediles de los municipios en conflicto.

En La Paz, los propietarios de vehículos indocumentados, conocidos como “chuteros”, instalan un bloqueo en la esquina de las calles Ayacucho y Potosí, con la intención de ingresar a la plaza Murillo para demandar que el gobierno atienda su pedido para nacionalizar y legalizar sus vehículos, pagando el impuesto que corresponde. Por su parte, la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, manifiesta que la ley ha dado tres meses de plazo a los propietarios de vehículos indocumentados para poner en orden sus papeles y realizar sus trámites.

Jueves 10

Los transportistas de larga distancia del departamento de Oruro bloquean los ingresos a los recintos aduaneros emplazados en la zona sur de esa ciudad, en plena avenida Circunvalación, para protestar contra una intimación de pago por el ingreso ilegal de remolques a Bolivia. En caso de que no se

atienda su petición de no pagar los 1.300 dólares por el registro de sus remolques, semirremolque o chatas intensificarán el bloqueo en las carreteras.

En La Paz, continúa por segundo día el bloqueo de los propietarios de vehículos indocumentados.

En Santa Cruz, dirigentes y vecinos de ocho barrios de la zona oeste instalan un bloqueo en la carretera Santa Cruz - Cochabamba, en el puente de La Amistad Boliviano - Japonés, para demandar a la alcaldía la construcción de un módulo educativo de cinco aulas. Luego de 18 horas de la medida de presión, se firma un acuerdo en el despacho del alcalde, mediante el cual la autoridad se compromete a iniciar las obras desde el 21 de este mes.

Viernes 11

En Beni, comerciantes y estudiantes de la ciudad de Trinidad realizan una marcha de protesta contra la inseguridad ciudadana existente en esa urbe, debido a que días atrás dos adolescentes perdieron la vida al ser asaltados. Si bien los asesinos fueron aprehendidos, los mismos están por salir en libertad. De ahí que los habitantes de la ciudad exijan que no queden sin castigo y pidan para ellos 30 años de cárcel.

Los médicos y trabajadores de ramas anexas de la CNS realizan un paro nacional de 24 horas, sumándose a los trabajadores sindicalizados, para protestar nuevamente contra la designación de Juan Carlos Alvarado como gerente general de esta institución. Por su parte, la ministra de salud, Nila Heredia, reitera que Alvarado se mantendrá en el cargo, porque su posesión en él es por disposición de una resolución suprema firmada por el presidente Evo Morales.

Lunes 14

En Oruro, entidades públicas y privadas de transporte, gremialistas, juntas vecinales, el magisterio, obreros y organizaciones sociales inician el primer día de un bloqueo de carreteras y realizan una multitudinaria marcha de protesta en defensa de sus límites en la querella con Potosí. La movilización logra aglutinar a todos los sectores, incluso provinciales, para exigir a la administración del presidente Evo Morales una solución al conflicto limítrofe entre comunarios de Potosí, en Coroma, y Oruro, en Quillacas. Los bloqueos de carreteras por el sector de transporte interprovincial y la Federación Sindical Unida de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO) se instalan en la carretera Oruro - La Paz, Caracollo en la carretera Oruro - Cochabamba, en Caihuasi, en el cruce Machacamarquita, carretera hacia Potosí, Sucre, Tarija y Villazón, y el sector del puente Español, a la altura de la carretera al occidente del país, que recorre de Oruro a Pisiga.

En Sucre, al menos tres de las salidas que comunican con el resto del país son bloqueadas por trabajadores de los sindicatos de transporte pesado, quienes se oponen al pago por la nacionalización de los remolques de los camiones de alto tonelaje.

Los sindicatos de la CNS de todo el país, en cumplimiento de la resolución del ampliado convocado por la FENSEGURAL, inician un paro de 48 horas en exigencia de la destitución o renuncia del nuevo gerente general de la CNS, Juan Carlos Alvarado. Entretanto, la ministra de Salud, Nila Heredia, además de ratificar la permanencia de Alvarado en el cargo, rechaza las acusaciones de los

sindicatos de la CNS en el sentido de que el gobierno pretendería buscar la quiebra de esta institución.

En Santa Cruz, los equipos de la radio comunitaria de Yapacaní y del canal 8 de televisión son retirados y destrozados por un grupo de colonos de Choré porque, según ellos, los medios de comunicación eran utilizados políticamente para desacreditar al alcalde de Yapacaní, David Carvajal. El ataque a los medios, que operan en Ichilo desde 2002, se acordó en un cabildo, en el que también se aprobó la ocupación de la sede de la Federación de Comunidades Interculturales, desde donde, según los colonos afines al alcalde, el presidente del Concejo Municipal de Yapacaní, Federico Ortiz, del Movimiento Sin Miedo (MSM), cuestionaba la gestión de aquél. Los colonos ingresaron violentamente a la radio comunitaria y al canal de televisión para sustraer computadoras, consolas, ventiladores, escritorios, sillas, televisores, material de escritorio y artículos de cocina y trasladarlos hasta la comunidad Campo Víbora, donde pretenden instalarlos para reiniciar la transmisión. Entre los puntos de la resolución aprobada en la concentración de los colonos, figura la petición de destitución del comandante de la policía de esa zona, que es acusado de no resguardar a los pobladores que exigen obras. Por esa razón, los dirigentes de la concentración anuncian la creación de una policía sindical. Desde el viernes 11, el consejo municipal permanece con llave y bajo la custodia de tres efectivos policiales, por lo tanto, los trabajadores municipales de Yapacaní no acuden a sus respectivas labores. Por su parte, la dirigencia de la Federación de Comunidades Interculturales de Yapacaní anuncia que presentará una denuncia en la policía contra los colonos de Choré por los destrozos y el robo de equipos de la radio comunitaria.

Martes 15

Los trabajadores de la CNS cumplen el segundo día del paro de 48 horas declarado a nivel nacional en demanda de la renuncia del gerente general de la institución, Juan Carlos Alvarado, sin la suspensión de la atención médica a los asegurados.

Los dirigentes de las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) resuelven dar un plazo de 48 horas al gobierno para resolver el conflicto que desató la designación, supuestamente irregular, de dos autoridades del Servicio Nacional de Aéreas Protegidas (SERNAP). Los originarios de ese área protegida tomaron la semana pasada la oficina del SERNAP en Trinidad en rechazo a la designación del director nacional y departamental de esa institución. Por su parte, el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, señala que el gobierno designó a las autoridades del SERNAP violando el principio de participación de los pueblos indígenas, ya que existe un convenio de administración compartida que no fue respetado. La dirigencia indígena espera que las siguientes horas se haga presente en Trinidad la ministra de Medio Ambiente para atender la demanda planteada; de lo contrario la toma del SERNAP no será suspendida.

El sector del transporte pesado declara un cuarto intermedio en sus medidas de presión, luego de acordar con el gobierno la instalación de una mesa de trabajo para analizar el pago de impuestos y multas por la legalización de remolques o ‘chatas’ indocumentadas. Este sector bloqueaba las vías de acceso a ciudades bolivianas y a algunas fronteras en rechazo a la propuesta oficial de pagar, por unidad, 1.300 dólares, en promedio, para legalizar sus remolques. Para tratar el tema, mañana se instalará una mesa de trabajo cuyos puntos en discusión son, primero, la valoración del porcentaje

de componentes nacionales que puedan o no tener los remolques y, segundo, determinar el criterio de aplicación de los tributos y multas para legalizar a las ‘chatas’ indocumentadas.

La Comisión de Reestructuración de la CNS realiza una reunión de emergencia para buscar una alternativa de solución al conflicto planteado por los trabajadores de la institución, la misma que consistiría en dejar en *statu quo* la designación del gerente general, Juan Carlos Alvarado, y concentrarse en el trabajo de la Comisión de Reestructuración de la CNS.

Continúa por segundo día el bloqueo caminero instalado por el Comité Cívico de Oruro (CCO) en demanda de una solución al tema del conflicto limítrofe que enfrenta con Potosí. El mismo ha comenzado a afectar la realización de viajes a nivel interdepartamental y responde al rechazo al avasallamiento por comunarios de Potosí de tierras jurisdiccionales del departamento.

En Cochabamba, los pobladores del Distrito 9 realizan un bloqueo al botadero de K’ara K’ara exigiendo que la alcaldía cumpla con los 15 puntos de sus demandas, entre ellos la aprobación de los planos de las nuevas urbanizaciones. En tanto, el consejo municipal aprueba la ordenanza que autoriza al ejecutivo la suscripción de un contrato por excepción para la construcción del cerco perimetral del botadero de K’ara K’ara. El monto aprobado por el legislativo edil es de Bs 1.099.972, con la empresa Camargo Construcciones, con un plazo de ejecución de 90 días de calendario. Pese al bloqueo por el ingreso principal, el alcalde Edwin Castellanos acuerda con los pobladores de la zona de K’ara K’ara que temporalmente se permita el ingreso de los carros basureros a través del camino a Arrumani, que también llega al vertedero, para mitigar la acumulación de basura en la ciudad. Los habitantes del centro de K’ara K’ara, donde está el botadero, expresan su molestia con los del Distrito 9, debido a que el bloqueo también dificulta la distribución de agua para el consumo usual a través de carros cisternas.

Miércoles 16

Los vecinos del Distrito 7 de la ciudad de El Alto toman las oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), ubicadas en el centro de La Paz, en demanda de la expulsión de la Empresa Rural de Electrificación de La Paz (EMPRELPAZ) por prestar un servicio deficiente.

En el departamento de Tarija se cumple un paro de 24 horas declarado por el Comité Cívico en defensa del campo petrolero Margarita, cuya propiedad está en discusión con Chuquisaca. La medida de presión se orienta a rechazar una eventual distribución compartida de las regalías por la explotación del campo gasífero Margarita con Chuquisaca, lo que se decidiría sobre la base de un estudio que debe encargar la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que informa que el presidente Evo Morales ha convocado a las autoridades de los departamentos de Tarija y Chuquisaca a una reunión en La Paz para buscar una solución al conflicto.

En La Paz, los trabajadores de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE) bloquean la avenida principal de Obrajes en rechazo al cambio de horario de trabajo que dispuso la gerencia de la entidad. El representante de los afectados, Roberto Fernández, señala que “el gerente de la empresa de manera abusiva está queriendo hacer el cambio, no estamos pidiendo ningún tema económico. El gerente es responsable por llevarnos a esta medida de hecho”. Fernández explica que la gerencia de la empresa dispuso que el horario de ingreso sea desde la media noche hasta el medio

día de la siguiente jornada, lo que considera como un atentado contra la integridad física de los empleados, entre otros aspectos.

Oruro cumple el tercer día de paro regional en defensa de la integridad de su territorio y en rechazo al avasallamiento por comunarios de Coroma, en el límite con el departamento de Potosí, en tierras del municipio de Quillacas. Por su parte, la dirigencia del CCO se traslada hasta los sectores de bloqueo para recoger las propuestas de los comunarios en la perspectiva de continuar con la lucha en defensa de los límites departamentales.

Jueves 17

El ampliado nacional de la FENSEGURAL acepta la propuesta de la COB de declarar un cuarto intermedio en sus medidas de presión, implementadas para exigir la renuncia del gerente Juan Carlos Alvarado. La decisión es asumida después de varias horas de debate.

En Oruro, ocho mil familias de las urbanizaciones San Isidro, 3 de mayo y Qaqachaca realizan una vigilia en las puertas del concejo y la alcaldía en demanda de la aprobación de los planos de sus barrios. Los adjudicatarios se encuentran en estado de emergencia, ya que si bien están de acuerdo en pagar los impuestos debidos a la alcaldía y registrar los terrenos en derechos reales, las autoridades del municipio y los concejales no se ocupan del tema.

En La Paz, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de COBEE, Roberto Fernández, informa que el gerente general, René Pereira, y los trabajadores de esa entidad han acordado dejar sin efecto el cambio de horario en esa compañía, para zanjar el conflicto que movilizó en las pasadas horas a los trabajadores de esa distribuidora de electricidad. El acuerdo se logra en una reunión que se realiza en instalaciones del Ministerio de Trabajo y que estuvo presidida por la directora general de ese despacho, Giovanna Maldonado. Fernández asegura que la empresa respetará las conquistas y convenios del Sindicato de Trabajadores de COBEE.

En Cochabamba se da un enfrentamiento entre gendarmes y comerciantes cuando los primeros deciden montar un operativo de desalojo de un área verde ubicada al lado de la biblioteca de Villa Pagador, en la comuna Valle Hermoso. Días atrás, la subalcaldía de la zona había notificado a los comerciantes su obligación de desalojar. El enfrentamiento se torna violento cuando los policías municipales comienzan a levantar toldos, mesas y mercadería de cerca de unos 70 asentados ilegales. Los comerciantes reaccionan y comienzan a atacar a los funcionarios edilicios con golpes, patadas, jalones de ropa y cabellos, agua con hielo, aceite hervido, piedras y palos.

Los gobernadores de La Paz, César Cocarico, y de Oruro, Santos Tito, informan que firmarán el 24 de noviembre un acuerdo de pacificación para garantizar la convivencia en la zona entre los municipios limítrofes de Colquiri y Caracollo. El acuerdo fue resultado de una inspección y verificación que realizaron autoridades nacionales del INRA, ambos gobernadores, autoridades electas y originarias de los municipios en conflicto. Tras la inspección se establece que el conflicto potencial podría ser detonado por una “sobreexposición” en el proceso de titulación de tierras que afectó a un perímetro de aproximadamente 11 km², donde actualmente viven comunarios del departamento de Oruro.

En la localidad de Yapacaní, de Santa Cruz, la Federación de Comunidades Interculturales tapa con ladrillos la puerta de ingreso de la alcaldía y amenaza con radicalizar sus medidas de presión hasta lograr la renuncia del alcalde David Carvajal. Para ese fin, dio plazo hasta las 14 hrs del día de la fecha para que el burgomaestre decline al cargo y bajen hasta esa comuna autoridades gubernamentales para solucionar el conflicto, caso contrario bloquearán la ruta Santa Cruz - Cochabamba. La problemática tiene que ver con las acusaciones que se le hacen al alcalde Carvajal de tener una baja ejecución presupuestaria, aunque el alcalde y quienes lo apoyan señalan que la misma responde a una intención política de sus opositores para lograr que renuncie a su cargo. Otra de las comunas con problemas de gobernabilidad es Lagunillas, donde representantes de comunidades guaraníes y las OTB mantienen tomada la alcaldía en rechazo a la gestión de Segundino Tardío, del Movimiento Al Socialismo (MAS), que hasta la fecha no presentó el informe de gestión. Durante el día se mantuvo la vigilia y la toma del edificio edil. No hubo enfrentamientos.

Viernes 18

Campesinos de distintas provincias del departamento de La Paz marchan para exigir al gobierno el reconocimiento del directorio de la EMPRELPAZ, elegido, según indicaron, democráticamente por las organizaciones campesinas. La medida de presión impulsada por los campesinos de 17 provincias donde presta servicios EMPRELPAZ es para exigirle a la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, que reconozca su directorio para que administre la distribución de la energía eléctrica en sus comunidades.

En Santa Cruz, los sectores opuestos al alcalde de Yapacaní, David Carvajal, inician un bloqueo indefinido de la carretera Santa Cruz - Cochabamba, a la altura del puente sobre el río Ichilo, para exigir la renuncia del alcalde. Además, los opositores mantienen tomado desde el jueves el edificio de la alcaldía, que figura entre los veinte municipios de Bolivia que están con sus cuentas congeladas, en su mayoría, por incumplir con la presentación del Plan Operativo Anual (POA) 2012. Los manifestantes exigen la presencia del ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, para buscar una salida al conflicto, pero ante la falta de respuesta optaron por el cierre de la vía. El congelamiento de las cuentas de Yapacaní y de otros diecinueve municipios de Bolivia fue aplicado por el Ministerio de Hacienda, en el marco del parágrafo tercero del artículo 2 del decreto supremo N° 0772, que reglamenta la ley que aprueba el Presupuesto General del Estado. Según el viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, hasta el 17 de noviembre los municipios de Comarapa, Puerto Suárez y San Ramón no presentaron el POA para la próxima gestión. En el caso de Yapacaní, la alcaldía no logró el aval del pleno del concejo municipal ni el pronunciamiento del comité de vigilancia para la aprobación de su presupuesto de 2012.

Sábado 19

En Cochabamba, representantes de más de 45 organizaciones e instituciones resuelven reconstituir el Comité Impulsor de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos y convocar a una concentración en diciembre para demandar la reposición del proyecto vial. La resolución surge luego de cuatro horas de debate en el salón de honor de la Gobernación de Cochabamba, donde inicialmente se determinó reconstituir por medio de una ley departamental al comité mencionado. La instancia estará presidida por un representante de la Gobernación de Cochabamba y otros de la

Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). También contará entre sus miembros a dos asambleístas indígenas, uno yuqui y otro yuracaré, un representante de la Asociación de Municipios de Cochabamba, (AMDECO) y un par de dirigentes del transporte federado y libre.

En Yapacani, Santa Cruz, la Federación de Colonizadores Interculturales denuncia al alcalde David Carvajal como promotor de la migración desde el trópico cochabambino hacia las tierras del Choré, en contra del interés de los campesinos locales. Esta sería, según los colonizadores, la explicación de por qué el municipio no se ha dedicado a su gestión, pues concentra sus esfuerzos en temas políticos y de colonización, teniendo hasta noviembre una ejecución presupuestaria de menos del 35% del POA de este año. La pugna ha derivado en una vigilia fuera de la alcaldía de Yapacaní para evitar el ingreso de Carvajal y de sus funcionarios, a lo que se añade un bloqueo de la nueva carretera a Cochabamba por algunas horas entre la noche del viernes y la madrugada de sábado. Horas más tarde, el bloqueo se levanta y se pospone hasta el próximo lunes.

Lunes 21

Más de un centenar de adultos mayores inicia un bloqueo en la autopista que une las ciudades de La Paz y El Alto en demanda a un incremento de la renta Dignidad, señalando que el presidente Morales hace tres años se comprometió a incrementar este beneficio, otorgado a personas que tengan más de 65 años.

El representante del Comité Técnico de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Lázaro Tacoo, anuncia que los dirigentes regionales del TIPNIS llegarán a La Paz el martes para instalar comisiones de trabajo con el gobierno a fin de consensuar la reglamentación de la ley Corta, que prohíbe cualquier carretera por el TIPNIS y establece la intangibilidad de ese territorio, que fue planteada por los representantes de las comunidades de esa reserva nacional y sus legisladores durante la marcha hacia la sede del gobierno en meses pasados.

En Santa Cruz, el conflicto en el municipio de Yapacaní se agudiza, ya que la petición de renuncia del alcalde David Carvajal (MAS) puede derivar en un bloqueo indefinido de la carretera Santa Cruz - Cochabamba, a la altura del puente que cruza el río Yapacaní. La protesta la encabeza la Federación de Colonizadores Interculturales, que agrupa a 22 organizaciones comunales, que reprochan a Carvajal no haber tenido la capacidad de hacer obras en el municipio, tener una ejecución presupuestaria por debajo del 40% a fin de año e incentivar la migración de campesinos de Chapare a esa zona.

Martes 22

En La Paz, el Comando Departamental de la Policía realiza un operativo pacífico de repliegue a la vereda de los propietarios de vehículos indocumentados que bloqueaban la calle Ayacucho y Potosí en demanda de ser incluidos en la nacionalización de vehículos, proceso que ya feneció. Para que el conflicto no se radicalice, el jefe del comando asumió el compromiso con estas personas, denominadas "“chuteros”" para que la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE)

revise caso por caso el pedido de conclusión de trámites de nacionalización, ya que los dueños habrían efectuado su registro y por varias razones no pudieron concluirlo.

La COB realiza una movilización de carácter nacional en defensa del sistema de la seguridad social y de la CNS. La medida se definió en un ampliado nacional, así como la petición de renuncia de la ministra de Salud, Nila Heredia, y el desconocimiento a la designación del nuevo gerente de la CNS, Juan Carlos Alvarado.

El departamento de Potosí cumple un paro de 24 horas debido a que el gobierno no dispuso un mecanismo para delimitar su territorio y el de Oruro, según establecía un acuerdo firmado con el primer mandatario hace un año. A fin de resolver el histórico diferendo limítrofe entre Oruro y Potosí, a la altura de Quillacas y Coroma, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, convoca para mañana por la tarde a un encuentro en La Paz. De acuerdo con la invitación, 48 delegados por región deben asistir a la reunión. Entretanto, los delegados del departamento de Oruro anuncian que asistirán al llamado con la condición de que mantengan un diálogo directo con el presidente Evo Morales.

Miércoles 23

En La Paz, los comerciantes minoristas del mercado Lanza protestan en puertas de la alcaldía por la incomodidad de los puestos de venta que les entregaron en ese centro de abasto. Los comerciantes señalan que venden en condiciones inhumanas y padecen enfermedades a causa del frío. Asimismo, sostienen que en esos puestos las ventas bajaron en gran medida, tomando en cuenta que deben pagar la seguridad y el alquiler de los pasillos.

Autoridades de los departamentos de Tarija y Chuquisaca informan que se ha abierto un cuarto intermedio en la reunión convocada por YPFB para analizar alternativas de solución al conflicto generado por la distribución de regalías del campo Margarita. La reunión, segunda de ese tipo, se realizó en oficinas de la estatal petrolera después de la convocatoria realizada por el presidente Evo Morales la pasada semana. En ella participaron los gobernadores Lino Condori, de Tarija, y Esteban Urquiza, de Chuquisaca, los presidentes de las asambleas legislativas departamentales Justino Zambrana, de la primera, y Porfirio Llanqui, de la última, además del responsable de la Comisión Multisectorial de Tarija, Normando Choque, entre otros.

Los gremios del transporte pesado de Bolivia rompen el diálogo con el gobierno convocado para fijar impuestos y multas por la legalización de los remolques o ‘chatas’ indocumentadas, bajo el argumento de que la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, dilata ese proceso por falta de capacidad e interés. En una conferencia de prensa, los dirigentes del sector informan que esa autoridad incumplió los acuerdos logrados la semana pasada respecto a la instalación de una mesa técnica que determine si en el país se fabrican o no remolques, además de consensuar una tabla impositiva para legalizar las ‘chatas’ indocumentadas. Los transportistas se rehúsan a pagar al menos 1.360 dólares, en promedio, para legalizar sus remolques y, en contrapartida, piden una rebaja de entre el 30 y el 50 por ciento del total.

Jueves 24

En Oruro, casi un millar de pobladores de la provincia Eduardo Abaroa realizan una marcha hacia la sede de gobierno exigiendo que la asamblea legislativa fije los límites con la provincia Sebastián Pagador. Los marchistas llegan hasta las inmediaciones de Sora, a pocos kilómetros de la ciudad de Oruro, y anuncian que descansarán, para retomar la caminata el viernes, que es pacífica y que no planea provocar bloqueos. El pedido de los pobladores es que se cumpla la resolución de la corte suprema de justicia, donde ya están definidos los límites territoriales, tras un largo conflicto y proceso judicial de 27 años.

Los corregidores de más de 20 poblaciones del TIPNIS piden al presidente Evo Morales la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos y denuncian que los dirigentes de la octava marcha indígena utilizaron el nombre de los pobladores de las tierras bajas para negar el desarrollo de esa región amazónica. En una reunión en el Palacio de Gobierno, el jefe de Estado escuchó las demandas de los originarios, que le entregaron un voto resolutivo en el que solicitan la modificación “inmediata” de la ley Corta, que prohíbe la construcción de la carretera y declara intangible el territorio del TIPNIS.

En el cuarto día de bloqueo en la población de Yapacaní se producen enfrentamientos entre policías y pobladores de esa región, mientras el alcalde, David Carvajal, denunciado por corrupción, pide un referendo revocatorio ante el pedido de renuncia. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales, Cirilo Sonabi, denuncia que la policía intentó desbloquear la ruta que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Ello suscitó un enfrentamiento duro con los policías en la madrugada con un saldo de dos heridos que no registran gravedad. Los manifestantes exigen la presencia de autoridades nacionales para iniciar el diálogo en Yapacaní.

Viernes 25

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, y los dirigentes que lideraron la marcha de los indígenas del TIPNIS inician una reunión para consensuar el reglamento de la ley Corta. Según Romero, existe predisposición de parte del gobierno para trabajar con los dirigentes en la elaboración del reglamento, aunque reconoce que hay muchos tópicos y variables que debatir.

En todo el país, diversas organizaciones realizan una marcha y una serie de actividades en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género.

Las organizaciones sociales de Yapacaní aglutinadas en el comité interinstitucional, proponen la elección de un alcalde interino como salida a la crisis política que existe en el municipio, que se ha complicado con el bloqueo que desde hace cinco días mantienen los pobladores en la carretera Santa Cruz - Cochabamba. La petición surge en un ampliado entre las bases de los colonos. Los manifestantes están conscientes de que la elección de un alcalde interino generará un conflicto legal porque Carvajal sigue en funciones. Posteriormente, tras una reunión acalorada entre dirigentes de instituciones y organizaciones sociales que integran el Comité Interinstitucional de Yapacaní, se opta por radicalizar las medidas de presión, y continuar y masificar el bloqueo de la carretera interdepartamental de manera indefinida sin ningún cuarto intermedio, hasta que el alcalde municipal David Carvajal renuncie a su cargo. Como otra medida de presión en la búsqueda de

destitución del alcalde, la dirigencia local decide abrir varios libros notariados para llenar firmas exigiendo su renuncia.

Sábado 26

Autoridades del gobierno y dirigentes de los marchistas del TIPNIS reanudan el diálogo para consensuar la reglamentación de la ley Corta bajo el análisis de cinco ejes temáticos en una reunión por tiempo y materia. Estos son: protección, conservación, desarrollo sostenible, alcance de la intangibilidad y asentamientos ilegales en el TIPNIS. El tema en el que todavía hay disenso es el de la modificación o revisión del Plan de Manejo General del TIPNIS, planteado por el ejecutivo. La ley Corta, propuesta por los marchistas y promulgada por el presidente Evo Morales, prohíbe la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos o cualquier otra, y declara intangible a esa región amazónica.

A los siete días de bloqueo de la carretera Santa Cruz - Cochabamba, el Comité Interinstitucional de Yapacaní acuerda tomar las válvulas del campo petrolero Víbora, el mayor productor gasífero del departamento de Santa Cruz. Esta drástica determinación se dio después de celebrar una reunión con los diputados oficialistas de la C-69, Franklin Garvizu y Dalcy Herrera, en la cual ninguna de las autoridades presentó una propuesta positiva ante el pedido de que renunciara del alcalde masista de Yapacaní, David Carvajal. Ante el descontento, emitieron un voto resolutivo de cuatro puntos, en el que declaran persona no grata al alcalde David Carvajal y exigen que de manera inmediata sea expulsado de Yapacaní y que no asuma ningún cargo público. Además, responsabilizan al ejecutivo municipal de destruir el proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales. El documento será enviado al presidente y a su gabinete ministerial.

Domingo 27

El gobierno y los marchistas del TIPNIS aprueban el proyecto del reglamento de la ley Corta, después de más de dos días de intensas negociaciones que se realizaron en instalaciones de la vicepresidencia. Respecto al tema de fondo del reglamento, la intangibilidad de ese parque nacional, se garantizará el uso exclusivo y tradicional de los recursos naturales por los habitantes de esa reserva natural a través de un plan de manejo y zonificación, que determina cuatro zonas en el TIPNIS: la zona núcleo y de protección estricta, la de uso productivo tradicional, la de aprovechamiento sustentable de recursos naturales y biodiversidad y la zona o espacio de reproducción social, cultural y espiritual del sistema.

En una reunión celebrada en medio de la carretera, los representantes de los sectores que desde hace ocho días bloquean la carretera Santa Cruz - Cochabamba, a la altura de Yapacaní, acuerdan suspender los cuartos intermedios para que circulen los transportistas y anuncian que reforzarán la medida de presión hasta que renuncie el alcalde David Carvajal, del MAS, a quien acusan de una baja inversión presupuestaria.

Lunes 28

El cacique mayor del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), Gumercindo Pradel, informa que una marcha será iniciada el 17 de diciembre y se dirigirá hacia La Paz para demandar la reposición del proyecto de la carretera que debía pasar por el TIPNIS. El CONISUR planea movilizar a 5 mil personas de las comunidades del río Ichilo y del Sécure para exigir la anulación de la ley Corta del TIPNIS. La resolución fue tomada en un ampliado de los pueblos que conforman el CONISUR realizada el fin de semana para analizar acciones que reviertan la marcha de 65 días de indígenas benianos que llegaron a La Paz y lograron la anulación del proyecto vial y la declaratoria de intangibilidad del TIPNIS.

Los regantes de La Paz y Cochabamba inician el bloqueo de carreteras en las vías La Paz - Oruro, Cochabamba - Santa Cruz (antigua) y La Paz - Copacabana en demanda del cumplimiento de los acuerdos de financiamiento para la prevención del fenómeno climatológico de La Niña y el apoyo a nuevos proyectos para riego y sus decretos reglamentarios, y en rechazo a la elevación de tarifas eléctricas en Cochabamba. En agosto pasado, la Asociación de Regantes y Agua Potable de Bolivia (ARAPB) presentó una serie de requerimientos al Ministerio de Aguas para la construcción de represas en provincias y departamentos, y un plan para la prevención del fenómeno La Niña, con un plazo acordado hasta la última semana de septiembre, pero no se ejecutó ninguno de tales planteamientos. La decisión de iniciar el bloqueo en los dos departamentos se aprobó después de que la ministra de Aguas y Medio Ambiente, Mabel Monje, no diera una respuesta concreta a los requerimientos de los regantes.

Martes 29

El gobierno y dirigentes del transporte pesado firman un acuerdo que pone fin al conflicto por la legalización de las ‘chatas’ o remolques indocumentados, que comenzó hace varias semanas por diferencias en el pago de impuestos y multas. El presidente de la Federación de Transporte Pesado Internacional de El Alto (FTP-El Alto), Gustavo Rivadeneira, informa que el sector logró una rebaja de casi el 50% de los 1.300 dólares que estableció, en promedio, el Viceministerio de Política Tributaria.

Después de nueve días de bloqueo, los comunarios interculturales de Yapacaní levantan su protesta, que afectó a la principal carretera de Bolivia, en el tramo que une los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, debido a los últimos sucesos violentos y obedeciendo la sugerencia del presidente Evo Morales de realizar un revocatorio de mandato.

En la zona de Senkata (La Paz), los transportistas pesados, que rechazan la nacionalización de sus remolques, realizan un bloqueo que es dispersado por la policía con el uso del carro Neptuno para disgregar a la gente que se encontraba obstaculizando el paso.

Los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) bloquean la autopista que vincula a El Alto y a La Paz, la carretera antigua Naciones Unidas, y apedrean el control de peaje en exigencia del 50 por ciento de la coparticipación tributaria. Los estudiantes apedrean a los policías que cumplían su labor, lo que les obligó a recurrir a gases lacrimógenos para intentar dispersar a la gente. Como resultado del accionar de los universitarios de la UPEA varios efectivos del orden fueron heridos, algunos de ellos trasladados en ambulancias en medio de un caos vehicular.

Oficiales de policía confirman que fueron detenidos algunos estudiantes en la carretera vieja, además de un par de docentes que después fueron liberados. Por su parte, los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), realizan también movilizaciones en demanda de respeto a los recursos de coparticipación tributaria que reciben del Tesoro General de la Nación (TGN), señalando que la UPEA nació con su propio presupuesto y que la UMSA no tiene porqué ceder ni un sólo porcentaje de su presupuesto a favor de esta universidad.

Miércoles 30

Con el fin de solucionar el conflicto por la coparticipación entre las universidades de La Paz y El Alto, se realiza una reunión entre autoridades del gobierno y los representantes de la UPEA que finaliza con la redacción de un documento en el que se garantizan los fondos para esa casa superior de estudios. A través del documento, el gobierno nacional se compromete a garantizar y otorgar los recursos económicos de la UPEA para la gestión en 2012. Por su parte, la UPEA levanta las medidas de presión.

En Yapacaní, Santa Cruz, las organizaciones sociales que conforman el comité interinstitucional de esa zona deciden nombrar al concejal del MAS, Senobio Meneses, como alcalde interino de esa localidad. La nueva autoridad es elegida por los concejales con tres votos a favor y dos abstenciones, en una sesión que comenzó en instalaciones del organismo deliberante y luego concluyó de forma pública, al mediodía, en la plaza principal. Sin embargo, la elección puede ser recurrida ante la justicia por el alcalde legalmente elegido, David Carvajal, porque él mismo no ha renunciado.

Glosario de siglas

AE	Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
AMDECO	Asociación de Municipios de Cochabamba
ANB	Aduana Nacional de Bolivia
ARAPB	Asociación de Regantes y Agua Potable de Bolivia
CASEGURAL	Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud
CCO	Comité Cívico de Oruro
CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CNS	Caja Nacional de Salud
COB	Central Obrera Boliviana
COBEE	Compañía Boliviana de Energía Eléctrica
CONISUR	Consejo Indígena del Sur
CPS	Caja Petrolera de Salud
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
DIPROVE	Dirección de Prevención y Robo de Vehículo
EMPRELPAZ	Empresa Rural de Electrificación de La Paz
FENSEGURAL	Federación Nacional de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud
FEPC	Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba

Bolivia – Cronología del conflicto social de noviembre de 2011 – OSAL

FSTCPS	Federación Sindical de Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud
FSUTCO	Federación Sindical Unida de Trabajadores Campesinos de Oruro
FTP-El Alto	Federación de Transporte Pesado Internacional de El Alto
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
MAS	Movimiento Al Socialismo
MSM	Movimiento Sin Miedo
OTB	Organización Territorial de Base
PMOT	Plan Municipal de Ordenamiento Territorial
POA	Plan Operativo Anual
SERNAP	Servicio Nacional de Aéreas Protegidas
SIB	Sociedad de Ingenieros de Bolivia
TGN	Tesoro General de la Nación
TIPNIS	Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécuré
UMSA	Universidad Mayor de San Andrés
UMSS	Universidad Mayor de San Simón
UPEA	Universidad Pública de El Alto
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinadoras: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, Bolpress, ABI y El Deber.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Bolivia

Diciembre 2011

Editada en abril 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d' Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 104

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Bolivia***



Integrantes

Pilar Uriona Crespo
Dunia Mokrani Chávez

Fuentes

diarios Los Tiempos, La Prensa, Bolpress,
ABI y El Deber.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Bolivia

Cronología del conflicto social

Diciembre de 2011

Jueves 1

Una comisión de veedores en el conflicto limítrofe de los departamentos de Potosí y Oruro – Coroma y Quillacas– escucha la posición de Oruro en una cita en la que representantes de entidades y el comité interinstitucional local ratifican el respeto a las actas de pacificación y la disposición a encontrar una solución mediante el camino jurídico con la nueva ley de Unidades Territoriales. David Rojas, delegado de la oficina de Movimientos Sociales de la Gobernación de Oruro, señala que el departamento está predisposto al diálogo, pero también expresa su molestia por la provocación de Potosí ante el anuncio de comunarios de Coroma de tomar mojones delimitadores.

En La Paz, los trabajadores de Servicios Aeroportuarios Bolivianos (SABSA), ente que administra el aeropuerto internacional de El Alto, realizan una huelga de brazos caídos en rechazo de la terciarización del servicio de seguridad. Según los trabajadores, la gerencia de la institución contrató a la empresa Asfade para que se encargue del servicio de seguridad, vulnerando así todas las medidas inherentes a la actividad,: serían administrativos que no cuentan con la certificación de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

En Cochabamba, miles de vendedores y gremiales realizan una marcha y cierran los mercados para oponerse a un nuevo reglamento de Uso y Concesión de Sitios y Locales en Mercados elaborado por la alcaldía de Cercado, que prohíbe la transferencia, venta o herencia de puestos, y la tenencia de más de una caseta por comerciante. Luego de una prolongada negociación y tras la toma pacífica de la plaza 14 de Septiembre, los marchistas consiguen la anulación del reglamento y el acuerdo de que el 17 de enero de 2012 se realice un seminario para consensuar con todos los presidentes de las asociaciones del sector sobre el contenido de un nuevo reglamento.

Viernes 2

En Oruro, la Gobernación, el Comité Cívico de Oruro (CCO), la Universidad Técnica de Oruro (UTO), la brigada parlamentaria y representes de otras instituciones se declaran en estado de emergencia y movilización ante la remoción de mojones en territorio de su jurisdicción por comunarios de Coroma, en el límite con el departamento de Potosí.

En Santa Cruz, campesinos de la provincia Guarayos denuncian que dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) los despojaron de sus tierras irregularmente, alegando tener una orden de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. Los campesinos se dirigen a la cámara de diputados para denunciar a los dirigentes Aida Romero, Concepción Cáceres y José Antonio Chungara por ser quienes, a nombre de la ministra, desterraron a varias familias en esa zona. Por esta razón, el grupo de campesinos afectados, en compañía del diputado Antonio Molina –del Movimiento Al Socialismo (MAS)–, exigen al presidente Evo Morales destituir a la ministra. Además, fueron maniatados cuando sufrieron los avasallamientos e incluso los despojaron de sus ganados y otros bienes.

En Santa Cruz, un centenar de mototaxistas de la Federación 2 de Diciembre realiza un bloqueo relámpago de la doble vía Montero - Warnes, para demandar que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) autorice la venta de combustibles a los conductores así éstos no tengan la placa de circulación que muestra la nacionalización de sus vehículos y solicitando se amplíe el plazo para regularizar su situación.

En Cochabamba tiene lugar una movilización de 7 mil trabajadores fabriles, con bloqueos en distintos puntos de la ciudad para exigir la renuncia del ministro de Trabajo, Daniel Santalla, por considerarlo “traidor” de la clase obrera y en demanda de respeto al fuero sindical. Los fabriles se dan cita en distintos puntos estratégicos de la ciudad, sumándose a una movilización que se desarrolla en el mismo sentido en La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando.

Sábado 3

En Tarija, habitantes de la provincia Gran Chaco realizan un bloqueo en más de 15 puntos de las rutas que unen Villamontes, Tarija y Bermejo en demanda del pago del Programa Solidario 2011 y la ejecución de una planta de cítricos. En la provincia Arce y en el municipio de Yacuiba, los lugareños radicalizan los cierres de vías que conectan a la capital tarijeña con Santa Cruz y Argentina. Son cuatro días de bloqueo en la ruta internacional. La salida de buses de la terminal de Tarija está suspendida y el transporte liviano paralizado.

Lunes 5

Las 35 personas con discapacidad que marchan desde Trinidad, Beni, hacia la capital cruceña en demanda de un bono y de un mejor trato llegan este día a San Julián. A pesar del temor de los marchistas porque San Julián es una localidad afín al MAS, la gente del lugar los recibe con aplausos y con algunos aportes económicos.

En inmediaciones de la plaza principal de Yapacaní, Santa Cruz,, seguidores de David Carvajal, depuesto alcalde, y miembros del comité interinstitucional se enfrentan violentamente. Las casetas de cobro de peaje en la tranca de Yapacaní fueron quemadas. Por otro lado, los mototaxistas vuelven a bloquear la nueva carretera interdepartamental que vincula Cochabamba y Santa Cruz para pedir a las autoridades nacionales un cuarto intermedio, de tres meses, a la medida adoptada por el SIN para regular la venta de gasolina.

En Cochabamba, los vecinos de Tinkakatu, una población perteneciente al municipio de Tiquipaya, bloquean el ingreso a este municipio en protesta porque la zona no cuenta con servicios básicos de agua y alcantarillado. El bloqueo se disipa después del mediodía por voluntad de los propios pobladores. Sin embargo, amenazan con llegar este día ante el despacho del alcalde si éste no da una solución inmediata a la demanda pendiente. La dirigente de la comunidad, Alicia Aguilar, señala que la principal necesidad de las más de 50 familias que habitan la zona es el servicio de alcantarillado, pozos sépticos y saneamiento básico.

Miércoles 7

En La Paz, el pleno de la cámara de senadores aprueba la delimitación del municipio de Santiago de Huari del departamento de Oruro, con lo que el conflicto de la localidad de Challapata, cuyos comunarios mantuvieron bloqueada la carretera Panamericana entre Oruro y Potosí, fue solucionado. Los comunarios de Challapata pedían a la asamblea legislativa la aprobación de la ley de delimitación territorial entre las provincias Abaroa y Sebastián Pagador del departamento de Oruro. Al respecto, se ha determinado que será el Instituto Geográfico Militar (IGM) el que realice la tarea de delimitar la zona en conflicto y quien fije los hitos respectivos finales. Los comunarios de Challapata tenían la necesidad de contar con la ley de delimitación para contar con recursos de la coparticipación tributaria que las comunidades de la región en conflicto no reciben, desde su creación, en 1984.

En Tarija, una multitudinaria marcha en defensa del campo Margarita, organizada por el comité multisectorial de defensa del megacampo y el Comité Cívico de Tarija (CCT), recorre las principales calles de la ciudad para reivindicar el derecho departamental sobre el yacimiento gasífero que también reclama Chuquisaca. Manifestantes de todos los sectores, desde el transporte, las cooperativas de servicios –como *Cosaalt* y *Cosett*–, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), el Comité Cívico Femenino (CCF), la subgobernación, la gobernación y la alcaldía de Cercado, entre otras entidades, adhieren a la demanda.

Las más de 80 personas con discapacidad física que vienen marchando desde Trinidad en demanda de sus derechos, como jubilación a los 45 años, bonos de Bs 3 mil para casos especiales y descuentos del 50 por ciento en los servicios básicos y de transporte, llegan a la comunidad 26 de Agosto, a una distancia de 26 kilómetros de Pailón, municipio que se encuentra a 52 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Debido a que el recorrido promedio diario es de 20 kilómetros, se estima que en cuatro días lleguen a Santa Cruz para proseguir el trayecto hasta la sede de gobierno. El presidente de la Asociación Departamental de Personas con Discapacidad, Mario Torrico, lamenta que hasta el momento no haya acercamiento de ninguna autoridad nacional ni departamental.

Jueves 8

En La Paz, por disposición de un ampliado del Sindicato de Trabajadores de Caja Nacional de Seguridad Social (CASEGURAL) se instala un piquete de huelga de hambre en el que participan tres dirigentes en demanda del pago del incremento adicional del 1 por ciento. La medida responde a que hasta la fecha el gobierno no ha hecho efectivo dicho incremento, aprobado por decreto tras los conflictos de abril, con pago en agosto con carácter retroactivo a enero.

En La Paz, la Comisión de Política Pocial de la cámara de diputados solicita a las personas con discapacidad que hagan un cuarto intermedio en su marcha hacia La Paz mientras se analiza la ley de Tratos Preferenciales. Sin embargo, el representante del sector en Santa Cruz, Mario Torrico, indica que no levantarán la medida hasta que los parlamentarios no dialoguen con ellos. Las personas con discapacidad –que ya han marchado 500 kilómetros desde Beni– piden atención a sus derechos a la salud, al trabajo y a la educación, centros educativos, albergues y comedores populares, además de un bono proveniente del Fondo Nacional de Solidaridad (FNS).

En Santa Cruz, los transportistas y mototaxistas que no lograron nacionalizar a sus motorizados inician un bloqueo indefinido de la carretera bioceánica que une a Bolivia y a Brasil, en Puerto Suárez, e impiden el acceso a los surtidores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Protestan por la resolución del SIN de autorizar únicamente la venta de combustibles a los conductores que tengan la placa de circulación. Exigen que el gobierno amplíe el plazo a los vehículos con placas municipales hasta el 28 de febrero para cargar diésel y gasolina, así como que vuelva a funcionar la aduana regional de Puerto Suárez.

Decenas de transportistas y vecinos de Vinto y Quillacollo bloquean a lo largo de 10 kms la ruta La Paz - Oruro entre Vinto y Parotani en demanda de la ampliación de la vía, en razón de los constantes accidentes de tránsito que se registran. Para solucionar el conflicto, el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, anuncia que autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el gobierno de Cochabamba negocian la solución al bloqueo del transporte para ver las posibilidades de realizar la carretera que están pidiendo de Quillacollo a Suticollo. El proyecto se encuentra en el diseño final.

Viernes 9

En Cochabamba, una masiva concentración de entidades a la cabeza de la gobernación del departamento exige la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. La concentración, que se realiza en horas de la tarde en el viaducto de la avenida Blanco Galindo, cuenta con la presencia del gobernador y el alcalde de Cochabamba, Edmundo Novillo y Edwin Castellanos, respectivamente, junto a otras organizaciones sociales que se sumaron a este pedido. En Santa Cruz, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, señala que este tipo de concentraciones que piden la carretera a través del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécuré (TIPNIS) sólo hacen daño a la imagen del presidente Evo Morales.

Martes 13

En Tarija, la Federación Universitaria Local (FUL) rechaza el paro indefinido asumido desde este pasado lunes por los docentes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), que exigen una reposición salarial; como medida de presión toman el rectorado.. Los docentes de la UAJMS piden al gobierno de Evo Morales el incremento salarios con retroactividad a enero de 2011.

El diputado de la opositora Convergencia Nacional (CN) y representante de las personas con discapacidad, Jaime Estivariz, informa que ese sector rompió el diálogo con la comisión legislativa de la cámara baja, que debate el proyecto de ley que otorga un trato preferencial a los discapacitados; anuncia la radicalización de las medidas de presión. A su juicio, el legislativo mostró poca voluntad para viabilizar la norma, la misma que permite a los discapacitados acceder a una jubilación a los 45 años y obtener beneficios como el 10 por ciento de inclusión en los cargos de instituciones públicas y privadas. Además, establece descuentos hasta el 50 por ciento en tarifas de servicios básicos y transporte y un bono por 3 mil bolivianos para las personas con discapacidad severa.

Sábado 17

En Cochabamba, el Consejo de Indígenas del Sur (CONISUR) del TIPNIS inicia una marcha desde San Antonio con destino a la sede de gobierno en demanda de la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos en su tramo II original, que atravesaría el área protegida.

Martes 20

En Tarija se cumple el primer día de paro instruido por el comité cívico y la comisión multisectorial de defensa del megacampo gasífero Margarita, que se encuentra en disputa con el departamento de Chuquisaca. Tarija y Chuquisaca se reclaman titulares de derechos en Margarita. La medida de presión adoptada por las instituciones del primero de los departamentos se debe a que la estatal YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos optaron porque sea una mensuradora internacional la que zanje la querella.

En Trinidad, Beni, tiene lugar una pacífica manifestación a favor del ex gobernador Ernesto Suárez (acusado de corrupción) y en contra del gobernador interino del Beni, Heisel Ribera. Decenas de manifestantes se concentran en la sede del Comité Cívico del Beni (CCB), desde donde recorren diferentes calles de la ciudad hasta llegar a una cuadra de la plaza principal José Ballivián. En la manifestación participa Suárez y los presidentes de los comités cívicos del Beni, David Coca; de Santa Cruz, Herland Vaca Díez, y de Cochabamba, Israel Mérida. Por su parte, Suárez reitera que continúa siendo el gobernador del Beni y que volverá a ocupar su despacho en la gobernación mediante la vía legal.

En Santa Cruz el gobierno logra un acuerdo con un sector de las personas con capacidades diferentes, quienes levantarán su medida de presión tras la firma del convenio que establece el pago de un bono para aquellas con problemas graves y muy graves además del cumplimiento de un pliego de peticiones del sector cuya demanda principal son las fuentes de trabajo en la administración pública. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, junto a los dirigentes de Santa Cruz, acuerda estos puntos para evitar que la caravana de personas con discapacidad continúe su recorrido a la sede de gobierno. Los puntos son: 1) que la ley que fue presentada al legislativo sea socializada a las bases; 2) que se cumpla el pliego de peticiones que se planteó al gobierno el 20 de octubre en Cochabamba, que debe ejecutarse mediante el Ministerio de Trabajo a partir del 2 de enero; y 3) que el bono solicitado por este sector (cuyo monto aún no fue definido) será para aquellos discapacitados que tienen casos graves y muy graves. Dicho monto podría llegar a 3 mil bolivianos, como se planteó al principio de la movilización.

Miércoles 21

En Tarija, se cumple el segundo día del paro cívico en defensa del campo gasífero Margarita.

En Cochabamba, alrededor de 60 vecinos de la comunidad de Pucara instalan dos puntos de bloqueo en los kilómetros 2.5 y 3.5 de la carretera a Sacaba, exigiendo una audiencia con los concejales del municipio para negociar la derogación de la resolución municipal 075/2011. Según el dirigente de la comunidad de Pucara, Ponciano Quiroga, los vecinos se sienten afectados por esta

disposición que les impide realizar mejoras en su comunidad, pues sería considerada una zona protegida en la que estaría prohibido hacer cualquier tipo de construcción o instalación. Los vecinos ubicados en estos puntos de bloqueo afirman que no levantarán la medida de presión hasta que reciban una respuesta positiva por parte de los concejales, quienes en anteriores oportunidades no habrían llegado a un consenso sobre la problemática.

Jueves 22

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, y los representantes de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad (COBOPDI) firman un nuevo convenio para avanzar en la elaboración de una ley integral que beneficie a ese sector con políticas de salud, educación, vivienda e inserción laboral. Romero explica que el convenio da continuidad al acuerdo firmado en Santa Cruz con los representantes departamentales de esa confederación. Sin embargo, un sector de las personas con discapacidad insiste en continuar con la lucha hasta lograr la aprobación del bono de 3 mil bolivianos. Los discapacitados anuncian que no aceptarán ningún acuerdo del gobierno que no sea consensuado con todos los involucrados.

Viernes 23

Los 357 indígenas que marchan con la exigencia de una carretera por el TIPNIS emiten un voto resolutivo para exigir que los dirigentes que presionaron por la promulgación de la ley Corta 180, se reúnan con ellos y den explicaciones sobre sus actos, ya que como CONISUR desconocen los contenidos de esa ley y exigen la construcción de la carretera.

Sábado 24

Las personas con capacidades diferentes firman un acta de siete puntos con el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, que posibilita que el sector levante sus medidas de presión. El convenio es suscrito por los principales representantes de la COBOPDI, entre ellos, el presidente de la organización, Guido Veliz; el vicepresidente, Salomón Laura; el secretario general, Rubén Camacho; y el secretario de Hacienda, Julio Zenteno. De acuerdo con Romero, el acta menciona que el ente matriz de los discapacitados resuelve sumarse a los acuerdos logrados por el gobierno nacional con delegados del sector, en la ciudad de Santa Cruz. Asimismo, señala que se determinó formar una comisión técnica, con representantes estatales, miembros de la confederación, federaciones y asociaciones para socializar y consensuar un proyecto de ley presentado por la COBOPDI a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a favor de las personas con discapacidad.

Miércoles 28

En Santa Cruz, residentes afro-bolivianos realizan una protesta en la plaza central exigiendo justicia para Gonzalo Medina Tórrez, quien denunció haber sufrido agresiones físicas y verbales de parte de uniformados policiales. El diputado Jorge Medina, del MAS y primo del afectado, pide a los jefes policiales identificar a los responsables de estos excesos. El pasado sábado, la policía boliviana realizó un desalojo a predios de la aduana nacional en la zona de la Pampa, Isla de Santa Cruz,

donde se habrían cometido los excesos. Desde La Paz, el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, asegura que se iniciará una investigación interna en la policía ante la supuesta discriminación que habrían realizado efectivos policiales contra un miembro de la comunidad afro-boliviana y promete resultados en un plazo de 10 días.

Viernes 30

En Cochabamba, el cacique mayor del CONISUR, Gumercindo Pradel, informa que en la marcha por una carretera por el TIPNIS se elabora un proyecto de normativa para anular y sustituir la ley Corta 180 que puso en vigencia la intangibilidad del área protegida en la cuenca amazónica de Bolivia, señalando que la norma que puso en vigencia la intangibilidad para el TIPNIS debe ser desechada porque para su aprobación no se consultó a los miembros de las comunidades indígenas. Asimismo, sostiene que hubo manipulación de información sobre los requerimientos de los verdaderos dueños del territorio con respaldo de organizaciones no gubernamentales y que por eso ellos no pudieron emitir su opinión de manera adecuada.

En Tarija, se declara un cuarto intermedio sobre las medidas de presión debido a los problemas generados con Chuquisaca por el megacampo hidrocarburífero de Margarita. Mientras tanto, en Santa Cruz, autoridades y representantes de los dos departamentos se reúnen con el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, para buscar una solución.

Glosario de siglas

ABC	Administradora Boliviana de Carreteras
ALP	Asamblea Legislativa Plurinacional
CASEGURAL	Sindicato de Trabajadores de Caja Nacional de Seguridad Social
CCB	Comité Cívico del Beni
CCF	Comité Cívico Femenino
CCO	Comité Cívico de Oruro
CCT	Comité Cívico de Tarija
CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CN	Convergencia Nacional
COBOPDI	Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad
CONISUR	Consejo de Indígenas del Sur
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
DGAC	Dirección General de Aviación Civil
FEJUVE	Federación de Juntas Vecinales
FNS	Fondo Nacional de Solidaridad
FUL	Federación Universitaria Local
IGM	Instituto Geográfico Militar
MAS	Movimiento Al Socialismo
SABSA	Servicios Aeroportuarios Bolivianos
SIN	Servicio de Impuestos Internos
TIPNIS	Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure

UAJMS Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
UTO Universidad Técnica de Oruro
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinadoras: Pilar Uriona Crespo y Dunia Mokrani Chávez.

Fuentes: diarios *Los Tiempos*, *La Prensa*, *Bolpress*, *ABI* y *El Deber*.